Marcos Roitman Rosenmann

Por la razón o la fuerza

Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina



Marcos Roitman Rosenmann

Por la razón o la fuerza

Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina





Siglo XXI / Serie Historia

Marcos Roitman Rosenmann

Por la razón o la fuerza

Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina

Versión corregida y aumentada



No ha habido rincón del planeta que, en las últimas cinco décadas, haya sido más castigado por los golpes de Estado que el continente Latinoamericano, golpes que han contado con la promoción y el aval de Estados Unidos. Durante estos cincuenta años los modos en que se ha depuesto a la democracia se han transformado radicalmente: hoy las técnicas son mucho más refinadas, sibilinas; los golpes se ejecutan desde los despachos de los poderes industriales y financieros, con la connivencia de jueces y Policía, con la aprobación de instituciones ajenas a las urnas.

Desde el derrocamiento de Árbenz en Guatemala, pasando por la toma del Palacio de la Moneda y la muerte del presidente Allende en Chile, hasta la autoproclamación de Guaidó en Venezuela con el respaldo de Estados Unidos y sus aliados, *Por la razón o la fuerza* ofrece el descarnado relato de los golpes y ataques a la democracia en América Latina. En él, Marcos Roitman, uno de los más perspicaces analistas de la realidad política latinoamericana, nos invita a revisar la historia y memoria de los golpes de Estado, las dictaduras y las resistencias para arrojar luz sobre un presente marcado, hoy como ayer, por militares, políticos e intereses comerciales que siguen abriendo las venas de América Latina.

Marcos Roitman Rosenmann es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y profesor e investigador invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México así como docente en diferentes centros de América Latina. Columnista del periódico *La Jornada* de México y *Clarín digital* de Chile, entre sus últimos títulos publicados destacan *El pensamiento sistémico. Los orígenes del socialconformismo* (2003), *Las razones de la democracia en América latina* (2005), *Pensar América Latina: el desarrollo de la sociología latinoamericana* (2008), *Democracia sin demócratas y otras invenciones* (2008), *Indignados: el rescate de la política* (Akal, 2011), *Tiempos de oscuridad* (Akal, 2013) y *La criminalización del pensamiento* (2017).

Diseño de portada
RAG

Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1968-6

A todas las víctimas que sufren la persecución anticomunista, dan sus vidas y combaten la explotación capitalista. A los trabajadores de Nuestra América que luchan por romper la dependencia imperialista.

INTRODUCCIÓN

> Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla el dinero y controlarás el mundo.
>
> Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, 1973

La historia de América Latina está llena de sobresaltos. Por una parte, las luchas democráticas, los avances en los derechos políticos y sociales; por otra parte, los procesos de involución. Las burguesías latinoamericanas, cuando han sido derrotadas en las urnas, no han tenido rubor en acudir a la técnica del golpe de Estado para mantener sus privilegios de clase. Parecen no aceptar las reglas del juego. Su comportamiento antidemocrático es una de sus señas de identidad.

Los golpes de Estado son recurrentes en la historia del continente. Sus formas evolucionan, al igual que los dispositivos para su realización. No se trata de una excepcionalidad. Asistimos a un cambio de estrategia. El *impeachment,* un recurso jurídico pensado para hacer frente a conductas deshonestas e impedir prácticas corruptas de los presidentes, se tuerce. Se trasforma en un arma arrojadiza utilizada para romper el orden constitucional judicializando la política. Su puesta en escena requiere una gran movilización de instituciones: el poder legislativo, el poder judicial, fiscales, abogados y magistrados de la corte suprema, sin menospreciar la retaguardia, medios de comunicación de masas, redes sociales, tertulianos, dirigentes sindicales, líderes de opinión, ideólogos.

La destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff es un claro ejemplo de lo apuntado. Se ponen en funcionamiento todos los dispositivos. Si en principio el *impeachment* fue considerado un factor de corrección para conductas autocráticas, hoy «describe una forma de guerra asimétrica. Una guerra jurídica que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno e internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes o inmovilizándolos

judicialmente para que no puedan conseguir sus objetivos, ni presentar sus candidaturas a cargos públicos»[1].

Asimismo, en una maniobra para eliminar la cara más canalla y repudiada de los golpes de Estado, la violencia directa acompañada de represión, tortura y asesinato político, el *impeachment* pierde su sentido y emerge como una forma «limpia» e indolora de golpe de Estado. No se trata del «caso Watergate», cuyo efecto fue la renuncia del presidente Richard Nixon ante la sola posibilidad de ser sometido al *impeachment.* El escarnio público fue castigo suficiente para provocar su caída.

Guerra asimétrica, guerra jurídica, *lawfare* (recurriendo al anglicismo): todo conduce al golpe de guante blanco. Eufemismo para señalar una cirugía indolora. Bien había señalado Kissinger, secretario de Estado en el gobierno republicano de Richard Nixon, al referirse al dictador Augusto Pinochet: «Pedimos un cirujano y contratamos un carnicero».

Los golpes blandos conllevan procesos desestabilizadores cuyo fin es desgastar, horadando los cimientos del poder constitucional. El ejercicio de la violencia, como una actividad complementaria al *impeachment,* le da el empaque necesario para crear una situación de caos, inestabilidad o catástrofe humanitaria. La desestabilización en la acción de organizaciones civiles, amas de casa, trabajadores de la administración, sectores medios, organizaciones empresariales, profesionales, ONG, medios de comunicación de masas, estudiantes, sindicatos independientes…, es la estrategia concebida como «lucha no violenta». El llamado por uno de sus ideólogos, Gene Sharp, *desafío político.* Su operatividad consiste en deslegitimar el gobierno y consolidar los apoyos al golpe blando. La violencia posterior se articula y reorienta a través de grupos paramilitares, sicarios, servicios de inteligencia, bandas del crimen organizado, grupos neonazis y anticomunistas. El asesinato en Honduras de la líder y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, premio Goldman en 2015, Berta Cáceres, se inscribe en esta forma de violencia selectiva. Sin embargo, han sido decenas los ajusticiamientos de dirigentes sindicales, líderes campesinos, estudiantiles y periodistas que han defendido la democracia y los derechos sociales, políticos, étnicos, de género y culturales en Honduras en estos años de posgolpe blando. Desde el año 2009, fecha en la cual se derrocase al presidente Manuel Zelaya, han caído víctimas de atentados 57 periodistas. La Federación Internacional de

Derechos Humanos (FIDH) subraya en su informe sobre Honduras: «Crímenes de persecución política, asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, de género y desplazamiento forzado fueron cometidos de forma sistemática como consecuencia del golpe de Estado de 2009. El golpe destruyó el Estado de derecho en Honduras. Destrozó la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y de seguridad».

La percepción que se tiene de los golpes de guante blanco, de allí el símil, es su limpieza. La realidad es otra. Lo dicho vincula a Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo, así como a Dilma Rousseff en Brasil. En ambos países se utilizó la técnica *impeachment* como mecanismo para el golpe de Estado.

En medio de la crisis actual del capitalismo, significarse como anticapitalista y levantar una alternativa socialista se considera un anacronismo histórico. Declararse marxista o comunista puede ser motivo de mofa, descalificación e insulto. Dirigentes políticos, sindicales, líderes de movimientos sociales e intelectuales partidarios del socialismo-marxista son sistemáticamente caricaturizados y estigmatizados como representantes de alternativas totalitarias, marginales y sin futuro.

Sin embargo, para ser considerados marginales, derrotados y sin futuro, la lucha contra el comunismo sobrepasa la ofensa verbal. Bajo el paraguas de la guerra total, se persigue aniquilar no solo política, sino físicamente a sus defensores. Seguramente, en la «civilizada» Europa occidental, esta práctica haya caído en desuso. Pero se mantiene vigente en el resto de continentes.

Europa occidental prefiere apelar a un discurso más efectivo, interferir en la mente de las personas y lograr consensuar el rechazo al marxismo y el socialismo. La guerra psicológica, el miedo y las campañas publicitarias *ad hoc,* presentan el comunismo como una amenaza para la familia, el individuo, la moral católica, la propiedad privada y el mercado. Por consiguiente, cuando el movimiento popular gana espacios de representación, se constituye en una opción de cambio social, la burguesía y sus aliados se quitan la careta. La clase dominante no tiene empacho en recurrir a la técnica del golpe de Estado para frenar el avance. Cuando lo hace, abandona los principios que tanto enarbola, el *habeas corpus,* la libertad de asociación, reunión y expresión. Los golpes de Estado y el anticomunismo marchan juntos en la historia. Sus comienzos fueron inorgánicos y difusos, pero a medida que los partidos obreros crecieron, sus

propuestas ganaron adeptos y votos, el anticomunismo se vertebró como parte de la razón de Estado.

Si hacemos historia, podemos remontarnos a la publicación del Manifiesto Comunista en 1847 y la fundación de la Primera Internacional en 1864 para datar el inicio de la persecución de comunistas, socialistas y anarquistas. Cualquier excusa sirvió para encarcelar, reprimir, censurar y asesinar a sus militantes. La represión ejercida sobre la Comuna de París, entre los días 21 y el 28 de mayo de 1871, evidenció la inexistencia de límites cuando se trata de restablecer el orden burgués. Conocida como «la semana sangrienta», el ejército actuó contra los sublevados, dejando un balance de 30.000 muertos y una ley marcial que se mantuvo durante cinco años.

Entrado el siglo XX, con el triunfo de la Revolución rusa y el nacimiento de la Tercera Internacional se clarificó la estrategia anticomunista. El enemigo tomó cuerpo en el Comintern y la revolución comunista. El peligro acechaba, era obligado blindarse. No hubo vuelta atrás. Las declaraciones de la Tercera Internacional, llamando a la revolución mundial del proletariado, dieron la voz de alarma. Liberales, conservadores y socialdemócratas unieron sus fuerzas para impedirlo, no importando costes ni métodos. Al anticomunismo se unirá la guerra sucia. Nada será suficiente con tal de salvaguardar los intereses de clase del capitalismo.

Pocos han sido los momentos en los cuales la burguesía liberal y su razón cultural se han sentido cuestionadas por otro fenómeno ajeno a la «amenaza comunista». Cuando esa posibilidad se concreta, como sucediese con el nazi-fascismo en los años treinta del siglo XX, busca la colaboración y el apoyo de la izquierda, dejando de lado el carácter marxista y comunista de sus militantes y organizaciones.

Durante la Segunda Guerra Mundial los países occidentales buscaron cobijo en la Unión Soviética y la resistencia partisana en la lucha contra Alemania y el nazismo. El objetivo: unir las fuerzas antifascistas y evitar el triunfo de Hitler y el Tercer Reich. Fue el concurso de la Unión Soviética, en plena época estalinista, lo que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas de la Wehrmacht, al mando del general Paulus, vieron cortado su avance en el Volga. El ejército rojo, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, combatió sin descanso. La derrota nazi en la batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión. Las conclusiones de los estrategas fueron inmediatas: las fuerzas alemanas no disponían de

suficiente material de guerra ni abastecimiento para emprender la ofensiva. El Ejército Rojo de la Unión soviética dio el golpe de gracia en agosto de 1943, en la batalla de Kursk. El mariscal nazi Erich Von Manstein vio cómo en dos meses fueron inutilizados y destruidos más de tres mil tanques Panzer. El General del Ejército Rojo, Georgi Zhúkov, siguió su avance hasta Berlín, logrando la rendición del Tercer Reich. Tras dos meses de enfrentamientos, entre el 14 de abril y el 2 de mayo de 1945, la bandera soviética fue izada en el bunker hitleriano. En el recuerdo, si atemperamos datos, yacieron veinte millones de ciudadanos soviéticos, civiles y militares asesinados en la ofensiva nazi.

El lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto de 1945, puso un dramático final a la Segunda Guerra Mundial. Los países del eje capitularon. El enemigo había sido derrotado. El comunismo volverá a ser el enemigo. Se acabaron las buenas maneras y se desataron las hostilidades. El 12 de marzo de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, pronunció un discurso histórico llamando a preservar la forma de vida de Occidente frente al terror comunista. Sentaba así las bases de la Guerra Fría.

La persecución de socialistas-marxistas y comunistas se convirtió, en los países occidentales, en labor prioritaria. Simultáneamente, se producía un acercamiento a los nazis y colaboracionistas. Muchos de ellos miembros destacados de las SS, militares de alto rango y científicos serán rescatados para emprender una nueva guerra. Identidades falsas, una nueva vida y el compromiso de protegerles a cambio de servir a los Estados Unidos y las potencias aliadas. Estados Unidos recibiría a cientos de nazis para trabajar en sus planes anticomunistas. El Juicio de Númemberg, celebrado en 1946, era historia.

Se declaró la guerra a muerte a los afiliados y simpatizantes comunistas en todo el mundo occidental. Se ilegalizó a los partidos obreros. Bajo el paraguas anticomunista se reprimió a las organizaciones sindicales y políticas, colgándoles el San Benito de subversivas. La tortura, el asesinato y la cárcel fueron los instrumentos preferidos para doblegar voluntades y someter a los pueblos. En Estados Unidos, el senador Joseph McCarthy emprendió una «caza de brujas», la mayor razia a ciudadanos acusados de profesar ideales comunistas o marxistas-socialistas. Aunque no había que

llegar a ese extremo, ser familiar, amigo o allegado abría las puertas para ser detenido y llevado a campos de concentración.

En 1950, McCarthy llevó al paroxismo el delirio anticomunista indicando que en el Departamento de Estado trabajaban infiltrados más de 200 agentes comunistas. Fue la fórmula para perseguir a educadores, científicos, actores, trabajadores, miembros del partido demócrata o republicano, que fueron tildados de filo-comunistas. Charles Chaplin, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, sufrieron la ira de McCarthy. Oppenheimer llegó a ser expulsado de la comisión de energía nuclear. Muchos otros fueron encarcelados, deportados o perdieron sus puestos de trabajo. Cientos de personas se suicidaron, se exiliaron o directamente abandonaron el país[2]. Su caída en 1954 fue precedida de la acusación de solicitar trato de favor para uno de sus colaboradores en el ejército. El juicio fue televisado, la gente pudo ver a un senador brabucón, insultante y engreído. Fue destituido con los votos de senadores republicanos y demócratas. «Y, sin embargo, si McCarthy se había ido, el macartismo dejó como herencia un gran cuerpo de leyes prácticas basadas en la idea de que había una "prueba del tornasol" para el americanismo, y que era tarea del gobierno hacer pasar esta prueba a todos los que habían servido en una institución pública. El elaborado aparato improvisado en los cuarentas cristalizó como maquinaria permanente del sistema de seguridad norteamericano. A la Ley Smith de 1940 y la Ley de Seguridad Interna de 1950, se añadió la Ley de Control Comunista en 1954, que puso fuera de la ley al Partido Comunista. Así como en los días anteriores a la guerra civil la hostilidad sureña a la abolición gradualmente se convirtió en una hostilidad a todas las ideas liberales del siglo XIX, ahora la hostilidad a la subversión se convirtió en una enconada oposición a quienes defendían los derechos de los negros, a quienes proponían el reconocimiento de China Comunista y apoyaban la atención médica a los ancianos y, como dijo Arthur Schlesinger, a quienes creían en el impuesto sobre la renta, la fluorización de las aguas y el siglo XX»[3].

El control hegemónico de los Estados Unidos cambió el eje gravitacional del poder planetario. Los países del llamado Tercer Mundo, Asia, África y América Latina, fueron cobayas para llevar a cabo la estrategia anticomunista y golpes de Estado. Cualquier régimen que osara plantar cara al imperialismo norteamericano sufriría las consecuencias en forma de

acciones encubiertas, desestabilizadoras, sabotaje y, por último, patrocinando un golpe de Estado.

Nacionalizar las riquezas básicas será una razón suficiente. En Irán, la CIA, junto con los servicios de inteligencia británicos, el M16, idearon el plan para acabar con el presidente Mohammed Mosaddegh el 18 de agosto de 1953. El recambio, instaurar una de las más férreas tiranías bajo el reinado del Sha Reza Pahlavi. En Guatemala, un año más tarde, la CIA urde el plan para deponer al general Jacobo Árbenz, presidente constitucional enfrentado a las compañías bananeras. El golpe de Estado cierra el proceso democrático más avanzado conocido en la región centroamericana. La lista se hace interminable; en todos está presente el asesinato político, el exilio y la persecución a los militantes y partidos comunistas.

En los años sesenta del siglo pasado, durante el proceso descolonizador en África y Asia, los Estados Unidos y sus aliados extendieron el ideario anticomunista, acompañándolo de una estrategia contrainsurgente y antisubversiva. El punto de inflexión lo constituye la Guerra de Argelia y las estrategias desarrolladas por las fuerzas armadas francesas para combatir a los gobiernos nacionalistas y antiimperialistas. Indonesia será objeto de un cruento golpe de Estado que acaba con Achmed Sakurno, líder nacionalista que gobierna en coalición con el Partido Comunista de Indonesia (PKI) en 1965. Considerado un peligro para los intereses norteamericanos y un mal ejemplo a seguir, se impone en el poder al general Haji Mohammad Suharto. Entre 1965 y 1966 se asesina a más de medio millón de afiliados y simpatizantes del Partido Comunista. Un informe redactado en Yakarta a poco de practicar el genocidio por los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, enviado al Departamento de Estado, señalaba: «El fervor musulmán en Atjeh parece haber dejado fuera de combate a casi todos los miembros del PKI y han clavado sus cabezas en estacas colocadas en los márgenes de los caminos. Se dice que han arrojado los cuerpos de las víctimas del PKI a los ríos o al mar porque los atjeheneses se niegan a "contaminar con ellos el suelo de Atjeh"»[4]. La CIA proporcionó listas de miembros del PKI al nuevo régimen para proceder a su detención y muerte.

En América Latina los golpes de Estado han seguido un itinerario inmerso en la estrategia de la tensión. Primero, guerra psicológica, una cuidada campaña del miedo aludiendo a la amenaza comunista, luego la desestabilización política, el estrangulamiento económico, mercado negro,

evasión de capitales y, por último, la movilización de las hordas fascistas para crear un estado social de «caos». Entre sus acciones: ataque a sedes de partidos obreros y sindicales, sabotaje de infraestructuras, puentes, líneas férreas, carreteras, edificios públicos, etc. Todo para pedir a las fuerzas armadas su intervención a fin de restaurar el orden social y político, acabando con la ingobernabilidad. Un llamado a salvar la patria con la excusa de existir un plan subversivo para instaurar un régimen totalitario, asesinar a opositores e imponer el terror rojo. Hoy Venezuela es el mejor ejemplo de esta estrategia anticomunista.

En Chile las fuerzas armadas apelaron a un supuesto «Plan Z» elaborado por la izquierda en dos fases, la del autogolpe y la insurrección armada para romper el orden constitucional. En la primera, según relatan, el gobierno «marxista» detendría a los principales dirigentes opositores, a los miembros de las fuerzas armadas, periodistas y personalidades anticomunistas, para asesinarlos. Luego, seguiría la toma de cuarteles y la insurrección popular. En el momento culmen, Salvador Allende saldría al balcón del palacio presidencial, La Moneda, proclamando el advenimiento de la República Democrática de Chile. A continuación, se izaría en el mástil principal del Palacio una nueva bandera: roja con una estrella amarilla en el lateral izquierdo. Dicho Plan Z, publicitado hasta la saciedad desde el momento mismo del golpe, el 11 de septiembre de 1973, nunca pudo ser probado. Quienes se remitieron a él se desdicen y lo consideran parte de la guerra total: «ellos o nosotros». La Democracia Cristiana participó de esta farsa. Patricio Aylwin declaró pocos días después del golpe de Estado: «Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena al socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular, y se exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Salvador Allende, y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias, pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista»[5].

Muchos fueron los crédulos que asumieron su existencia. La Junta Militar de Gobierno hizo lo indecible para demostrar su autenticidad llegando a

editar un libro, distribuido gratis y en millares de ejemplares, donde se detallaban los objetivos, nombres y definían las fases del Plan Z. *El libro blanco del cambio de gobierno en Chile,* fue su encabezado. Este imaginario Plan Z se trasforma en lanzadera para realizar los interrogatorios tras el golpe. Recuerdo con claridad las dos primeras preguntas del oficial que me interrogaba en el Estadio Nacional: «¿Dónde se esconden las armas? ¿Cuál era tu misión en el Plan Z?».

Nada se dejó al azar. Justificar el asesinato, la tortura, requiere una elaboración sistemática. Tanto como dotarla de credibilidad. El discurso fue construido apelando a los valores de la patria y el nacionalismo chovinista. La izquierda y el gobierno, dirían los golpistas, tenían pensado destruir Chile, cambiar la bandera y el escudo nacional. Se instituiría la obligación de hablar ruso en las escuelas públicas. Los niños y la juventud serían objeto de un lavado de cerebro mediante la inoculación de virus introducidos en la leche donada por los países del Norte de Europa. Y la música «psicodélica», cuya particularidad era portar mensajes subliminales, debilitando la voluntad y la conciencia, trasformaría a los jóvenes chilenos en seres obedientes, sumisos y capaces de acatar cualquier orden. Eran los años de los experimentos de control mental de la CIA y se apoyaron en sus prácticas para crear miedo. Todas estas diatribas se instalaron en el discurso oficial para justificar la represión anticomunista y concitar el apoyo de la ciudadanía.

Mientras, el 11 de septiembre de 1973, las imágenes del bombardeo de La Moneda recorrían el mundo. El cadáver del presidente Allende envuelto en una manta por los bomberos era sacado del Palacio presidencial en llamas. Los colaboradores del presidente, entre ellos asesores y guardia personal, además de autoridades democráticamente electas, que resistieron en el palacio presidencial, serían obligados a tenderse boca abajo en hilera. Soldados comandados por el coronel Palacios, les apuntaban a la sien. Los tanques a centímetros de sus cuerpos mostraban al mundo la fiereza y violencia de los golpistas. Era la ruptura del orden democrático y el epílogo a una ciudadanía republicana de la cual el pueblo chileno se sentía orgulloso.

El fin trágico de la Unidad Popular, el asesinato de miles de personas, el suicidio del presidente Salvador Allende, constituyen parte de la historia de este ensayo. Fui uno de tantos que vio truncarse un proyecto donde no

cabían la traición, la tortura, la represión y el odio. La situación era inimaginable. El fascismo, tantas veces estudiado, residual a la cultura política de Chile, tomaba las riendas y pasaba al ataque. A muchos nos pilló por sorpresa, confiamos en la «neutralidad» de las fuerzas armadas. ¿Ingenuidad? País de tradición democrática, los golpes de Estado no tenían lugar en la historia de Chile. Esta visión idílica se hizo añicos el 11 de setiembre de 1973.

En 2018 se cumplieron cuarenta y cinco años del bombardeo al palacio presidencial y el golpe militar. La actuación de las fuerzas armadas chilenas interviniendo en la vida política del país es parte del nuevo imaginario. Son muchos quienes no descartan, si fuese necesario, una nueva intervención. Aunque con un perfil más acorde con los golpes blandos.

En 1970 hubo quienes alertaron de la falsa neutralidad y el «apoliticismo» de las fuerzas armadas, señalando su papel esencial en la formación del Estado moderno en Chile. Sus análisis venían a demostrar una peculiaridad que las distinguía de sus homólogas latinoamericanas. Alain Joxe, en un estudio pionero, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno,* dejó claro el peligro político de asumir una hipótesis no intervencionista de las fuerzas armadas chilenas.

> Hablar de una tradición continua de no intervención es transcribir por antífrasis –en el nivel ideológico– el hecho de que las intervenciones de las fuerzas armadas, después de la Guerra del Pacífico, han sido en realidad tan importantes y tan decisivas (la marina en 1891; el ejército en 1924), que han podido, en cada ocasión, remodelar el Estado «en forma» con una gran eficacia, de modo que se encuentran inútiles intervenciones numerosas y que resulta imposible la permanencia durable de las fuerzas armadas en el poder. La reconstrucción –en cada intervención exitosa– de un sistema en el cual la intervención permanente del ejército en los asuntos propiamente políticos no es necesaria, produce una ilusión óptica. Una intervención militar en Chile es perfecta. La tranquilidad política de los militares chilenos proviene de la satisfacción durable del trabajo bien hecho. Por supuesto que no se trata del mismo ejército, ni del mismo trabajo, en 1891, que en 1924/31. La noción de tradición es relativa, y se evita decir que el ejército en Chile tiene por tradición intervenir cada treinta o cuarenta años. Puede intentarse explicar la tradición por la historia, pero no el sistema actual por la simple tradición.

Las fuerzas armadas se auparon al poder político. Elegidos por Dios, tomaron la «patriótica» decisión de derrocar al gobierno «marxista de la Unidad Popular y comenzar la lucha para erradicar el cáncer marxista de raíz», «salvando a Chile de caer en las garras del comunismo». Así lo

esputó el general de la fuerza aérea Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar de Gobierno a la hora de justificar la intervención golpista.

Ser socialista, comunista, militante de la Unidad Popular, simpatizante de izquierdas o constitucionalista se convirtió en delito. Proscritos, perseguidos. En no pocas ocasiones fueron expropiados sus bienes inmuebles, tanto como su patrimonio. Obras de arte, joyas, dinero, antigüedades. Se arrasó con todo. El saqueo en la casa del presidente Allende fue considerado por sus autores un trofeo de guerra. Desde las medallas, los premios, fotos familiares, libros autografiados, pinturas, etcétera.

Detenidos, torturados, desaparecidos. Quienes defendieron y participaron del gobierno de la Unidad Popular engrosaron las filas, a partir del 11 de septiembre de 1973, de los etiquetados como subversivos y terroristas. No tenían derecho a la vida. Perdí compañeros y amigos. Recuerdo la cara de Gregorio Mimica, presidente de la Federación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Técnica del Estado, militante comunista. El 12 de septiembre de 1973, en el patio de la escuela de Artes y Oficios, fue separado, junto a otros dirigentes estudiantiles. De familia castrense, no pudieron evitar su desaparición. Hoy, engrosa la lista de detenidos desaparecidos. En el Estadio Chile, rebautizado Víctor Jara, pude ver por última vez al cantautor Víctor Jara (nos cruzamos miradas), también detenido en la Universidad Técnica. Chile entraba en una noche oscura, presagio cruel de lo que se avecinaba.

El 11 de septiembre hubiese sido para los estudiantes de la Universidad Técnica un día especial. Salvador Allende iba a acudir a inaugurar la exposición de cuadros antifascistas. La sedición nos jugó una mala pasada. El bombardeo a la Moneda estaba en su apogeo. Aún pensábamos que el golpe podía revertirse. Nos insuflamos ánimos creyendo que tropas encabezadas por generales leales, a cuyo mando estaría Carlos Prats, abortarían la asonada. Había que resistir. Mantuvimos la ilusión entre gritos de ¡Unidad Popular, venceremos! El 12 de septiembre, los militares entraron fusil en mano, disparando al aire y dando órdenes. «¡Todos al suelo, boca abajo, manos sobre la cabeza y pies cruzados!» El cuadro era otro.

Habían pasado tres años del triunfo electoral de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970. En la memoria, el mitin de proclamación, a los pies del

cerro Santa Lucía, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la noche del 4 al 5 de septiembre de 1970. Lugar emblemático, odiado por la derecha, había sufrido múltiples atentados, entre otros un incendio. Se le conocía como la FECH quemada. Por su presidencia pasaron grandes líderes de la izquierda chilena. Allende habló con cordura:

> Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la federación de Estudiantes. Esto posee un valor y un significado muy amplio. Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque todos lo sabemos. La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo; ella es la victoria de Chile, alcanzada limpiamente esta tarde. Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan solo un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre, y si pude soportar –porque cumplía una tarea– la derrota de ayer, hoy, sin soberbia y sin espíritu de venganza, acepto este triunfo que nada tiene de personal, y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a nosotros. Se lo debo al hombre anónimo y sacrificado de la patria, se lo debo a la humilde mujer de nuestra tierra. Le debo el triunfo al pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre.

El sueño de construir un Chile socialista en democracia y libertad se hacía posible. El 5 de septiembre, la derecha ya maquinaba el plan desestabilizador. Hizo lo indecible por evitar que Salvador Allende llegara a la Moneda. Intentó secuestrar al general en jefe de las fuerzas armadas, René Schneider Chereau. Su plan fracasó cuando opuso resistencia, siendo acribillado a balazos. Asimismo, un sector de la Democracia Cristiana, encabezado por Andrés Zaldívar y Eduardo Frei Montalva, presidente saliente, en complicidad con la Embajada de Estados Unidos y la derecha fascista, activaron la vía al golpe de Estado. La trama civil, entrelazada con militares golpistas, triunfó el 11 de septiembre de 1973.

Fueron mil días de gobierno popular. Nacionalizaciones, reforma agraria, trabajo voluntario, alfabetización, ampliación de los derechos civiles, incorporación de la mujer, la juventud, los trabajadores y el pueblo Mapuche. Por primera vez verían respetar su historia, su territorio y su dignidad. La vía chilena al socialismo triunfó en un campo minado, la Guerra Fría. El proyecto y la figura de Salvador Allende traspasarán fronteras. Humanista y confeso socialista-marxista, cumplió siempre su palabra. Primero como líder estudiantil, diputado, ministro de Sanidad en el gobierno del Frente Popular del presidente Pedro Aguirre Cerda, senador y,

por último, como presidente. Muchas leyes sociales llevan su nombre. Respetado por unos y otros, fue víctima de la traición. Pagó con su vida la lealtad que el pueblo chileno le entregó el 4 de septiembre de 1970. Chile no ha tenido figura política más relevante ni más influyente.

Colegas, compañeros de militancia y estudiantes me han animado a escribir una historia del golpismo en América Latina. La idea me pareció excelente. Significaba reconstruir y abordar teóricamente la parte más negra de la historia del continente. Las intervenciones militares y el anticomunismo. Acepté el reto como una manera de evidenciar la escasa estatura moral, los delirios de grandeza y pequeñez intelectual de tanto tirano que asoló América Latina en el siglo XX.

El texto que tienen en sus manos responde a una edición actualizada y corregida de *Tiempos de Oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina,* publicado en Akal dentro de la colección Pensamiento Crítico (2013). Tuvo dos ediciones. Se había pensado en una reedición, pero ante las buenas y malas críticas y los aportes de lectores anónimos, se tomó la decisión de reescribirlo. En este sentido, el ensayo cobra nueva vida. Esta versión presenta varias novedades. Un mayor espacio dedicado a la historia del siglo XIX latinoamericano y las conexiones del imperialismo con las clases dominantes. Igualmente, vincula la historia de Estados Unidos con los factores que condicionaron su posterior desarrollo. Por otro lado, busca engarzar la descripción de las estructuras sociales y de poder con los movimientos y vanguardias que han configurado la cultura latinoamericana. El Romanticismo, Modernismo y Realismo actúan como puntos donde se reflejan las ideas de las generaciones cuyo hacer identificó las luchas democráticas. Igualmente, emergen los movimientos de género, las primeras luchas de las mujeres por los derechos políticos, sus aportes a la construcción de proyectos emancipadores, hasta ahora invisibilizados. Por último, incorpora el debate actual sobre los golpes blandos, no violentos, y una descripción de los mismos, tanto como de las estrategias desestabilizadoras articuladas desde los centros hegemónicos.

El texto está escrito como un tránsito de la historia a la política. He querido dejar constancia de los mecanismos de aplicación de la técnica del golpe de Estado. Igualmente, de cómo se construye el discurso anticomunista que lo acompaña. Los caudillos militares aparecen a la luz de

sus extravagancias y métodos de control político. Para lograr una narración fidedigna, he preferido que tomen la palabra.

La Doctrina de la Seguridad Nacional, el enemigo interno, la lucha antisubversiva, la noción de guerra total, las guerras de baja intensidad, las acciones encubiertas urden una trama donde el imperialismo y el complejo industrial-militar-financiero, liderado por Estados Unidos, ocupa un lugar de excepción. En este cuadro, el relato se detiene en dos experiencias atípicas que perduraron en el tiempo, dando lugar al nacimiento del llamado reformismo militar: Panamá y Perú, ambos emergentes en 1968. Hubo otros intentos, como la Revolución juliana en Ecuador o la efímera República Socialista de Chile, entre el 4 y el 16 de junio en 1932. Todos tuvieron un trágico fin, al igual que la experiencia boliviana del general Juan José Torres en 1971. En esta nueva edición, primera en Siglo XXI, se añade un apartado sobre la gestación del golpe de Estado en Chile y otro sobre la nueva seguridad hemisférica de los Estados Unidos hacia el continente realizado al alimón con una excelente compañera y colega: María José Rodríguez Rejas. Su obra, editada en Akal, *La norteamericanización de la seguridad en América Latina,* es de lectura imprescindible. Para no citarla repetidas veces, creí honesto pedirle su colaboración. Igualmente, se suma un nuevo capítulo: «Golpes de Estado, luchas democráticas y movimientos sociales». Se trata de visualizar la diferencia entre el golpe de Estado y su posterior trasformación en dictadura, haciendo hincapié en aquellas en que se produce el desarrollo de una cultura autoritaria, a las cuales adjetivé como dictaduras fundacionales.

En pleno siglo XXI, la amenaza comunista se disipa en la mente de los ideólogos de la guerra. Las fuerzas armadas combaten a partir del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, otro enemigo: el terrorista universal. Sin embargo, en América Latina, los golpes de Estados siguen arguyendo el comunismo como excusa para derrocar gobiernos constitucionales, aunque los militares han pasado a una segunda línea de fuego. Así, ve la luz otro tipo de golpe de Estado capaz de torcer la dirección de los acontecimientos históricos y políticos. Empresas trasnacionales, bancos de inversión como Goldman Sachs o Agencias de Calificación, «los mercados», ajustan sus estrategias para dar golpes de Estado siendo los artífices de una nueva arquitectura de la política conspirativa.

La nueva red de actores golpistas crea un conglomerado que compromete a medios de comunicación, empresas transnacionales, partidos políticos, ideólogos, fundaciones, militantes neoliberales, conservadores o socialdemócratas, mediante un *impeachment* fabricado para la ocasión. Es el caso de Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Brasil 2016.

Las intentonas frustradas en Venezuela, Bolivia o Ecuador muestran que la derecha latinoamericana no acepta la derrota electoral cuando sus intereses son amenazados. En México, el fraude electoral se ha constituido como un mecanismo para el golpe de Estado. Milagrosamente, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 ha sido incontestable. El PRI le arrebató, mediante fraude, el triunfo al candidato Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, naciendo el gobierno espurio de Carlos Salinas de Gortari. Por dos ocasiones, Andrés Manuel López Obrador sufrió el mismo destino. Felipe Calderón, en 2006, y Peña Nieto, en 2012, se alzaron con la presidencia alterando el resultado de las urnas. El Instituto Federal Electoral hizo caso omiso de las acusaciones de fraude, a diferencia de Venezuela, que escrutó en 2013, a petición del candidato Henrique Capriles, el 100 por 100 de las mesas, despejando cualquier acusación de fraude. En México, la máxima institución electoral prefirió legitimar el golpe de Estado, haciendo oídos sordos a la petición de conteo de papeletas. El triunfo de Manuel López Obrador, el 1 de julio de 2018, pone un paréntesis en esta dirección, pero puede abrir la puerta a un golpe blando, si su gobierno incomoda o frena las reformas neoliberales de estas últimas décadas.

Esta historia de los golpes de Estado busca sacar a la superficie la memoria política y social del siglo XX latinoamericano. Mirar el pasado y obtener respuestas. Generaciones han sido sus víctimas. Miles de jóvenes, hombres y mujeres, sufrieron la tortura y aún se vive la desazón de los detenidos desaparecidos. Impunidad e ignominia cubren las vergüenzas. Nos encontramos con países donde no es posible juzgar a los militares y civiles autores de crímenes de lesa humanidad. Sea por cobardía, complicidad, miedo o pérdida de dignidad, lo cierto es que siguen en la calle. En otros casos, las penas se condonan o trasmutan por el arresto domiciliario. En Chile, el actual presidente Piñera y su gobierno, junto a la Corte Suprema de Justicia, han decidido dejar en libertad condicional a presos condenados por crímenes de lesa humanidad, que no se han arrepentido ni colaborado con la justicia para solucionar los casos en los

cuales participaron. Todos ellos han sido encarcelados en el Penal *Punta Peuco,* cárcel de lujo para miembros de las fuerzas armadas y carabineros. Allí se mantienen, a cuerpo de rey, los más sanguinarios asesinos de la dictadura.

No es asumible que un general, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, espete por su boca, arguyendo la Doctrina de la Seguridad Nacional: «Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después… a sus simpatizantes, enseguida… a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos».

Pero tampoco es aceptable una amnesia rayana en la estupidez, como la del exministro de Asuntos Exteriores de la expresidenta socialista Michelle Bachelett, Alejandro Foxley, en 2000:

> Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar.

Enunciarlo y no ruborizarse es perder la dignidad. Creérselo, una falta de respeto al pueblo chileno, las víctimas de la dictadura y sus familias. Foxley no fue destituido de su cargo. Estos comportamientos alientan nuevas aventuras golpistas. Noches oscuras que en pleno siglo XXI amenazan los países de nuestra América.

Mientras redactaba, pensé cuál podía ser el sentido de una historia del golpismo en América Latina. Encontré respuesta en la pérdida de memoria y la guerra psíquica del capitalismo digital por borrar todo vestigio del pasado. Un ataque a la memoria histórica y la conciencia colectiva que debemos combatir; si no, corremos el peligro de olvidar. En muchas ocasiones, como docente en la ya extinta especialidad de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid, pude verificar cómo a los estudiantes se les hurta el conocimiento de Nuestra América y se

manipula la historia bajo enseñanzas tópicas y versiones eurocéntricas rayanas en la idiotez y el colonialismo cultural.

Concluida esta nueva versión, distribuí el texto entre exalumnos, estudiantes de posgrado. Hay quienes se tomaron la lectura como un reto, aportando sugerencias e información. Como han sido muchos, a todos ellos les doy las gracias. Pero no puedo dejar de mencionar en especial a Eduardo Fort, exalumno, licenciado en Ciencias Políticas, quien asumió la responsabilidad de la cronología de los golpes de Estado. Tengo una deuda infinita con Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García Sánchez, del espacio de comunicación popular *Vocesenlucha.* Hicieron una lectura detallada y prolija. Esfuerzo y compromiso los caracterizan. Capítulo a capítulo, me señalaron errores y aciertos. Ellos también son hacedores del libro. Pero no puedo dejar de reconocer los valiosos aportes de Rodrigo Rodríguez Otero, cuya erudición en el conocimiento de la historia de Chile, literatura latinoamericana y los movimientos de liberación nacional me sacaron de errores y facilitaron la reescritura. No olvido a Mario Casasús, gran periodista mexicano conocedor profundo de nuestra realidad, nerudiano confeso; sus comentarios fueron de gran ayuda. A Jaime Pastor, colega y amigo, le agradezco sus consejos; espero los vea incorporados. Francisco Ochoa de Michelena, editor y lector cuyas aportaciones a la redacción han mejorado mi castellano y aligerado el texto. Frank Rubio, compañero de tertulias, me hizo ver la importancia de lo escrito. Eugenio Bermúdez González, cuyo talento me ayudó a matizar afirmaciones, sin olvidar a David Sánchez Rubio, jurista y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, cuyos comentarios me subieron la estima, junto a los aportes de Gustavo González Geraldino, exalumno colombiano, comprometido con su país y las luchas democráticas, quien me animó a realizar una nueva edición sugiriendo enfoques y nuevos temas, y un nuevo amigo, Pedro Valeije, surgido de mis idas y venidas a la librería Marcial Pons, cuyo interés por la lectura y recomendación de autores me abren nuevas vías de conocimiento. Por último, reconocer el apoyo de Aurora, compañera de toda una vida (su generosidad y entrega no tiene límites), y Talía, hija incisiva que siempre me pone en la tierra con sus acertados argumentos. Ambas son coautoras. A ellas también pertenece este libro.

[1] «El *lawfare:* guerra jurídica contra la democracia», *eldiario.es,* 21 de agosto 2018.

[2] Véase C. Belfrage, *La inquisición democrática en Estados Unidos,* México, Siglo XXI, 1972.

[3] S. E. Morison, H. Steele y W. Leuchtenburg, *Breve historia de los Estados Unidos,* México, FCE, 3.ª ed., 1987, p. 823.

[4] V. Prashad, *Las naciones oscuras. Una historia del tercer mundo,* Barcelona, Península, 2012, p. 261.

[5] Véase [https://www.youtube.com/watch?v=SnECpGlTUdI].

I. MEMORIA VIVA DE LOS SIGLOS XIX-XX LATINOAMERICANOS. UNA HISTORIA DE IDA Y VUELTA

> De mí sé decirle que, con ley o sin ley, a esa señora que llaman Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas.
>
> Diego Portales. Forjador del Estado chileno.

> Un ejército victorioso no tiene que dar explicaciones. Si en la última guerra mundial hubieran ganado las tropas del Reich, el juicio no se habría hecho en Núremberg, sino en Virginia.
>
> Roberto Viola. Dictador argentino.

DEL IMPERIO AL IMPERIALISMO

¿Cómo entender la modernidad sin la invención de América? Occidente se completa con la conquista y colonización hispano-lusa del siglo XVI. Los imperios trasladan sus instituciones, religión, moral, costumbres, lengua; imponen su cultura. El capitalismo hunde sus raíces en la explotación colonial: la esclavitud, la servidumbre, la Inquisición. El pensamiento utópico se nutre de los primeros relatores de Indias. El Dorado, la fuente de la eterna juventud, el paraíso perdido. Los sueños de Occidente y su civilización se hacen realidad en América Latina, avivan el sentido de dominación imperial. La Corona, banqueros, comerciantes, la Iglesia, ven en el nuevo continente una oportunidad para saciar su sed de riquezas, poder, evangelización y reconocimiento. Se enciende la fiebre de conquista. América y Europa sellan su destino.

Guerras, revoluciones, genocidios, invasiones, golpes de Estado conviven junto a proyectos democráticos, populares, de liberación nacional y antiimperialistas. La historia de América Latina está cargada de acontecimientos cuya explicación obliga a reconocer su origen. Fueron tierras de conquista y, más tarde, colonias. Objeto deseado por las grandes potencias, sus territorios han sido explotados hasta el agotamiento o extinción de flora, fauna y riquezas naturales. Los conquistadores

esquilman, destruyen, asesinan e imponen su ley. Sin embargo, a la par que la dominación imperial se despliega, la resistencia y el rechazo se generalizan. Los pueblos originarios presentaron y siguen presentando batalla. Mientras la pesadilla de la conquista se extiende, los sueños liberadores crecen.

América Latina es un continente con cicatrices a flor de piel. Conquista, colonia, independencia, tiranías, antiimperialismo. Cinco siglos marcan su devenir. Pasado vivo, emerge en cada proceso político, en su pensamiento, filosofía, arte, literatura, escultura, cine, lengua, arquitectura. Colonialismo interno, presencia africana, mestizos, mulatos, zambos, pueblos originarios. Todo fluye hasta converger en una idea: la emancipación.

El imperialismo no ceja en el empeño de maniatar a los Estados, busca su control ideológico, político, cultural. Juega sus cartas. Son las trasnacionales, el capital especulativo, el complejo militar-industrial-financiero, avalados por sus socios internos, las burguesías locales, las plutocracias. Para las potencias hegemónicas, los pueblos de América Latina son pueblos sin historia, pasado ni memoria. Países donde se aplican políticas, sin capacidad de decisión, a los cuales se les niegan los derechos soberanos. Y cuando surgen proyectos democráticos, son avasallados, condenados a muerte. Hacerse escuchar, contravenir órdenes, ejercer derechos, no está bien visto.

El siglo XIX se abre con los procesos emancipadores, potencias en declive y auge: España invadida, su rey secuestrado, Francia en pleno apogeo napoleónico; Gran Bretaña a punto de entrar en la era victoriana, madre de la revolución industrial, exhibe su poderío naval. Los Países Bajos mantienen su presencia en el Caribe y África. Mientras tanto, Prusia, Austria y Rusia conforman la Santa Alianza. La Revolución francesa estremece al Viejo Continente.

El positivismo, la idea de progreso, la lucha contra el despotismo ilustrado, el auge del nacionalismo. El Romanticismo, movimiento antirracionalista, conecta las postrimerías del siglo XVIII con los albores del siglo XIX. Pintura, literatura, arquitectura, arte, filosofía. Las revoluciones burguesas y el liberalismo político toman fuerza. Delacroix y su lienzo *La Libertad guiando al pueblo,* un homenaje a la Revolución de 1830, simbolizan la época. Goya y su monumental *Saturno devorando a un hijo,* o *Los fusilamientos del 3 de mayo,* la complementan. La novela se

consolida como género: Mary Shelley, con *Frankenstein o el moderno Prometeo,* Jane Austin, con *Orgullo y Prejuicio,* Emily Brontë y sus *Cumbres Borrascosas.* Goethe, Victor Hugo. La filosofía no se queda atrás: Johann Herder escribe *Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad;* Friedrich Schelling, *Las edades del mundo.* La música no va a remolque: Ludwig van Beethoven, Félix Mendelssohn, Richard Wagner. El Romanticismo ocupa todo el espacio cultural, político, económico y social. Muestra los cambios en la estructura social y de dominación. El individualismo burgués se expande.

En América Latina, una generación de jóvenes intelectuales, educados en Francia, Inglaterra, reacios a reflejarse en el clasicismo español, asume las riendas del nacionalismo criollo. Una crítica al despotismo y los primeros dictadores. Esteban Echeverría, argentino, introductor del Romanticismo en América Latina, escribe su novela *El Matadero* (1840), mostrando los excesos del caudillo Rosas. José Domingo Sarmiento, en su exilio en Chile, escribe *Facundo: civilización o barbarie.* Era el enfrentamiento entre la América bárbara y la Europa civilizada. Andrés Bello (1781-1865), venezolano-chileno, maestro de Simón Bolívar, redacta *Gramática de la lengua castellana dedicada al uso de los americanos* (1847) y entabla una dura polémica con Sarmiento, reconociéndose en el humanismo. Juan Bautista Alberti (1810-1884) apunta en 1838: «La revolución nos ha sacado bruscamente de entre los brazos de la Edad Media y nos ha colocado bruscamente al lado del siglo XIX».

El romanticismo latinoamericano expresa las contradicciones de un orden que nace al amparo de las estructuras de poder colonial. Sus autores, poetas, literatos, periodistas, políticos, describen las sociedades a partir de la novela costumbrista, son los relatores de una época. La historia se cuenta en sus páginas. Es el tiempo de las luchas entre caudillos regionales, dictadores supremos, federalistas versus unitarios. Liberales y conservadores. Monárquicos enfrentados a republicanos. Sus narraciones describen la esclavitud, las luchas abolicionistas, la emergencia de las ciudades y las contradicciones de un orden rural afianzado en el caciquismo. En México, José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827) presenta *El periquillo Sarniento.* Novela costumbrista, describe el fin del orden colonial, los primeros años de la independencia y es una descarnada crítica a la esclavitud; Vicente Riva Palacio (1832-1896), ejemplo de la personalidad

romántica, periodista, político, militar, incursiona en la sátira política, escribe novela, teatro, ensayo, cuento, poesía. Junto a Juan de Dios Peza, edita *Tradiciones y leyendas mexicanas* (1885). En Cuba, Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873) escribe *Sab* (1841); en Perú, Ricardo Palma (1833-1919), *Tradiciones Peruanas* (1872); el colombiano Jorge Isaacs (1837-1895) alcanza renombre internacional con la novela sentimental *María* (1867), mientras en Chile Francisco Bilbao (1823-1865) escribe *Sociabilidad chilena* (1844) y en Guatemala José Batres Montufar (1809-1844) reúne en un volumen *Tradiciones de Guatemala.* Sin olvidar la obra que marca las diferencias: *Martín Fierro,* del argentino José Hernández (1834-1886)[1].

La mayoría compaginaron sus inquietudes literarias con la acción política. Ejercieron cargos públicos, llegando a ser presidentes, ministros, gobernadores, senadores, forjadores de sociedades de igualdad, masones. Sufrieron el exilio. Ilustrados amantes del progreso y la educación laica. Algunos, anticlericales. Les movía el conocimiento, el desarrollo de las artes, las letras y las ciencias. Otros, los más positivistas, compartían un lema: *orden y progreso.* La bandera de Brasil lo lleva en su estandarte y el escudo chileno subraya las fuentes de legitimación del orden: *por la razón o la fuerza.* El Romanticismo unió a una generación, la nacida tras la independencia. Sus obras, luchas, reivindicaciones, constituyen la memoria histórica del siglo XIX latinoamericano. La descripción del historiador Paco Taibo II, refiriéndose a los liberales mexicanos, apodados liberales rojos, puede extenderse a los liberales románticos de todo el continente:

> Endiabladamente inteligentes, agudos, esforzados, laboriosos, personajes terriblemente celosos de su independencia y espíritu crítico, honestos hasta la absoluta pobreza. Incorruptibles, obsesionados por la educación popular, hijos de la iluminación, las luces, el progreso, el conocimiento, la Ilustración, la ciencia. Atrapados sin quererlo en las bombas de agua, las fraguas, las máquinas de vapor, las imprentas, los elevadores, las carretas, en el amor al ferrocarril, sin llegar a entender que en sus ruedas transportaría no solo el progreso, sino también una nueva forma de barbarie. De esta falsa idea de progreso los salvaba una mentalidad que no daba por bueno lo históricamente inevitable, que veneraba las costumbres, lo popular, al pueblo llano, a los trabajadores y los artesanos, los oficios mayores, como el de impresor, o los pequeños, como el de aguador[2].

En América del norte, la independencia de las 13 colonias se presenta como antesala de la Revolución francesa. En 1776, nacen los Estados

Unidos. La guerra anticolonial, de la cual emanan, trasforma en líderes a los llamados padres fundadores. Su influencia se deja sentir en Europa. John Adams, verdadero artífice de la doctrina Monroe, segundo presidente, es nombrado embajador en Gran Bretaña y Francia (1782-1788); en 1811 había escrito a su padre: «Todo el continente de Norteamérica parece *destinado por la Divina providencia* a ser poblado por una *nación,* a hablar un idioma, a profesar un sistema general de principios religiosos y políticos, acostumbrado a un tenor general de usos y costumbres sociales. Por la común felicidad de todos ellos, por la paz y prosperidad, considero indispensable que se asocien en una sola Unión Federal»[3]; John Jay, presidente del Congreso Constituyente, será embajador en España y Francia en 1779-1782; Thomas Jefferson, tercer presidente, embajador en Francia en 1785-1789; Benjamín Franklin, en Francia y Suecia (1775-1778). Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, junto a John Jay y Madison, escribe una de las obras más importantes en la historia política y constitucional: *El Federalista.* George Washington, primer presidente, inglés de nacimiento hasta la independencia, militar del ejército británico en las colonias, antes de asumir el cargo de comandante en jefe del Ejército Continental en 1775, se trasforma en su director supremo. James Madison, cuarto presidente, uno de los redactores de la carta de derechos, asesor de Jefferson en la compra de Luisiana a los franceses, abre el ciclo bélico contra Gran Bretaña, con el objetivo de ocupar territorios canadienses.

Alexis de Tocqueville une ambas revoluciones, establece diferencias. En su viaje por tierras americanas (1831), toma contacto con el proceso político y en 1835 ve la luz el primer volumen de *La democracia en América.* Un alegato contra las tiranías. Sus reflexiones evidencian las preferencias liberales y sus temores sobre el futuro del orden democrático. Crítico de la esclavitud, el despotismo, cronista de un cambio de siglo, señala los puntos de encuentro entre Europa y América del Norte y alienta una revolución social capaz de articular un orden democrático representativo. Bajo este marco, se pregunta:

> ¿Dónde nos encontramos, pues? ¡Los hombres religiosos combaten la libertad y los amigos de la libertad, a las religiones; espíritus nobles y guerreros elogian la esclavitud y almas bajas y serviles preconizan la independencia; ciudadanos honrados e instruidos son enemigos de todo progreso, al tiempo que hombres sin patriotismo ni moral se convierten en apóstoles de la civilización y de la cultura! ¿Es que todos los siglos se han parecido al nuestro? ¿Ha tenido el

hombre siempre ante los ojos, como hoy, un mundo en el que nada se prosigue, donde la virtud carece de genio y el genio carece de honor; donde el mor al orden se confunde con la devoción por los tiranos y el culto santo de la libertad con el desprecio a las leyes; en que la conciencia no arroja más que una claridad dudosa para iluminar las acciones humanas; donde ya nada parece prohibido, ni permitido, ni honrado, ni vergonzoso, ni verdadero, ni falso? ¿He de pensar que el Creador ha hecho al hombre para dejar que se debata eternamente en medio de las miserias intelectuales que nos rodean? No puedo creerlo […]. Existe un país en el mundo donde la gran revolución social de la que hablo parece haber alcanzado sus límites naturales; la revolución se ha efectuado allí de manera sencilla y fácil, o más bien podría decirse que dicho país está viviendo los resultados de la revolución democrática que se opera entre nosotros sin haber conocido la revolución misma. Los emigrantes que fueron a establecerse a América a principios del siglo XVII desligaron en cierto modo el principio de la democracia de todos aquellos contra los que se luchaba en el seno de las viejas sociedades de Europa. Allá pudo crecer libremente y, marchando con las costumbres, desarrollándose apaciblemente en las leyes. Me parece que tarde o temprano llegaremos, como los americanos, a la igualdad casi completa de las condiciones… [4].

Igualmente, sienta la distancia entre el norte y el sur del continente a la hora de buscar una explicación a las dos conquistas:

[…] Encontramos en algunas partes de América del Sur vastas comarcas habitadas por pueblos menos ilustrados que ellos, pero que ya se habían apropiado del suelo, cultivándolo. Para fundar los nuevos Estados debieron destruir o someter a numerosas poblaciones, e hicieron avergonzar a la civilización por sus triunfos. Pero América del Norte no estaba habitada sino por tribus errantes que no pensaban utilizar las riquezas naturales del suelo. América del Norte, hablando con propiedad, era todavía un continente vacío, una tierra desierta que aguardaba a sus habitantes.

Sin embargo, no deja de constatar:

Todas las tribus indias que en otro tiempo habitaban el territorio de Nueva Inglaterra, los narraganssetts, los mohicanos, los pecots, solo existen ya en el recuerdo de los hombres; los lenapes, que recibieron a Penn hace ciento cincuenta años en las orillas del delaware, hoy han desaparecido. He conocido a los últimos iroqueses: pedían limosna. Todos los pueblos que acabo de nombrar se extendían antaño hasta la orilla del mar; ahora hay que andar más de cien leguas por el interior del continente para encontrar un indio. A estos salvajes no solo se les ha hecho retroceder, sino que se les ha destruido. A medida que los indígenas huyen y mueren, ocupa su lugar y crece incesantemente un pueblo inmenso. Nunca se había visto entre las naciones un desarrollo tan prodigioso[5].

A principios del siglo XIX, Estados Unidos es una potencia emergente. El presidente de la Universidad de Yale entre 1795 y 1817, Timothy Dwight, vaticina para los siglos venideros «un futuro en que Norteamérica dictaría

leyes al mundo: ¡Salve, Tierra de luz y alegría! Tu poder crecerá. Vasto como el mar que rodea sus regiones. Por los enormes ámbitos de la tierra se extenderá tu gloria y naciones salvajes ante tu cetro se inclinarán. En torno de playas heladas navegarán tus hijos. O extenderán tu estandarte en los ámbitos del Asia»[6].

La doctrina Monroe, 1823, sintetiza los sueños imperiales, punto de partida del expansionismo territorial en las excolonias españolas. Joan Garcés, en *Soberanos e intervenidos,* apunta la consolidación de la doctrina Monroe tras lograr Gran Bretaña,

> en octubre de 1823, cuando ya las tropas francesas tenían plenamente ocupada España, […] el compromiso escrito de que Francia no intentaría restablecer el poder español en América ni tenía la «intención», o el deseo, de apropiarse ella misma de ninguna de las partes de las posesiones españolas en América. Sin la colaboración de Francia, calculaba Canning, Rusia no podría actuar en solitario. El 22 de diciembre siguiente el presidente Monroe, con la tranquilidad de conocer que el gobierno francés ya se había inclinado ante el veto inglés, insertó en su mensaje anual al Congreso los conocidos tres principios de una política exterior largamente mantenida: 1. El continente americano no debía ser considerado objeto de colonizaciones futuras por ninguna potencia europea; 2. En contrapartida, Estados Unidos se abstenía de intervenir en los asuntos internos de Europa; y 3. Advertía contra toda interposición de los poderes europeos en cualquier porción del continente americano. La interpretación que tras ser elegido presidente dio John Adams a la «Doctrina» de la cual era autor intelectual –aunque llevaría el nombre de su predecesor, Monroe– fue muy restrictiva en cuanto a su ámbito territorial de aplicación: «Nuestra postura no se extenderá más allá de un compromiso mutuo de las partes con el pacto de mantener la aplicación del principio *en el territorio propio,* y de no permitir instalaciones coloniales o el establecimiento de jurisdicción europea en suelo propio». Lo que asombró a los gobiernos de México, Brasil, Colombia y otros países que, con grandes protestas, pedían al de Estados Unidos que se comprometiera a intervenir también en la América hispana-contra las expectativas de desembarco, de reconquista, por la alianza europea desde la intervenida España[7].

Estados Unidos, consciente de sus intereses geopolíticos, utiliza el argumento de la defensa como justificación a futuras invasiones:

> […] En 1843, el presidente Tyler otorgó una nueva dimensión a las palabras de Monroe cuando inició una campaña para anexar Texas a la Unión. El presidente Polk amplió aún más su sentido cuando completó la anexión y promovió su propio programa expansionista […]. El presidente Polk pronosticó las nuevas intenciones en su primer mensaje anual al Congreso, pronunciado el 2 de diciembre de 1845. Polk demostró que las actividades que británicos y franceses habían desarrollado en Texas en el pasado reciente y la presencia de los primeros en el territorio de Oregón, que se identificaban como una forma de nueva colonización en Estados Unidos, implicaban otras tantas violaciones a los principios de Monroe. Hizo una velada

> referencia al tema polémico de los límites de Texas y discutió largamente el problema de las deudas que México había contraído con los norteamericanos. Medio año más tarde patrocina una guerra con los mexicanos. A partir de entonces, el tema defensivo del mensaje de Monroe fue ampliado en los informes del Congreso, en las consultas de gabinete, en las instrucciones a los diplomáticos destacados en el extranjero y en las discusiones con los colaboradores políticos, hasta que llegó a coincidir con el tema de la expansión. Los amigos del gobierno también esgrimían estos tópicos en la prensa y el Congreso. El *leitmotiv,* tal como lo presentaban los órganos oficialistas, era la seguridad. Tal como lo interpretaban los críticos, era la expansión[8].

El 11 de mayo de 1846, con un escenario manipulado, estrategia recurrente, el presidente Polk declara la guerra a México. Para tal ocasión, aduce el incidente entre una patrulla estadounidense y el ejército mexicano, obviando que se había producido en tierras mexicanas. El altercado pasa a la historia como «escaramuza de Thornton». En su discurso, exclama: «Sangre americana ha sido derramada en suelo americano». La respuesta no se hace esperar: ciento setenta y tres congresistas apoyan la declaración de guerra, catorce muestran su rechazo. En el senado, de los cuarenta y dos, solo dos mostrarán su discrepancia.

México sufre la carrera expansionista de Estados Unidos. Si en 1836 se había desgajado Texas de su territorio, en 1848 será privado de Nuevo México y Alta California. El ejército invasor, al mando del general Zachary Tylor, entra en la capital, el 14 de septiembre de 1847. Tras una numantina resistencia de jóvenes cadetes atrincherados en el Castillo de Chapultepec, apodados los «Niños Héroes», la bandera estadounidense es izada en el palacio presidencial, curiosamente, en el día de su independencia, el 16 de septiembre.

Estados Unidos redefine sus fronteras tanto al norte como al sur. La conquista del oeste, cruzando los Apalaches, tendrá otra dimensión, será recordada como la historia del genocidio de los pueblos originarios. Para sus padres fundadores, la necesidad de expandirse hacia el sur, controlar el Caribe y los océanos Atlántico y Pacífico,

> se convirtió en verdadera fiebre, que empezaba a racionalizar su ambición. Unos hablaban de la obligación de extender la democracia, otros del cumplimiento del mandato bíblico «fructificad y multiplicaos y bendecid la tierra y sojuzgadla y señoread»; los ánimos clamaban por el Oregón y Texas. Muchos ambicionaban las dos Californias, con el puerto de San Francisco para el comercio con Asia. El clima de ambición de tierras solo espera un nombre. John. L. Sullivan acuñó en 1845 la frase feliz de «Destino Manifiesto», o destino revelado, que en verdad expresaba ese vago conjunto de ideas y sentimientos que justificaban las ambiciones

> norteamericanas y de los que él mismo hizo verdadera doctrina. Cualquier pueblo vecino podría establecer un autogobierno por contrato, solicitar su admisión y, si se le consideraba calificado, se le admitiría en la Unión[9].

Tras México, le toca el turno a Centroamérica de ser el objetivo de los proyectos expansivos de Estados Unidos. Sus generales y padres fundadores buscan construir un canal interoceánico, controlando comunicaciones y consolidando su poderío en la región. Era una necesidad estratégica. Nada más producirse la independencia de las repúblicas centroamericanas, en 1825, traba conversaciones con el gobierno de Nicaragua, para obtener la concesión sobre cualquier proyecto que facilite la unión entre los dos océanos. De esa manera, con una armada poderosa, tendría el control naval, cuestionando la hegemonía de Gran Bretaña. Conscientes de la disputa, Inglaterra, entre 1841 y 1850, realiza incursiones en la Costa Atlántica. En una jugada maestra, reconoce la figura de «rey» de la Mesquitia. Los indios miskitos ocupan una amplia banda territorial entre Honduras y Nicaragua. Tal maniobra le permite hacerse con el control del puerto de San Juan del Norte, salida natural de cualquier proyecto transatlántico. Las fuerzas navales británicas toman San Juan, lo convierten en un protectorado y rebautizan el territorio con el nombre de Greytown. Será la puesta de largo de la doctrina Monroe. Estados Unidos envía la fragata de guerra «Cyane». Ocupan el Puerto de San Juan del Norte, prenden fuego a la ciudad, reduciéndola a escombros. Es el mensaje enviado a Gran Bretaña. A los pocos días del suceso, se reúnen el secretario de Estado John Clayton y el ministro inglés sir Henry Lytton, firmando un acuerdo de caballeros, en el cual se muestran

> deseosos de consolidar las amistosas relaciones que felizmente existen entre ellos, han dispuesto manifestar y fijar en convención sus puntos de vista e intenciones con respecto a cualquier medio de comunicación por canal que deba construirse entre los océanos Atlántico y Pacífico, por la vía del río San Juan de Nicaragua y uno de los dos lagos de Nicaragua y Managua, hasta puerto o lugar sobre el océano Pacífico […], ni uno ni otro obtendrán jamás, ni mantendrán por sí ninguna intervención exclusiva sobre dicho canal […], ambos se abstendrán de ocupar, fortificar, colonizar, asumir o ejercer dominio alguno sobre Nicaragua, Costa Rica, la costa mosquita o parte alguna de la América Central[10].

Tras la disolución de la República Federal Centroamericana en 1840, la guerra civil y el fusilamiento de su último presidente, Francisco de Morazán, en San José de Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842, las

nuevas repúblicas son objeto de deseo de las grandes potencias. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua consolidan un poder conservador mirando a Estados Unidos. En 1854, el mercenario estadounidense Byron Cole ofrece sus servicios, en medio de una disputa de poder entre liberales y conservadores, al entonces jefe del partido liberal de Nicaragua Francisco Castellón. La operación queda al mando del filibustero William Walker y trescientos hombres desplazados para la ocasión desde Estados Unidos. Fogueado en la Guerra de México, esclavista, se propone conquistar territorios para su posterior anexión a los Estados del Sur de Estados Unidos. Su aventura, apoyada por el entonces presidente de Estados Unidos Franklin Pierce, toma cuerpo. Terminada la guerra, William Walker se hace con el poder, designándose presidente en julio de 1856. Su objetivo es controlar los cinco Estados centroamericanos, más Cuba, e incorporarlos, bajo bandera esclavista, a Estados Unidos. Según sus palabras, la introducción de la esclavitud «tendería a separar las razas y a destruir a los mestizos, causantes del desorden que ha reinado en el país desde la independencia». Walker emite «una serie de leyes y decretos tendentes a garantizar la existencia de su "república esclavista del trópico". El primero de ellos confiscó las tierras de los enemigos del régimen y las puso en venta aceptando como medio de pago los valores emitidos por el ejército. Después se declaró el inglés idioma oficial […]. A fin de asegurar el suministro de mano de obra se dictó una ley contra la vagancia y, posteriormente, se hicieron legales los contratos de servicios obligatorios; todas estas reformas culminaron con la ley de restablecimiento de la esclavitud»[11]. Los países centroamericanos se unen para desalojar a Walker de Nicaragua. Bajo el nombre de «Guerra Nacional» los ejércitos de Honduras, Costa Rica y Guatemala logran su derrota. Deportado a los Estados Unidos, rearma a sus hombres y regresa; será capturado y fusilado el 12 de septiembre de 1860.

Los grandes libertadores visualizaron el peligro que suponía una hegemonía en manos de Estados Unidos. No otro era el objetivo de Simón Bolívar a la hora de convocar en 1824 el Congreso Anfictiónico, celebrado dos años más tarde en Ciudad de Panamá, el 22 de junio. Tenía claro que no debía participar Estados Unidos. Sin embargo, el general Francisco de Paula y Santander, a la sazón vicepresidente de La Gran Colombia, cursó una invitación formal al Presidente Adams, a espaldas de Bolívar, teniendo que

aceptar, este último, la política de hechos consumados. Tanto era su enfado, que responde a Santander: «No creo que los americanos deban entrar en el Congreso del Istmo […]. Nunca me he atrevido a decir a usted lo que pensaba de sus mensajes, que yo conozco muy bien que son perfectos, pero que no me gustan porque se parecen a los del presidente de los regatones americanos. Aborrezco a ese canalla de tal modo que no quisiera que se dijese que un colombiano hacía nada como ellos».

Simón Bolívar tomó la decisión de invitar a Inglaterra[12]. Otros son los motivos, y así se lo hace saber al emisario británico: «Varios Estados pidieron ser sostenidos por el poder e influencia de Gran Bretaña, sin la cual no puede esperarse seguridad alguna, ni preservarse la cohesión ni mantenerse el pacto social. Todo acabaría por ser destruido entre disputas de unos con otros, y por la anarquía interna. Intereses diversos ya lo estaban impeliendo; guerras que hubieran sido evitables desafortunadamente se propagan, como por ejemplo entre Brasil y Buenos Aires; la pelea entre jefes estaba perturbando la tranquilidad de Chile; sentimientos de envidia y rencor obraban en algunos Estados; mientras que en otros un clima de rivalidades estaba engendrando divisiones entre las distintas provincias»[13]. El Congreso será un fracaso.

En 1829, el 5 de agosto, y tras haber emprendido múltiples acciones para evitar lo inevitable, le responde al entonces coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de su majestad británica: «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad». El cubano José Martí, fundador del Partido Revolucionario, artífice de la guerra de independencia, muerto en combate en mayo 1895, señaló: «Los pueblos de América son más libres a medida que se apartan de Estados Unidos… Ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia»[14].

El itinerario diseñado por las potencias imperiales, hacer del subcontinente una región atomizada y sin poder en el campo de las relaciones internacionales, se cumple a rajatabla. Inglaterra, Francia y Estados Unidos, cuyos gobiernos habían apoyado las luchas de independencia, sin otra razón que favorecer sus intereses políticos y económicos, se convertirán en los amos de la región. Simón Bolívar, en carta dirigida a Sucre, fechada el 26 de mayo de 1823, subraya: «La Inglaterra es la primera interesada en esta transacción porque ella desea

formar una Liga con todos los pueblos libres de América y Europa contra la Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos y mandar el Mundo. A la Inglaterra no le puede convenir que una nación europea, como la España, tenga una posesión como el Perú en América, y preferirá que sea independiente bajo un poder débil y un gobierno frágil; así, con cualquier pretexto, apoyará la independencia del Perú»[15].

Con América Latina inmersa en luchas intestinas, con las oligarquías consolidando su poder, las potencias europeas y los Estados Unidos no tuvieron reparos en financiar toda clase de proyectos. Los empréstitos de la banca privada inglesa se diversifican cubriendo cualquier actividad empresarial rentable: venta de armas, construcción de ferrocarriles, puertos, explotación minera, producción agrícola, maquinaria textil, etc. Las casas comerciales encontraron aliados naturales en la oligarquía, trabando vínculos, favoreciendo los proyectos plutocráticos y consolidando la vía oligárquica del desarrollo del capitalismo en la región. «A lo largo de toda América Latina surgió un esquema similar. Un número selecto de compañías mercantiles prósperas y bien relacionadas se impusieron sobre las demás firmas, logrando colocarse en la mejor posición para obtener los contratos de material bélico, así como servir a los gobiernos como agentes en la negociación de empréstitos externos. En Colombia y Venezuela, por ejemplo, dos firmas descollaban en el comercio y las finanzas: M. W. Hylsops y Herring, Powles, Graham & Company. Los Hylsops se habían establecido en Kingston (Jamaica) a principios de siglo, operando en estrecha vinculación con la empresa de sus primos, W. y A. Maxwell & Company de Liverpool. Los Maxwell vendían mantequilla, jabón, loza, jamones y queso a la agencia de Jamaica a cambio de productos tropicales como cacao, azúcar, pimienta y añil. Después de 1815, los Hylsops extendieron sus actividades al continente sudamericano. Maxwell Hylsops trabó amistad con Bolívar y poco después fue nombrado agente del gobierno colombiano para el suministro de armas. Se abrieron filiales de la compañía en Cartagena y Maracaibo, que desarrollaron un comercio creciente, introduciendo no solo material de guerra, sino también herramientas, textiles y maquinaria británicos. Los principales rivales de los Hylsops, la casa Herring, Powell y Graham, desempeñaron asimismo un importante papel en la provisión de armas para el ejército colombiano, dedicándose posteriormente a otros tipos de negocios en Nueva Granada y

Venezuela. A comienzos de la década de 1820 esta empresa comercial consiguió concesiones de tierras para compañías mineras y proyectos de colonización, obtuvo el contrato para el primer préstamo externo del gobierno de Colombia y financió semanarios en Bogotá y Caracas que abogaban por los intereses de la comunidad británica. […] En resumen, la independencia abrió nuevos y dinámicos canales para el comercio latinoamericano, integrándolo a la ya espesa red de transacciones mercantiles y crediticias internacionales, que eran controladas desde Londres, Glasgow y Liverpool»[16].

En Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, México, Centroamérica, bancos y casas comerciales alemanas, británicas, francesas y estadounidenses se reparten beneficios. Santiago, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, Bogotá, Ciudad de México. Las capitales ven asentarse sus filiales. Baring Brothers, Rothschild, London Country Bank, J. S. Morgan, Lloyds Bank, Midland Bank J. Shroder, Erlangers, Antony Gibbs & Sons, Glyn, Mills & Company, entre los ingleses. Las francesas, Banque de París et des Pays Bas (Paribas), Banque de l'Union Parisienne; L. Cahen d'Anvers, Credit Lyonnais, Credit Mobilier, Louis Dreyfus et Cie, Heine et Cie. Los alemanes Deusche Bank, Norddeutsch Bank de Hamburgo, Dresdner Bank, S. Bleicröder y Cia, Disconto Gesellschaft, compiten de tú a tú con los bancos norteamericanos Blair y Company, Brown Brothers, Chase Securites Corporation, Dilton, Read & Company, Hallgarten & Company, Kuhn, Loeb & Company, J. P. Morgan & Company, National City Bank, Seligman Brothers, Speyer & Company.

Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la emisión de empréstitos fue el mecanismo para establecer la dependencia y afianzar el control político en los países latinoamericanos. Desde México a Chile y el Caribe, la lluvia de bonos de deuda no se frenó. La fiebre especulativa y la plutocracia se enriquecían. São Paulo, Montevideo, Córdoba, Ciudad de México, recibieron bonos en condiciones draconianas. Por otro lado, cualquier sector económico era una bicoca donde sacar rentabilidad: guano, salitre, ferrocarriles, café, oro, obras públicas, diamantes, cobre, telégrafos, electricidad, metalurgia, redes portuarias, cereales, ganado, plata, banano, azúcar.

> Gran parte de los empréstitos no se entregaban en efectivo, sino un 50 por 100 en maquinarias y mercancías, cobrando altas tasas de interés. Por ejemplo, el empréstito de 3.200.000 libras esterlinas contraído por México en 1824 con la banca inglesa Goldschmitdt, solo se recibió en efectivo la mitad. En Argentina, de un millón de libras esterlinas del empréstito de la casa Baring, se entregaron en efectivo 570.000, el resto en mercancías […]. En Chile, el gobierno contrajo un empréstito en 1822 con la casa Hullet de Londres, por un monto de un millón de libras esterlinas, y solo se recibieron en efectivo 675.000. No obstante el pago de amortizaciones, después de 20 años se adeudaban 1.690.000 libras esterlinas[17].

El ideario atomizador toma cuerpo y las repúblicas van definiendo sus fronteras. En no pocas ocasiones las guerras entre países hermanos conllevaron una suerte de chovinismo, odios y resquemores. Comerciantes, mineros, banqueros y terratenientes, amalgama que cuajó en la formación de la oligarquía latinoamericana, se convierten en los interlocutores de los intereses británicos o estadounidenses. Las guerras de independencia ceden paso a las batallas por controlar el Estado. Los caudillos regionales querían su botín de guerra. A finales del siglo XIX, la oligarquía terrateniente asentaba su poder en toda la región. El desarrollo de una plutocracia rentista afirmó una economía primaria exportadora y el carácter excluyente y concentrador del régimen político. Las reformas liberales, librecambistas, «dejar hacer, dejar pasar», dieron al traste con las propuestas democráticas y progresistas defendidas por la incipiente y débil burguesía nacional. Las ideas federales levantadas por criollos ilustrados afrancesados, protestantes, masones y librepensadores fueron perseguidas. Sus líderes, encarcelados, asesinados o derrotados militar y políticamente.

En el siglo XIX, Francisco Morazán sintetiza el esfuerzo por mantener la unidad territorial en Centroamérica. Combatido por los conservadores y la Iglesia, en 1838 emprende el exilio. Las oligarquías locales desmantelan la República Federal Centroamericana, dando lugar al nacimiento de cinco Estados: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Morazán, más tarde presidente de El Salvador y jefe supremo de Costa Rica, será fusilado un 11 de septiembre de 1842. El Virreinato de Nueva Granada sigue la misma senda. A la naciente gran Colombia se oponen intereses espurios de mantuanos, caudillos y latifundistas.

Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Sucre, Artigas, Manuel Rodríguez, entre otros, habrán arado en el mar. En 1829 se produce su desintegración. Nacen Ecuador, Colombia y Venezuela. Otro tanto

sucede en el mundo andino. El virreinato del Perú, afectado por reformas borbónicas del siglo XVIII, del cual emerge el virreinato del Río de la Plata, acaba, en el siglo XIX, dando lugar a la formación de Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los movimientos de integración fueron rechazados por las potencias extranjeras. El divide y vencerás se convirtió en la estrategia para evitar la emergencia de un continente poderoso y soberano.

El Caribe y las Antillas sufren los embates de las potencias imperiales que se disputan la supremacía mundial. España se ve obligada a compartir su dominio a regañadientes. En 1713, Felipe V firma el Tratado de Utrecht reconociendo la hegemonía de Inglaterra en el mar Caribe. Desde ese instante, su presencia, al igual que la de Francia y Holanda, se consolida.

Piratas, corsarios y filibusteros habitaron sus mares. La esclavitud se extendió, convirtiendo las islas en cárceles, compra y venta de «carne» humana. Fama lograron sus plantaciones, sobre todo de azúcar, que se nutrirán del comercio de esclavos para solventar la mano de obra. Los ingleses serán los mayores productores y consumidores de azúcar del mundo, urdiendo los nexos entre esclavitud, comercio de esclavos y la economía antillana de plantación:

> Por lo tanto, la esclavitud negra no tiene nada que ver con el clima. Su origen se puede rastrear en tres palabras: en el Caribe, el azúcar; en el continente, el tabaco y el algodón. Un cambio en la estructura económica produjo una trasformación correspondiente en el suministro de fuerza de trabajo. El hecho fundamental fue la creación de una organización socioeconómica inferior de explotadores y explotados. El azúcar, el tabaco y el algodón requerían la gran plantación y hordas de fuerza de trabajo barata… En Barbados, el tabaco de las pequeñas granjas fue desplazado por el azúcar de las grandes plantaciones. El surgimiento de la industria azucarera en el Caribe fue la señal para un gigantesco desposeimiento del pequeño agricultor. En 1645, Barbados tenía 11.200 pequeños agricultores blancos y 5.680 esclavos negros; en 1667 había 745 propietarios de grandes plantaciones y 82.023 esclavos…[18].

Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Haití serán transformadas en fortalezas militares y nichos de esclavitud. Las luchas independentistas y emancipadoras tendrán un marcado acento antiesclavista. En Haití, la revolución encabezada por Toussaint L'Ouverture la convierte «en la primera república negra fuera del continente africano, y en la segunda sociedad poscolonial de la era moderna (después de Estados Unidos). En el proceso los exesclavos –sus ejércitos,

sus líderes, sus guerrillas– habían derrotado a los ejércitos invasores de Inglaterra, España y Francia. Fue una inversión sorprendente, no solo el poder ejercido por las armas europeas, sino también de los fundamentos raciales que sostenían el sistema trasatlántico. Los dueños europeos habían sido derrotados por sus siervos africanos en un vuelco sin precedentes de los destinos raciales. Los propietarios de esclavos comprendieron, y temieron, las consecuencias de lo acontecido en Haití. De este modo se materializó, en un contexto explosivo de rivalidades internacionales, enfrentamientos raciales y luchas ideológicas, la peor pesadilla de los plantadores: la de unos esclavos dueños de su propia igualdad, armados y capaces de derrocar al mismo tiempo a los plantadores y al gobierno colonial»[19].

Su final fue trágico. La represión contra los esclavos se hizo patente en sus formas extremas. Descuartizados, empalados, degollados, quemados vivos y sus mujeres violadas. Durante el siglo XIX, solo dos colonias del Caribe, Haití, en 1804, y República Dominicana, en 1865, obtienen la independencia. El resto acceden a ella durante el siglo XX. Cuba adquiere su carta de independencia en 1901, pero entra en el escenario como república neocolonial. La necesidad de mantener el control político y militar sobre la isla, por parte de Estados Unidos, obligó a introducir en su constitución la enmienda impulsada por el senador norteamericano Orville H. Platt:

> El gobierno de Cuba consiente que Estados Unidos pueda ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba[20].

Dos años más tarde, en 1903, Panamá, desgajada provincia de Colombia, se convertía en un Estado independiente, sufriendo el mismo destino intervencionista que Cuba. Sus constituyentes serán obligados a incorporar una versión *ad hoc* de la enmienda Platt en el artículo 136 de su carta magna: «El gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional, si hubiese sido turbado en el caso de que por

virtud de tratado público aquella nación asumiere o hubiese asumido la obligación de garantizar la independencia y soberanía de la república»[21].

Las Antillas y el Caribe vieron consolidar su papel exportador de productos agrarios al mercado mundial, fortaleciéndose las estructuras latifundistas y el trabajo precario. El poder de los terratenientes locales o compañías extranjeras determinó tanto las estructuras sociales como las formas de lucha emancipadora y esta última puso en primera línea la necesidad de una reforma de la propiedad agrícola y la recuperación de los enclaves, las plantaciones, en manos de las compañías extranjeras:

> Estos elementos condicionaron las formas de penetración del capitalismo mundial, sin embargo, se fueron adaptando a la compulsiva vinculación neocolonial. La sujeción financiera, bancaria y el clásico esquema colonial en materia comercial lograron neutralizar poco a poco las tendencias internas que buscaban mayor identidad nacional y desarrollo de proyectos autonomistas reales. Las clases dominantes se convirtieron en instrumentos de la dominación externa y manifestaron una total obediencia al orden mundial creado por los países del capitalismo central. Esta condición de dependencia queda sellada con la intervención y la ocupación militar de estos países por el imperialismo: Cuba fue desde 1898 a 1903; República Dominicana durante los años 1908 y 1916-1924; en Haití desde 1915 hasta 1934, y en Puerto Rico, desde 1898 hasta la fecha[22].

DIVIDE Y VENCERÁS, CAMINANDO HACIA EL SIGLO XXI

Así, en América Latina y el Caribe, las batallas por la emancipación política se trasforman en luchas antioligárquicas y antiimperialistas. Una historia que enlaza el siglo XIX con los proyectos liberadores y populares que se extienden por el ancho siglo XX latinoamericano. La independencia política del siglo XIX se transforma, en el siglo XX, en una dependencia política, estructural, económica-social y cultural. Quien une a los libertadores con las generaciones antiimperialistas de principios del siglo XX es Manuel Ugarte:

> Contemplemos con la imaginación el mapa de América. Al norte bullen cien millones de anglosajones febriles e imperialistas, reunidos dentro de la armonía más perfecta en una nación única, al sur se agitan ochenta millones de hispanoamericanos de cultura y actividad desigual, divididos en veinte repúblicas que en muchos casos se ignoran o combaten. Cada día que pasa marca un triunfo de los del norte. Cada día que pasa registra una derrota de los del sur. Es una avalancha que se precipita. Las ciudades fundadas por nuestra raza, con sus nombres españoles y con sus recuerdos de la conquista, de la colonia o la libertad, van quedando paulatinamente del

> otro lado de la frontera en marcha. San Francisco, Los Ángeles, Sacramento, Santa Fe, están diciendo a gritos del origen. El canal de Panamá y los últimos sucesos de Nicaragua anuncian nuevos atentados. Nadie puede prever ante qué río o ante qué montaña se detendrá el avance de la nación que aspira a unificar el nuevo mundo bajo su bandera. Y la emancipación soñada, la resplandeciente hipótesis de libertad de todas las colonias, va resultando un instrumento de dominación que precipita la pérdida de muchos[23].

El Modernismo hace su aparición y con ello el pensamiento antiimperialista toma el relevo del Romanticismo. Mario Benedetti señala: «En una sola oportunidad América Latina se adelantó a los avances culturales del Viejo Mundo, pero ese adelanto fue provocado, paradójicamente, por la acumulación de sus muchos atrasos. Sobrevino un periodo (tres últimas décadas del siglo XIX) en que los escritores latinoamericanos se encontraron con que tenían en las manos un clasicismo que habían copiosamente imitado pero no re-creado; un Romanticismo, no menos imitado, que ya empezaba a resultarles incómodo y campanudo; y además, un indigenismo balbuciente, cuyo atraso tenía poco que ver con lo europeo, y sí con la exigente, postergada realidad. De estos tres atrasos surgió un solo adelanto: el Modernismo. El Modernismo tiene elementos clásicos, románticos y autóctonos; tiene resonancias españolas, francesas, inglesas y otras más exóticas. Pero al no ser nada de ello en particular, resulta por eso mismo típicamente latinoamericano, ya que fueron los modernistas los primeros acaso en vislumbrar que uno de los posibles modos de arraigo en este cruce de rumbos encontrados consistía en fijar el desarraigo»[24].

Rubén Darío y José Martí son exponentes. En 1891, el «apóstol» cubano dirá en carta desde Nueva York a su amigo José Dolores Poyo: «Es la hora de los hornos y no se puede ver más que la luz». La identidad se define: «Nuestra América». Por vez primera, se trata de crear, dar salida a los problemas: «Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido, entre las olas y las fieras. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Éramos charreteras y togas, en países

que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza […]. Se ponen en pie los pueblos, y se saludan, ¿cómo somos?, se preguntan; y unos y otros se van diciendo cómo son. Cuando aparece en Cojimar un problema, no van a buscar la solución a Dantzig. Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación»[25]. En el mismo texto Martí reflexiona, adelantándose en más de un siglo a lo que hoy se conoce como estudios poscoloniales: «Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de las tiranías. La Universidad europea debe ceder a la Universidad americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas»[26].

Los cambios se aceleran. La guerra hispano-cubana-norteamericana agudiza las contradicciones. España pierde sus últimas posesiones y cede Puerto Rico. Estados Unidos es el amo y señor del mar Caribe. Pero no solo del Caribe; su poder se extenderá a todo el Pacífico. Se anexiona la isla de Hawái y arrebata Filipinas a España. En su despliegue, y con la victoria de los japoneses sobre China (1894-1895), Estados Unidos negocia la política de «puerta abierta», buscando salvaguardar sus intereses comerciales, al tiempo que firma tratados con Gran Bretaña, Rusia, Japón, Alemania y Francia. No podía ser de otra manera. Tras la guerra «Japón había adquirido Formosa (Taiwán) y establecido su ascendencia en el “reino ermitaño” de Corea; en 1897 y 1898, Rusia tomó Puerto Arturo y la península de Liatung, que le daba acceso al interior de Manchuria; Alemania se apoderó de Kiiochow en Shantung, y Francia se consoló con la cesión de la Bahía de Kwangchow, junto a Indonesia; Italia obtuvo la Bahía de Sanmún, al sur de Yang Tse, e Inglaterra aumentó sus posesiones en el puerto de Wei-hai-wei. Junto con estas adquisiciones, hubo valiosas concesiones ferroviarias, que

prometían dar a las potencias europeas un dominio casi completo del comercio interno de China. El desmembramiento de China pareció amenazar el comercio norteamericano y anular parte del valor de las Filipinas. Agentes interesados redactaron una proposición que urgía a todas las grandes potencias a aceptar el principio de igualdad de comercio con China y a comprometerse a no violar la integridad del territorio chino. John Hay –secretario de Estado– aceptó e incorporó algunas de ellas a su propia política de “puerta abierta”»[27].

Se inicia la era del imperialismo; el capitalismo vive una fase expansiva. Se produce la concentración de la producción y del capital, dando origen a los monopolios, se consolida la fusión entre capital bancario y capital industrial, emerge una oligarquía financiera, es el tiempo de la unidad del capital monopólico, del reparto del mundo entre las primeras multinacionales y su corolario, el trueque de las posesiones territoriales entre imperios rivales. Gran Bretaña deja de ser el único «taller» del mundo. La revolución industrial se expande, el comercio mundial y la necesidad de materias primas trasforma el mapa geopolítico. Estados Unidos es ya un actor de primera fila. Su poderío avanza a medida que, internamente, las secuelas de la guerra civil 1860-1865 y el asesinato de Lincoln dan paso a una nueva generación. Etapa de transición, el espíritu norteamericano se plasma en las artes, las ciencias, sus universidades, la educación, literatura, arquitectura. Las donaciones de las grandes fortunas para obras filantrópicas se reflejan en los multimillonarios como John Rockefeller, creador de Standard Oil, Leland Stanford, empresario de los ferrocarriles, Andrew Carnegie, magnate del acero. Universidades, bibliotecas, centros de investigación contaron con sus dádivas. De esta forma legitimaron la expansión del imperialismo, siendo sus mecenas, cuando no sus forjadores. El poderío militar quedó patente. El presidente Roosevelt, consciente de su nuevo rol, despliega la armada a través de la llamada flota blanca. Entre diciembre de 1907 y febrero de 1909, cuatro escuadras de cuatro acorazados con sus escoltas dan la vuelta al mundo, mostrando el potencial militar y el control de los océanos. «En 1880, la marina de los Estados Unidos ocupaba el dozavo lugar en el mundo; para 1900, con 17 acorazados y 6 cruceros armados, ocupaba el tercer lugar. La revolución cubana de 1895 llevó este chauvinismo a su punto culminante»[28].

La guerra hispano-cubano-norteamericana dejó secuelas. No solo la enmienda Platt. El intervencionismo estadounidense se refuerza con el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, señalando el derecho de Estados Unidos a intervenir en otros países si los intereses de ciudadanos norteamericanos se ven amenazados o están en peligro. «Si una nación muestra cómo actuar con decencia en materia industrial y política, si mantiene el orden y cumple con sus obligaciones, entonces no tiene que temer una intervención de los Estados Unidos. Brutales injusticias o una impotencia que resulte en un aflojamiento general de los nexos de la sociedad civilizada, finalmente pueden requerir la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental los Estados Unidos no pueden olvidar este deber». Su política del *big stick:* «Hay un viejo adagio que dice: habla suavemente y lleva un buen garrote, así llegarás lejos», se convierte en la máxima. El intervencionismo militar será una constante. La historia de construcción del canal de Panamá es reflejo de esta política.

La necesidad de un paso interoceánico no era novedad. Francia lo intenta, obteniendo de Colombia la concesión en 1876, pero la obra choca con las enfermedades tropicales y las dificultades del terreno. La compañía, propiedad, entre otros, del ingeniero y vizconde Ferdinand de Lesseps, quiebra en 1889. Estados Unidos, en 1902, compra todos los derechos de construcción, antes de eliminar los obstáculos diplomáticos con Inglaterra, dada la vigencia del tratado Clayton-Bulwer, firmado con Estados Unidos en 1850. Dicho tratado impedía la construcción, control y fortificación de cualquier canal de forma unilateral y en beneficio propio. Gran Bretaña, cuyas relaciones con Estados Unidos pasan por una etapa de extraordinario entendimiento, hará la vista gorda a la política expansionista de Estados Unidos y, por su parte, esta apoya la diplomacia británica en Medio Oriente. En este contexto de «amistad», la firma *ad hoc,* en 1901, entre el secretario de Estado John Hay y el embajador de la Corona Lord Pauncefote, concederá a Estados Unidos la potestad de construir y controlar un canal que una los dos océanos, con la condición de abrirlo al tránsito de las naciones en términos de igualdad. Ahora, solo quedaba tocar a la puerta del gobierno colombiano. No hubo problemas.

Las conversaciones serían encabezadas por Tomás Herrán, ministro diplomático nombrado por el entonces presidente de Colombia, y el sempiterno secretario de Estado John Hay. Herrán tuvo orden de negociar la

obtención de 10 millones de dólares al contado y 600.000 de renta anual como contraparte a la cesión de derechos para la construcción del canal, previa ratificación por el Congreso colombiano. El Tratado Hay-Herrán no fue ratificado. Las condiciones leoninas lo hacían inviable:

> Según el artículo I del Tratado, el gobierno de Colombia autorizaba a la Compañía Nueva del Canal de Panamá para vender y traspasar a los Estados Unidos sus derechos, privilegios, propiedades, concesiones, como también el Ferrocarril de Panamá y todas las acciones o parte de ellas en dicha compañía. Por el artículo II, los Estados Unidos lograban el derecho exclusivo durante el término de cien años, prorrogables a la exclusiva y absoluta opción de los Estados Unidos, por periodos de igual duración, mientras así lo desearan, para excavar, construir, conservar, explotar, dirigir y proteger en Canal marítimo y también tendrían los mismos derechos para construir, conservar, explotar y dirigir y proteger el Ferrocarril de Panamá y los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, canales, diques, represas, depósitos de agua y demás obras auxiliares que fueran necesarias y convenientes para la construcción, conservación, protección y explotación del Canal y de los ferrocarriles. El artículo III disponía para que el gobierno de los Estados Unidos pueda ejercer los derechos y privilegios concedidos por este tratado, la República de Colombia concede a dicho gobierno el uso y dirección por término de cien años, prorrogables a la exclusiva y absoluta opción de los Estados Unidos, por periodos de igual duración, mientras así lo desee, de una Zona de terreno a lo largo del Canal que se abra, de cinco kilómetros de ancho a cada lado de la vía, medidas desde la línea central de ella[29].

Las amenazas de Roosevelt y su secretario de Estado, John Hay, toman forma. La decisión de construir el canal y consolidar su poder militar y estratégico no era negociable. Ya controlaban la vía del ferrocarril y el transporte terrestre entre los dos océanos, y la salida por Nicaragua había sido descartada. Reunidos el accionista principal de la Compañía del Nuevo Canal, Philippe Bunau-Varilla, agentes de la misma y oficiales del ejército estadounidense en el hotel «Waldorf-Astoria», trazaron el plan. Se decidió la independencia de Panamá mediante una invasión. Problema solucionado. El 3 de noviembre de 1903, con el aval de Roosevelt y Hay, Amador Guerrero, quien sería presidente de la ya naciente república, exclamaba: «¡El mundo está asombrado por nuestro heroísmo, ayer éramos esclavos de Colombia: hoy somos libres. El presidente Roosevelt ha cumplido […]. Hijos libres de Panamá, os saludo! ¡Viva la República de Panamá! ¡Viva el presidente Roosevelt! ¡Viva el gobierno norteamericano!»[30]. El 6 de noviembre, Roosevelt daba orden de reconocer el gobierno de facto. El 10 de noviembre, Amador firmaba el tratado. Años más tarde, Roosevelt exclamaría *«yo tomé Panamá»*. El 15 de agosto de 1915 se inauguró

oficialmente. Rubén Darío escribió la «Oda a Roosevelt» en el poemario *Cantos de vida y esperanza,* en 1904:

«Oda a Roosevelt»

¡Es con voz de la biblia o verso de Walt Whitman,
que habría que llegar hasta ti, Cazador!
Primitivo y moderno, sencillo y complicado,
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.
Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre indígena,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.
Y domando caballos, o asesinando tigres,
eres un Alejandro-Nabucodonosor
(eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy).
Crees que la vida es incendio,
que el progreso es erupción;
en donde pones la bala
el porvenir pones.
No.
Los Estados Unidos son potentes y grandes.
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.
Si clamáis, se oye como el rugir del león.
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son vuestras»
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol y la estrella chilena se levanta…) Sois ricos.
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;
y alumbrando el camino de la fácil conquista,
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.
Más la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,
que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco,
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;
que consultó los astros, que conoció la Atlántida,
cuyo nombre nos llega resonando en Platón,
que desde los remotos momentos de su vida
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,
la América del gran Moctezuma, del Inca,
la América fragante de Cristóbal Colón,
la América católica, la América española,
la América en que dijo el noble Cuactemoc:
«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América

que tiembla de huracanes y que vive de Amor,
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.
Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hay mil cachorros sueltos del León español.
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!

Estados Unidos impone la política del *big stick,* ahora reforzada con la llamada diplomacia del dólar, inaugurada por el presidente Williams Taff (1909-1913), aunque fuese Theodore Roosevelt, su antecesor en el cargo, quien acuñó el término. Se trataba de proteger las inversiones de las principales compañías norteamericanas en la región, en ese momento representadas básicamente por la United Fruit Company. Las invasiones serán una constante. Tras Panamá, le siguen la ocupación militar de Cuba, 1906-1909, República Dominicana, 1916-1924 y Haití, 1915-1934. Apoyan dictaduras, compran presidentes, fomentan guerras civiles, todo en función de sus intereses comerciales y geoestratégicos. Es el tiempo de las «repúblicas bananeras». La Primera Guerra Mundial cambiará el escenario político en América Latina. Se avecinan malos tiempos.

Las oligarquías gobiernan con mano de hierro. «La implantación de este tipo de régimen a lo largo y ancho del continente latinoamericano es algo más que una coincidencia, incluso cronológica. Obedece, sin la menor duda, a la conformación de un nuevo tipo de Estado acorde con las necesidades, también nuevas, de la evolución económica y social de nuestros países. Tal Estado, que en síntesis no es más que la expresión de un proceso de acumulación originaria de poder capitalista, con la consiguiente concentración del mismo, emerge de una manera sinuosa y conflictiva, a través de un movimiento que, por un lado, se encarga de supeditar a los elementos de poder precapitalistas, por la fuerza cuando es menester, y, por otro lado, de aniquilar, *manu militari* casi siempre, a los elementos democrático-burgueses que levantan una alternativa progresista de desarrollo capitalista»[31].

Serán los ejércitos el arma utilizada para frustrar la revolución democrática. La consolidación de una cultura autoritaria demostró el miedo de las clases dominantes a cualquier medida de apertura política progresista,

marginando a los sectores más avanzados de la burguesía. La democracia fue considerada una forma política no apta para los pueblos latinoamericanos:

> Las repúblicas de origen español han dado hasta ahora más de un ejemplo funesto de los excesos a que los pueblos se entregan cuando no se ha procurado de antemano ilustrar su inteligencia y desenvolver los elementos que puedan constituir su riqueza […]. Por no comprender estas sencillas nociones, es que el sistema democrático ha degenerado en muchos puntos del continente… Centroamérica, Buenos Aires y Bolivia se han visto entregados a la dirección estúpida de masas ignorantes y de ningún modo preparadas para desempeñar el rol en que se las ha visto figurar […]. Preguntad a esos gobiernos qué es lo que han hecho para preparar a sus pueblos para la vida activa de la democracia. Preguntarles si es posible por una ilusión óptica, si por un encantamiento incomprensible se puede cambiar en un instante la túnica del colono en el vestido del ciudadano. La respuesta será desconsoladora[32].

El carácter del voto censitario daba cuenta del poder ejercido por la oligarquía y del paripé que representaba tener instituciones como el Parlamento y el Senado. A finales del siglo XIX, la participación electoral promedio no sobrepasaba el 1,5 por 100 de la población. En el siglo XX, las cifras, para toda la región se mantuvieron por debajo del 15 por 100 hasta muy entrada la década de los treinta, donde la proporción se acerca al 30 por 100. Excluyendo a la mujer, claro está. En Chile, las elecciones presidenciales de 1924, país con una población total de 3.874.008 habitantes, de los que 2.171.481 eran personas adultas, hombres y mujeres, solo estaban inscritas en el censo electoral 302.000, de las cuales acudieron a las urnas 197.143, es decir, un 5 por 100 del total[33]. En el Caribe, Jamaica presentaba en 1865 una «Asamblea con 49 miembros, todos blancos, elegidos por 1.457 votantes, porcentaje ínfimo del total de la población que era de 400.000 personas. Las asambleas se disolvieron en esa época, ante el temor de que las personas de color pudieran votar, y el control quedó totalmente a cargo del gobernador»[34].

Durante las dos primeras décadas del siglo XX las oligarquías vivieron su esplendor amasando fortunas, en calidad de dueños, socios, administradores de las minas, plantaciones, haciendas o representantes de casas comerciales. Garantizaron las inversiones extranjeras mediante gobiernos represivos, en el convencimiento de cumplir una misión civilizatoria: «Al transformar sus países, de salvajes como eran, en países, que sin negar su matriz latina en general, ibérica en particular, tienden a desarrollarse a la inglesa. Esta

imagen la proporciona también la historiografía corriente, confirmando una vez más que la misión de los historiadores ha sido siempre la de crear mitos colectivos, susceptibles de ser utilizados por la clase dominante en el poder»[35].

Vivir a la inglesa, más que desarrollarse a la inglesa, fue la realidad. El *ethos* oligárquico pasó por reproducir las formas de vida del *gentleman* inglés. Hizo del lujo, el despilfarro y la ostentación su principal preocupación. Mansiones imitando palacios venecianos, teatros, calco de la *Scala* de Milán. Cristalería de Murano y Bohemia, cuberterías londinenses, cuadros, mobiliario y objetos de arte comprados en París, Berlín o Ámsterdam. Las mujeres de la oligarquía vestían a la moda. Medias de seda, encajes, escote y complementos. Para ellos, zapatos italianos, levita, bastón y sombrero hongo. La capa española perdió peso en favor del abrigo o sobretodo inglés. Cambiaron las costumbres. Abandonaron la merienda española del chocolate y la mistela, hábito de las familias criollas del XVIII. La influencia inglesa y francesa copó el espacio social de la vida cotidiana de terratenientes y oligarcas. El té, el café, el *whisky* y el *champagne* dejaron de ser excentricidades. La oligarquía pasó a comunicarse preferentemente en francés e inglés, símbolos de poder y distinción. Sus hijos se educaban en las capitales europeas, siendo objeto de envidia y admiración.

Despreciaron la cultura de los pueblos originarios, considerándola un reducto de salvajismo. Bajo el mito de la superioridad étnico-racial y el eufemismo de guerras civilizatorias se apoderaron de sus tierras en nombre del progreso. La matanza de indios fue el campo de batalla donde se foguearon los ejércitos latinoamericanos. Sus intervenciones marcaron hitos de crueldad. Característica incólume hasta nuestros días cuando se trata de reprimir al pueblo mapuche, maya o guaraní:

> Y el ejército tiene una grande y larga tarea que desempeñar entre nosotros. Cada diez años se hacen entradas a los indios; los indios se retiran al sur a la aproximación de nuestras fuerzas y, en cambio de los cien mil pesos que ha costado la expedición, nuestros expedicionarios vuelven con algunos centenares de ovejas tomadas a los indios y algunos individuos de chusma por trofeos; concluido lo cual, los indios reaparecen en nuestras campañas y siguen sus depredaciones. En gobierno previsor debe obrar de otra manera. Desde Bahía Blanca hasta la cordillera de los Andes, apoyándose en la margen del río Colorado, debe de diez en diez leguas erigirse un fuerte permanente y dispuesto de modo que sirva de núcleo a una ciudad. Esto no haría más que quince o veinte fuertes, los cuales formarían una línea final a la república por el

> sur. Las tribus salvajes que quedasen cortadas por esta línea de puestos avanzados no resistirían largo tiempo a la amenaza de ser aniquiladas, cogidas entre dos fuerzas y diezmadas[36].

Las oligarquías plutocráticas controlaron las débiles instituciones públicas. Jueces, parlamentos, fuerzas armadas, universidades y ministerios. Los apellidos de la vieja aristocracia criolla se reprodujeron en la sociedad republicana. Coparon el poder político, económico, religioso y militar. Eran dueños de la tierra, estancieros, banqueros, comerciantes y mineros. La gran familia oligárquica se hizo fuerte mediante matrimonios, acuerdos y enlaces espurios; así impidieron la atomización del poder, al tiempo que «integraron sus intereses económicos con aquellos que sobrepasaban el nivel local mediante una variedad de arreglos: sociedades, tenencia de acciones, operaciones de sucursales, servicios profesionales, incorporación y agencias de representación. En muchos casos, estos arreglos se hacían al interior de las redes familiares y entre ellas y, en creciente medida, sobrepasaban las fronteras locales y aun provinciales. También se establecieron conexiones con los recién llegados, ya fueran extranjeros o nacionales, con nueva riqueza y posición política. Las redes notables adoptaron y difundieron cada vez más los nuevos principios de dirección practicados por empresarios del Atlántico norte al establecer sus arreglos comerciales. El casamiento a veces daba permanencia a estos lazos comerciales. Las conexiones políticas se formaban del mismo modo. Miembros de la familia emprendieron carreras políticas y ocupar un cargo se convirtió en una responsabilidad que exigía dedicación exclusiva. La expansión de sus posesiones económicas y su poder político se reforzaba mutuamente y los nuevos principios directivos servían de común denominador en el desarrollo de estructuras comerciales y de gobierno»[37].

La plutocracia disfruta de un mundo exclusivo, vedado al pueblo y los sectores medios. Practican la extravagancia y se sienten los dueños del territorio nacional. El poder de la familia oligárquica del siglo XIX llega hasta nuestros días. En pleno siglo XXI, conservan propiedades, poder y siguen siendo un factor decisivo en el orden político. Entrelazadas por vínculos consanguíneos, representan una minoría consistente. De ellas salen presidentes, diputados, senadores, banqueros, intelectuales, deportistas de elite, terratenientes, jueces, militares o sacerdotes, empresarios. Hombres y mujeres que dan lustre a las historias nacionales. En Uruguay, los Batlle

Ordoñez. En Chile, los Edwards, Matte, Errázuriz, Alessandri, Larraín. Sus familias han aportado presidentes, ministros, diputados, senadores, jueces, empresarios. En Argentina, los Alvear, Pinero y Pueyrredón, Braun, entre cuyos miembros destacan presidentes, alcaldes de Buenos Aires, gobernadores de provincias, embajadores, ministros, jueces de la Corte Suprema, generales; la familia Bullrich, un apellido de rancio abolengo, cuyo patriarca obtiene su fortuna gracias a la conquista del desierto (1878-1885) y las sesiones concedidas por Julio Argentino Roca. Así, Adolfo Jorge Bullrich fue alcalde de Buenos Aires (1898-1902); Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, caso particular, reúne en su persona ser diputada, secretaria de gobierno y ministra. Diputada nacional en dos legislaturas (1993-1997) y (2007-2015), secretaria de Política Criminal (1999-2000), ministra de Trabajo (2000-2001) y ministra de Seguridad en la actualidad, Esteban José Bullrich, diputado nacional (2005-2007 y 2009-2010), ministro de Desarrollo social de la ciudad de Buenos Aires (2007-2008), ministro de educación del mismo distrito (2010-2015), ministro de Educación (2015-2017), en la actualidad es senador. En Guatemala, dos empresarios de linaje: Jorge Castillo Love posee 82 empresas, la cervecera más grande de Centroamérica y grupos financieros, es descendiente del conquistador Bernal Díaz del Castillo; Julio Herrara Zabala es descendiente de Manuel Herrera Luna, ministro de fomento del general Justo Rufino Barrios y de Carlos Herrera Luna, expresidente de Guatemala. Es el principal exportador de azúcar de América Latina y posee ingenios en Nicaragua. En Bolivia, la plutocracia oligárquica sobrevive. Apodada eufemísticamente la rosca entre los apellidos ilustres: Simón Patiño, Mauricio Hochschild, Aniceto Arce, Víctor Aramayo, Félix Aramayo, Gregorio Pacheco. En Colombia, los apellidos Ospina, Lleras, Valencia y Santos suman diez presidentes. El exvicepresidente del presidente José Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, es nieto de Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia (1966-1970). Santos a su vez es sobrino-nieto de Eduardo Santos, presidente entre 1938 y 1942. En Costa Rica: «La clase política ha consistido en los descendientes de un pequeño grupo de familias hidalgas de la época colonial que luego se transformaron en grandes cafetaleros, dueños del capital comercial y de los procesos de preparación del grano. Grandes, pero pocas, familias que tuvieron en el pasado el control del gobierno y de sus instituciones, ejerciendo el poder

personalmente, a través de sus más brillantes hijos y no a pesar, sino por medio de una democracia paternal. Treinta y tres de las cuarenta y cuatro personas que han ejercido la presidencia de la república desde la independencia pertenecen a descendientes directos de tres familias (las del conquistador Juan Vázquez de Coronado, la de don Nicolás de González y Oviedo y la de don Antonio Acosta Arévalo) y solo de esta última han salido 18 presidentes y aproximadamente 230 diputados…»[38].

Mientras la plutocracia vivía de las exportaciones y amasaba grandes fortunas, las relaciones entre las burguesías metropolitanas y las oligarquías locales funcionaron. No hubo preocupaciones. En los enclaves bananeros, plantaciones, minas, maestranzas o industrias manufactureras imperaban los castigos corporales, el sistema de deudas y los contratos en condiciones de semiesclavitud. Veamos un contrato tipo, vigente a principios del siglo XX, entre la empresa frigorífica norteamericana Swift y los trabajadores en la Patagonia argentina, obligados a firmar en Buenos Aires antes de emprender el viaje:

> Entre la Compañía Swift de La Plata, Río Gallegos, San Julián (en lo sucesivo del presente documento, denominado La Compañía) por intermedio de sus agentes en esta ciudad, Compañía Swift de la Plata, sociedad Anónima, calle 25 de mayo 195, por una parte, y Manuel Pérez (en lo sucesivo del presente documento denominado El contratante), por la otra, se ha convenido lo siguiente: El contratante entra al servicio de la referida Compañía en sus fábricas de Río Gallego o San Julián en calidad de peón, por lo cual recibirá un sueldo de $ 0,65, moneda nacional curso legal, por hora, manutención a razón de cincuenta pesos por mes por su cuenta, comprometiéndose a hacer todo el trabajo en cualquier capacidad que le fuese requerido. La Compañía anticipará al contratante el pasaje de ida de tercera clase desde Buenos Aires hasta Río Gallego o San Julián, descontándose el valor de dicho pasaje del sueldo que percibirá el primer mes. La Compañía se compromete a pagar al contratante a razón de cuatro horas por día desde que sale de Buenos Aires hasta el día que empiece la matanza y desde el día en que termine la matanza hasta el día que llegue a Buenos Aires en viaje de regreso, exceptuando domingos y feriados legales, como asimismo demoras ocasionadas por causas ajenas a la voluntad de la Empresa. Si el contratante abandonara el empleo o fuera despedido por mal cumplimiento o ineptitud en el desempeño de sus deberes antes de concluir los trabajos, según criterio exclusivo del gerente de la Compañía en Río Gallegos o San Julián, perderá el valor del mencionado pasaje, tanto de ida como de vuelta. En la calidad de garantía para el debido cumplimiento de contrato, la Compañía descontará treinta pesos mensuales y dicha suma se abonará al contratante a la terminación del contrato, pero si el contratante no cumpliera estrictamente con las obligaciones aquí estipuladas o si contribuyera de cualquier manera que fuese, ya sea directa o indirectamente, a disturbios u obstaculizaciones del trabajo, perderá la cantidad retenida. El contratante se compromete a trabajar por el sueldo arriba fijado todas las

> horas necesarias durante el día que le sean requeridas por la Compañía. Asimismo, en el caso que le sea requerido cumplimentar trabajo durante medio día de los domingos tendrá que hacerlo. La Compañía se compromete a dar, al contratante, ocho horas de trabajo como mínimo por día, desde la fecha que empiece a la fecha que termine. Si el vapor, que lleva el personal a Río Gallego o San Julián, no saliese o demorase por causas ajenas a la Compañía, como huelgas, incendios y casos de fuerza mayor, el contrato quedará en suspenso o anulado a juicio de la Compañía. Cualquier reclamo que se suscite contra la Compañía hasta que el contratante deje la fábrica en viaje de vuelta a Buenos Aires deberá ser presentado para su liquidación al Superintendente de la Compañía en Río Gallegos, de lo contrario, el reclamo no recibirá atención alguna. Conformes, firmamos en Buenos Aires…[39].

Las voces de protesta se acallaron reprimiendo. El 21 de diciembre de 1921, tropas al mando del teniente coronel Héctor Varela fusilan, asesinan a los trabajadores y dirigentes bajo el adjetivo de «bandoleros». Todo con la participación de la Sociedad Rural de Estancieros, el intendente Edelmiro Correa Falcón y el gobierno radical encabezado por Hipólito Irigoyen.

La sobreexplotación, la miseria, el hambre, la marginación y las condiciones de extrema dureza en que se desarrollaba la actividad laboral de las clases trabajadoras creaban un paisaje «triste y desconsolador […]. Estacionadas en todo sentido, se suceden sus generaciones sin dar un paso adelante, y la familia del nieto es copia fiel de la del ascendiente […]. Los medios de vida de que dispone son tan escasos, que al trabajo del jefe de familia debe unirse el de la madre y el de los hijos, muy tiernos, por lo general, para hacer frente, a medias, a los horrores del hambre y la intemperie»[40].

La total ausencia de derechos políticos en la clase obrera, el campesinado, en una sociedad preeminentemente rural, inauguró la historia de las protestas obreras y las reivindicaciones democráticas de las nóveles organizaciones del proletariado. Su aparición supuso el amanecer de la «cuestión social». Las dos primeras décadas del siglo XX, estuvieron plagadas de reivindicaciones sociales y políticas. Las huelgas se generalizaron y el proceso político de articulación del movimiento obrero se aceleró. Las oligarquías tuvieron miedo de perder su poder omnímodo y, ante las demandas populares, acudieron a la solución más fácil: utilizar el ejército para aplacar los gritos de democracia. Las tropas salían a las calles en estricta formación, instalando ametralladoras y disparando a mansalva bajo la atenta mirada de sus instructores alemanes, británicos, italianos o franceses.

Las fuerzas armadas se transformaron en el brazo ejecutor de los intereses de la clase oligárquica. La carrera militar, para el cuerpo de oficiales, estuvo reservada a las elites, pero abrió sus puertas a los sectores medios; era una manera de conseguir el apoyo de una escasa población que disfrutaba de las migajas del poder. Solo podían entrar en las escuelas militares cadetes que supiesen leer y escribir y fuesen hijos legítimos. En una sociedad donde más del 60 por 100 de la población adulta era analfabeta y muchos hijos naturales, la selección imponía un rasgo altamente discriminatorio.

Los primeros dictadores del siglo XX fueron los guardianes de la plutocracia. Si no pertenecían a sus redes, procedían de los sectores medios y debían su ascenso a los favores otorgados por las oligarquías. En Cuba, el dictador Gerardo Machado se convirtió en ejecutivo de General Electric y «basaba su poder en el ejército, al que había sobornado con éxito mediante una táctica de amenaza y de corrupción a la vez. Todos los oficiales difíciles habían sido designados para el desempeño de puestos sin importancia o se había prescindido de ellos por completo; los demás recibían una paga abundante… El pillaje y la malversación eran dueños del ejército. Una sola firma obtuvo en 1926 el derecho de aprovisionamiento y lo mantuvo hasta 1933. Dios sabe qué cifra cobraría Machado…»[41].

Estado y nación oligárquica eran una y la misma cosa. Los países fueron administrados como haciendas particulares y sus habitantes considerados esclavos, inquilinos, nunca ciudadanos. La plutocracia se sentía ama y señora del territorio. Eduardo Matte Pérez, patriarca de una de las familias chilenas más poderosas, a la sazón diputado liberal y ministro en varias ocasiones, pronunció una frase histórica: «Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio».

Pero nada dura eternamente. La estructura social del orden oligárquico se resquebraja al tiempo que las clases trabajadoras se organizan y ganan protagonismo. Las demandas de apertura política y democracia consolidan un movimiento popular, democrático, nacionalista y antioligárquico. La Revolución mexicana, en 1910, se convierte en paradigma de las luchas antioligárquicas. Porfirio Díaz, considerado adalid del progreso y modernizador del México colonial, es derrotado en el campo de batalla. Los ejércitos insurgentes del sur, formados por campesinos, liderados por Emiliano Zapata, y del norte, comandados por Francisco Villa, asestan el

golpe definitivo al ejército de la dictadura. Porfirio Díaz muere exiliado en Francia en 1915, a la edad de 84 años. Había permanecido en el poder desde 1876 hasta 1910.

La lucha contra el porfiriato fue una yuxtaposición de proyectos burgueses y populares, enfrentados en el plano ideológico, político y también militar. La burguesía antiporfirista se parapeta bajo el Plan San Luis de Potosí, defendido por Francisco Madero. El proyecto acota las reivindicaciones políticas exigidas al porfiriato: *«sufragio efectivo y no reelección»*. Por otro lado, las clases populares elaboran su alternativa: el Plan de Ayala. En forma de manifiesto, su redacción se atribuye a Emiliano Zapata y Otilio Montaño, siendo firmado por todos los generales, coroneles y capitanes revolucionarios agrupados en el ejército insurgente del sur. En él queda planteada la devolución de las tierras a los campesinos, la expropiación a los latifundistas y la nacionalización de las empresas extranjeras. Su lema: «Reforma, libertad, justicia y ley».

La Revolución mexicana tendrá una gran influencia en las luchas democráticas latinoamericanas, por ello sufre, desde sus inicios, los embates del imperialismo norteamericano, que nunca deja de conspirar e intervenir, apoyando a generales y caudillos para que le pongan fin, devolviendo a México a su posición neocolonial. Aliándose a la figura de Victoriano Huerta, general traidor, el gobierno norteamericano alienta, desde su embajada, el desembarco de marines en Veracruz, el año 1913. Las fuerzas mercenarias serán derrotadas por los ejércitos revolucionarios. El triunfo determina el camino de la revolución, al menos en principio, dando paso a la convención de Aguascalientes en 1914. Todas las fuerzas que lucharon contra Huerta estarán presentes: Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, aunque no siempre confluyen en acuerdos. Sin embargo, es un punto de inflexión. Marca las distancias entre Zapata, Villa y el futuro presidente Venustiano Carranza. Sin pactos, no resulta posible el nombramiento de una jefatura colegiada de la revolución ni de presidente. En 1916 se convocan elecciones constituyentes. De sus entrañas saldrá promulgada una de las constituciones más progresistas de la época el 5 de febrero de 1917. En su articulado, se establece el carácter laico de la educación, la gratuidad de la enseñanza primaria, se prohíben los cultos religiosos, crear o dirigir escuelas de educación primaria. Se implanta la jornada de las ocho horas, el

salario mínimo, la protección a las madres trabajadoras en caso de embarazo, el derecho de huelga, la prohibición de contratación de menores, la separación entre el Estado y la Iglesia y el matrimonio civil. La iglesia no podrá participar públicamente en política ni adquirir bienes. Se instituye la propiedad original de la nación sobre las tierras, las aguas y el subsuelo; el principio de expropiación en caso de utilidad pública y el establecimiento de los bienes comunales.

La conspiración, los deseos de acabar con los sectores populares de la revolución, toma los mandos del proceso político. Emiliano Zapata será asesinado el 10 de abril de 1919 y Francisco Villa, el 20 de julio de 1923. La revolución queda interrumpida. «El año 1920 fue el cierre de la revolución. La fecha que lo anunció fue el 10 de abril de 1919, día del asesinato de Emiliano Zapata. El resto de este año y la primera mitad del siguiente fueron un periodo de transición política en la cual, ya sin la amenaza directa de las masas, pero impulsado por su persistente resistencia y aprovechando los daños irreparables que habían infligido al régimen carrancista, reagrupó sus fuerzas el obregonismo y preparó y consumó su ascenso al poder, sellando así la interrupción de la revolución y abriendo un periodo de estabilización del poder burgués frente a las masas y en sus relaciones con estas»[42].

Aun así, las oligarquías latinoamericanas ven con temor lo sucedido en México. La revolución les aturde y se repliegan sobre sí mismas. Para contrarrestar las luchas democráticas y las demandas de justicia, libertad y ley, inauguran una nueva fase de dominación. Se vuelven adictas a la técnica del golpe de Estado. Las alusiones a la amenaza del socialismo-marxista, la izquierda social y el comunismo toman cuerpo y se reflejan en las primeras soflamas golpistas. América Latina vive el reacomodo de un orden mundial consternado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa y la crisis de los años treinta.

Las exportaciones de materias primas sufren los efectos. La inestabilidad política se extiende a todo el continente. El mantenimiento del orden oligárquico solo puede ser garantizado si la plutocracia acude a las fuerzas armadas. La Iglesia dispara las primeras balas desde los púlpitos, alertando del peligro socialista. Sus pastorales asumen un tono apocalíptico. Monseñor Alfonso Belloso y Sánchez, arzobispo de El Salvador, en su pastoral de 1927 *El presente momento social,* señala: «El socialismo, así

como aborrece las ideas de propiedad familiar, estado, religión, así también abomina de la idea de Patria. Las fronteras se le antojan coacción y tiranía, y ha jurado borrarlas; el hombre ha de ser ciudadano del universo; en el mundo socialista no habrá naciones, habrá sindicatos. Por consiguiente, en la geografía socialista no contaría la República de El Salvador, sino la Confederación de Camaradas Salvadoreños»[43]. En México estalla la contrarrevolución Cristera. En Roma, el Vaticano despliega su artillería. La Iglesia será un soldado eficiente en la campaña contra la izquierda y el socialismo:

> Esta doble función de la Iglesia de proporcionar legitimidad y estabilidad a la clase dominante y a su Estado se manifestó más claramente cuando el sistema sociopolítico mostró indicios de crisis interna a causa de sus periódicos desequilibrios. Entonces la jerarquía eclesiástica presentó a la Iglesia como un factor de equilibrio entre el capital y el trabajo, pretendiendo poner racionalidad al sistema. En definitiva, nunca aceptó o propuso cambios estructurales. Supo distinguir muy bien, al igual que la clase dominante, las innovaciones compatibles con la supervivencia del sistema y las que no lo eran. Consideró subversivo cualquier cambio de carácter estructural aceptando con ello, al igual que los economistas liberales, la inevitabilidad de las leyes económicas y de la miseria humana […]. Al identificar a la clase dominante con el interés general, legitimó el sistema imperante. En el fondo, el control social escondía la violencia institucionalizada. La funcionalización de la Iglesia dentro del sistema capitalista llegó al extremo de reprimir rápidamente las voces discordantes dentro del mismo clero[44].

En contraposición, emerge una generación de intelectuales antiimperialistas. A un siglo de la independencia, en medio de las celebraciones del centenario, con la Revolución mexicana triunfante, la rusa en ciernes y un movimiento antibelicista por la paz y contra la Primera Guerra Mundial, se promulga en Argentina la Ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio para varones mayores de 18 años. Coincide con el ascenso a la presidencia de Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical (1916-1922).

En 1918, en la conservadora y aristocrática provincia de Córdoba se produce otro hecho de significancia trascendental en América Latina: la rebelión de los estudiantes de educación superior, contra la Universidad decimonónica. Son los comienzos de la llamada Reforma Universitaria. Se proclama la autonomía del campus, la cátedra libre, la participación de los estudiantes en la elaboración de los planes de estudios y elección de las autoridades del claustro y el rector. La Reforma Universitaria, según sus impulsores, debe cumplir una misión social acorde con la época. Su

manifiesto inicial, dirigido «a los hombres libres de Sur América», tiene eco en todo el continente: «Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana […], acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica […]. Se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo sus banderas a todos los hombres libres del continente»[45].

Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, México, Bolivia toman el testigo. El debate propuesto por los estudiantes inaugura la discusión sobre el proyecto democrático, profundizando en la crítica al orden oligárquico y proponiendo su disolución. La izquierda se ve reforzada. El desarrollo del pensamiento marxista, el socialismo y el comunismo aparecen en la agenda del movimiento estudiantil latinoamericano. Nombres que más adelante tendrán enorme importancia en sus respectivos países participan de la polémica: Alejandro Korn, José Ingenieros, Julio V. González, Germán Arciniegas, Julio Antonio Mella, Víctor Raúl Haya de la Torre, Aníbal Ponce, Manuel Ugarte, José Carlos Mariátegui, Alfredo Palacios o Deodoro Roca.

Es un momento álgido, coronado por la gesta antiimperialista que enfrenta al «general de Hombres libres», Augusto César Sandino en Nicaragua, contra las tropas de intervención estadounidenses apostadas en su territorio y apoyadas por un gobierno neocolonial. Toda América Latina clama contra la intervención imperialista. La formación del APRA, Partido Acción Popular Revolucionaria Americana, en 1927, por uno de los principales dirigentes estudiantiles peruanos, Víctor Raúl Haya de la Torre, sintetiza el sentir de toda una generación. Su programa contiene cinco puntos irrenunciables: 1. Acción contra el imperialismo; 2. Por la unidad política de América Latina; 3. Por la nacionalización de tierras e industrias; 4. Por la internacionalización del canal de Panamá; 5. Por la solidaridad con todos los pueblos y las clases oprimidas del mundo.

El final de una época se masca en el ambiente; el régimen oligárquico agoniza. Son tiempos contradictorios. Emergen militares progresistas, con credo socialista, democrático y antioligárquico en sus proclamas. Con el nombre de «tenentismo», jóvenes oficiales emprenden la lucha contra la Republica «Velha» en Brasil. De 1925 a 1927 se enfrentarán a las fuerzas

federales, sumando el apoyo de gauchos y campesinos. En sus filas, el capitán Luis Carlos Prestes, apodado «caballero de la esperanza». La experiencia acaba en derrota. Años más tarde funda el partido comunista. Los militares ecuatorianos viven una propuesta señera en la región. Se adelantan a su tiempo. Un proyecto progresista y democrático, liderado por el general Eloy Alfaro, será abortado por la oligarquía dando al traste con las reformas. La conspiración de la plutocracia afincada en Quito y Guayaquil acabará con su gobierno. Detenido, es linchado, su cuerpo quemado y arrastrado por las calles de Quito, un 28 de enero de 1912. En 1925, habrá otro intento de ruptura oligárquica, contra el clericalismo, la oligarquía financiera y la plutocracia. El 9 de julio de 1925, toma el poder político una junta militar bajo el liderato del teniente coronel Luis Telmo Paz y Miño. Su gobierno será conocido como la Revolución juliana. En 1931, el coronel Luis Larrea Alba pone punto y final al proyecto[46].

En Chile, el 4 de junio de 1932, oficiales y militares progresistas, abanderados del socialismo, inauguran la *República Socialista.* El comodoro del Aire, Marmaduque Grove, asume la presidencia durante 14 días. El 16 de ese mes otra junta civil, apoyada por militares pro oligarquía recupera el poder. La historia es caprichosa. En los 14 días de gobierno socialista ven la luz un conjunto de leyes, nunca derogadas. Gracias a ellas, en 1971, Salvador Allende y el Gobierno de la Unidad Popular podrán realizar la expropiación de la gran minería del cobre en propiedad de las empresas norteamericanas. El 21 de mayo de 1971 se nacionaliza la gran minería del Cobre, declarándose día de la dignidad nacional. Quien fuese impulsor de la República Socialista en 1932, Marmaduke Grove, funda junto a otros dirigentes obreros y de la izquierda, en 1933, el Partido Socialista Chileno; en su primer Comité Central, un joven le da la mano: Salvador Allende.

Pero el orden oligárquico se resiste a morir. Emplea toda la fuerza contra el movimiento obrero, los partidos populares y las voces que piden apertura política. La crisis de entreguerras tuvo un fuerte impacto sobre las plutocracias. Primero, restringió la demanda de los productos de exportación, lo cual trajo una disminución de ingresos en los gobiernos acostumbrados al despilfarro y «que dependían en gran medida de los impuestos pagados por las empresas exportadoras. Incluso en aquellos productos que se siguieron exportando hubo una baja en los precios, al

disminuir la demanda. Ello tuvo como repercusión una ola de paro, tanto entre los empleos que dependían del sector exportador como de la administración pública. En Argentina 20.000 empleados del Estado quedaron sin trabajo entre 1930-1931. Los trabajadores en las plantaciones de azúcar de Cuba, del café en América Central, Colombia y Brasil, y del salitre en Chile estuvieron entre los principales afectados. Además, la crisis afectó la capacidad de importación, ya que los países latinoamericanos se encontraban con menos divisas. El valor de las exportaciones de los cinco países centroamericanos que en 1930, último año normal, había sido de 169 millones de dólares, bajó rápidamente, pasando a 105 millones en 1933 y a 54 millones en 1936»[47].

Sin opciones de mantener las prebendas a sus aliados internos, las plutocracias ven cómo su poder omnímodo se resquebraja. Un pujante movimiento antioligárquico, nacionalista, afincado en la generación antiimperialista, es suficiente excusa para que la oligarquía llame a la puerta de los cuarteles. Los militares acuden a su mandato. Así cobran vida las dictaduras oligárquicas del siglo XX. Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944); Gerardo Machado en Cuba (1925-1933); Augusto Leguía en Perú (1919-1930); Getulio Vargas en Brasil (1930-1945); Anastacio Somoza en Nicaragua (1937-1956); Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1932-1944); Tiburcio Carias en Honduras (1933-1944); Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935); Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana (1930-1961); José Luis Terra en Uruguay (1933-1938); Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1927-1931); José Félix Uriburu en Argentina (1930-1932).

En otros países la inestabilidad política se hace norma; sin acuerdo entre las facciones de la oligarquía, sufren continuos golpes de mano. Paraguay, desgarrado por la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1939, se aboca a sufrir gobiernos de vida efímera. En algunos casos no cumplen los treinta días y son depuestos por compañeros de armas o civiles apoyados por los militares. En 1940 se pone fin al trasiego de presidentes con el advenimiento de la dictadura de Higinio Moriñigo, que sobrevive hasta 1948. En Bolivia, José Daniel Toro (1936-1937) inaugura la era de las dictaduras con características similares.

A pesar de la represión, el régimen oligárquico se ve obligado a reconocer, dada la gran presión social, derechos sociales mínimos a las

clases trabajadoras. La mujer es protagonista. Su papel no es testimonial. Múltiples revistas, folletos, partidos feministas, ven la luz a principios del siglo XX. En Argentina: *Nosotras* o *Vida Femenina,* dirigidas por María Abella de Ramírez y Julieta Lantarí. En México, en plena revolución, se edita en 1915 el semanario *La mujer moderna,* bajo la dirección de Hermila Galindo; en Chile (1904), Amanda Labarca publica *La Aurora Feminista;* en Brasil, se funda una imprenta feminista y ven la luz dos revistas: *O quinze de Novembro do sexo femenino,* dirigida por Francisca Dinis y *A Familia* de Josefina Álvarez de Azevedo, quien, además, publica la obra de teatro *O voto femenino.* En 1922 Bertha Lutz, naturalista y zoóloga, funda la Federación Brasileña para el Progreso Femenino. Destaca por ser la primera mujer contratada en 1919 por el Museo Nacional de Río de Janeiro; en 1934 es elegida diputada y en 1945, en representación Brasil, participa en la redacción de la Carta de Naciones Unidas en 1945. En El Salvador, Prudencia Ayala crea el periódico *Redención femenina.* En Brasil, Leolinda Daltro funda en 1910 el Partido Republicano Feminista; en Argentina, en 1920, toma forma el Partido Feminista impulsado por Julieta Lanterí. En Chile, en 1921, se funda el Partido Femenino Progresista y en 1922 lo hará el Partido Cívico Femenino. En Perú, en 1925, Zoila Aurora Cáceres funda Feminismo Peruano. En Bolivia emergen los ateneos femeninos con diversas publicaciones en los años veinte; en 1929 se celebrará el I Congreso Feminista en Cochabamba.

Durante todo el periodo sus luchas no estuvieron exentas de las características de una sociedad donde su rol se encasillaba en ser madre, mujer y esposa. Confinada a la casa, destinada a la crianza de los hijos y el cuidado de la familia, carecía de los derechos civiles. Poseían nacionalidad, eran uruguayas, argentinas, guatemaltecas, peruanas o chilenas, pero se les negaba la ciudadanía. Las primeras reivindicaciones se centraron en conseguir reformas en los Códigos Civiles, tanto como en mantener las reivindicaciones políticas, generando luchas trasversales: «Las organizaciones femeninas preferían, como en otros países latinoamericanos, asegurar la reforma del Código Civil para lograr la equiparación legal de la mujer al hombre, especialmente en cuanto a legislación familiar. La definición de ciudadanía no seguía una ruta únicamente política, sino social, al perseguir la igualdad personal en esferas como la ampliación de la patria potestad respecto a los derechos sobre los hijos y de todas las formas de

sujeción femenina al hombre. Así, los esfuerzos en pro del sufragio estuvieron compartidos con aquellos dedicados a la obtención de cambios favorables al reconocimiento de la personalidad jurídica. Los argumentos esgrimidos a favor de estos cambios se apoyaban en la educación de la mujer y su contribución al mercado laboral, los mismos que también servían para reclamar el derecho al voto»[48].

La mayoría de los Códigos Civiles de la época señalaban: «el marido debe protección a su mujer, la mujer obediencia al marido». La Iglesia católica participa en su encasillamiento durante el orden plutocrático. Pecadora, su redención la encarna la pureza de la Virgen María. Castidad, obediencia, sacrificio, amor materno. Así lo expresa el arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler, en su apología al culto de la Santísima Virgen María, en 1904: «La gracia divina posibilitó la redención de la mujer, pero a través de una función: la maternidad». Y agrega: «María ha levantado a su sexo de la decadencia en que la falta de Eva lo había precipitado, la mujer ha sido rehabilitada primero del pecado, en el orden religioso; después del desprecio, en el orden moral, y, por último, de la servidumbre… en el orden legal […]. La iglesia lucha para que la mujer sea considerada como igual al hombre en cuanto atañe a la dignidad y el respeto a sus derechos, pero conservando las desigualdades que nacen de la misión de ambos sexos en la familia y en la sociedad […]. Mientras el hombre, el esposo y el padre son en la familia la manifestación de la Providencia en lo que toca a la razón y la fuerza, los que ganan el pan cotidiano y los que por medio de su autoridad dan solución a todos los conflictos […], la mujer, la esposa, la madre es la más elevada personificación de ese amor sincero a la familia»[49].

Es una sociedad que accede a la independencia bajo una estructura social afincada en lo masculino y patriarcal, cuyos valores provienen de dos tradiciones que fueron arraigando en la construcción de los Estados nacionales, representadas por los conquistadores y colonos, hombres recios, violentos fuertes, articulados al poder de la Corona y el poder de la Iglesia. Así, «confluyeron, por tanto, dos *monopolios patriarcales* de origen medieval: el de los monarcas y el de la Iglesia católica. Pero también confluyeron dos monopolios masculinos de coyuntura: el de los conquistadores que afrontaban la "doble violencia" del descubrimiento y la conquista, y el de los grandes mercaderes que afrontaban el "riesgo

violento” del comercio de aventura […]. Era una selva regida por hombres “fuertes”; es decir, por “poderes universales” (el monarca y el papa), de carácter simbólico y de origen medieval, y poderes materiales (la violencia física, la violencia del dinero y la justicia sumaria), templados en el terreno mismo de la conquista. Lo universal, en este contexto, no podía ser sino *autoritario,* y lo material, sino *masculino»*[50].

Lo dicho tendrá repercusiones en la creación de los espacios públicos y privados donde la pertenencia a la clase social y las condiciones de subordinación, explotación y dominio reproducen la sociedad patriarcal y masculina. Así, surgen dos morales, la mujer del conquistador y la mujer conquistada. «El espacio privado, en este contexto, fue solo un vivac, el “reposo del guerrero” (depredador), el momento orgiástico de goce de botín o un proyecto provisorio de “amancebamiento”. Fue inevitable que el “espacio privado” resurgiera aquí no como fundamento del espacio público, sino como subproducto de este. A la larga esta reversión se morigeró, pues por arriba, en la elite conquistadora, el espacio privado se articuló a la manera europea (centrado en mujeres blancas inmigradas o en criollas) y por abajo, a la manera de la conquista (centrada en mujeres abusadas). De ello resultó no solo un espacio privado estratificado, sino también regido por un doble estándar de moral y un doble código civil. En cualquiera de esos hogares, sin embargo, solo el padre de familia quedó habilitado para operar en el espacio público y no la madre ni el resto de la familia […]. Precisamente por la estratificación del espacio privado colonial, la madre de familia (de elite) se halló en una posición distinta a la que había tenido en Europa, pues aquí no fue un miembro paritario de una comunidad local, sino un “sujeto de poder” que podía operar en términos de conquista sobre una masa social de “objetos de poder”. Pues en América, la mujer del colono, junto con ser esposa y madre fue, a la vez, *patrona.* Y patrona con los mismos atributos de poder (abusivo) del colono masculino. En este sentido, *el poder privado (accesible a la mujer del colono) se fundó en los poderes abusivos del “espacio público” masculino»*[51].

La belleza, la virginidad, la sumisión, el respeto, la maternidad, el cuidado de los hijos, la castidad, el amor eran considerados los valores propios de la mujer. En definitiva, subordinación al hombre. Con el proceso de secularización se impone el matrimonio civil, el divorcio y la mujer gana derechos. Aunque lentamente, el mundo cerrado de la dominación

masculina se tambalea. Una generación de mujeres literatas, maestras, juristas, artistas, médicas entra en liza. Sufrirán la represión, serán objeto de burlas, en ocasiones padecerán el ostracismo, el exilio, la cárcel. Pero no desfallecerán. Junto a Rubén Darío, el modernismo cuenta con la argentina Alfonsina Storni (1892-1938), las uruguayas Juana de Ibarbourou (1895-1979) y Delmira Agustini (1886-1914), asesinada por su marido. La premio nobel chilena Gabriela Mistral (1889-1957), la salvadoreña de origen armenio Claudia Lars (1899-1974), luchadora incansable contra la dictadura de Maximiliano Hernández, más tarde diplomática. En Brasil, Cecilia Meireles traducirá al portugués a García Lorca, Ibsen, Tagore o Virginia Woolf. Sus obras, poesía, novela, relatos cortos, cuentos describen la realidad de la mujer en la familia, el trabajo o el amor en la sociedad oligárquica.

La incorporación de la mujer al mundo laboral estuvo igualmente condicionada por el modelo primario exportador y las dinámicas de una sociedad reacia a todo cambio en el rol de la mujer dentro de la dominación paternalista-patriarcal. La oligarquía y la Iglesia no se opusieron al trabajo de la mujer en la esfera de la producción. El requisito era mantener el estereotipo consignado en la división social del trabajo por género. «La capacidad para curar heridas, preparar remedios y cuidar a los dolientes fue considerada una tarea naturalmente femenina, vinculada por valores culturales y sociales al complejo vital de la reproducción. Fueran o no madres, las mujeres debían enfrentarse más que los varones, por supuestos condicionamientos biológicos, a la muerte y la enfermedad. Eran también capaces de extender los roles asignados más allá de la familia, a los allegados, y casi sin tensión, al resto de la sociedad. En este imaginario de género que las instaló como enfermeras abnegadas, a la responsabilidad femenina de sanar y curar se unió el cuidado del hogar, los hijos, la pulcritud y el orden en las vestimentas, el baño periódico y la preparación higiénica de los alimentos, aspectos todos que expresaban el rango social y los valores culturales de las familias»[52].

Aquellas labores identificadas como propias del sexo femenino fueron nichos de trabajo de las mujeres plebeyas y su incorporación al movimiento obrero. Pronto destacarán en la producción textil, como planchadoras, tejedoras, modistas, lavanderas, bordadoras, además de sirvientas y cocineras. Las condiciones de trabajo no eran mejores que las de los

trabajadores: «En una síntesis muy apretada podría decirse que, al bajo nivel de salubridad y extensas jornadas laborales, había que sumar, en el caso de las mujeres, el acoso y la violencia sexual a que eran sometidas, la postergación en cuanto a promociones internas, el salario inferior al masculino por igual tarea y, en caso de ser casadas, la incapacidad legal de administrar la paga recibida por su trabajo»[53].

En las luchas reivindicativas del movimiento obrero la mujer participó codo a codo con los hombres, teniendo que sortear las visiones paternalistas, logrando un gran reconocimiento en el movimiento sindical y los partidos políticos populares, sobre todo en los comunistas y anarquistas. Igualmente, dentro del ideario socialista, la mayoría de las feministas y sufragistas compartieron debates y protagonismo. Especial atención merece el sentido de la educación de las mujeres en el periodo. Su incorporación a la enseñanza secundaria y la Universidad supuso un golpe a la sociedad oligárquica. Sin embargo, en el mundo rural, poco cambió su papel. En 1945, relata Mercedes, mujer campesina, que después de trabajar varios años de cocinera en fundo, en los lavados y otras cosas, se casa. Vive en fundos y en una pequeña propiedad de su marido; tiene diez hijos:

> Yo me levantaba en la mañana siempre como a las seis de la mañana, a darle el desayuno a él y todos pa'que se fueran al trabajo. Entonces ahí dejaba a los niños desayunando. Mi mamá estaba con nosotros, los dejaba con ella y me iba a hacer las galletas a las casas patronales; después venía a hacer el almuerzo acá, hacerles el almuerzo a los trabajadores, después de lavar […]. El día que no hacia las galletas, me iba a lavar a la casa de la señora. Oiga, unos manteles de mesa de comedor tan largos. Ahí donde me demoraba lavando, sobre todo para enjuagarlos a mano. Los días domingo hacia alfajores, empanadas y pan para vender […]. Majadilla se llamaba el fundo. Ahí donde yo trabajaba duramente, ahí les hacía el pan, las galletas, les venía a hacer la casa en la tarde; las dejaba hechas y después del almuerzo las venía a cocer ahí mismo. Entonces, a la señora, a veces […] yo le tenía que venir a lavar a la misma casa y plancharle. Otras veces yo me llevaba la ropa para allá y así, hacerles la comida también a los trabajadores, quince algunas veces, varios todo el tiempo. El amasado era trabajo que yo le hacía, me pagaban una miseria. Como ser, les hacía la comida yo, me pagaban mensual junto con el sueldo de él. Me pagaban y me daban ración, una galleta en la tarde y otra en la mañana […]. Después nos vinimos a Tutuquén, ahí mi marido trabajaba como ser en las hortalizas, ahí yo le ayudaba a limpiar, ahí trabajamos mucho… Ahí casi me mataba yo… Era malo el rico[54].

Al final del ciclo oligárquico, nueve países han reconocido el derecho a voto de las mujeres, conquistado a sangre y fuego. Ecuador, en 1924; Brasil y Uruguay, en 1932; Cuba, en 1934; El Salvador, en 1942; República

Dominicana, en 1944; Guatemala y Panamá, en 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, el voto femenino se reconoce en Venezuela, en 1947, pudiendo votar las mujeres mayores de 18 años y analfabetas. Chile y Costa Rica lo incorporan en su legislación en 1949. Bolivia se suma tras la revolución de 1952; Colombia y México, en 1954; Honduras, en 1955; Argentina, en 1957; y Paraguay, en 1961.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial se inaugura una etapa política en América Latina, bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. Su dominio se asienta en la dependencia industrial-tecnológica. «Hasta el año 1940, el principal sector de actividad lo constituyen los sectores primarios y los ferrocarriles. Esto resultaba del carácter colonial-exportador de la economía latinoamericana a la cual se integraba el capital extranjero. Incorporábase este en una economía productora de materias primas y productos agrícolas, complementada por los medios de trasporte para su exportación»[55]. A partir de los años cincuenta la tendencia se revierte. Las inversiones directas norteamericanas se trasladan del sector primario al secundario. Manufactura, industria de sustitución de importaciones, metalmecánica, química, ampliando su presencia en el sector estratégico petrolero.

Estados Unidos, en 1936, invirtió en dichos sectores 2.803 millones de dólares, en 1950 la cifra fue de 4.445 millones y, en 1967, superó los 10.200 millones de dólares. Desde 1960 a 1967, las manufacturas constituyen el principal rubro de la inversión norteamericana en América Latina. En 1960 representan 19 por 100 del monto total de las inversiones directas norteamericanas en América Latina. En 1967 pasan a representar el 32 por 100. Entre los años 1951 y 1961 el flujo de inversiones de capital estadounidense en el petróleo alcanza el 33 por 100 del total; la manufactura, el 31 por 100, integrándose definitivamente como parte del tejido industrial local. «En 1967, el sector industrial que tenía el más alto valor de inversiones directas de Estados Unidos en América Latina era el de las industrias químicas y derivados que correspondía a 682 millones de dólares, es decir, el 27 por 100 del valor de las inversiones. Enseguida venía la industria de trasportes y equipos con 428 millones de dólares, es decir, el 17 por 100 de esas inversiones. Las industrias de máquinas eléctricas y no eléctricas sumaban los 334 millones, correspondiendo al 13 por 100 de esas inversiones. Un poco por debajo se encuentra la industria de productos

alimenticios, que no siempre es de las más tradicionales y que absorbe 315 millones, es decir, otro 13 por 100. Las industrias que siguen son las del caucho, 7 por 100, metales primarios fundidos, 6 por 100, el papel y derivados, 2 por 100, y otra cantidad de industrias varias con un 14 por 100»[56].

El capital monopólico norteamericano se ubicó en la franja moderna y dinámica de las industrias latinoamericanas. La dependencia industrial-tecnológica supuso un cambio de alianzas. La nueva división internacional de la producción, los mercados y el trabajo facilitó que las empresas multinacionales ejercieran el control monopólico sobre la industria pesada, las aplicaciones tecnológicas y el proceso de automatización. El imperialismo se redefine bajo parámetros del capital monopólico y la formación de oligopolios.

En este contexto, las burguesías modernizadoras latinoamericanas se asocian al capital norteamericano de manera subordinada, renunciando, definitivamente a un proyecto de desarrollo nacional. «Tras la Segunda Guerra Mundial, la penetración de las empresas multinacionales en América Latina se hizo más intensa, especialmente en los países que ya habían alcanzado cierto desarrollo industrial […]. En tal sentido, el proceso de formación de una clase nacional de empresarios industriales quedó interrumpido. Dada su poderosa situación financiera, la empresa multinacional extiende poco a poco su control sobre los sectores más dinámicos de la actividad industrial. Los mejores talentos de la industria local fueron absorbidos en la nueva clase dirigente […]. La clase empresarial nacional e independiente se vio reducida, en el curso de este proceso, a actividades secundarias o a empresas de carácter pionero que, a largo plazo, acabaron por abrir nuevos espacios a la futura expansión de la empresa multinacional […]. La eliminación de la clase empresarial excluye, por tanto, la posibilidad de un desarrollo nacional sostenido por los propios países, de acuerdo con el desarrollo capitalista clásico»[57].

Las redes familiares funcionan a la perfección; las nuevas generaciones de las clases dominantes toman el relevo, haciéndose con el control político. Los cambios se suceden. La población urbana crece y las ciudades se masifican. Disminuyen las tasas de analfabetismo y la mortalidad infantil. La migración campo-ciudad crea las grandes metrópolis urbanas. Santiago, por ejemplo, pasa de tener 950.000 habitantes en 1940 a 1.907.000 en 1960.

Similar tendencia experimentan Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Asunción, Montevideo, Río de Janeiro, São Paulo, Caracas o Bogotá. El trasporte público, las carreteras, los sistemas de comunicación van lentamente cambiando la fisonomía y la imagen de países atrasados. La población rural disminuye. El PIB crece y la estructura social de diversifica: «El contexto económico de la época favoreció a aquellas clases que vivían de las actividades urbanas, sobre todo en la industria. En conjunto, la agricultura perdió la primacía que había ostentado hasta mediados del siglo XX como fuente de empleos, ya que en 1960 solo el 46,7 por 100 de la población activa del conjunto latinoamericano trabajaba en el campo, cifra que había sido del 61,6 por 100 en 1940. En las ciudades, los profesionales, empleados y obreros asalariados cobraron cada vez más importancia, mientras declinaba el número de artesanos»[58].

Afloran las contradicciones. La ciudad masificada que nace, al amparo de la modernización política, muestra el desequilibrio estructural en la utilización del espacio y pone en evidencia la enorme desigualdad social que la atraviesa. En ella coexisten la riqueza y la opulencia con la pobreza y la marginalidad. Son ciudades duales, divididas, donde se viven culturas paralelas. Los asentamientos marginales, conocidos como favelas en Brasil, callampas en Chile, villas miseria en Argentina, ciudades perdidas en México, pueblos piratas en Colombia, baños de brujas en Panamá, barriadas en Perú, cantegiles en Uruguay y, genéricamente, rancheríos, son habitadas por las clases trabajadoras que emigraron del campo, que no tienen acceso a viviendas. Los asentamientos «espontáneos» conllevan una segregación «ecológica, en el sentido que ella manifiesta al mismo tiempo la segregación residencial del espacio urbano y la incapacidad del sistema de producción de viviendas para tomar en cuenta las necesidades sociales cuando la demanda no es rentable»[59]. Los barrios populares carecen de un servicio adecuado de infraestructuras, trasporte, recogida de basuras, alcantarillado, centros médicos, escuelas. La utilización del espacio y la distribución de bienes y servicios se polarizan. Es el nacimiento de la ciudad masificada y de una sociedad escindida: «En aquellas ciudades donde se produjo la concentración de grupos inmigrantes la conmoción fue profunda. Muy pronto se advirtió que la presencia de más gente no constituía solo un fenómeno cuantitativo, sino más bien un cambio cualitativo. Consistió en sustituir una sociedad congregada y compacta por

otra escindida, en la que se contraponían dos mundos. En el futuro, la ciudad contendría –por un lapso de imprevisible duración– dos sociedades coexistentes y yuxtapuestas, pero enfrentadas en un principio y sometidas luego a permanente confrontación y a una interpenetración lenta, trabajosa, conflictiva, y por cierto, aún no consumada»[60].

El proceso de acumulación de capital articulado a la industrialización por sustitución de importaciones se refleja en la transformación de la estructura productiva y la inversión interna bruta de capital. Este crece a un promedio anual del 7,4 por 100 desde 1950 hasta los años setenta, según las estadísticas de CEPAL para el periodo. Pero también demuestra la adopción de un estilo de desarrollo concentrador inherente a la dependencia industrial-tecnológica que no puede resolver los problemas de desigualdad social, pobreza, marginalidad y exclusión. América Latina sigue el patrón de acumulación, dependiente del modelo primario-exportador y de bajo valor agregado.

La tan anhelada transición de la sociedad rural de base latifundista no alteró el poder real de las oligarquías terratenientes. La modernización no cuestionó la constelación lati-minifundio ni la forma de tenencia de la tierra. Es más, la denominada «revolución verde», que modernizó la agricultura latinoamericana en cuanto crecimiento de la productividad, lo hizo a costa de una gran concentración de la riqueza y el ingreso y una masiva migración de la población agraria a las ciudades. «Asimismo, el uso intensivo y sostenido de suelos frágiles desencadenó problemas ambientales de erosión y desertificación, a lo que se agrega la propagación abusiva de las variedades vegetales modernas de maíz, trigo, arroz, café y otros cultivos, que ha reducido gravemente la diversidad genética de las variedades autóctonas o aclimatadas durante cientos de años. Las repercusiones de estas pérdidas por carencia de diversidad genética en los espacios modernos de plantaciones ya son notorias…»[61].

El capitalismo latinoamericano se remoza sin revolución burguesa. La opción política que abrazaron las burguesías locales fue el populismo. «La divisa *hagamos la revolución antes de que el pueblo la haga,* de uno de los jefes oligarcas que participaba en la Alianza Liberal, es muy representativa de la actitud de este movimiento en relación a las masas populares. El movimiento […] nacía de la escisión de la minoría dominante y tenía objetivos limitados casi exclusivamente a la “representación y justicia”,

consiguió conquistar las simpatías de las masas populares urbanas, mas no llegó a interesarse por su participación activa. En verdad, la Alianza Liberal solo aspiraba a atender en mínima parte a las aspiraciones populares y, en lo fundamental, buscaba anticiparse a un posible movimiento popular. […] No solo el movimiento de 1930 fue básicamente una alteración de la estructura de poder operada "desde arriba" y, de este modo, capaz de anticiparse a las masas populares, sino que la misma participación de estas últimas en el juego político se hará también desde arriba hacia abajo. En esto radica una de las condiciones históricas del régimen y de la política populista vigentes en los decenios siguientes»[62].

Bajo el populismo, pudieron cooptar, frenar y absorber las demandas sociales de las clases populares, pasando a controlar los tiempos del cambio social, bajo un discurso nacionalista, antioligárquico, obrerista y de renegociación de la dependencia. Solo hubo un excluido, el campesinado y los sectores rurales de los trabajadores agrícolas. En este contexto, la política amplía el espacio de participación de las clases trabajadoras urbanas, favorece el sindicalismo amarillo y la negociación colectiva.

> La alianza desarrollista involucró una política de compromiso entre los sectores industriales financieros y los sectores urbanos populares, no excluyó la vinculación del primero de estos conjuntos de fuerzas con el que suele llamarse sector latifundista exportador tradicional, ni evitó la presión urbana popular. En general, puede decirse que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en este sistema de alianzas de fuerzas la evidente relación asimétrica entre los dos principales componentes se tradujo en la obtención de beneficios desiguales. En conjunto, sin embargo, y gracias al hecho de haberse excluido del sistema de fuerzas a la masa rural y, en grado menor o menos conocido, también a las poblaciones urbanas denominadas marginales, fue posible mantener el plano de las alianzas mientras se ampliaba el sistema productivo. Para salvaguardar la continuidad de esta ampliación cada una de las partes cedió transitoriamente respecto a objetivos estratégicos: los grupos empresariales privados aceptaron parte de la política popular nacionalista que se expresó mediante la ampliación del sector estatal de la economía y los sectores populares aceptaron tácitamente la ampliación de la base económica de la economía a través de fuertes inversiones extranjeras[63].

La oligarquía se retiró a sus cuarteles de invierno, acomodándose a su nuevo papel: actuar tras bambalinas. «Resalta su disposición para acomodarse a nuevas situaciones, cambiando la lucha frontal de un comienzo por la retirada posterior a líneas más fuertes, susceptibles de cuidar sus intereses primordiales. Para el éxito de esa conducta ha sido decisiva la expresión social de ductilidad, esto es, la aptitud para atraer y

recibir elementos que sobresalen en los cuadros ajenos y que, por supuesto, son asequibles. En Chile ha hecho historia y ha pasado a ser un personaje característico de una constelación política el joven rebelde de pequeña o mediana burguesía, por lo general provinciano, que es progresivamente "asimilado" por la derecha –aunque ello no implique mudanza en su filiación partidaria–. El fenómeno, como es evidente, se aceleró y extendió grandemente con los cambios en el "balance de poder". La vieja oligarquía abrió sus puertas, consciente de que por ese medio podía contrarrestar su debilitamiento y abrirse paso más expedito hacia las oportunidades creadas por la intervención estatal. Los otros, a su vez, siguiendo la antigua tradición, no vacilaron en trocar influencias o poder por lustre social»[64].

La Guerra Fría ubica a los países de América Latina en la esfera de Estados Unidos. El centro hegemónico gravitacional del poder se traslada a Washington. Occidente se enfrenta a un nuevo orden mundial. Derrotados los países del eje, sus enemigos serán el comunismo mundial, la Unión Soviética y sus aliados. Nace la doctrina Truman de las compensaciones. Al igual que la enmienda Platt fue una garantía para la intervención de Estados Unidos en Cuba y Panamá, la doctrina Truman fue la fórmula de enfrentar la expansión y consolidación de la izquierda marxista, los partidos obreros y los sindicatos de clase en la región, y la excusa perfecta para controlar militarmente el espacio geopolítico.

Bajo el cartel de «la amenaza comunista», los estrategas estadounidenses fundan organismos regionales de contención «comunista». En América Latina, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR (1947), y la Organización de Estados americanos, OEA (1948). El TIAR funge como alianza militar, permitiendo a Estados Unidos intervenir en el subhemisferio, si el alto mando considera que puede tener lugar un ataque extracontinental. Su artículo tercero explicita: «Las altas partes contratantes convienen en que un ataque armado de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos y, en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en el ejercicio del derecho inmanente de la legítima defensa individual y colectiva que reconoce el artículo 51 de la carta magna de las Naciones Unidas»[65]. Y la OEA se convierte en la institución garantista de la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos. No por casualidad, sus países miembros aprobaron en

1954, a petición del secretario de Estado norteamericano Dulles, la siguiente declaración: «[…] La dominación o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional… constituiría una amenaza para la soberanía e independencia de los Estados Unidos». La creación de ambas instituciones corrió paralela al cambio de política militar de seguridad, donde la estrategia de guerra total y peligro hemisférico se ve complementada por la estrategia de guerra limitada y la emergencia del peligro interno, incorporando a la población civil como un objetivo militar.

Desarrollo dependiente y seguridad militar fueron los límites impuestos por el imperialismo norteamericano para llevar a cabo la modernización, tratando de poner coto al cambio social y controlando el desborde social y político. La Alianza Para el Progreso, política de ayuda económica diseñada por el gobierno Kennedy, tratará de constreñir las demandas de reforma agraria y frenar el avance de la Revolución cubana en América Latina. Bajo esta perspectiva se expulsa a Cuba de la OEA en la reunión de Punta del Este. «Es evidente que antes de que pueda ser adoptada una acción más firme contra la amenaza comunista, centralizada ahora en Cuba, los pueblos latinoamericanos deberán progresar considerablemente en cuanto a la confianza en los propósitos declarados de la OEA y en la política de Estados Unidos. Más si la Alianza Para el Progreso logra éxitos y el pueblo de los países latinoamericanos percibe más claramente el valor que para sus intereses y fines tienen los principios que rodean a la OEA, también apoyarán inevitablemente las medidas necesarias para proteger este sistema contra las fuerzas agresivas, cuyo objetivo es la desintegración y fracaso»[66].

Cualquier alternativa popular y democrática autónoma será tachada de izquierdista, marxista, socialista o comunista. La Doctrina de la Seguridad Nacional hace acto de presencia, acompañada de «leyes de defensa de la democracia», que ilegalizan a los partidos obreros, mandando al cadalso a las izquierdas marxistas y socialistas, persiguiendo a sus afiliados. Dichas leyes se conocieron popularmente como «leyes malditas». Coinciden en el tiempo con la Ley de Seguridad Interna en Estados Unidos, consecuencia del macartismo, y la Ley de Control Comunista decretada en 1954, ilegalizando al Partido Comunista.

La Guerra Fría se institucionaliza. Costa Rica es el laboratorio perfecto para poner en funcionamiento las estrategias de guerra anticomunista. En dicho país centroamericano gobierna una alianza popular desde 1940 con el partido comunista y el arzobispo Víctor Sanabria, hombre de pensamiento progresista. El presidente Calderón será derrocado, bajo una supuesta guerra civil. Sus políticas habían debilitado la oligarquía costarricense. En Colombia, el 9 de abril de 1948, se produce el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Su muerte da lugar a una gran explosión social, conocida como el «bogotazo». Dicho movimiento popular de repulsa por el asesinato, conduce al presidente de turno, Ospina López a crear un frente anti-comunista, facilitando, en 1953, el golpe de Estado al general Rojas Pinilla. En Venezuela, otro golpe de Estado derrocará a Rómulo Gallegos en noviembre de 1948. En Perú, el general Manuel Odría se encarga de reprimir y perseguir a la izquierda, marxistas-socialistas, comunistas, incluidos los militantes del APRA, nada tachables de izquierdistas. En Bolivia, tras la revolución nacionalista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a los pocos meses de consolidarse en el poder, 1952, considera necesario dotar al país de una institución militar, las fuerzas armadas, disueltas en primera instancia por el poder popular y las organizaciones obreras y mineras que habían participado del movimiento reformista. «La reorganización del ejército es una de las condiciones del reconocimiento por parte del imperialismo. Puesto que su propia existencia y la totalidad de su equipamiento provinieron de los Estados Unidos, es un ejército que se organiza en los términos de aquellos que existen bajo el control neocolonial norteamericano y así ocurrirá, aun en aspectos de tanta inferencia local como lo que se llama su doctrina militar»[67].

En 1954, una expedición militar alentada desde Honduras y encabezada por el coronel Castillo Armas, e instigada por Estados Unidos, derrocará en Guatemala al gobierno democrático del general Jacobo Árbenz. El imperialismo acota: democracia sí, pero sin cuestionar ni alterar la dimensión subordinada de los países latinoamericanos al bloque occidental. Lo cual suponía poner un freno a las políticas de reforma agrarias anti-latifundistas, a las nacionalizaciones de las riquezas básicas, las expropiaciones del capital multinacional y las proclamas socialistas. No hay lugar para la formación de gobiernos populares y anticapitalistas. La política de seguridad hemisférica diseñada por el imperialismo se debe

cumplir a rajatabla; de lo contrario se recurre a la invasión o el golpe de Estado.

En Cuba se lucha contra Fulgencio Batista. El rechazo a su figura aglutina a las fuerzas democráticas. La insurrección popular y la creación de un ejército rebelde, capaz de enfrentarse a un ejército regular y derrotarlo, supone un punto de inflexión en la Guerra Fría. Su triunfo, el 1 de enero de 1959, trae nuevos aires en las luchas emancipatorias. Su influencia se dejará sentir en todo el continente. Cuba cierra medio siglo de historia de luchas nacionalistas y abre el ciclo de las revoluciones anticapitalistas, socialistas y de liberación nacional. El antiimperialismo se redefine al interior del proyecto socialista.

La primera declaración de La Habana, leída el 2 de septiembre de 1960, ante el pueblo cubano, aclara:

> La Asamblea General del Pueblo de Cuba proclama ante América: el derecho de los campesinos a la tierra; el derecho del obrero al fruto de su trabajo; el derecho de los niños a la educación; el derecho de los enfermos a la asistencia médica y hospitalaria; el derecho de los jóvenes al trabajo; el derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica; el derecho de los negros y los indios a la dignidad plena del hombre; el derecho de la mujer a la igualdad civil, social y política; el derecho del anciano a una vejez segura; el derecho de los intelectuales y artistas a un mundo mejor; derecho a la nacionalización de los monopolios imperialistas, rescatando así las riquezas y los recursos naturales; el derecho de los países al comercio libre con todos los pueblos del mundo; el derecho de las naciones a su plena soberanía; el derecho de los pueblos a convertir sus fortalezas militares en escuelas, y armar a sus obreros, sus campesinos, a sus estudiantes, a sus intelectuales, al negro, al indio, a la mujer, al anciano, a todos los oprimidos y explotados, para que defiendan, por sí mismos, sus derechos y sus destinos […]. La Asamblea General del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten a sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano, y quienes impiden oír la verdadera voz en las reuniones de los Cancilleres donde domesticados hacen de coro infame al amo despótico. Ratifica, por ello, su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano, que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la genuina voz de los pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de las minas de carbón y de estaño, desde las fábricas y centrales azucareros, desde las tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos de Zapata y de Sandino, empuñan las armas de su libertad, voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvalidos[68].

La I Declaración de la Habana tendrá un efecto directo en las fuerzas imperialistas y las burguesías locales, desatando la contrarrevolución. Estados Unidos atacará con todo su arsenal. Desde invasiones, financiación de ejércitos mercenarios, apoyo militar y logístico, sabotaje y, sobre todo, elaborando un plan de adoctrinamiento político, ideológico y cultural.

En América Latina, Estados Unidos reproducirá su política de *acciones encubiertas* desarrollada en Irán, Egipto y Guatemala, cuya definición incorpora «toda actividad clandestina con el fin de influir en gobiernos extranjeros, acontecimientos, organizaciones o personas, en apoyo a la política exterior de Estados Unidos, realizada de tal forma que no se advierta la participación de Estados Unidos»; y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, dichas actividades, deben «planificarse y ejecutarse de tal forma que para las personas no autorizadas no exista evidencia de la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y que, si se descubren, el gobierno de Estados Unidos pueda rechazar de forma convincente cualquier responsabilidad por ellas»[69]. La primera de ellas consiste en impedir la consolidación de la Revolución cubana. Se diseña durante la administración de D. Eisenhower y se ejecuta por el gobierno de John Kennedy. Se alecciona a fuerzas mercenarias, entrenadas por la CIA para desembarcar en la Isla, buscando ganar una cabeza de playa para el posterior desembarco de tropas. El plan se lleva a cabo en la Bahía de Cochinos, Playa Girón, el 15 de abril de 1961, terminando con un sonoro fiasco. Sus jefes serán detenidos e intercambiados por compota para el consumo del pueblo cubano.

Las burguesías desarrollistas se pliegan a la Doctrina de la Seguridad Nacional. El miedo a los movimientos de liberación nacional las atenaza. Los golpes de Estados son la alternativa. Pero comprometen institucionalmente a las fuerzas armadas instruidas y entrenadas en la zona del Canal. Las dictaduras de la seguridad nacional compartirán espacio con regímenes seudodemocráticos donde impera un presidencialismo bipartidista o monocolor como son Colombia, Costa Rica, Venezuela, México, Uruguay o Chile. En 1965, República Dominicana será invadida por más de 20.000 marines acabando con la resistencia popular.

Los movimientos guerrilleros nacidos a la luz de la Revolución cubana se extienden. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua (1961); el Movimiento 13 de Noviembre en Guatemala, fundado por un

oficial entrenado en la lucha contrainsurgente, Antonio Yon Sosa. Perú, cuya guerrilla campesina tendrá como fundador a Hugo Blanco (1961), en la actualidad sigue en la brega y defensa de los derechos de los pueblos originarios, dirige la revista *Lucha Indígena.* Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela, México y Argentina viven experiencias similares. «Estos primeros intentos, al inicio de los años sesenta, expresaban un momento de ascenso del movimiento popular. Ascenso que era, por una parte, resultado de la propaganda y de la euforia que despertaba en el continente la victoria de la Revolución cubana y, por otra, correspondía al fin del periodo de desarrollo que se había iniciado en Latinoamérica en la postguerra, el que empezaba a agotarse debido a las contradicciones generadas por el proceso de industrialización que se realizó dentro de los marcos de la integración monopólica mundial»[70].

Es un momento álgido, la sociedad latinoamericana se trasforma. El Modernismo latinoamericano da frutos: se crea, se inventa, se desarrolla pensamiento crítico. La Revolución mexicana está presente. El muralismo, con David Siqueiros (1896-1974) y su obra *La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el Cosmos;* Jorge González Camarena, pintando *Presencia de América Latina;* José Orozco (1883-1949), autor de *El Hombre en Llamas,* cuya obra está esparcida en el Palacio de Justicia, el Colegio de San Idelfonso o el Hospicio Cabañas de Guadalajara; Diego Rivera (1886-1957) nos asombra con *El hombre controlador del Universo.* El muralismo relata la historia del movimiento obrero, la emancipación, las luchas del campesinado, la revolución mundial, el imperialismo, al tiempo que le da vida a Zapata, Villa, Morelos. En América Latina tiene su reflejo inmediatamente. La historia sale a la calle en forma de relatos pictóricos. Las grandes estaciones de ferrocarriles, los centros culturales, los ateneos, las universidades, las escuelas de artes y oficios. Cualquier espacio público se trasforma en lienzo. En Chile, Julio Escamez, Roberto Matta o Nemesio Antúnez. En Perú, Oscar Quiñones, cuya obra en el rectorado de la Universidad de San Marcos en Lima destaca por su monumentalidad. Oswaldo Guayasamin en Ecuador, cuyo mural en la Universidad Central *Historia del Hombre y la cultura* es igualmente grandioso. Napoleón Poty, Di Cavalcanti o Cándido Portanari, en Brasil. Frescos de Portanari decoran la sede de Naciones Unidas o la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En Bolivia tenemos a Miguel Alandia Pantoja. La historia de

América Latina sale a las calles y con ello la memoria colectiva de una conciencia emancipadora.

La literatura de la revolución sienta precedentes: Mariano Azuela (1873-1952) con *Los de abajo* (1915); Martín Luis Guzmán (1887-1976) con *El águila de la serpiente* (1928); Francisco Urquizo (1891-1969) con *Tropa Vieja* (1943); José Vasconcelos (1882-1959) con *Raza Cósmica;* Juan Rulfo (1917-1986) con *Pedro Páramo* y *El Llano en Llamas.* En América Latina sus obras son un referente obligado. En 1935, Jorge Luis Borges (1899-1986) edita sus crónicas *Historia Universal de la infamia.* En 1950, Octavio Paz (1914-1998) publica *Laberinto de Soledad* y, en 1962, Carlos Fuentes escribe *La muerte de Artemio Cruz.* Es un continente en ebullición. Lo real maravilloso emerge de la mano del cubano Alejo Carpentier (1094-1980), con *El reino de este mundo* (1949). Juan Carlos Onetti (1909-1994) publica *La vida breve* en 1950. Así se van sumando uno a uno.

La Revolución cubana, al igual que la Revolución mexicana, tiene una honda repercusión en todo el continente: afecta a la política, la cultura, las ciencias sociales. El pensamiento crítico gana terreno en literatura, antropología, arte, arquitectura, cine, teatro, sociología, ciencia política, filosofía o historia. Nombres como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, David Viñas, Luis Cardoza y Aragón, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa se convierten en referentes. En las ciencias sociales, Pablo González Casanova, Sergio Bagú, Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Octavio Ianni, Rodolfo Stavenhagen, Ricaurte Soler, Vania Bambirra, Celso Furtado, Enzo Faletto, Aníbal Pinto, Antonio García, Costa Pinto, Florestán Fernándes, Leopoldo Zea, José Nún, Paulo Freire, Oswaldo Sunkel, René Zavaleta Mercado, Aníbal Quijano, Tomás Amadeo Vasconi, Adolfo Gilly, José Aricó, Suzy Castor, José Agustín Silva Michelena, Edelberto Torres Rivas, Daniel Camacho, Pedro Vuskovic, Gerard Pierre Charles, Agustín Cueva, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, María Concepción Tavaré o Gregorio Selser. La lista es extensa. Es un momento dulce para la creación intelectual y se refleja en la gran producción teórica de los años sesenta y principios de los setenta. Las ciencias sociales dan un salto cualitativo: la crítica a la teoría formalista del subdesarrollo y el funcionalismo confluyen en el nacimiento de la teoría de la dependencia. La praxis teórica se convierte en un campo de batalla política. En su interior se

formulan propuestas reinterpretando el subdesarrollo, las formas de dominación, de control social.

Estados Unidos toma la delantera en las ciencias sociales; los estudios de la cibernética y la informática van definiendo la teoría de sistemas. Nuevas disciplinas cobran fuerza. Los análisis de futuro, prospectiva, estilos políticos. La teoría de juegos se convierte en un arma estratégica que contempla la formulación de escenarios revolucionarios para el control del espacio y el cambio social. Se buscan modelos para aplicar a la guerra subversiva en América Latina. Estados Unidos maneja con cautela su experiencia. En la Guerra de Indochina, Vietnam, desplaza antropólogos, sociólogos, ingenieros y topógrafos. Se busca establecer un mapa socio-cultural, político, del espacio. La geografía política aporta una nueva dimensión: «Hay que tener muy presente, por ejemplo, que las monografías que los geógrafos han dedicado a determinada "región", a determinada población del tercer mundo o de otro sitio, a determinado grupo étnico, a determinado grupo social, a determinado barrio, a determinado "bidonville", etc., constituyen documentaciones de interés considerable para los servicios de información política y militar de las grandes potencias, la CIA y el Pentágono, evidentemente, en primer lugar. Estas informaciones almacenadas desde hace mucho tiempo y metódicamente puestas al día permitirán, si es necesario, intervenir eficaz y rápidamente en tal o cual parte del mundo»[71].

Los estudios geográficos sobre los diques del río Rojo en Vietnam, elaborados por antropólogos, geógrafos, ingenieros y topógrafos, facilitaron y definieron la política de guerra de Estados Unidos. Los continuos bombardeos tenían como objetivo anegar las poblaciones ribereñas y cortar las vías de comunicación fluvial. Las denuncias internacionales, en 1965, lograron frenarlos, aunque el gobierno de Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, harán oídos sordos en la ofensiva del año 1972.

Para América Latina, en 1964, el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos solicitará a la Oficina de Investigaciones de Operaciones Especiales de la American University el desarrollo de un plan donde se midan y detecten: «1) Las potencialidades de guerra interna: un medio para identificar, medir y prever el potencial de guerra interna; 2) estimación de los efectos de reacción: como medio para estimar la eficacia relativa de varias posiciones, prácticas y niveles de

acción de carácter militar, donde estas estuviesen envueltas y su resultado sobre una amplia gama de condiciones medioambientales; y 3) recolección de información y manipulación de sistemas: medios y procedimientos para una rápida recolección de información, su acumulación y recuperación de datos, acerca de las potencialidades de guerra interna y de efectos de la acción gubernamental, con consideraciones apropiadas acerca de las facilidades existentes y que puedan surgir en el futuro para su procesamiento y análisis». Esta estrategia, conocida como «Plan Camelot», será denunciada por intelectuales y académicos latinoamericanos en 1965, al recibir invitaciones a participar del proyecto[72].

La guerra contrainsurgente tendrá éxito en Colombia y Bolivia. Camilo Torres, sacerdote, sociólogo y militante del Ejército de Liberación Nacional, cae en combate el 15 de febrero de 1966 y Ernesto Che Guevara, el 9 de octubre de 1967, es fusilado a manos de las fuerzas armadas bolivianas. Ambos sucesos marcan un punto de inflexión en las estrategias foquistas. La guerra contrainsurgente da frutos a costa de centenares de muertos, tortura y represión. La Guerra de Vietnam, nuevamente, fue un referente:

> De hecho el Pentágono creó un arsenal nuevo completo en respuesta a la guerra de guerrillas en Vietnam. Este armamento tecnológico iba desde la durable y liviana radio para un hombre, hasta ataques de aire, mar y tierra dirigidos electrónicamente contra puestos enemigos. En resumen, Vietnam se convirtió en un conejillo de Indias para la nueva tecnología militar. Lo que se produjo fue un concepto conocido como «campo de batalla electrónico» del cual el senador conservador Barry Goldwater dijo: «Personalmente creo que hay posibilidades de que sea el más grande paso adelante en la guerra desde la pólvora»[73].

Una sombra de pesimismo se cierne sobre la vía insurreccional. Las fuerzas armadas, pertrechadas con el material tecnológico más avanzado, realizan una labor de exterminio de poblaciones campesinas y organizaciones guerrilleras. Un conjunto de aparatos de última generación en tecnología armamentística comienzan entonces a ser comunes en las operaciones militares. Por ejemplo: el uso de detectores olfactrónicos (el análisis mecánico del olor fue refinado por el Pentágono para localizar cuerpos humanos), los detectores infrarrojos (otro medio para ubicar a las fuerzas guerrilleras escondidas en la selva), detectores acústicos (micrófonos pequeños pero altamente dispersos en áreas determinadas podían distinguir ruidos humanos de ruidos normales de fondo), detectores sísmicos (aparatos que pueden notar la presión producida en el suelo por

una persona caminando), detectores magnéticos (aparatos generalmente llevados en avión que registran la presencia de una concentración no habitual en el campo, bosque o selva), radares de vigilancia (capaces de detectar objetivos en movimiento, incluyendo soldados a pie) y de aparatos para visión nocturna. Lo anterior puede verificarse en la excelente novela histórica de Carlos Montemayor: *Guerra en el Paraíso* (1997), que describe la guerra sucia de las fuerzas armadas mexicanas, en el Estado de Guerrero, contra la guerrilla de Lucio Cabañas.

La región padece golpes de Estado. Los gobiernos encabezados por las burguesías locales reformistas tratan de hacer frente a los primeros fracasos del desarrollismo. En Chile, la «Revolución en Libertad», eslogan con el cual gobierna la democracia-cristiana entre 1964 y 1970, busca neutralizar las alternativas socialistas que mira hacia Cuba. Los Estados Unidos avalan el proyecto. El deterioro institucional y el desgaste se acrecientan. Los movimientos de liberación nacional se redefinen.

Las alternativas al subdesarrollo se enmarcan en la crítica al desarrollo capitalista. La dicotomía, en términos políticos, se expresa en la contradicción subdesarrollo o revolución. Los cambios de fachada para modernizar política, social y económicamente la región no rompen las estructuras del atraso y dejan intacto el edificio de la dependencia industrial-tecnológica. Ahora se cuestiona el estilo de desarrollo capitalista transnacional. La salida, en términos económicos y sociales, se piensa bajo los principios de desarrollo socialista. El imperialismo se trasforma en el principal escollo. Las empresas e intereses norteamericanos serán considerados parte del proceso desnacionalizador que profundiza la dominación social, política y cultural, aumentando la brecha entre centros hegemónicos y periferias dependientes. El subdesarrollo se considera un fenómeno específico del desarrollo capitalista.

El 3 de octubre de 1968 las fuerzas armadas peruanas, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, asaltan el palacio Presidencial destituyendo a Fernando Belaunde Terry, oligarca conservador y empresario terrateniente. Ocho días más tarde, en Panamá, el 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional desconoce el triunfo fraudulento de Arnulfo Arias en las urnas. Una junta de coroneles asume el poder. Omar Torrijos destaca entre sus miembros. Ambos son gobiernos militares y se declaran nacionalistas, progresistas, respetuosos de los derechos humanos y las libertades políticas.

Es el comienzo del reformismo militar. Su origen: la crisis del desarrollismo.

La década de los setenta trae una sorpresa. El 4 de septiembre de 1970, se abre una nueva ventana en la historia de las luchas democráticas de América Latina. Apoyado por una coalición de partidos de izquierda, laicos, cristianos, marxistas, socialdemócratas e independientes, Salvador Allende, médico, adscrito al marxismo-socialista, es aupado a la presidencia de Chile. La vía chilena al socialismo comienza su andadura. Sus enunciados dejan claro el sentido democrático del proyecto. Institucionalidad, legalidad y libertad política. Sin restricciones a los derechos civiles, públicos y privados, y respetando el monopolio legítimo de las armas en poder de las fuerzas armadas, se define el proyecto. El camino no era insurreccional, sino adscrito a la lenta y continuada reforma del sistema político, buscando aunar voluntades para un proceso constituyente capaz de profundizar los cambios democráticos y socialistas, entre otros, la socialización de los medios de producción, bajo una economía productiva fundada en tres áreas: el área de propiedad social, el área mixta y el área de propiedad privada.

Tras la victoria, la burguesía chilena y Estados Unidos profundizan las acciones encubiertas, iniciadas con anterioridad al triunfo. Ahora, su objetivo es impedir a toda costa que Salvador Allende asuma la presidencia. Henry Kissinger, Secretario de Estado de Richard Nixon, esputa: «No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo».

Durante los mil días de gobierno popular, la derecha conspira, hasta conseguir su objetivo: romper la institucionalidad de las fuerzas armadas. En esos tres años del gobierno de la Unidad Popular se obtienen los mayores logros sociales, culturales y políticos que registra la historia de Chile. La juventud, la mujer de las clases populares, el pueblo mapuche y los campesinos se transforman en sujetos de su historia, son dueños de su futuro. Se suben sueldos y salarios, se emprenden obras de infraestructura, se profundiza la reforma agraria, se entregan viviendas sociales y se recupera la soberanía en el ámbito internacional, restableciendo relaciones con Cuba y abriendo otras en el campo socialista. La vía pacífica al socialismo es el camino para romper el capitalismo dependiente. El 11 de septiembre de 1973, el bombardeo al palacio presidencial pone el fin trágico a la experiencia chilena. En su lugar se aúpa una sangrienta

dictadura que asola Chile durante 17 años. La muerte, la tortura y la ignominia serán sus métodos de gobierno. Le seguirá el olvido y la traición. Los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad no serán juzgados.

En los años setenta, el golpe militar de Chile tiene su correlato en diferentes dictaduras militares o cívico-militares: Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador. Existen pocos gobiernos legitimados en las urnas, y su existencia no es símbolo de respeto a las reglas de la democracia representativa. En México, la guerra sucia impone su ley. La matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, de campesinos en la sierra de Guerrero, la persecución y asesinato de los militantes del Ejército de los Pobres, fundado en 1967 por el maestro de escuela Lucio Cabañas, muerto en combate en 1974, cuenta con el asesoramiento de los Estados Unidos, lo cual deja al descubierto la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La historia juega en contra de los proyectos democráticos. La caída de la Unidad Popular rompe muchas expectativas. La vía electoral no germina en tierra estéril, donde el imperialismo y las burguesías locales imponen la ley del golpe de Estado. Sin embargo, al concluir la década, en 1979, una subregión, considerada marginal, Centroamérica, apodada despectivamente por sus gobiernos despóticos como tierra de «repúblicas bananeras», emerge dando un nuevo impulso a las luchas democráticas. Nicaragua se levanta contra la tiranía de los Somoza. No se trata de un foco guerrillero, tampoco de una unidad de partidos de izquierda. El Frente Sandinista de Liberación Nacional promueve la integración de todas las fuerzas opositoras bajo un programa único. Nace el Movimiento Popular. Dicha estrategia culmina en el Movimiento del Pueblo Unido. Campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, intelectuales, artistas, independientes, pueblos originarios dan vida al proyecto nacional, democrático, antiimperialista, popular y de economía mixta. El 19 de julio de 1979, el Ejército Sandinista entra en Managua. El dictador huye a Paraguay junto a su amigo Stroessner, en el poder desde 1954. Mientras tanto, la burguesía nicaragüense se une a los planes imperialistas para desestabilizar y derrocar al nuevo gobierno popular.

La Revolución sandinista triunfa, entre otras causas, por la coyuntura internacional favorable. La presidencia del gobierno del Partido Demócrata

en Estados Unidos, James Carter, y su política exterior tendrán una enorme repercusión en los acontecimientos regionales. Durante su mandato, por primera vez, la Casa Blanca realiza una crítica a la violación de los derechos humanos cometidos por las dictaduras militares. La congelación de fondos a los países que no respeten los derechos humanos es una voz de alarma para las dictaduras. La primavera dura poco. La elección del republicano Ronald Reagan en 1981 sepulta sus principios. La revolución sandinista pasa a ser considerada una amenaza para los Estados Unidos. James Carter es acusado de procomunista por apoyar el triunfo de los sandinistas o entregar el canal de Panamá a otro gobierno hostil encabezado por el general Omar Torrijos. Ambos hechos son la punta de lanza para un cambio doctrinal en la Casa Blanca. Se impone el neoconservadurismo. Una visión apocalíptica se apodera de los análisis. En 1980, los estrategas norteamericanos, ligados a la plataforma republicana, redactan el documento, base para la política exterior hacia América Latina, conocido como *Documento de Santa Fe,* pieza clave de la política exterior de Estados Unidos en la década de los ochenta y noventa del siglo XX:

> La política exterior de Estados Unidos debe comenzar a contrarrestar (no actuar en contra de) la teología de la liberación tal como esta es utilizada en América Latina por los clérigos de la «teología de la liberación». […] Estados Unidos debe rechazar la suposición errónea de que puede fácilmente generar e imponer alternativas democráticas de estilo estadounidense a los gobiernos autoritarios, y también dejar de lado la creencia igualmente fuerte de que en tales situaciones el cambio es *per se* inevitable, deseable y de interés para Estados Unidos. Esta creencia ha inducido a la administración Carter a participar activamente en la caída de regímenes autoritarios no comunistas, a la vez que se mantenía pasivo frente a la expansión comunista. […] El de los derechos humanos, que es un concepto cultural y político relativo que la actual administración ha utilizado para intervenir en procura de cambios políticos en países de este hemisferio, afectando de manera adversa la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, debe ser abandonado y reemplazado por una política no intervencionista de realismo político y ético[74].

Se reanuda el apoyo a las dictaduras y financia, de forma abierta y con el aval del Congreso estadounidense, la lucha contrainsurgente para revertir procesos. Los dineros se destinan a comprar armas, formar ejércitos mercenarios, corromper a la clase política o enriquecer las cúpulas militares. Guatemala y El Salvador, países cuyos movimientos políticos de liberación nacional poseían una larga tradición de lucha democrática, serán

el objetivo de esta nueva estrategia bautizada con el nombre de Guerras de Baja Intensidad.

Centroamérica copa la atención en los años ochenta; solo la crisis de la deuda externa y las reformas neoliberales compiten en relevancia. En Guatemala, las fuerzas armadas bombardean con Napalm a los pueblos mayas y las comunidades indígenas. «Entre 1980 y 1984, 460 aldeas del altiplano occidental son aniquiladas en la estrategia de "tierra arrasada" y cobrará trágica fama el triángulo Ixil […]. Los testimonios son espantosos: incendios de templos con todos los aldeanos dentro, decapitación de niños ante la vista de sus padres; introducción de la cabeza de los niños en el vientre de las madres ejecutadas, ante la vista del padre y abuelos. Testigos refieren que adultos indígenas debieron presenciar, antes de su ejecución, un partido de fútbol jugado por los soldados con la cabeza de los infantes»[75]. Los propios victimarios relatan sus acciones de crucifixión y empalamiento: «[…] Cuando los sentaban en las estacas la gente gritaba, y al poco tiempo ya no se oía, ahí se quedaban sentados. Eso era parte del grupo de matadores a los que vi. Fueron esas cuatro personas, y cinco mujeres también, de las que hicieron uso los oficiales y las mataron sobre estacas […]. Yo estoy tranquilo al morir de un balazo, ya que de una vez se muere, pero sentarlo a uno en una estaca que llega hasta el estómago y le salga a uno, imagínese qué gritos […]. Yo me sentía mal, pero qué podía hacer […]. Como recibía órdenes…»[76].

El responsable de este genocidio cometido durante el llamado «quinquenio negro» 1978-1983 fue el dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983). Miembro de la Iglesia Evangelista del Verbo Divino, creó las patrullas de autodefensa civil y los grupos paramilitares cuya misión consistía en lograr el exterminio de la población campesina maya. En enero de 2013, Ríos Montt se sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. En abril, los jueces tumbaron la acusación. Sin embargo, tras un breve interregno, en mayo fue condenado a 80 años de prisión. La sentencia fue anulada el 20 de mayo de ese mismo año por la jueza Jazmín Barrios. Las fuerzas armadas guatemaltecas siguen incólumes; la impunidad sobre los mandos que participaron en la guerra sucia y el genocidio no se altera; hoy viven en la tranquilidad de no ser llevados a los tribunales.

Las guerras de baja intensidad son el arma para revertir los procesos de liberación nacional. Su modalidad no establece diferencias entre fuerzas beligerantes, ejércitos y población civil. Ya nadie queda fuera del conflicto. Así, los ataques de las fuerzas armadas se ceban con la población civil centroamericana. En El Salvador, entre 1980 y 1992, serán asesinadas 75.000 personas. En Guatemala, la cifra sube a 200.000. En Nicaragua, durante la etapa de acoso, desestabilización y derrota electoral del Frente Sandinista, entre 1984 y febrero de 1990, los muertos superan las 35.000 personas[77]. En Panamá, el 20 de diciembre de 1989, los marines invaden el país. Las fuerzas de despliegue rápido, acompañadas de 26.000 soldados, dejan un saldo de 3.500 ciudadanos asesinados. Mientras esto ocurre en las calles de la capital y los barrios populares la noche del 20 de diciembre, en otro lugar de la ciudad, con premeditación y nocturnidad, Guillermo Endara jura el cargo de presidente, en la base norteamericana de Fort Clayton.

Estados Unidos seguirá prestando su apoyo a las dictaduras militares, considerándolas gobiernos autoritarios defensores de la libertad de Occidente. En medio de esta ola involucionista, los años ochenta del siglo XX pasan a la historia de América Latina como «la década perdida». Los gobiernos democráticos casi desaparecen del mapa continental. La desigualdad se acrecienta y se destruyen derechos políticos, sociales, étnicos y culturales. En lo económico se imponen las políticas de austeridad. La deuda externa estrangula las economías sometiéndolas a draconianos planes de ajuste diseñados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1989 ve la luz el documento que orienta las políticas estadounidenses hacia el mundo. América Latina sufrirá en sus carnes el llamado *Consenso de Washington.* Su decálogo incluye: disciplina presupuestaria, reordenamiento del gasto público hacia el sector privado, reforma impositiva a la baja, liberalización financiera, desregulación de los mercados, apertura comercial, fin del proteccionismo, privatización, reforma laboral y protección de la propiedad privada. Venezuela es el primer país en ser afectado por los planes de ajuste. El segundo gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez acepta, en febrero de 1989, un paquete de medidas; a cambio recibirá un préstamo del FMI estimado de 4.500 millones de dólares. Debía liberalizar precios, subir el transporte público, el agua, el teléfono, la electricidad, el gas doméstico y la gasolina. Su aplicación se tradujo en una protesta social espontánea. A las

pocas horas, las ciudades más importantes fueron objeto de revueltas populares. El gobierno aplacó el descontento sacando a las fuerzas armadas a reprimir. El resultado, 3.500 personas asesinadas. La masacre pasa a la historia de Venezuela como «el Caracazo».

El neoliberalismo latinoamericano cosecha víctimas. El Caracazo fue premonitorio. Durante los años noventa, los gobiernos neoliberales se adueñan del espacio político y económico. Los planes de ajustes se complementan con reformas constitucionales para adecuar el sistema político a la economía de mercado. La pobreza extrema, la desigualdad social, la exclusión y la marginalidad son sus resultados.

El triunfo de la Revolución Sandinista había levantado esperanzas e ilusionado a la izquierda latinoamericana. Su derrota electoral, en las postrimerías del siglo XX, bloqueó el proyecto antiimperialista, democrático, popular, nacional y, sobre todo, anticapitalista. En sus maletas, una generación marcada por la guerra y la desesperanza. En 2007 el FSLN retorna al gobierno, pero ya no será el mismo. La revolución es traicionada y el partido dividido. Hoy el país vive sumido en un orden político donde el nepotismo y la represión son el sello de identidad de la dupla Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa como vicepresidenta.

Los grandes problemas que dieron lugar a las luchas de liberación nacional (la pobreza, la desigualdad social, el latifundismo, la corrupción institucional, la violencia estructural, la dependencia) no fueron resueltos. La crisis centroamericana se cierra en falso. Los procesos de negociación y paz no incluyeron la justicia social. El fin de la guerra ha sido un triunfo considerable, pero insuficiente. Hoy, la militarización de las sociedades pone en el tapete el derecho a la vida.

La caída del muro de Berlín hizo albergar esperanzas. La guerra nuclear se alejaba del horizonte. La disolución del Pacto de Varsovia se consideró el principio del fin de la Guerra Fría. Por otra parte, se pensó que la OTAN desaparecería del horizonte; vanas esperanzas. Se hizo más fuerte. En América Latina, las dictaduras militares resultaban incómodas a los ojos de un mundo que abrazaba la globalización. Su papel de guardianes del «mundo libre», representantes de «la lucha anticomunista» perdía adeptos. Mejor iniciar procesos de transición controlados por las fuerzas armadas, bajo el atento examen de Estados Unidos.

Durante décadas, la tarea despolitizante, la represión hacia el movimiento obrero, la desarticulación de los partidos de izquierda y el asesinato de los dirigentes políticos, sindicales y campesinos llevados a cabo por las fuerzas armadas facilitaron el terreno para una transición «indolora». En Paraguay, el general Alfredo Stroessner, dictador desde 1954, era derrocado en febrero de 1989 con la anuencia de Estados Unidos y la complicidad del general Andrés Rodriguez Pedotti, a la sazón consuegro de Stroessner. Como en la mayoría de los casos, no fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Vivirá exiliado en Brasil hasta su muerte en 2006. La actitud condescendiente hacia los dictadores es el sello de identidad de las transiciones. Es el pago exigido por los militares para dejar el poder político y regresar a sus cuarteles.

La ideología de la globalización aparece como la herramienta para modernizar los sistemas políticos. La euforia por el triunfo del capitalismo y el llamado «fin de la historia» requiere otra manera de gobernar. Se anuncian más políticas liberalizadoras. América Latina se convierte en laboratorio donde experimentar y mostrar las virtudes del neoliberalismo.

Estados Unidos recupera la política del buen vecino para construir democracias de baja intensidad. En el poder, gobiernos civiles neoliberales. Colombia resiste el embate de las transiciones democráticas. Solo un intento antes de la caída del muro. En 1986, las FARC y el ELN dan un paso adelante. El gobierno de Belisario Betancur toma el testigo; se abre un proceso de paz y negociación, tras décadas de violencia. La derecha, el ejército y los grupos paramilitares muestran su descontento y boicotean los acuerdos. Entre 1986 y 1990, son asesinados más de 4000 militantes de Unión Patriótica, formación política donde se congregaron exguerrilleros, marxistas-socialistas del Partido Comunista e independientes de izquierda. Hubo más de 500 cargos electos asesinados. Entre ellos, dos candidatos a presidente, ocho senadores, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes. En 1990, el gobierno de César Gaviria reanuda las acciones contrainsurgentes. Los Estados Unidos acuñan un concepto, narco-guerrilla, para unir narcotráfico y fuerzas insurgentes. Su objetivo persigue participar en las políticas de seguridad nacional colombianas. La DEA cobrará un protagonismo inusual. Con el gobierno de José Manuel Santos, se logrará un acuerdo histórico con las FARC en 2018, tras años de negociación en La Habana, Cuba. Es el fin de la guerra. Sin embargo, los obstáculos y la

negativa en referéndum, impulsando el NO, y el expresidente Álvaro Uribe, quien implementa el paramilitarismo, suponen un freno al proceso y le restan posibilidades de implementación. Trasformadas las FARC en partido político, sufren el mismo destino que su antecesor, el Polo Patriótico en 1986. Los grupos paramilitares siguen actuando y cobrándose las vidas de militantes, activistas, sindicalistas y campesinos. Desde la firma de los acuerdos, han sido asesinados 123 dirigentes.

Colombia se presenta como el gran laboratorio de las políticas de militarización de la sociedad y contrainsurgencia. Estados Unidos redefine su presencia. Ahora controla los consejos de seguridad nacional de la mayoría de los países latinoamericanos. La soberanía está secuestrada. En 1999, bajo la administración Bill Clinton, la militarización del poder para América Latina tomó un nombre específico: «Plan Colombia». Las líneas maestras: lucha contra el narcotráfico, inversiones trasnacionales, megaproyectos y política de seguridad estratégica. Bajo el paraguas de una planificación para inversiones productivas, la promoción de la defensa medioambiental, la búsqueda de la paz y la lucha contra la corrupción institucional, se esconde el verdadero objetivo: la posesión de las riquezas básicas y el fortalecimiento, modernización de las fuerzas armadas y de la policía, bajo la supervisión de Estados Unidos, actuando de forma integrada y sistemática en la lucha contra el narcotráfico y los «grupos alzados en armas». La DEA y el Pentágono, mediante los acuerdos bilaterales, asumen la dirección de las operaciones militares. El primer paquete consiste en un presupuesto de 600 millones de dólares para dos años con el fin de entrenar y equipar a dos nuevos batallones en la lucha contra el narcotráfico, incorporando 30 helicópteros Blackhawk y 33 Huey, además de actividades de inteligencia y operaciones especiales de contrainsurgencia. Hasta 2018, el Plan sigue su desarrollo. El Banco Mundial abre una línea de crédito, para el primer año, de 900 millones de dólares y la Unión Europea, cuyo interlocutor es España en los años del gobierno conservador de José María Aznar, recauda entre sus países miembros mil millones de dólares. Colombia se convierte, así, en el principal destinatario de ayuda norteamericana después de Egipto e Israel, y profundiza en su dependencia de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Tras el plan Colombia, se implementa, con iguales características, el Plan Puebla Panamá, abarcando el centro sur de México y toda Centroamérica. El

gobierno de Vicente Fox articula la militarización de la lucha contra el narcotráfico y facilita la incorporación de la DEA en el control de su política de seguridad. Los objetivos son idénticos: apropiación de las riquezas básicas, megaproyectos y lucha contra el narcotráfico. «Colombia parece ofrecer actualmente la mejor coartada para la aplicación de otras medidas más drásticas de control (ya no solo económicas ni meramente políticas, sino militares) que permitan un acceso directo de los Estados Unidos a los inmensos yacimientos de petróleo, gas carbón y arenas bituminosas de Venezuela y Colombia, a las reservas de la biodiversidad y agua de la vasta región del Amazonas, así como al control de los mercados sudamericanos y de sus corredores logísticos de acceso a la cuenca del Pacífico»[78].

En los últimos estertores de la Guerra Fría cae en 1986, en Haití, una de las dictaduras más sangrientas instaladas en el Caribe desde 1957. Padre e hijo, François Duvalier (Papá Doc) y baby Doc desde 1971, sembraron la muerte y el terror. En las primeras elecciones libres celebradas en 1991, accede a la presidencia el exsacerdote Bertrand Aristide. Vinculado a la teología de la liberación, su mandato será interrumpido por un golpe militar encabezado por el general Raoul Cédras, viejo colaborador del dictador. Aristide emprende viaje al exilio. Después de tres años de estancia en Venezuela y Estados Unidos, la administración Clinton y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acuerdan, en 1994, enviar una fuerza militar de 20.000 marines con la misión de reponer al presidente destituido. El nombre de la misión no deja dudas del nuevo momento histórico: «Restaurar la democracia».

Con el enemigo interno derrotado, el discurso se centró en hacer cumplir las políticas de «austeridad». Reducir el gasto público y apretarse el cinturón. Pero el estilo neoliberal ahogó las economías. Los resultados no fueron los previstos. Los problemas de marginación, pobreza y desigualdad se agudizaron, haciéndose crónicos. La corrupción político-económica vio aumentar sus niveles, impregnando todos los espacios de la vida social.

En Venezuela, un golpe de Estado fallido, en 1992, dio la voz de alarma al neoliberalismo. Carlos Andrés Pérez fue objeto, el 4 de febrero de 1992, de una insurrección militar. Un intento impulsado por jóvenes oficiales que reclamaban un cambio de rumbo y poner fin a las políticas de austeridad. El Caracazo (explosión social acaecida entre los días 27 y 28 de 1989, cuyo

resultado fue la utilización de las fuerzas armadas para reprimir a la población, causando más de un millar de muertos), la corrupción, la deuda externa y los planes de ajustes del FMI fueron los argumentos para alzarse en armas. Hugo Chávez, la cara visible del golpe, fue encarcelado y, en 1994, amnistiado. Allí comenzaba su andadura política, un peregrinar en el desierto. Exgolpista y militar, las suyas no eran buenas cartas de recomendación. En 1998 presentó su candidatura a la Presidencia contra los partidos que dominaban el escenario de Venezuela desde 1958, AD y COPEI. Su triunfo fue algo inesperado. Electo, impulsó las transformaciones democráticas más importantes del siglo XXI en América Latina. Desde ese año hasta su muerte el 5 de marzo de 2013, contó con el apoyo de su pueblo, siendo reelegido para el cargo en los procesos electorales más transparentes que recuerda la historia latinoamericana.

La pérdida de soberanía corrió paralela a la eliminación de las barreras arancelarias. Los tratados de libre comercio fueron el expediente para debilitar los Estados y las políticas nacionalistas. México abandona su tradicional política antiimperialista, junto a Chile; serán los dos ejemplos de reforma liberal triunfante. El gobierno del PRI, durante el mandato espurio de Salinas de Gortari, define su proyecto como *liberalismo social.* Corren tiempos de privatizaciones, venta de activos nacionales, evasión de capitales, lavado de dinero e inversiones extranjeras libres de impuestos. La brecha entre ricos y pobres crece.

En México, nacido del fraude, el PRI logra hacerse con la presidencia en 1988. Gobierna Salinas de Gortari. Su mayor éxito es la firma con Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio (ALCA). El 1 de enero de 1994 entra en funcionamiento. Todos los focos están en los discursos, los parabienes y las felicitaciones. Es un acuerdo de máximos. México deja de ser el vecino pobre. Sin embargo, ese mismo día, una insurrección popular hace tambalearse el discurso oficial. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpe en el escenario denunciando el carácter espurio del gobierno del PRI y reivindicando un proyecto constituyente democrático. Desde la Selva Lacandona, Chiapas, los pueblos originarios, oprimidos, pero no vencidos, redefinen la historia, la lucha contra el colonialismo interno y el neoliberalismo. Así lo deja entrever el comunicado al pueblo de México el EZLN:

> […] el nuevo espacio de relaciones políticas debe tener como base la justicia, la garantía de las condiciones de vida digna para todos los mexicanos: techo, tierra, trabajo, alimentación, educación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz… Un gobierno de transición democrática es un gobierno con un programa político de democratización de la vida del país. Un gobierno que se comprometa a abrir todos los espacios de participación política legal y pacífica para que las distintas fuerzas políticas, partidarias o no, puedan manifestarse, presentar sus propuestas de sociedad y competir, en igualdad de circunstancias, por el apoyo popular. Con un gobierno de transición, la participación política no se limitará al aspecto electoral. Porque existen, en nuestro país, realidades que no tienen figura legal para reconocer el derecho de existencia de las comunidades indígenas, como la creciente participación política de grupos no partidarios, como la necesidad de consultar a toda la sociedad decisiones que atañen a los intereses de la nación…[79].

La presencia del EZLN se convierte en un revulsivo para los movimientos sociales y políticos de la izquierda latinoamericana y mundial. Heterodoxo en el lenguaje, con una concepción de la democracia que incorpora las experiencias políticas de resistencia y lucha de los pueblos originarios, constituye un aporte a la construcción de alternativas populares. Es el ideario del neozapatismo: Democracia; Libertad y Justicia, «donde la libertad se refiere al carácter del cambio revolucionario. Se trata de un carácter que incorpora métodos diferentes, frentes diversos, formas variadas y distintos grados de compromiso y participación. Esto significa que todos los métodos tienen su lugar, que todos los frentes de lucha son necesarios, y que todos los grados de participación son importantes. Se trata de una concepción incluyente, antivanguardista y colectiva. La democracia se refiere al objetivo y al resultado de esa revolución. Se trata de lograr construir la antesala del mundo nuevo, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones, las distintas fuerzas políticas se "disputen" el apoyo de la mayoría de la sociedad. Mas no se trata de la conquista del poder o de la implantación (por vías pacíficas o violentas) de un nuevo sistema social; una revolución "impuesta", sin el aval de las mayorías, termina por volverse contra sí misma. Y la justicia trata de las características no ya de la revolución, sino de su resultado. El espacio resultante, las nuevas relaciones políticas, deberá cumplir con tres condiciones: la libertad, la democracia y la justicia. Estamos proponiendo, pues, una revolución que haga posible la revolución…»[80].

Por esta razón, entre otras, el EZLN fue atacado, buscando primero su exterminio. El clamor del pueblo mexicano, copando las avenidas, evitó la

tragedia. Pero en estos veinte años se le combate lateralmente, con planes de contrainsurgencia y hostigamiento en los territorios liberados, los Municipios Autónomos de Rebeldía Zapatista. El racismo y el colonialismo interno se han convertido en armas para aislar y minimizar su aporte al pensamiento emancipador latinoamericano. Hoy resiste.

Desde 1994, fecha del alzamiento del EZLN, hasta 2018, ha trascurrido casi un cuarto de siglo. El Estado mexicano ha entrado en un momento donde la narcopolítica controla el proceso de toma de decisiones. Los feminicidios, los asesinatos políticos de dirigentes medioambientalistas, sindicales, periodistas, han llevado a pensar en México como un narcoestado. En las últimas elecciones presidenciales, en las cuales se impuso el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, perdieron la vida en atentados 133 candidatos a cargos públicos. El crimen organizado, en el sexenio del PAN, bajo la presidencia de Felipe Calderón, ejecutó a 53.105 personas y en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto (2006-2012), a 54.993. Las cifran crecen junto a la criminalización del pensamiento.

La última década del siglo XX, sin dictaduras, los gobiernos constitucionales nacidos de las transiciones llevaron el sello de las reformas neoliberales. Ningún país se escapa, salvo Cuba. La personalidad de sus presidentes, provengan de la derecha o la socialdemocracia, se declararon defensores de la economía de mercado. Carlos Menem en Argentina (1989-1999), Fernando Henrique Cardoso en Brasil (1995-2000), Eduardo Frei Ruiz Tagle en Chile (1994-2000), Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), Gonzalo Sánchez de Losada y Hugo Banzer en Bolivia, Zedillo en México, Violeta Chamorro en Nicaragua, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti en Uruguay.

En Centroamérica, la paz firmada en El Salvador y Guatemala deja como legado, por primera vez en su historia, el traspaso de poder de presidente a presidente. Podrán cumplir sus mandatos sin sufrir un golpe de Estado. Axioma roto en Honduras en 2009, aunque los cargos electos, debemos subrayar, sean ocupados, como en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, por exmilitares o civiles comprometidos con la violación de los derechos humanos.

Ecuador pasará por un periodo de inestabilidad tras el gobierno de Sixto Duran (1992-1996), hasta el triunfo de Rafael Correa en 2007. Entre 1996 y

el año 2000 desfilan tres presidentes: Abdalá Bucaram (1996-1997), Fabián Alarcón (1997-1998) y Jamil Mahuad 1998-2000. Los conflictos maduran. Las voces de protesta se generalizan. Las políticas de ajuste, los planes de austeridad y las reformas laborales se ceban con las clases trabajadoras y los sectores medios. Se practica una política económica de exclusión social. La desnacionalización y las privatizaciones debilitan el Estado desarrollista construido en la posguerra. Las constituciones, muchas de ellas vigentes desde principios del siglo XX, se reforman para recibir el credo neoliberal. La adición de nuevos artículos *ad hoc* es la puerta de entrada para la venta de los recursos estratégicos, considerados, hasta ese instante, propiedad del Estado. Tras los cambios, se los puede privatizar o vender al capital extranjero. Bajo el pretexto de la «capitalización», la desnacionalización se extiende a los sectores estratégicos como energía, petróleo, selvas, bosques y recursos hídricos. Las empresas transnacionales desempeñan su papel. Los megaproyectos se popularizan y el descontento crece. El fin del siglo XX coincide con un estallido social cuestionador del neoliberalismo.

En Venezuela, no serán los partidos tradicionales quienes ganen las elecciones presidenciales en 1998. Un movimiento surgido en los extramuros de la política y liderado por Hugo Chávez Frías triunfa, contra todo pronóstico. El declive de los partidos políticos tradicionales, las frustraciones, la corrupción, el aumento de las desigualdades son, junto a las políticas neoliberales aplicadas durante una década, causas suficientes para votar abajo y a la izquierda. La llegada a la presidencia de Hugo Chávez conlleva el fin de la Cuarta República, época donde gobernaron desde 1958 dos partidos, el socialcristiano COPEI y el socialdemócrata AD. Los cambios y las reformas iniciadas por el gobierno de Chávez se concretan en la refundación de la nación y el Estado, dando origen a la V República. Una nueva Constitución, aprobada en referéndum en 1999, legitima el proyecto bajo el principio de la democracia participativa. Desde 1999 hasta las últimas elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018, el proyecto bolivariano ha pasado por varias etapas: un golpe de Estado fallido en abril de 2002, un referéndum revocatorio, perdido por la oposición, un referéndum para modificar la Constitución, perdido por Hugo Chávez, y la muerte del propio presidente Hugo Chávez en marzo de 2013, produciéndose el relevo en la figura de Nicolás Maduro. Una revolución en la revolución, dando un nuevo impulso a las misiones de participación

popular, las políticas sociales de vivienda, educación pública gratuita, programas de infraestructura e investigación. La fuerza del PSUV fundado en 2007 es el punto de inflexión que facilita la organización y da un plus de articulación política al proyecto de socialismo democrático iniciado en 1998. El proceso desestabilizador ha ido en aumento, desde el boicot, el desabastecimiento, el bloqueo, la guerra informativa, el mercado negro. La escalada de violencia ha tenido como punto álgido el atentado terrorista al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, organizado por la oposición, con el apoyo del gobierno de Colombia, Estados Unidos y los sectores más reaccionarios de la derecha venezolana. Un atentado coincidente con la declaración del gobierno de las reformas económicas tendientes a enfrentar justamente tales acciones desestabilizadoras.

En Bolivia, antes del triunfo de Evo Morales en 2005, el poder y la legitimidad de los gobiernos neoliberales se resquebraja. Hugo Banzer, el exdictador y presidente entre 1997-2001, ve cómo la sociedad civil se manifiesta contra la privatización del suministro de agua, entregada a la empresa multinacional Beche. Durante cuatro meses, entre enero y abril de 2000, las movilizaciones populares en Cochabamba suscitaron la declaración del Estado de Sitio. La llamada Guerra del agua fue un punto de inflexión. La lucha de las organizaciones sociales populares revirtieron la privatización e impidieron una subida del 50 por 100 en las tarifas. En medio de la crisis, un diputado, Evo Morales, único parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS), cobra protagonismo al lado de la organización sindical de cocaleros. Expulsado del Congreso en una orquestada pantomima parlamentaria, fue elegido presidente en 2005, reelecto en 2009 y en 2014. Hoy Bolivia es un Estado Plurinacional, su Constitución se organiza bajo los principios de soberanía, dignidad y buen vivir. Se han nacionalizado las grandes empresas de hidrocarburos e hidroeléctricas, profundizado la reforma agraria y legislado en materia de jubilación, desempleo y derechos laborales. Por primera vez en la historia de Bolivia un representante del pueblo Aymara ocupa la máxima magistratura. Sus éxitos le valen el reconocimiento internacional y también el rechazo que le profesa la oligarquía boliviana que, desplazada del poder político, ha promovido golpes de Estado y procesos desestabilizadores, dando muestras de su intolerancia al advenimiento de un gobierno democrático.

En Argentina el sueño neoliberal es una pesadilla. Tras el interregno de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy retoma el poder el empresario Mauricio Macri. Entre los años 2001 y 2004, pasarán por la Casa Rosada seis presidentes. Con Fernando de la Rua, tras aplicar la ley de restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y de ahorro, conocida como «Corralito», la ciudadanía sale a la calle y ataca las sedes bancarias. Bajo presión, declara estado de sitio. Los militares intervienen sin contemplación. Se producen 27 muertos y más de 2.000 heridos. Renuncia en diciembre de 2001. Es el año en el que aparecen los «piqueteros», organización heterogénea nacida de la unión de los movimientos de barrio, parados y trabajadores precarios, que supone un punto de inflexión para el movimiento popular de la década. Hasta la elección de Néstor Kirchner, una acefalia política caracterizada por la renuncia de tres presidentes, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Caamaño, dará cuenta del descalabro neoliberal. Será Eduardo Duhalde, elegido por la asamblea, quien convoque las elecciones que dan el triunfo al peronista Néstor Kirchner, cuyo mandato se extiende hasta 2007, dando un giro nacionalista y antiimperialista. Su mayor éxito lo protagoniza en materia de derechos humanos, al sentar en el banquillo de los acusados a todos los militares implicados en la guerra sucia. Le sucede en el cargo Cristina Fernández, su esposa, quien opta por dar continuidad a las políticas nacionalistas y populares.

En Ecuador, el 9 de enero de 2000, el gobierno de Jamil Mahuad anuncia la dolarización del país. El Sucre, moneda nacional, pasará a mejor vida. La pérdida de soberanía monetaria trae mayor pobreza, exclusión y desigualdad social. Son los comienzos de la inmigración masiva. Los movimientos de pueblos originarios, CONAIE y Pachakutik, ganan protagonismo. A partir de ese momento desempeñarán un papel destacado en el proceso político y social. Sus acciones se miden por la capacidad de quitar y mantener presidentes. Quien no cuente con su respaldo enfrenta un problema. En este contexto, al igual que sucediera en Venezuela y Bolivia, se consolida una organización política que recoge el descontento en medio de una profunda crisis política y económica. Rafael Correa lidera una nueva alianza en la cual participan el Partido Socialista, el Movimiento Popular Democrático, Pachakutik, Partido Roldosista, Izquierda Democrática y

Partido Comunista (Alianza PAIS). Gana las elecciones presidenciales de 2006 en segunda vuelta; en 2008 convoca un proceso constituyente, siendo reelecto en 2009. El proyecto se define bajo el principio de ciudadanía activa y «Buen Vivir». La Constitución de 2008 abre las puertas al desarrollo armonioso con la naturaleza para crear un sistema de inclusión y equidad con respeto a la biodiversidad. Es la «Revolución Ciudadana». Gobierna hasta 2017. El sucesor, Lenin Moreno (2018-), a la sazón vicepresidente del gobierno de Correa, emprende una política de desarticulación de la Revolución Ciudadana, buscando la inhabilitación de Rafael Correa. La involución está en marcha.

Una nueva realidad emergente hace pensar en un giro a la izquierda a principios del siglo XXI. El triunfo electoral de coaliciones o partidos políticos cuya vida se desarrolló en la clandestinidad y sus miembros sufrieron las consecuencias de la guerra sucia, la represión, la cárcel, la tortura o el exilio, son aupados a la condición de presidentes. En Brasil, un obrero metalúrgico, fogueado en la lucha sindical de los años setenta, ligado a la teología de la liberación, Luiz Inácio Lula da Silva, gana las elecciones presidenciales en 2003. Su gobierno, lleno de contradicciones y enfrentamientos con el Movimiento Campesino de los Sin Tierra, tiene continuidad en 2011. Tras ser electo en dos ocasiones, cede el testigo a su compañera de partido, Dilma Rousseff, quien sufrirá un golpe de Estado, bajo la fórmula de un juicio político amañado, en 2016. Su impulsor, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, se encuentra en la cárcel condenado a 15 años de prisión por corrupción, lavado de activos y evasión de impuestos. La derecha le agradece los servicios prestados. Michel Temer, su vicepresidente, miembro del Partido Liberal, asume la presidencia. La violencia política y el asesinato de dirigentes populares son el sello de su mandato. Hoy Jair Bolsonaro parece continuar en la misma dirección.

> En el año pasado hubo en Brasil 63 mil 880 asesinatos, que en léxico de los informes oficiales aparecen como «muertes violentas». Es decir, 175 asesinatos cada día. Más de siete por hora. Hubo más asesinatos en Brasil que muertos en la Guerra de Siria el año pasado. […] Hubo al menos 60 mil 18 estupros oficialmente denunciados, lo que significa 164 al día […]. Y se registraron 606 mil casos de violencia doméstica. Vale recordar que esos datos se refieren exclusivamente a las denuncias […], especialistas indican que el número real sería al menos el doble, o sea, escalofriantes 120 mil estupros, 328 al día, 14 por hora. El pasado febrero (2018)

> Michel Temer intentó lo que él mismo clasificó de “golpe maestro”: para distraer a la opinión pública de Río, muy justamente alarmada por el creciente aumento de la violencia frente a la inoperancia absoluta del gobierno local, e intentar un jirón de luz para su inexistente popularidad (su figura es rechazada por el 97 por 100 de los brasileños) decretó una intervención militar en el Estado […]. El golpe institucional llevado a cabo por un Congreso plagado de corruptos, por medios hegemónicos de comunicación y por una Corte Suprema cobarde y omisa, por arbitrariedades inadmisibles de tribunales de primera instancia, por jueces que no juzgan, acusan y condenan, resulta en la retomada del crecimiento de la mortalidad infantil, el retorno de enfermedades que habían sido extirpadas, la vuelta de entre cinco y ocho millones de brasileños a la situación de miseria y hambre. Se traduce en la existencia de 27 millones de brasileños desempleados […]. Como cierre de oro de semejante espectáculo, Lula sigue preso sin prueba alguna, trofeo de oro de los golpistas y del golpe […], mientras el futuro candidato a la presidencia de la derecha, Jair Bolsonaro –espeta–: «Expandiré la educación a la distancia para combatir el marxismo»[81].

En Uruguay, la izquierda obtiene un triunfo destacable. Tras doscientos años de hegemonía bipartidista, una coalición, el Frente Amplio, fundado en 1971, donde confluyen el Partido Comunista, Socialista, el Movimiento de Participación Popular, la Alianza Progresista o la Asamblea de Uruguay, logra imponerse sobre el Partido Blanco y Colorado. En 2005, el Frente Amplio, perseguido por décadas, enarbola la candidatura de Tabaré Vázquez, alcalde de Montevideo. Su buena gestión en el ayuntamiento le da la victoria en las presidenciales. En 2010, el Frente Amplio volverá a triunfar, presentando a José Mujica, exmilitante del grupo guerrillero Tupamaros. Previamente, había fungido como ministro y senador de la república. Detenido por vez primera en 1972, sufrió cárcel de aislamiento durante once años, seis meses y siete días, hasta 1985. Fue considerado un rehén por las fuerzas armadas, señalando que cualquier acción de Tupamaros a los militares traería consigo su fusilamiento inmediato. Su comportamiento ético y su quehacer político le aúpan como uno de los grandes estadistas de América Latina. Tras su mandato, desde 2015, le sucede en el cargo, nuevamente, Tabaré Vázquez en 2015.

El mapa de América Latina ya no es monocolor. En Costa Rica el bipartidismo entró en crisis en 2014. Un movimiento liderado por Luis Guillermo Solís Rivera, profesor de Historia y Ciencia Política, rompe con la dupla del partido Liberación Nacional y el partido Unidad Social Cristiana. Su triunfo lo aúpa a la presidencia encabezando la lista del Partido Acción Ciudadana; hoy entrega la banda presidencial a un representante de su organización, Carlos Alvarado Quesada.

El Caribe se transforma, sea el anglófono, el español o el francés. Gobiernos nacionalistas o progresistas se asoman y cambian la correlación de fuerzas. El tiempo se acelera. En 2010, treinta y tres presidentes y jefes de Gobierno crean un nuevo espacio de integración, el mayor de América Latina, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, proyecto que deja fuera por primera vez a Estados Unidos y Canadá. Los avances de integración exclusivamente latinoamericana se disparan en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. MERCOSUR, UNASUR, ALBA, Telesur o Banco del SUR. Son una respuesta colectiva al neoliberalismo, el TIAR, la OEA y los Tratados de Libre Comercio. Hoy son atacadas y se busca su destrucción. La derecha latinoamericana se rearma.

Así, coexisten los gobiernos en América Latina neoliberales, progresistas, nacionalistas, conservadores, populistas, de izquierdas y anticapitalistas. Sin embargo, algo permanece con fuerzas renovadas: el poder de las oligarquías, las burguesías gerenciales, las transnacionales y el imperialismo norteamericano. Todos juntos redefinen la estrategia para enfrentar nuevos retos conspirativos. Su mano está presente en los golpes de Estado de Honduras, en Paraguay, destituyendo al presidente Fernando Lugo, en Brasil, contra Dilma Rousseff, o alentando procesos desestabilizadores en Bolivia, Ecuador y Venezuela. También en los megaproyectos, traficando con alimentos transgénicos y queriendo mantener el control militar hemisférico del continente, instalando bases militares desde México a Chile.

La historia de América Latina sigue abierta, su futuro no está diseñado. La acción emancipadora siempre reaparece. Salvador Allende lo expresó en su discurso del 11 de septiembre de 1973, mientras el palacio de gobierno era bombardeado:

> La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.

[1] Para un análisis de la cultura latinoamericana, véase P. Henríquez Ureña, *Historia de la cultura en la América hispánica,* La Habana, Ediciones Gente Nueva, 1979; *La Utopía de América,* Caracas, Ayacucho, 1989; Á. Rama, *La crítica de la cultura en América Latina,* Caracas, Ayacucho, 1985.

[2] P. I. Taibo II, *Patria,* vol. 1, México, Planeta, 2017, p. 10.

[3] R. Horsman, *La raza y el destino manifiesto. Orígenes del anglosajonismo racial norteamericano,* México, FCE, 1985, p. 126 (cursivas del autor).

[4] A. Tocqueville, *La democracia en América,* vol. I, Madrid, Madrid, Alianza, 1980, pp. 16 y ss.

[5] *Ibid.,* pp. 305 y ss.

[6] R. Horsman, *La raza y el destino manifiesto, op. cit.,* p. 124.

[7] J. E. Garcés, *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles,* Madrid, Siglo XXI de España, 1.ª ed., 1996, pp. 319-320.

[8] F. Merk, *La doctrina Monroe y el expansionismo norteamericano,* Buenos Aires, Paidós, 1966, p. 11.

[9] J. Zoraida Vázquez, «Los primeros tropiezos», en *Historia General de México,* vol. 3, México, El Colegio de México, 2.ª ed., 1977, p. 77.

[10] G. Selser, *Nicaragua de Walker a Somoza,* México, Mex-Sur, 1984, p. 16.

[11] C. Collado Herrera, *Nicaragua,* México, Alianza Mexicana, 1988, p. 81.

[12] Véase J. Garcés, *Soberanos e intervenidos, op. cit.* En cartas confidenciales y correspondencia con Sucre, aparece en Bolívar la necesidad de contar con Gran Bretaña para lograr la tan ansiada unidad, evitando así la desarticulación del continente, pp. 323 y ss. Epígrafe: «La frustración de Bolívar».

[13] *Ibid.,* p. 325.

[14] J. Martí, *Nuestra América,* en *Antología Mínima,* t. I, La Habana, 1972, p. 238.

[15] Cit. por C. Marichal, *Historia de la deuda externa en América Latina,* Madrid, Alianza, 1988, p. 24.

[16] *Ibid.,* pp. 29-30.

[17] L. Vitale, *Los principales periodos de la historia de América Latina. Contribución al debate del Bicentenario,* Santiago de Chile, LOM, 2009, p. 47.

[18] E. Williams, *Esclavitud y capitalismo,* La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 20.

[19] C. L. R. James, *Los jacobinos negros, Toussaint L'Ouverture y la revolución de Haití,* Madrid, Turner, 2003, p. 14.

[20] Véase G. Selser, *Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina. 1899-1945,* t. III, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2009, p. 59.

[21] Universidad de Panamá, *Constituciones de la república,* Panamá, 1970, p. 45.

[22] G. Pierre-Charles, *El pensamiento sociopolítico moderno en el Caribe,* México, FCE, 1985, p. 15.

[23] M. Ugarte, *La nación latinoamericana,* Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 10.

[24] M. Benedetti, «Temas y problemas», en C. Fernández Moreno (coord.), *América Latina en su literatura,* México, Siglo XXI, 10.ª ed., 1986.

[25] J. Martí, *Nuestra América,* Obras Completas, vol. VI, La Habana, Editorial de Ciencias sociales, 1975, p. 20.

[26] *Ibid.,* p. 18.

[27] E. Morison, H. Steele Commager y W. Leuchtenburg, *Breve historia de los Estados Unidos, op. cit.,* p. 603.

[28] *Ibid.,* p. 594.

[29] G. Selser, *El rapto de Panamá,* Buenos Aires, Granica Editor, 2.ª ed., 1975, p. 150.

[30] *Ibid.,* p. 192. Véase E. Jaramillo-Levi (comp.), *Una explosión en América: el canal de Panamá,* México, Siglo XXI, 1976.

[31] A. Cueva, *El desarrollo del capitalismo en América Latina,* México, Siglo XXI, 1.ª ed., 1977, p. 130.

[32] J. L. Romero y L. A. Romero (comps.), *Pensamiento Conservador (1815-1898),* «Fragmento del Manifiesto del Partido Conservador chileno a la nación», Caracas, Ayacucho, 1978, pp. 184-185.

[33] Véase J. Hesie, *El Periodo Parlamentario. 1861-1925,* Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1982, pp. 198 y ss.

[34] J. del Pozo, *Historia de América Latina y del Caribe. Desde la independencia hasta hoy,* Santiago de Chile, LOM, 2.ª ed., 2009, p. 74.

[35] M. Carmagnani, *Estado y sociedad en América Latina: 1850-1930,* Barcelona, Crítica, 1984, p. 98.

[36] F. Sarmiento, «Argiropolis o la capital de los Estados confederados del Río de la Plata», en L. Zea (comp.), *Pensamiento positivista latinoamericano,* vol. I, Editorial Ayacucho. Caracas, 1980, p. 71.

[37] D. Balmori, V. Stuart y W. Miles, *Las alianzas de familia y la formación del país en América Latina,* FCE, México, 1990, pp. 66-67.

[38] E. Torres Rivas, «Historia del proceso político centroamericano», en *Centroamérica Hoy,* México, Siglo XXI, 1976, pp. 74-75.

[39] O. Bayer, *La Patagonia Rebelde,* vol. II, Buenos Aires, Planeta, p. 30.

[40] H. Ramírez Necochea, *Historia del movimiento obrero en Chile,* Santiago de Chile, Austral, 1955, p. 108.

[41] H. Thomas, *Cuba,* Barcelona, Debate, 2004, p. 430.

[42] A. Gilly, *La revolución Interrumpida,* México, ERA, 2.ª ed. aumentada y corregida, 2007, p. 324.

[43] Cit. por J. Arias Gómez, *Farabundo Marti,* San José (Costa Rica), Editorial Educa, 1972, p. 45.

[44] VVAA, *Historia General de la Iglesia en América Latina,* vol. VI, Salamanca, Sígueme, 1985, pp. 360-361.

[45] «La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica», en *La Reforma Universitaria,* Caracas, Ayacucho, 1979, pp. 3-7.

[46] Véase J. Breilh Paz y Miño y F. Herrera, *El proceso juliano. Pensamiento, utopía y militares solidarios,* Quito, Corporación Editora Nacional, 2011.

[47] J. del Pozo, *Historia de América Latina y del Caribe, op. cit.,* p. 147.

[48] A. Lavrin, «Ciudadanía y acción política femenina en Chile y Perú hasta mediados del siglo XX», en I. Morat (dir.), *Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI,* vol. IV, Barcelona, Cátedra, 2.ª ed., 2008, p. 580.

[49] Cit. por A. Frega, «Redentores, amos y tutores. La concepción dominante de la mujer en el Uruguay a comienzos del siglo XX», en VVAA, *Tiempo y espacio. Las luchas sociales de las mujeres latinoamericanas,* Buenos Aires, CLACSO, 1993, pp. 277 y ss.

[50] G. Salazar y J. Pinto Julio, *Historia Contemporánea de Chile. Vol. IV. Hombría y Feminidad,* Santiago de Chile, LOM, 2002, pp. 110 y ss.

[51] *Ibid.,* p. 112. Las cursivas pertenecen a los autores.

[52] M. S. Di Liscia, «Mujeres, familia y salud en Argentina y Chile», en I. Morat (dir.), *Historia de las mujeres en España y América Latina,* vol. III, *op. cit.,* p. 765.

[53] *Ibid.,* p. 288.

[54] X. Valdés, *La posición de la mujer en la hacienda,* Santiago de Chile, Centro de Estudios de la Mujer, 1988, pp. 47 y ss.

[55] T. Dos Santos, *Socialismo o fascismo. El nuevo carácter de la dependencia y el dilema latinoamericano,* Buenos Aires, Periferia, 1972, p. 22.

[56] *Ibid.,* p. 25.

[57] C. Furtado, *La hegemonía de los USA y América Latina,* Madrid, *Cuadernos para el Diálogo,* 1971, p. 130.

[58] J. del Pozo, *Historia de América Latina, op. cit.,* p. 156.

[59] M. Sánchez, «Estructura social y política de vivienda en el área metropolitana de Caracas», en M. Castells (comp.), *Estructura de clases y política urbana en América Latina,* Buenos Aires, SIAP, 1974, p. 145.

[60] J. L. Romero, *Latinoamérica. Las ciudades y las ideas,* México, Siglo XXI, 5.ª ed., 2001, p. 331.

[61] P. Cunill, *Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano,* 1930-1990, México, FCE-El Colegio de México, 1995, p. 129.

[62] F. Weffort, «El populismo en la política brasileña», en VVAA, *Brasil Hoy,* México, Siglo XXI, 4.ª ed., 1975, p. 62.

[63] F. H. Cardoso, «Hegemonía burguesa e independencia económica: raíces estructurales de la crisis política brasileña», en VVAA, *Brasil Hoy, op. cit.,* p. 117.

[64] A. Pinto, «Desarrollo económico y relaciones sociales», en *Chile Hoy,* México, Siglo XXI, 1974, p. 24.

[65] J. Tapia Valdés, *El terrorismo de Estado. La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur,* Caracas, Nueva Sociedad, 1980, p. 57.

[66] J. Dreirer, *La Organización de Estados Americanos,* Buenos Aires, INDICE, 1963, p. 169.

[67] R. Zavaleta Mercado, *Clases sociales y conocimiento,* La Paz, Los amigos del Libro, 1988, p. 46.

[68] «Primera Declaración de La Habana», en *Cinco Documentos,* La Habana, Editorial de Ciencias Sociales-Instituto Cubano del Libro, 1971, pp. 123-124.

[69] F. Stonor Saunders, *La CIA y la guerra fría cultural,* Barcelona, Debate, 2001, p. 65.

[70] V. Bambirra, *Diez años de Insurrección en América Latina,* Santiago de Chile, Prensa Latina, 1970, p. 30.

[71] Y. Lacoste, «¿Por qué Hérodote? Crisis de la geografía y geografía de la crisis», en N. Ortega (comp.), *Geografías, ideologías, estrategias espaciales,* Madrid, Dédalo, 1977, p. 47.

[72] I. Balbontín Arteaga, «Las posibles consecuencias de un pensamiento belicista con apariencia científica: el Plan Camelot», en VVAA, *Subversión y Contrasubversión,* Santiago de Chile, CISEC, 1978, p. 78.

[73] R. Wingerter, «El fracaso de la violencia en Vietnam», en VVAA, *Subversión y Contrasubversión, op. cit.,* p. 29.

[74] G. Selser, *El Documento de Santa Fe, Reagan y los derechos humanos,* México, Alpa-Corral, 1988, p. 50.

[75] J. Solares, «Guatemala: etnicidad y democracia en tierra arrasada», en P. González Casanova y M. Roitman (coords.), *Democracia y Estado multiétnico en América Latina,* México, La Jornada-UNAM, 1996, p. 182.

[76] P. García, *El genocidio de Guatemala a la luz de la sociología militar,* Madrid, Sepha, 2005, p. 169.

[77] Véase L. Suárez Salazar, *Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998),* La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2006.

[78] A. Barreda, «Los objetivos del Plan Puebla Panamá», en VVAA, *Economía Política del Plan Puebla Panamá,* México, ÍTACA, 2002, p. 39.

[79] «Comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al pueblo de México que participa en la Primera sesión de la Convención Nacional democrática», en *La Jornada,* 31 de julio de 1994, p. 17.

[80] EZLN, *La guerra por la palabra. A siete años de la lucha zapatista,* México, Rizoma, 2001, pp. 48-49.

[81] E. Nepomuceno, «Retratos de un país destrozado», en *La Jornada,* 12 de agosto de 2018.

II. GUERRA, FUERZAS ARMADAS Y GOLPES DE ESTADO

> Voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe.
>
> Leónidas Rafael Trujillo. Dictador República Dominicana.

> En la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país.
>
> Jorge Rafael Videla. Dictador argentino.

Las guerras parecen acompañar a la historia de la humanidad. Conocemos sus consecuencias. A medida que los sistemas sociales se hacen complejos, los dispositivos de seguridad y los mecanismos de control social se perfeccionan. La capacidad de fuego, factor que cambió su curso, modificó las estrategias de combate. Algo similar ocurre con el contingente militar. Ejércitos profesionales, el fin del llamado a filas obligatorio, conllevan otra manera de entender las guerras, sin dejar de lado su capacidad destructiva.

La sofisticación del armamento en la era del capitalismo digital trae consigo cambios en el escenario de los conflictos. Las batallas donde priman los ejércitos de a pie o caballo, culminando en un cuerpo a cuerpo y entrando a bayoneta calada, forman parte de la historia militar. Para el recuerdo: la batalla de Leipzig (1813) entre los ejércitos de Napoleón y el Káiser, Waterloo (1815), derrota final de Napoleón, Verdún (1916), durante la Primera Guerra Mundial, o Stalingrado (1942-1943), en la Segunda Guerra Mundial. Otro tanto ocurre con los desastres navales: Salamina (480 a.C.), entre griegos y persas; Lepanto (1571), enfrentando al Imperio otomano y la Liga Santa; Trafalgar (1805), con Gran Bretaña contra España y Francia. En la Gran Guerra, Jutlandia, entre la marina del Káiser y la armada británica (1916), y, en la Segunda Guerra Mundial, la batalla del Golfo de Leyte (1944) entre Estados Unidos y Japón. Sin mencionar las batallas en las guerras de independencia o civiles. En Estados Unidos, Nashville (1864), en España la batalla del Ebro (1938). En América Latina las guerras han dejado huella: la batalla de Puebla (1862), en medio de la intervención francesa en México; la Guerra del Pacífico, enfrentando a Chile, Perú y Bolivia (1879-1883); la Guerra del Acre (1899-1903) entre

Bolivia y Brasil; y la más cruenta: la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935).

El potencial de las armas de destrucción masiva, los servicios de inteligencia y contraespionaje han reinventado las guerras en el siglo XXI. Sin embargo, hay un factor que sigue estando presente: la destrucción y aniquilamiento del enemigo. La Guerra de los Balcanes, la guerra que sostiene Israel contra el pueblo palestino, las guerras étnicas en África, son ejemplos. En América Latina, la llamada guerra contra el narcotráfico, antisubversiva, anticomunista, guerra sucia, comparten dicho objetivo: eliminar al enemigo.

Guerras frías, absolutas, totales, de baja intensidad, mundiales, étnicas, nucleares, religiosas, civiles, psicológicas, imperialistas. ¿Tantos calificativos para un mismo conflicto?

Un oficial prusiano, tras la derrota infligida por Napoleón y sus ejércitos en la batalla de Jena-Auerstadt (1806) al káiser Federico Guillermo III, buscó una explicación más allá de lo estrictamente militar. ¿Qué determina la guerra? ¿Cuáles son sus fines? ¿Dónde reside la fuerza del enemigo? ¿Qué lleva a las tropas a obedecer a sus mandos? ¿En qué consiste el genio militar? Su obra pasará a la historia. Carl von Clausewitz redacta un conjunto de artículos y textos sueltos, recopilados por su viuda. Será ella quien le dé forma y edite en 1832. Su título: *De la guerra.*

Su innovación, descubrir la relación unívoca existente entre dos variables hasta ese momento consideradas independientes: la política y la guerra. Comprendió que la fuerza de los ejércitos napoleónicos residía tanto en el genio militar del general como en su poder político. Sus tropas luchaban por Francia. Clausewitz no dejó de señalar que todas las guerras son políticas. No hay guerras militares, hay campañas militares, respaldadas por el orden político, o patrocinadas por el Estado-nación. La victoria estará más cerca si existe la unidad de sentimientos nacionales como moral de combate. El esfuerzo, el sacrificio y la entrega de los combatientes deben contener el espíritu de una nación, de un pueblo. Trasladar al campo de batalla los ideales y principios por los cuales se lucha hasta la muerte, las ansias de libertad e independencia. El Romanticismo caló por completo en su análisis. Nación y guerra. Estado y política. Las academias de oficiales debían preocuparse por fortalecer los lazos de identidad, incorporando a sus

enseñanzas la historia política del Estado-nación. En la guerra real, lo político decide el escenario:

> La guerra de una comunidad –pueblos enteros–, y concretamente de pueblos *instruidos,* emana siempre de una situación política y solo es provocada por un motivo político. Es, pues, un acto político. Si solo fuera una manifestación perfecta inalterada, una manifestación absoluta de violencia, como tendríamos que deducir de su mero concepto, desde el momento en que es provocada por la política ocuparía su lugar como algo completamente independiente de ella, la desplazaría y solo seguiría sus propias leyes, lo mismo que una mina, una vez descargada, ya no sigue más orientación y dirección que la que le dieron los dispositivos preparatorios. Hasta ahora así se imaginaba la cuestión, siempre que una falta de armonía entre la política y la dirección de la guerra ha conducido a distinciones teóricas de este tipo. Solo que no es así, y esta idea es radicalmente falsa[1].

Hasta hoy, su obra se convirtió en el manual por excelencia de las academias militares. Su influencia quedó de manifiesto en las guerras franco-prusianas (1866-1870). El general Helmuth von Moltke, su exalumno, dirigió al ejército prusiano y sus aliados a la victoria final, con Bismark y el káiser a la cabeza. Fue el final del ejército de Napoleón III. El resultado: la unidad política de Alemania y la emergencia del Imperio.

Para Clausewitz: «*La guerra es, pues, un acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra voluntad.* La violencia se arma con los inventos de las artes y las ciencias para salir al paso de la violencia. La acompañan limitaciones imperceptibles apenas dignas de mención, que se ponen a sí mismas bajo el nombre de costumbre internacional, sin debilitar sustancialmente su fuerza. La violencia, es decir, la violencia física (porque no hay una violencia moral fuera de los conceptos del Estado y la Ley), es, pues, el medio de imponer nuestra voluntad al enemigo. Para alcanzar ese fin con seguridad, tenemos que dejar al enemigo indefenso, y este es, en su concepto, el verdadero objetivo de la acción bélica. Representa al fin y lo desplaza, en cierto modo, como algo que no pertenece a la guerra misma […]. Así, pues, repetimos nuestra frase: la guerra es un acto de violencia, y no hay límites en la aplicación de la misma…»[2].

La intención de infligir daño y destruir al enemigo define la guerra. Francisco de Goya ha sido uno de los principales cronistas gráficos de los desastres de la guerra. Entre 1810-1815 pintó 82 grabados cuya visión no puede dejar indiferente. Cuerpos mutilados, caras desgarradas, perdidas en el limbo, ojos desorbitados. La guerra se disfraza de bestia parturienta,

regurgita cadáveres. Sombras desfiguradas, animales amenazantes, buitres gigantescos, caballos atacados por jaurías de perros rabiosos. Seres humanos sin humanidad, cegados por el odio, la ira, la crueldad del castigo. Soldados degollando mujeres, violando. Escenas de ahorcados, carretas con cuerpos apilados hacia el cementerio. Niños, mujeres, civiles contemplan la razón de la sinrazón. Los grabados llevan como título: *Los horrores de la guerra.* Susan Sontag los describe de la siguiente manera:

> Las imágenes de Goya trasladan al espectador cerca del horror. Se han eliminado todas las galas de lo espectacular: el paisaje es un ambiente, una oscuridad, apenas está esbozado. La guerra no es un espectáculo. Y la serie de grabados de Goya no es una narración: cada imagen, cuyo pie es una breve frase que lamenta la iniquidad de los invasores y la monstruosidad del sufrimiento infligido, es independiente de las otras. El efecto acumulado es devastador. Con Goya entra en el arte un nuevo criterio de respuesta ante el sufrimiento […]. La relación de las crueldades bélicas está forjada como un asalto a la sensibilidad de los espectadores. Las expresivas frases en cursiva a pie de cada imagen comentan la provocación. Si bien la imagen, como cualquier otra, es una inducción a mirar, el pie reitera, las más de las veces, la patente dificultad de hacerlo. Una voz, acaso la del artista, acosa al espectador: ¿puedes mirar esto y soportarlo? Un pie afirma: *no se puede mirar.* Otro señala: *esto es malo.* Otro responde: *esto es peor.* Uno grita: ¡*Esto es lo peor!* Uno más declama: *¡Bárbaros!; ¡qué locura!,* pregona otro. Y otro más: *¡Fuerte cosa es!* Y aún otro: ¡Por qué![3].

En América Latina, pintores, escultores, fotógrafos plasman sus horrores. Los sentimientos nacionales están presentes. Victoria o derrota, la violencia unifica. Crueldad, desolación, muerte. En Perú, Etna Velarde (1943-2014) dio vida a la serie de óleos sobre la Guerra del Pacífico. Los pintores soldados que fueron al campo de batalla y retrataron *in situ* la realidad de los conflictos han dibujado desde sus experiencias las consecuencias humanas de la guerra. El boliviano Cecilio Guzmán de Rojas (1990-1950) realizó 27 grabados sobre la Guerra del Chaco. El paraguayo, telegrafista y pintor Saturio Ríos (1845-1920) lo hizo de la Guerra de la Triple Alianza. El resultado fue siempre el mismo, dieron cuenta del holocausto. Sus obras, como en Goya, son un alegato contra la barbarie. No menos impactantes son los grabados sobre la crueldad de los conquistadores españoles en América Latina. Sobresalen los del belga Theodore de Bry (1528-1598); aunque no estuvo presente, su obra tomó como referencia los relatos de los propios conquistadores. Sus dibujos acompañaron las ediciones inglesas y francesas del texto de Bartolomé de las Casas: *Brevísima relación de la destrucción de Indias.*

El siglo XX ha sido, nos recuerda Hobsbawn, «el más sangriento en la historia conocida de la humanidad. La cifra total de muertos provocados directa o indirectamente por las guerras se eleva a unos 187 millones de personas, un número que equivale a más del diez por 100 de la población mundial de 1913. Si tomamos el año 1914 como punto de partida, el siglo XX ha sido un siglo de guerras casi ininterrumpidas, a excepción de algunos breves periodos sin conflictos armados organizados en todo el planeta»[4].

En América Latina estos datos se vuelven aún más aterradores si consideramos solo los muertos y los desaparecidos a causa de la represión, la guerra contrainsurgente, las dictaduras y los golpes de Estado, perpetrados entre 1945 y 1990. Así, en Argentina hubo 46.000 entre 1974-1983; la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba sumó 20.000 muertos entre 1952-1958; en Colombia la cifra se eleva a 300.000 desde 1946 al fin de la Guerra Fría; durante la dictadura de Pinochet, en Chile, entre 1973-1989 fueron 3.065 los asesinados; en El Salvador, entre 1980 y 1922, conocido como periodo del «terror blanco», se contabilizaron 75.000. Las diferentes dictaduras en Guatemala, desde 1960 hasta 1994, elevaron sus cotas a 200.000; en Haití, la dictadura de Duvalier (1958-1985) contabilizó 45.000. Durante la dinastía Somoza y la «guerra sucia» desarrollada por Estados Unidos en Nicaragua, entre 1984-1991, hubo 70.000 muertos; Perú presenta una estadística de 69.000 hasta la era Fujimori; Panamá, 3.000, durante la invasión de 1989; República Dominicana, otras 6.000 víctimas por la invasión de Estados Unidos en 1965[5]. Países como México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Uruguay o Venezuela ocultan sus datos, pero podemos estar hablando de aproximadamente dos millones de víctimas para la región. Cifra que no considera las matanzas obreras, la represión cotidiana o quienes sufrieron la tortura, la cárcel y el exilio.

Conspiraciones, atentados, ruido de sables, maniobras militares, estados de excepción, magnicidios, se vinculan a la guerra y los golpes de Estado. No hay que ir muy lejos para recordar que la Primera Guerra Mundial tuvo como pretexto el asesinato, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, del archiduque Francisco Fernando y su esposa, herederos de la Corona austro-húngara. Estados Unidos siempre encuentra alguna excusa para invadir, provocar o apoyar golpes de Estado en América Latina. El hundimiento del

Maine en 1898 desató la guerra hispano-cubana-norteamericana. En el siglo XX, el conocido «incidente del golfo de Tonkín», el 2 de agosto de 1964, fue la argucia de Lyndon Johnson para declarar la guerra a Vietnam. Un supuesto ataque de lanchas norvietnamitas al destructor USS Maddox fue suficiente para iniciar los bombardeos. Según la doctrina del destino manifiesto y el corolario Roosevelt, hemos visto, Estados Unidos es un pueblo pacífico cuya misión consiste en proveer al mundo de instituciones democráticas, salvaguardar la paz mundial y combatir a los enemigos que la acechan. Su gobierno solo responde a las provocaciones exteriores.

El capitalismo se caracteriza por promover guerras y hacer de la industria bélica un gran negocio. Fue un general cinco estrellas, presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quien destacó el papel del conglomerado industrial-militar. Un *lobby* que pesaba en el campo de la inversión y tecnología de guerra. En su discurso de despedida de la Casa Blanca, recalcó el significado de otorgar autonomía total al *establishment* militar y la gran industria armamentística: «[…] Debemos guardarnos de la adquisición de influencia injustificada, sea buscada o no, por el complejo militar-industrial […]. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos: no se puede dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta e informada puede obligar al engranaje de la inmensa maquinaria industrial-militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos a salvaguardar la libertad». Aunque el propio Eisenhower no desconocía que tan noble propósito debía estar supeditado a proteger la civilización occidental del comunismo: «Una ideología hostil –de ámbito mundial–, de carácter ateo, implacable en su propósito e insidioso en sus métodos».

¿Y las fuerzas armadas? Será durante la formación del Estado en el siglo XVI, específicamente en las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX, cuando las fuerzas armadas se conviertan en la institución que hoy reconocemos. La idea moderna de fuerzas armadas consiste en dotarlas de poder para llevar a cabo la defensa del territorio, del espacio aéreo y de las aguas territoriales ante una agresión externa. Patria, nación, valores político-ideológicos, son los principios sobre los que descansan los organismos armados. La bandera, el escudo, sus estandartes, a los cuales rinden pleitesía. Será el concepto ambiguo *defensa de la patria* lo que abra las puertas a la independencia de las fuerzas armadas para realizar los

golpes de Estado. El mantenimiento del orden público, la paz interior, la estabilidad, serán argumentos esgrimidos. Sin obviar la defensa del orden constitucional, el modelo económico y social. Sus funciones se despliegan al interior del Estado. El enemigo definido por Clausewitz se distorsiona y difumina. La guerra se trasforma en guerra interna. Las fuerzas armadas se redefinen. El enemigo hostil al cual aniquilar y contra el que ejercer la violencia es un connacional. Su rol ofensivo frente al enemigo exterior se convierte en una estrategia defensiva en el propio territorio nacional.

Para Estados Unidos hacer de las fuerzas armadas el gendarme de la democracia quedaba claro: «Estados Unidos se opone a cualquier tipo de tiranía, no importa por parte de qué grupo social se origine la misma. El problema es la tiranía, no el dominio militar, de por sí […]. *Los militares, única clase social tradicional* que probablemente sobreviviría en el proceso de cambio social, podrían desempeñar un papel importante en fomentar la movilidad manteniendo a la vez la estabilidad, en facilitar el cambio mientras impide el caos. El resultado airoso de la transición en muchas sociedades podría depender de la eficacia con que el sector militar pueda ser encaminado a desempeñar ese papel»[6].

El concepto de la sociedad bajo la hegemonía del poder militar como organización capaz de articular el cambio social, se complementaba con la movilización de los sectores sociales cuyo objetivo era la lucha contra el comunismo. Así lo señala uno de los ideólogos de la doctrina, John MçConaughy, en 1961: «A pesar de los esfuerzos de la Unión Soviética por atraer a Latinoamérica hacia el comunismo internacional, existen allí fuerzas poderosas que promueven la democracia. Estas podrían enumerarse como: 1. El individualismo y la hostilidad de los latinoamericanos hacia la regimentación. 2. Su idealismo político y convicción democrática. 3. La Iglesia Católica Apostólica Romana. 4. *Las fuerzas armadas de Latinoamérica*»[7].

El concepto de la guerra total, la articulación de todos los sectores sociales a las dinámicas de un cambio social dirigido y controlado para frenar los procesos revolucionarios, antiimperialistas y socialistas terminaron por construir un mundo en el cual las fuerzas armadas dejaban de ser una institución no beligerante, para trasformar un actor político capaz de articular la seguridad nacional.

> La doctrina del control civil obviamente encerraba y exhibe aún buen acierto, indudablemente, nos ha sido de gran utilidad. Cuando se desarrolló esta doctrina en el siglo XVII, los ejércitos permanentes consistían mayormente en mercenarios, y la guerra era esporádica y apenas afectaba al curso normal de la vida. No obstante la premisa básica de que los elementos militar y civil de la política son separados se ha vuelto menos cierta a medida que durante el último siglo y medio ha ido surgiendo nuestro mundo más complejo e industrializado […]. No tenemos una política extranjera, una política militar, una política económica, ni una política social, sino que todas ellas forman parte y esencialmente inseparable de la aptitud de los Estados Unidos para defender la libertad. Ahora estamos empeñados en la formulación de la política para la seguridad nacional.

Para hacer frente a este enemigo hostil, los gobiernos hacen de las fuerzas armadas la institución idónea para abordar, bajo la lente ideológica-política, los escenarios de guerra. Guerra psicológica, informativa, económica. Las fuerzas armadas utilizan todo tipo de armas acordes al enemigo a combatir. Fue al interior de la Guerra Fría donde tomó cuerpo la guerra contra la subversión. La incorporación de las fuerzas armadas a la lucha antisubversiva dio pie al militarismo, facilitando la militarización de las sociedades y avalando los golpes de Estado institucionales. La Doctrina de la Seguridad Nacional sirvió de pantalla.

Sobre las espaldas de las fuerzas armadas recae el ejercicio de la violencia legítima, sin obviar que su monopolio corresponde al Estado, institución que expresa la unidad entre territorio, seguridad y control de la población. Hacer uso irrestricto de la fuerza y convertirse en el garante del orden interno es, de acuerdo a Samuel Finer, teórico de las fuerzas armadas, producto de cinco *virtudes* acuñadas en su interior, cuya confluencia orgánico-institucional las hace idóneas para desempeñar dicha tarea: 1) Poseen un comando centralizado, 2) asumen una jerarquía única, 3) garantizan un alto nivel de disciplina, 4) desarrollan técnicas de intercomunicación capaces de organizar una acción colectiva en un reducido espacio de tiempo y 5) poseen *esprit de corps.* Característica, esta última, que la dota del necesario aislamiento y un amplio nivel de autosuficiencia. Dichos principios cobran protagonismo en los golpes de Estado tradicionales, donde las fuerzas armadas asumen el rol principal.

Michael Foucault, a principios de los años sesenta del siglo XX, rescata el sentido de la frase de Clausewitz, «la guerra es la continuación de la política por otros medios», añadiendo algo que ya estaba presente en Clausewitz, pero fue descuidado hasta hacerlo desaparecer de su

pensamiento: «La política es la guerra continuada por otros medios». Acorde con dicha máxima, la guerra interna mantiene la dominación política, ganada en el campo de batalla ideológico, trasfiriendo a las fuerzas armadas el control sobre los individuos, grupos y clases sociales, mediante la violencia física y la sumisión de la voluntad.

Tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, el 6 y 9 de agosto de 1945, la relación espacio-tiempo de la guerra se altera abruptamente. La disuasión no depende del número de portaaviones, tanques, submarinos, infantería o aviación. El poder lo establecen las ojivas nucleares capaces de provocar la hecatombe planetaria. Sin embargo, esta espada de Damocles no ha sido inconveniente para patrocinar y desarrollar guerras convencionales en escenarios regionales. Un nuevo contexto las reubica, primero al interior de la Guerra Fría y hoy en las guerras de la globalización neoliberal, los Balcanes, Ucrania, Irak, Libia, Siria o Yemen.

La experiencia francesa en Argelia (1954-1962) e Indochina (1946-1964) constituye un punto de inflexión en la elaboración de estrategias y tácticas militares. Nace la guerra contrainsurgente. La Revolución china (1949) añade más leña al fuego en lo que pasará a la historia como la lucha contra el comunismo internacional. Será durante el periodo de la llamada Guerra Fría (1946-1991) cuando se condensen los golpes de Estado mediante el uso de las fuerzas armadas como principal protagonista.

Bajo un enfoque bipolar, Occidente cristiano versus Oriente comunista, se recuperan los principios de unidad patria, sentimiento nacional, hostilidad bélica y violencia, enunciados por Clausewitz para el combate. Dos bloques político-militares e ideológicos se reparten el mundo, ejerciendo presión sobre los países aliados, subordinados y enemigos. La Unión Soviética y Estados Unidos se erigen como sus respectivos líderes. Los ideólogos de la guerra cambian los relatos. Las luchas de liberación nacional son reinterpretadas a la luz de estrategias y tácticas de guerrillas y guerra anticomunista:

> El comunismo debe ser considerado no solo como un movimiento en sí mismo, sino también como una fuerza que explota y expresa razonadamente las llamadas «aspiraciones nacionalistas», y que provee orientación organizativa y política a todos los elementos anti-Estados Unidos; aunque es una facción minoritaria en el área, actualmente es un serio peligro en Guatemala y posiblemente crece en forma preocupante en Brasil y otros países. Fuera de la ley

> en varios países, posee no obstante las potencialidades peligrosas que caracterizan su presencia en otras partes del mundo. Su doctrina, que es paralela a la doctrina nacionalista en importantes aspectos, tiene un fuerte atractivo entre intelectuales y obreros, con el resultado de que han sido penetrados las escuelas y sindicatos[8].

El coronel francés Roger Trinquier se convierte en el teórico más relevante de la guerra moderna a partir de los años cincuenta. Sus reflexiones constituyen un salto en el abordaje de las acciones contrainsurgentes, destacando su concepto de subversión, donde incluye los aspectos psicológicos de una guerra concebida total y globalmente. La guerra subversiva, dice, «compromete a un conjunto de acciones de todo tipo (políticas, económicas, psicológicas, armadas, etc.) que pretenden la toma del poder y el reemplazo de un sistema establecido por otro… En la guerra moderna es mucho más difícil definir al enemigo. Ninguna frontera material separa los dos campos. El límite entre los amigos y los enemigos atraviesa el seno mismo de la nación, de un mismo pueblo, en ocasiones una misma familia. Con frecuencia, es una frontera ideológica, inmaterial, que sin embargo debe estar fijada de forma imperativa, si queremos alcanzar y vencer con seguridad a nuestro adversario»[9].

La noción de guerra moderna no tardó en formar parte de la Doctrina de la Seguridad Nacional y justificar la presencia activa de las fuerzas armadas en la aplicación de las políticas antisubversivas en América Latina. Así reclamó su papel en la lucha contra la izquierda marxista-socialista y comunista. En las academias de guerra sus instructores explicitan la visión global de la lucha contrainsurgente: «De estrictamente militar, la guerra se ha convertido en una guerra total, una guerra tanto económica, financiera, política, psicológica y científica como una guerra de ejército, flota y aviación; de la guerra total a la guerra global y de la guerra global a la guerra indivisible y, por qué no reconocerlo, a la guerra permanente»[10].

Bajo este paraguas, la guerra contra el comunismo adopta un tomo mesiánico. Quienes la llevan a cabo se comprometen con la salvaguarda de los valores católicos, la defensa de la familia cristiana y la patria, amenazada por enemigos que buscan su desintegración. Trinquier y otros generales forman al interior de las fuerzas armadas francesas la «Cité Catholique», organización secreta católica y ultranacionalista. Sus principios se expanden por América Latina. En Argentina toma cuerpo a principios de los sesenta. Sus miembros tendrán una actuación destacada

bajo la dictadura de Videla. En 1961 «el presidente argentino Arturo Frondizi inaugura el curso, el director de la Escuela Superior de Guerra dijo que versaría sobre un nuevo tipo de guerra "que podríamos denominar guerra interna", que se libra "sin reparar en medios, sin escrúpulos ni principios éticos". No tiene límites geográficos y entre los enemigos figuran la demagogia, la inmoralidad, los vicios, las bajas pasiones, que son utilizados por la "dialéctica de acción comunista" que fomenta "oposiciones y contradicciones". El mundo libre debe comprender que está en operaciones. La ceremonia fue bendecida por el entonces cardenal Antonio Caggiano, quien invocó la ayuda de Dios para que "los militares encuentren el sendero recto para defender la paz de nuestros pueblos"»[11].

El enemigo anida en el Estado, se esconde bajo el hombre y la mujer corrientes. Los marxistas se adueñan de los sindicatos, los partidos democráticos, la justicia, el Parlamento, están en todas partes, se camuflan bajo la libertad de partidos, de prensa, de expresión, de reunión y asociación. Las fuerzas armadas tienen la obligación de actuar, aun a costa de restringir momentáneamente el ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas, con el noble propósito de evitar la instauración de una dictadura marxista-totalitaria. Es la guerra total. Karl Popper define esta visión del enemigo interno, justificando la emergencia de dictaduras y golpes de Estado como parte de la defensa de la democracia representativa. En eso consiste la fuerza del orden democrático que nunca está libre de sufrir los embates del comunismo y el marxismo. El deber del demócrata liberal será vigilar y prevenir su triunfo: «Aquel que acepte el principio de la democracia en este sentido no estará obligado, por consiguiente, a considerar el resultado de una elección democrática como expresión autoritaria de lo que es justo. Aunque acepte la decisión de la mayoría, a fin de permitir el desenvolvimiento de las instituciones democráticas, tendrá plena libertad para combatirla, apelando a los recursos democráticos, y bregar por su revisión. Y en el caso de que llegara el día que el voto de la mayoría destruyese las instituciones democráticas, entonces esta triste experiencia solo le serviría para demostrarle que no existe en la realidad ningún método perfecto para evitar la tiranía. Por esto no tendrá por qué debilitar su decisión de combatirla ni demostrará que su teoría es inconsistente»[12]. En definitiva, el argumento desplegado por las fuerzas

armadas para justificar los golpes de Estado. Legítimos en origen, ilegítimos en el ejercicio del poder.

La psicología social y las técnicas de control mental se reivindican como asignaturas en las academias de guerra, evidenciando el hándicap que conlleva prescindir de ellas: «Las escuelas militares que enseñan las doctrinas clásicas de la guerra muestran factores de decisión más o menos numerosas: la misión, el enemigo, el terreno, los medios. Por el contrario, en general, se hace abstracción de un factor que es esencial en la conducta de la guerra moderna: el habitante […]. El control de las masas por medio de una estricta jerarquía, o con frecuencia por muchas jerarquías paralelas, es el arma de la guerra moderna»[13].

La guerra psicológica incorpora estudios etológicos y de la conducta aplicados a la población civil. El uso militar de la psiquiatría se extiende. El miedo y las campañas anticomunistas en cine, radio y novelas se transforman en un campo de batalla. Nada está fuera de esta guerra total y global. En los cómics, el enemigo ataca las mentes, quiere la sumisión, el control absoluto de los individuos, crear un mundo de autómatas, sin libertad. Los héroes se presentan como salvadores de la civilización occidental y los valores cristianos[14]. Nace la amenaza y la infiltración «comunista».

Durante el macartismo, en Estados Unidos se difundió, como más tarde en América Latina, esta visión para ilegalizar los partidos comunistas y perseguir a sus militantes. En un folleto redactado por la CIA, el *Manual comunista de instrucciones para la guerra psicopolítica,* se plantea la posibilidad de infiltración comunista en el sistema nacional profesional de la salud con el fin de hacer que América sea «más loca». Los comunistas tratarían de reclutar médicos y psiquiatras para desquiciar la vida de la población por medio de «tratamientos» que la vuelvan neurótica, que alienten el suicidio y que «mantengan alta la mística de la locura»[15]. Al mismo tiempo, la conspiración comunista busca destruir la libertad: «[…] Los comunistas han desarrollado una elaborada técnica científica, calculada y dirigida a inutilizar a la juventud estadounidense por medio de ataques al sistema nervioso, promoviendo el deterioro y el retardo mental… La música destructiva de los Beatles simplemente refuerza el sistema excitatorio de la juventud en el punto donde se cruza el sistema inhibitorio: todo esto debilita el sistema nervioso del joven y lo hace sufrir una neurosis artificialmente

inducida. Lo horrorizante, y aun fatal, de este estado de destrucción mental, es que estos adolescentes, una vez que han entrado en este estado de excitación e hipnosis pueden ser dirigidos para hacer cualquier cosa, y lo harán»[16].

Los golpes de Estado y ruido de sables en el Tercer Mundo han tenido ese denominador común. Las fuerzas armadas se arrogan la salvaguarda de los valores y el honor patrio ante la amenaza comunista. La institución militar se presenta como el instrumento idóneo para cumplir la misión. La nación en peligro. Nuevamente Finer: «Las fuerzas armadas poseen tres grandes ventajas políticas con respecto a las organizaciones civiles: una notable superioridad en la organización, una condición simbólica en la cual intervienen elementos sumamente emocionales y el monopolio de las armas. Constituyen una corporación o una orden prestigiosa, que goza de gran superioridad en cuanto a las maneras de emplear la fuerza. La duda, por lo tanto, no está en el motivo por el cual se rebelan contra sus amos civiles, sino la razón por la cual los obedecen alguna vez»[17].

A pesar de la propaganda estadounidense, dando a entender las ambiciones ocultas de la Unión Soviética por apoderarse de América Latina, circunstancia que justificó incrementar gastos militares y tropas, los servicios de inteligencia y el Pentágono tenían una visión menos catastrófica: «En 1948 en los veinte países de América Latina el conjunto de militantes de partidos comunistas eran unos 360.000, equivalente al 0,25 por 100 de su población. Diez años después su número total era rebajado a unos 200.000, de los cuales 80.000 estaban en Argentina, 40.000 en Brasil y muchos menos en Chile y Perú […]. Y en la documentación del Departamento de Estado se había anticipado en junio de 1948 que “el comunismo en las Américas es un peligro potencial”, pero con quizá unas pocas excepciones no es un peligro serio en estos momentos»[18].

Aun así, desplegaron todo el potencial político e ideológico para desatar la guerra psicológica del miedo y atemorizar a la población. El enemigo interno se despliega en todas las esferas de la vida cotidiana. Cubre todos los espacios. Los golpes de Estado cumplen una función liberadora a la par que una catarsis. Esta concepción de la guerra psicológica «está presente en la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, es decir, aquella que considera a las propias clases populares como objeto del dominio. En el ámbito de la “paz” política se trata de imponer un “universo cultural” que

organice la totalidad de lo real desde las fuerzas armadas. Están así aliadas y unidas en una misma acción con los poderes que abarcan todos los campos de la información, de la política, de la economía, de la religión, de las relaciones sociales, de la educación y hasta de las relaciones sexuales. Creo que aquí se pone de relieve la estructura fundamental que organiza en un todo orgánico la complicidad de los diversos órdenes de dominación integrados al poder, que abarcan la totalidad de la vida civil, organizada desde las fuerzas militares. Este plan expresa el fundamento estratégico vigente durante la "paz", es decir, allí donde aparentemente impera el dominio de la política como campo de debate y libre decisión ciudadana. Estamos entonces en presencia de los fundamentos visibles y declarados, explícitos de esa estrategia. El plan guerrero de "acción psicológica" es el fundamento descarnado y visible de la estrategia de dominio de todo el sistema del capitalismo imperial en tiempos de paz que son también –como ellos mismos declaran– de guerra. El fundamento, en fin, del endocolonialismo»[19].

LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS MILITARES

Los golpes de Estado y la presencia de los militares en la política latinoamericana tienen una larga data. La excusa de la subversión no precedió a la actuación de las fuerzas armadas. El fantasma del comunismo, la izquierda totalitaria y el marxismo-socialista son argumentos posteriores al triunfo de la Revolución rusa. Influenciados por la Tercera Internacional, el llamado a la revolución mundial y la creación de un aparato clandestino destinado a promover la insurrección popular, la lucha de clase contra clase, en los bisoños partidos comunistas fundados en los años veinte del siglo pasado, supuso un cambio cualitativo. Previamente, los golpes de Estado aducen motivos más peregrinos: riñas entre familias de la oligarquía, desavenencias al interior de unas fuerzas armadas poco institucionales e incluso la acción concertada entre las compañías multinacionales y algunos sectores proclives al chantaje, la corrupción y el deseo de riquezas.

Los golpes de Estado y la presencia de los militares entroncan con la historia de América Latina desde la independencia política. En un estudio realizado a finales de los años ochenta, se analizan 1.763 gobiernos desde la

independencia hasta 1984, detallando que hubo más gobernantes militares (44,8 por 100) que civiles (38,4 por 100); el restante 16,8 por 100 se adjudica a gobiernos cívico-militares. Los militares gobernaron más tiempo (47,6 por 100 del total) que los civiles (42,5 por 100). Considerado por etapas, la proporción de gobiernos militares y cívico-militares es la siguiente: 1801-1830 (57 por 100); 1831-1880 (55,7 por 100); 1881-1944 (42,0 por 100); 1945-1963 (34,3 por 100); 1964-1977 (50,5 por 100); 1978-1984 (48,1 por 100). En total del periodo el 48,8 por ciento de los gobiernos estuvo a cargo de militares y de juntas cívico-militares[20].

Concluidas las luchas de independencia, los ejércitos eran controlados por caudillos locales o regionales. Sus galones, ganados en el campo de batalla, eran aval suficiente para demandar la presidencia del país. Pasada la primera mitad del siglo XIX y concluido el llamado periodo anárquico de formación del Estado Nacional, se hizo necesario profesionalizar los ejércitos. Había llegado la hora de educar a los militares en técnicas de combate, estrategias de defensa y ataque, dotarlos de una ideología garante de la paz y la seguridad territorial. El caudillismo de primera generación debía ser reemplazado por unas fuerzas armadas con miras elevadas: la defensa de la soberanía. En estas condiciones se produjo la «revolución de la profesionalización». Para esta tarea, las clases dominantes solicitaron los servicios de los grandes ejércitos europeos de la época. Así, llegaron al continente las primeras misiones encabezadas por militares alemanes y franceses. Los regímenes oligárquicos dedicaron tiempo e invirtieron dinero a dicha labor.

> Uno de los primeros casos es el de Chile, donde al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX arriba una misión encabezada por Emil Koerner, que encara un profundo plan de modernización referido al armamento y la creación de una verdadera red de apoyo logístico (maestranzas, abastecimientos y arsenales), a la enseñanza de nuevas formaciones de batalla (abandonando la formación en cuadro de la infantería chilena); a la creación de una escuela de guerra para oficiales superiores, al envío de muchos de ellos a perfeccionarse en Europa, y a la creación de un estado mayor: estas misiones alemanas también estuvieron en los ejércitos de Argentina, Bolivia y Uruguay, aunque en estos dos últimos países también sufrieron fuertemente la influencia de misiones francesas. Por su parte, Brasil, Perú y Guatemala contrataron técnicos militares franceses y, poco después, la influencia militar germana se hizo sentir en Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela (que luego tendría su fuerza aérea entrenada por pilotos italianos), El Salvador y Nicaragua, a través de los instructores chilenos que viajaron a esos países o de los oficiales de estos que estudiaron en la academia de guerra de Santiago de Chile[21].

Pero Chile no fue el único; en Argentina, un aspecto significativo de la importancia que se «atribuyo después de 1900 al profesionalismo fue la difusión de la influencia militar en la forma de asesores, periodos de entrenamiento en ultramar y armamentos. Una serie de contratos firmados con las fábricas alemanas de municiones, a partir de la década de 1890, determinó que el ejército argentino se abasteciese casi totalmente con armas y equipos fabricados en Alemania. Pero aún más importante, por su influencia sobre el cuerpo de oficiales, fue la decisión adoptada en 1899, de acuerdo con la cual se invitaba a oficiales alemanes a organizar la Academia de Guerra. Cuando esa institución abrió sus puertas en abril de 1900, el director y cuatro de sus diez profesores eran oficiales alemanes. Y durante los catorce años siguientes varios mayores y capitanes alemanes, que vestían uniformes argentinos y ostentaban grados argentinos honorarios de teniente coronel y mayor respectivamente, se turnaron en el cuerpo de instructores, dictando los cursos principales a centenares de oficiales argentinos de todas las graduaciones»[22].

Bajo el influjo de las oligarquías primario-exportadoras, las fuerzas armadas actuaron como gendarmes del proceso de acumulación de capital. Asimismo, no olvidaron apoyar las políticas expansionistas de sus gobiernos plutocráticos. Basta mencionar las guerra del Pacífico, del Acre y del Chaco, en el Cono Sur. En ellas, Bolivia perdió su salida al mar y la mitad de su territorio. En Centroamérica su actuación en el siglo XX, hasta el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua, en 1979, sirvió para crear un nacionalismo chauvinista. La guerra entre Nicaragua y Costa Rica durante la dictadura de Somoza tapó la represión interna. La Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador, en 1969, acentuó el patriotismo de ambos países y de paso ocultó la política represiva hacia los campesinos salvadoreños afincados en la frontera hondureña durante años.

Por su importancia, vale la pena reproducir cómo Ryszard Kapuscinski, el corresponsal de guerra polaco, relató *in situ* la Guerra del Fútbol de las cien horas: «La verdadera causa de la Guerra del Fútbol radicaba en lo siguiente. El Salvador, el país más pequeño de América Central, tiene la densidad de población más alta de todo el continente americano (más de 160 personas por kilómetro cuadrado). La gente se agolpa en un espacio tremendamente reducido, máxime cuando la inmensa mayoría de la tierra está en manos de catorce poderosos clanes de terratenientes. Incluso se dice que "El

Salvador” es la propiedad particular de catorce familias. Mil latifundistas poseen exactamente diez veces más extensión de tierra que la que poseen cien mil campesinos juntos. Dos tercios de la población rural no tienen ni un acre. En unas migraciones que se han prolongado durante años, una buena parte de este campesinado ha emigrado a Honduras, donde había grandes extensiones de tierras sin dueño. Honduras (112.000 kilómetros cuadrados) es casi seis veces mayor que El Salvador, al tiempo que tiene una población dos veces menor (alrededor de dos millones y medio de habitantes). Se trataba de una emigración bajo cuerda, ilegal, pero tolerada por el gobierno de Honduras durante años. Los campesinos de El Salvador se establecían en Honduras, fundaban sus aldeas y llevaban una vida algo mejor que la que dejaban atrás; su número alcanzó unos trescientos mil. En los años sesenta se manifestaron los primeros síntomas de malestar entre los campesinos hondureños, que reclamaban tierras en propiedad. El gobierno proclamó un decreto de reforma agraria. Al ser un gobierno al servicio de la oligarquía terrateniente y ejecutor de la voluntad de Estados Unidos, el decreto no preveía ni la fragmentación de los latifundios ni el reparto de las tierras pertenecientes al trust estadounidense United Fruit, que posee grandes plantaciones bananeras en territorio de Honduras. El gobierno pretendía entregar a los campesinos hondureños las tierras ocupadas por los campesinos salvadoreños. Eso significaba que trescientos mil emigrantes salvadoreños debían regresar a su país, donde no tenían nada. A su vez, el también oligárquico gobierno de El Salvador se negó a recibirlos, llevado del temor de una revuelta campesina. El gobierno de Honduras insistía y el gobierno de El Salvador se negaba. Las relaciones entre los dos países se volvieron muy tensas. A ambos lados de la frontera, los periódicos llevaban a cabo una campaña de odio, calumnias e insultos. Mutuamente se tachaban de nazis, enanos, borrachos, sádicos, sabandijas, agresores y ladrones. Organizaban pogromos e incendiaban comercios […]. El fútbol ayudó a enardecer aún más los ánimos de chovinismo y de histeria seudopatriótica, tan necesarios para desencadenar la guerra y fortalecer así el poder de las oligarquías en los dos países. El Salvador fue el primero en atacar»[23].

Los ejércitos también fueron utilizados para reprimir a los pueblos originarios, tomando un cariz «civilizatorio». El objetivo, combatir y exterminar «razas inferiores», renuentes al progreso, no aptas o con escasas aptitudes para el trabajo. Así, podían ser gauchos, vagos, campesinos,

mapuches, tehuelches, pampas, mayas, incas, patagones o cimarrones. La solución, combatirlos sin piedad.

> En relación con los indios araucanos de la Pampa, las ideas de Sarmiento y las de la oligarquía ganadera no podían encontrarse dentro de una mayor coincidencia, al punto de que en Chile, el autor de *Facundo, Civilización o barbarie* había llegado a escribir: «Porque es preciso que seamos justos con los españoles; al exterminar a un pueblo salvaje, cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes […]. Las razas fuertes exterminan a las débiles, los pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes. Esto es providencial y útil, sublime y grande». Y repetía: «Sobre todo, quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia, y para nosotros Colocolo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los ropajes civilizados y nobles de que los revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar o mandaríamos colgar ahora, si reapareciesen en una guerra de los araucanos contra Chile, que nada tiene que ver con esa canalla». Y, siendo presidente de la República Argentina, prosiguió la guerra contra esos mismos «indios asquerosos» en nuestras pampas, con la saña y ferocidad de siempre[24].

El mismo autor reproduce la célebre recomendación que por escrito hiciera Sarmiento a Bartolomé Mitre: «No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que conviene hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos». Y acota: «A Sarmiento le tocó enfrentar y exterminar a los caudillos del interior de Argentina, poniendo punto final a la tarea que Rosas había hecho posible y que prosiguió Mitre, es decir, finalizando lo que él llamó la lucha entre la civilización y la barbarie, que era, en realidad, la lucha entre el capitalismo y el precapitalismo»[25].

Los ejércitos asumieron su función civilizatoria, fogueándose en el arte de la guerra. Por consiguiente, sus primeras intervenciones consistieron en desposeer de sus tierras a los pueblos originarios. Para la oligarquía, el uso de la fuerza militar tuvo como objetivo la ampliación de los grandes latifundios y consolidación de la clase terrateniente.

En Brasil, durante la etapa de la «pacificación», entrado el siglo XX, con el fin de ampliar la frontera agrícola latifundista, se llevó a cabo un genocidio que hoy, en rentable zona de economía agrícola, se reconoce. La «proporción más alta de tribus extinguidas, pues el 60 por 100 de los grupos registrados en 1900 ya no existen. En todos estos casos se trata de tribus que consiguieron sobrevivir aisladas en fajas que hasta el siglo XX permanecieron inexploradas, próximas a la costa atlántica, en los estados de

Minas, Espíritu Santo y Bahía. Nos referimos a los indios Batocudos, Baenân, Pataxo y Kamakân, que se mantuvieron hostiles hasta el primer cuarto de siglo, aunque reducidos a pequeños bandos atemorizados y totalmente descaracterizados por un siglo de choques sangrientos con los civilizados». Entre 1900 y 1957 existían «en áreas de economía extractiva 47 grupos, de los cuales quedan seis, de los demás, 27 pasaron a otras etapas de integración y 14 desaparecieron. Estos últimos comprendían, principalmente tribus de la región del Juruá-Purús que habían enfrentado en los últimos años del siglo pasado el más potente movimiento de expansión experimentado por la industria extractiva en el Brasil. Nos referimos a la oleada de extractores de caucho, balata y goma que subió aquellos ríos hasta el Acre, en los años de más alta cotización comercial de aquellos productos, y avanzó sobre los grupos tribales como una avalancha de destrucción»[26].

El etnocidio de los pueblos originarios se entendió como el triunfo del orden y el progreso. Los ejércitos fueron el brazo armado de las clases dominantes y el capital multinacional. La aparición y desarrollo de las academias de guerra favoreció las ansias de grandeza de los mílites en su labor purificadora de la patria amenazada. Las fuerzas armadas se consolidaron como defensoras «naturales» del Estado oligárquico, volviéndose protagonistas habituales en la esfera política.

En Uruguay el exterminio de la nación chaná-charrúa se produjo en Puntas de Queguay, los días 10 y 11 de abril de 1831. Su ejecutor fue el general y primer presidente de la Republica, Fructuoso Rivera, a la sazón fundador del partido colorado. Rivera, convocó a los caciques junto a mujeres y niños. Era una emboscada. La historia de Uruguay la conoce como la matanza de *salsipuedes*. Rivera, una vez reunidos, sacó su arma disparando al cacique Venado: era la orden para iniciar la matanza. Supuso el final de la etnia chaná-charrúa. Los pocos sobrevivientes fueron regalaron a extranjeros, entregadas como mascotas a las familias ricas de Montevideo o simplemente llevados como esclavos. Hoy, tampoco queda remordimiento. El expresidente Julio María Sanguinetti, quien llamó a los militares en 1973 a destituir el gobierno legítimo, se refiere así a los indios charrúas: «No hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma […], ni aun un recuerdo benévolo de nuestros mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente les

describieron como sus enemigos, en un choque que duró más de dos siglos y los enfrentó a la sociedad hispano-criolla que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción, para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos»[27].

El desarrollo de los enclaves mineros, agrícolas y la explotación de las riquezas básicas, en poder de las oligarquías y el capital multinacional, requería un sistema de explotación estable, controlado férreamente. Mantener la sumisión, evitar las huelgas y reprimir las organizaciones obreras se entendió como misión prioritaria de las fuerzas armadas. Se consideraron «apaciguadores» de las protestas sociales y diques de contención natural contra los dirigentes sindicales que llamaban a organizarse y resistir. Así nacía una tríada. El poder político quedaba en manos de la oligarquía, el orden entregado a los militares y el progreso al capital extranjero.

El incipiente accionar del movimiento obrero y las revueltas campesinas se convirtieron en el objetivo predilecto de las fuerzas armadas. La represión política forma parte del triste historial que lucen las fuerzas armadas latinoamericanas. No hay país donde no hayan protagonizado masacres, llevándose por delante centenares de vidas de trabajadores, militantes obreros, mujeres y niños. Un prototipo de actuación fue la matanza ocurrida en la escuela «Santa María» de Iquique, en Chile:

> El 16 de diciembre de 1907 estalló en Iquique un gran movimiento, en el que participaron diez mil trabajadores. Pedían aumentos de salarios, seguridades en las faenas (colocación de rejillas metálicas en torno a los cachuchos hirvientes, a fin de impedir las frecuentes caídas de los obreros y su muerte horrorosa) y comercio libre que pusiera fin a la explotación de las pulperías de las compañías salitreras. Las autoridades, en vez de entender sus justas demandas, ordenaron ametrallarlos, siendo muertos más de dos mil hombres, mujeres y niños. Esta feroz represión fue autorizada por el presidente Montt y llevada a cabo por el jefe de las fuerzas militares, comandante Silva Renard. La prensa al servicio de la oligarquía atenuó la matanza y el Congreso cometió la indignidad de aprobar la conducta de las autoridades; apoyaba en todo al gobierno de Montt, en una coalición disfrazada con el nombre «tregua doctrinaria» y en la que nacionales, radicales, conservadores y liberales doctrinarios daban su consentimiento a las más vergonzosas iniquidades […]. Luego los niños debieron asistir a clases pasando por sobre las enormes costras de sangre, parte de ella proveniente de sus propios parientes[28].

Otros episodios similares han sido registrados en todo el continente: la «semana trágica» de 1919 en Argentina; en Bolivia, la masacre minera de Uncía en 1923 y de Chayanta contra la población indígena sublevada por la

expropiación de tierras comunales, que afectó a los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca y La Paz en 1927; la matanza en los bananales de Santa Marta, Colombia, en diciembre de 1928; el exterminio de las poblaciones campesinas en la guerra contrainsurgente de los años sesenta y las atrocidades cometidas por las dictaduras militares. El honor de la institución está a salvo bajo el recurso de «obediencia debida». Todos sus crímenes han sido subsumidos en la historia general de la represión, exculpando a las fuerzas armadas como institución. Ellas cumplían un sagrado deber, no son responsables.

A medida que el modelo primario exportador y el régimen oligárquico pierden fuelle, y la protesta social crece, las fuerzas armadas asumen la dirección política del orden social. Las intervenciones militares se generalizan como medio para retardar la crisis del orden oligárquico. Durante los años treinta surgen las dictaduras militares que se erigen como la solución a los problemas de la dominación oligárquica. Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1927-1931); Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1931-1944); Jorque Ubico en Guatemala (1931-1944); Gerardo Machado en Cuba (1925-1933); Tiburcio Carías Andino en Honduras (1933-1948); Anastasio Somoza García en Nicaragua (1937-1956); gobiernos provisionales militares en Paraguay a partir de la década; Luis Sánchez Cerro (1931-1933) y el mariscal Óscar Benavides (1933-1938) en Perú; Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana (1930-1962), Gabriel Terra (1933-1938) y Alfredo Baldomir (1938-1943) en Uruguay; Juan Vicente Gómez (1909-1935) e Isaías Medina Angarita (1935-1939) en Venezuela; José Félix Uriburu (1930-1932) y Agustín P. Justo (1932-1938) en Argentina; Juntas Militares en Bolivia, como las de Toro-Ruiloba (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939); golpe de Estado en Brasil en 1930 y militarización del poder bajo la dictadura de Getulio Vargas hasta 1945; Alberto Enríquez en Ecuador (1937-1938).

Salvo excepciones, los golpes de Estado tuvieron como objetivo salvaguardar el equilibrio perturbado del orden oligárquico. La figura del militar con lustrosos trajes repleto de medallas hace acto de presencia. Las fuerzas armadas, pese a la profesionalización iniciada a finales del siglo XIX, no cubren todas las expectativas, muestran fisuras.

DICTADURAS OLIGÁRQUICAS Y CAUDILLOS

La dictadura es un concepto acuñado por la *civitas* romana. Hace referencia a una situación de emergencia, generalmente provocada por actos de sedición. Bajo estas circunstancias, el Senado delegaba en el Cónsul todos los poderes. Sin embargo, el dictador tenía límites. Primero, temporal: no excedía los seis meses; sus actos estaban sometidos a la ley, no podía declarar la guerra, ni imponer impuestos a los ciudadanos romanos, carecía de competencias en la judicatura civil. El poder del dictador derivaba del orden constitucional republicano. Hoy podríamos señalar que dichos poderes son homologables a la declaración del Estado de Sitio. El legislativo concede al ejecutivo un poder extraordinario para hacer frente a intentos de golpes de Estado, poniendo en barbecho ciertas libertades políticas. Dicha prerrogativa puede ser negada al ejecutivo. Sirva como ejemplo Chile durante el gobierno constitucional de Salvador Allende. El presidente solicitó a la Cámara de Diputados la declaración del Estado de Sitio. Con mayoría golpista, el 22 de agosto de 1973, por primera vez en la historia constitucional chilena, se negó al presidente la declaración del Estado de Sitio, dando vía libre a las fuerzas armadas para romper el orden republicano.

Las dictaduras actuales nada tienen en común, ni menos los dictadores, con su definición romana. Se trata de regímenes políticos, no de estados de excepción. Es una forma de gobierno, cuya característica radica en su acceso de facto al poder, rompiendo la legalidad y el orden constitucional. Ilegítimas en origen, su duración no presenta límites, salvo los derivados de la muerte biológica del dictador, pactos consensuados, golpes de Estado o revoluciones. A las dictaduras actuales les es más apropiado definirlas como regímenes despóticos y tiránicos. Despóticos, en tanto son gobiernos sin ley ni frenos. El déspota arrastra a su capricho y voluntad a todos imponiendo un régimen de terror y miedo como mecanismo de sumisión. Tiránicos por la manera en la cual se ejerce ese gobierno, «de forma irresponsable, arbitraria y violenta sobre todos los ciudadanos, iguales y superiores, con vistas a su propio interés, y no al de los súbditos; por eso es contra la voluntad de estos, pues ningún hombre libre soporta con gusto un poder de tal clase»[29]. Asimismo, las dictaduras modernas han sido caracterizadas

como regímenes autocráticos, en las cuales el poder del autócrata es absoluto, se detenta de manera ilimitada, independizándose de la ley, a la cual no está sometido. Esta visión de conjunto presupone un poder piramidal, sin libertades políticas, con escasa o nula participación del pueblo, sometido a la voluntad del dictador.

El estereotipo moderno de dictador, tiránico y déspota, hereda de la tradición griega su perfil más característico, desarrollado por Sócrates en los diálogos de Platón. *Gorgias.* Hombre gobernado por sus ansias de poder supremo. Persona insatisfecha, aterrado, desconfiado, envidioso, sin amigos y completamente desgraciado, aparte de la esclavitud interior a la que le somete su propio carácter desequilibrado y que hace que el hombre tiránico, en su vida privada, sea solo inferior en desdicha al tirano real.

Las primeras dictaduras dejan huella por lo siniestro de los personajes que las encarnan. Inmortalizados en grandes novelas, el tirano está presente en la obra de Augusto Roa Bastos, *Yo el supremo;* Alejo Carpentier, *El recurso del método;* Mario Vargas Llosa, *La fiesta del Chivo;* Miguel Ángel Asturias, *Señor Presidente;* Gabriel García Márquez, *El otoño del patriarca.* En ellas se retratan los excesos, fobias, vicios y relaciones de Juan Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, Gerardo Machado en Cuba, Leónidas Trujillo en República Dominicana o Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Momentos de horror, muerte, exilio, persecución y miedo.

El historiador venezolano Germán Carrera Damas describe la personalidad de uno de los más representativos de su país, Juan Vicente Gómez, en el poder desde 1908 hasta 1935. «Tenacidad, alto grado de adaptabilidad, ausencia de límites éticos, moralidad ordinaria, concentración de la personalidad en el ejercicio del poder, crueldad sistemática y reservada, estricta separación entre la función pública y la vida privada con absoluta subordinación de esta última, bajo nivel cultural y ausencia de inquietud en este sentido, fuerte personalidad sexual, fuerte sentido de pertenencia a un sector de la sociedad, cultivo de la soledad como garantía y escudo de la autonomía de acción, conciencia de la fundamentación económica del poder, consecuente aplicación del principio “premio-castigo” ejemplarizante, clara diferenciación entre ejercicio del poder y administración pública, desconfianza respecto “al mundo exterior”, vigoroso sentido de la paternidad, llevado hasta la práctica del paternalismo, codicia, astucia, parco en el uso de las palabras, sentido de

mando, impredictibilidad, inaccesibilidad y omnipresencia, rencor frío, horror a la indeterminación»[30].

Con pequeñas variaciones, sobre todo religiosas, es posible extrapolar este muestrario a quienes se erigieron dioses en la tierra. Dictadores omnímodos, autócratas que transitaron desde el liberalismo positivista al conservadurismo doctrinario. Nada escapó a sus designios. Los ejércitos respondían a la visión del «jefe supremo». Porfirio Díaz en México (1876-1910) fue un ser odiado y respetado. Su manera de ejercer el poder le granjeó el miedo de sus adversarios y cortesanos. Sus allegados podían disfrutar de sus favores o caer en desgracia. «Finalmente en la cúspide, en el entorno de Díaz y entre sus más sólidos apoyos –gobernadores, jefes militares, ministros– predomina un tipo de relaciones fundadas sobre la devoción y la fidelidad. Surgidas indudablemente de los lazos militares de las épocas de guerra, han adquirido, gracias a la larga permanencia en el poder del presidente y a la exaltación de su figura, un carácter que las aproxima al vasallaje o, al menos, a las que ligan a un rey con los grandes señores. Carlos Pacheco, secretario de Fomento y gobernador de Chihuahua, se dirige así al presidente en 1887: "La bondad de usted y los favores que me prodiga son inagotables, y verdaderamente me tiene usted obligado con ellos y ansioso de demostrar con hechos reales cuánto lo estimo, cómo le pertenezco y cómo, señor, le estoy agradecido y dispuesto a todo por Usted"»[31].

Los ejércitos y las fuerzas armadas hacían la voluntad del dictador. Actuaban a sus órdenes, convirtiéndose en guardias pretorianas. El caso de Tiburcio Carías en Honduras es modélico: «El ejército, durante el periodo aquí estudiado, careció de dinámica propia que lo convirtiera, como en diversos países sudamericanos, en el factótum de las relaciones entre las diversas clases sociales. Por el contrario, estuvo subordinado y al servicio del mantenimiento en el poder de Tiburcio Carías […]. En forma deliberada, Carías logró mantenerlo en un estado no profesional, con excepción de unidades elites. Ello fue así, ya que él desconfiaba, y los hechos tendieron a confirmarlo, de un ejército con una estructura organizativa autosuficiente, con el necesario poder en sus manos como para erigirse en el árbitro de la política hondureña»[32].

En Nicaragua, Anastasio Somoza García, en el poder entre 1937 y 1956, fecha de su ajusticiamiento, fue un hombre romo, cuyo ascenso se debió al

asesinato del general de hombres libres, Augusto César Sandino, y sus «supuestas» dotes de seductor. Entre sus conquistas se suma la mujer del embajador de Estados Unidos, quien le facilitó el acceso a la legación diplomática. Se ganó la confianza del cornudo y pasó a ser visto como una opción política para las autoridades estadounidenses. Así, fue nombrado jefe de la Guarda Nacional, creando un entramado de favores y lealtades sobre los cuales levantó su imperio. «Además de los elementos ínsitos en la disciplina castrense, el sistema de lealtad reposaba sobre bajos salarios de rasos y oficiales acompañados de tácita vista gorda frente a los modos extralegales en que los militares, desde el primero hasta el último de la escala jerárquica, se valían para obtener, con exacciones abusivas, prebendas disimuladas y obsequios intermitentes, la diferencia de paga entre lo que hubieran debido percibir en un régimen de orden distinto. Cada quien con su parcela de extorsión al prójimo, los más altos oficiales imbricados en negocios de hostelería prostibularia o de comercio mejor vistos o disfrazados, se trataba de una red de obtención indirecta de ingresos apoyada sobre la tolerancia y el guiño autorizador que manaba desde el poder supremo. La complicidad en la rapiña establecía así el rédito de la lealtad, en vicioso círculo que anudaba y aceitaba los engranajes del sistema. La Guardia robaba y extorsionaba porque el gobierno le pagaba poco y mal; el gobierno malpagaba a la Guardia para inducirla al latrocinio y la fechoría, cuyo ejercicio automáticamente asociaba al ladrón y el extorsionador con los superiores que los toleraban; los guardias debían, pues, ser los primeros defensores del sistema gracias al cual obtenían magros sueldos legales y sus ingresos extras nada legales, pero sí consentidos a todos los niveles»[33].

Hubo caudillos civiles que sojuzgaron a las fuerzas armadas asesinando a sus mandos opositores. El dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera es buen ejemplo. Abogado y notario, llega a presidencia por un golpe de suerte. Su antecesor Reyna Barrios es asesinado mientras visitaba a su amante, la actriz Josefina Roca. Estrada, ministro de Gobernación, es nombrado presidente en una rocambolesca batalla por el poder. Desde ese momento y hasta el final de su dictadura «comenzó el largo reinado de Estrada Cabrera: entre las sombras de la noche y junto a una charca de sangre se alzó la dictadura más cruel en la historia de América […]. A los militares temibles por su carácter o prestigio rondábales de cerca la

desgracia; a los galonados por el favor, muchas veces como recompensa de crímenes, se les destinaba a las cabeceras departamentales o comandancias de distrito, jefes de prisiones, sicarios despreciables o criados personales verdaderos […]. Como un tirano, Cabrera sentía la necesidad de que no hubiese carácter varonil ni prendas personales sobresalientes ni caudales de importancia; pues todo lo que signifique fuerzas vivas de la sociedad parece amenaza contra el poder irrestricto de los dictadores. Si alguno de sus propios servidores se alzaba más de lo prudente, pronto le hacía pagar con humillaciones su temeraria vanidad; y en la prensa –para todo muda, menos para repetir como eco la voz del amo–, se le injuriaba impunemente hasta el sarcasmo: sabiendo las víctimas que no se movía la hoja del árbol sin la voluntad de Cabrera, tenían que aguantar las afrentas con la sonrisa en los labios y la hiel en el corazón. El triunfo del talento constituía falta grave que de alguna manera se había de purgar; la riqueza pagaba sus esplendores con la persecución del capital y con litigios adversos; hasta las prendas personales, fueran gracia, bondad, hermosura, nacimiento, elegancia –aun color–, aparecían culpas ante la rencorosa envidia cabreruna, cual si la naturaleza no debiera prodigar más dones que a los que a migajas dispensara la condescendencia oficial. Todo lo que es brillo en la sociedad y gaje de adelanto en las naciones debía ocultarse como si fuera delito. ¿Qué iniciativa, qué progreso, qué labor intensa y proficua pudiera surgir? El miedo fue otro elemento de dominación combinado con el interés. Por interés y por miedo, amigos y familiares desamparaban al caído. Nunca peste mortal causó más desolación en torno de un hogar que la persecución política: ni la amistad, ni gratitud, ni sangre, nada valía; todos huían pálidos y trémulos y no paraban hasta no protestar adhesiones no pedidas y reniegos desdorosos»[34].

Otros caudillos se consideraron abanderados regeneracionistas. Imbuidos de un halo mesiánico decidieron cambiar el sistema educativo, crear una moral y fomentar el culto a su persona. En este casillero podemos ubicar al dominicano Leónidas Trujillo. Bajo un estado de iluminación divina, se dice, redactó el texto oficial que los estudiantes de enseñanza primaria debían leer como parte de su formación integral. Todo joven dominicano estaba obligado a conocer y recitar la *Cartilla cívica para el pueblo dominicano.* En ella encontramos los principios que guían la actuación del presidente: «Guardián de la república y procurador del orden donde

prevalece la paz, anida el progreso y es posible la felicidad. Padre de todos los dominicanos, no descansa y está atento, guiado por un espíritu superior, se rodea de empleados y de un ejército para hacer cumplir la ley, garantizando el disfrute de la vida de esa gran familia que es el pueblo. Como se ve, el presidente trabaja incesantemente por la felicidad de su pueblo. Él mantiene la paz, sostiene las escuelas, hace los caminos, protege al trabajo en toda forma, ayuda a la agricultura; ampara industrias; conserva y mejora los puertos; mantiene los hospitales, favorece el estudio y organiza el Ejército para garantía de cada hombre ordenado…»[35].

En este singular mundo de dictadores y autócratas no faltaron aduladores, ideólogos y quienes deseaban granjearse los parabienes del caudillo. En torno a sus figuras se fueron tejiendo interpretaciones que justificaban su peculiar manera de ejercer el poder. Sus estudios han quedado como un referente para comprender las raíces del pensamiento conservador de la derecha racista latinoamericana que defiende las dictaduras «como el gobierno adecuado para crear el orden interior, desarrollar la riqueza y anular las castas enemigas»; haciendo del dictador un *César* capaz de ejercer la coerción represiva como un gendarme último, asumiendo su condición real de autócrata despótico, buscando la estabilidad y la paz con métodos poco ortodoxos pero eficaces. El nuevo caudillo, travestido en *César,* encarnó los parabienes y su figura se ensalzó como la respuesta al desorden, el caos y la anarquía. Laureano Vallenilla Lanz desarrolló la tesis del cesarismo democrático para dar legitimidad al dictador venezolano Vicente Gómez:

> En todos los países y en todos los tiempos se ha comprobado que, por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal, el gendarme electivo y hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor, mantiene la paz, es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta, el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aún el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las páginas de interacción de las sociedades: los jefes no se eligen sino que se imponen. Y citando a García Calderón, en su aporte a la definición de cesarismo democrático: «La historia de estas repúblicas se reduce a la biografía de sus hombres representativos. El espíritu nacional se concentra en sus caudillos, jefes absolutos, tiranos bienhechores. Ellos dominan por el valor, el prestigio personal, la audacia agresiva. Ellos representan lo vivo de la democracia que los deifica […]. Los dictadores, como los reyes feudales, abaten a los caciques locales, a los generales de provincia; así lo hicieron Porfirio Díaz, Gracia Moreno, Guzmán Blanco […]. Y las revoluciones se suceden hasta la aparición del tirano esperado que domina, durante veinte o treinta años, la

> vida nacional». Y Vallenilla concluye, tras este párrafo de apoyo: «El césar democrático es siempre el representante y el regulador de la soberanía popular, es la democracia personificada, la nación hecha hombre. En él se sintetizan estos dos aspectos al parecer antagónicos: democracia y autocracia, es decir, Cesarismo democrático; la igualdad bajo un jefe…[36].

Igualmente, hubo quienes llamaron directamente al golpe de Estado para salir de la apatía en la cual estaban inmersos los pueblos latinoamericanos. Leopoldo Lugones, poeta y escritor argentino, fascista y admirador de Benito Mussolini, afirmaba que no se podía esperar nada bueno del liberalismo decimonónico: el futuro solo contará si está en manos de los ejércitos. Los militares educados en las virtudes espartanas propias de su profesión –aduce–, tales como el orden, la disciplina, el sentido del honor y del sacrificio, son los últimos depositarios de los supremos valores de la patria. Al cumplirse el centenario de la batalla de Ayacucho –9 de diciembre de 1824– pronuncia en Lima un discurso para los militares argentinos: «Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada […]. El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última aristocracia; vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica»[37].

Los caudillos se mantuvieron en el poder gracias a farsas electorales. Pocos prescindieron de las urnas. Eran militantes, se afiliaron o fundaron partidos *expost.* Los utilizaron y se valieron de ellos para su beneficio, desplegando las redes de poder y control político. Anastasio Somoza García, dictador nicaragüense padre de la dinastía, fue conservador y más tarde liberal; a sabiendas de que contaba con el beneplácito de los Estados Unidos y del presidente Roosevelt, espetó: «Pienso permanecer en la presidencia no menos de cuarenta años. Pero si los Estados Unidos me hicieran la menor insinuación de abandonarla, lo haría inmediatamente, pidiendo solamente garantías completas para mi persona»[38]. Y en Argentina, otro militar, el general Agustín P. Justo, presidente entre 1932 y 1938, declaró sin rubor alguno que su triunfo se debió al fraude. Al reconocerlo, eso sí, lo adjetivó como «fraude patriótico».

Fueron caudillos quienes controlaron a las fuerzas armadas. Las academias de guerra, donde paseaban instructores alemanes, franceses o británicos y en las cuales se enseñaban las doctrinas militares de avanzada, se fortalecieron al ritmo de la dominación oligárquica. Siguieron sus pautas y actuaron como los garantes del orden. *Manu militari,* su protagonismo se

extendió entre 1870 y 1945, aproximadamente. Muchos de los dictadores que llegaron al poder a principios del siglo XX perdieron empuje a medida que se requerían unas fuerzas armadas con espíritu de cuerpo, cuyas actuaciones caían bajo el sentido patriótico de la defensa del pueblo, la nación y los valores de Occidente. Mientras se fraguaba el cambio interno, la crisis del orden oligárquico se cobraba a sus personajes más representativos como peaje para la modernización: los dictadores autócratas.

A las oligarquías bajo banderas partidarias no les importó sobornar, comprar opositores y partidos enteros. Las escenas de fraude y la eliminación física de adversarios a manos de los dictadores no levantó quejas en la oligarquía. Sacaban tajada y se enriquecían en un clima de terror. No les ruborizó que los caudillos-dictadores amasaran fortunas de la nada, era un pacto perfecto. Paz para explotar y deshacerse de quienes denunciaban la felonía y la traición. Asesinaron a sindicalistas, militantes obreros, demócratas radicales, progresistas, liberales y conservadores honestos, que los hubo. Todos cayeron en el saco de indeseables, siendo víctimas propicias para el asesinato político. La plutocracia vivió sus últimos momentos al amparo de los Trujillo, Somoza, Gómez, Estrada Cabrera, Ubico, Maximiliano Hernández Martínez o Machado. Ellos encarnan el fin de una época en la que el anticomunismo pasó a ser la excusa perfecta para mantenerse en el poder.

GUERRA Y DESESTABILIZACIÓN: LA NORTEAMERICANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA[39]

El papel de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad en los países de América Latina durante los últimos cuarenta años se inscribe en el campo del capitalismo de guerra, cuya característica es el saqueo de los territorios y la concentración de la riqueza. La reestructuración del capitalismo neoliberal, en un contexto de crisis de hegemonía de Estados Unidos, se acompaña de una política de seguridad y defensa de complejas implicaciones para América Latina. Los cuerpos de seguridad desempeñan

hoy un papel central en el mantenimiento y reproducción de la estructura de poder. Las fuerzas armadas asumen otros cometidos. La militarización de la política y la seguridad pública, en ascenso, afecta especialmente a países como México, Colombia y Centroamérica, cuya relación institucional y subordinada a los lineamientos de Estados Unidos es manifiesta. A ello se suman nuevas formas de desestabilización en la disputa por territorios ricos en recursos estratégicos, mercados y recursos humanos, cruciales para Estados Unidos. Ejemplo de ello son la guerra económica en Argentina, los golpes blandos en Brasil, Paraguay y Honduras o la guerra militar en Haití. Estos fenómenos son expresión del conservadurismo que teje una relación simbiótica entre las elites estadounidenses y las elites de la región. El control político es, para ambas, condición necesaria para sostener el patrón de acumulación. No es casual que de las experiencias alternativas, agrupadas en torno a lo que se llamó la geopolítica del sur, solo sobrevivan Bolivia y Venezuela, bajo un acoso constante. Desde la perspectiva estadounidense, América Latina posee recursos estratégicos a nivel mundial. Las mayores reservas de petróleo, de agua dulce y biodiversidad. Cuenta con siete de los diez principales países mineros del mundo, posee reservas de gas y extensas áreas de tierra cultivable e irrigada y, además, es una región exportadora neta de capital a través del pago de la deuda externa, así como un mercado de consumo estratégico y fuente de mano de obra.

La *norteamericanización de la seguridad* se refiere a las transformaciones en el ámbito de la seguridad y defensa que sostienen el capitalismo de guerra a través de la creación de un Estado de seguridad, cuyo fin es destruir las instituciones sociales democráticas. En el ámbito de las relaciones internacionales hace de la intervención y desestabilización una práctica institucionalizada y legalizada mediante acuerdos económicos y de seguridad. Las concepciones de seguridad de Estados Unidos y estrategias cuentan con la plena colaboración de las elites latinoamericanas, con la excepción de Venezuela, Bolivia y, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en México se abre una incógnita. Desde una visión conservadora y universalista, economía de mercado y democracia formal, Estados Unidos construye las bases de la guerra total permanente y preventiva (económica, político-ideológica, social, cultural y psicológica). El abanico de acciones contiene las tradicionales en el campo militar y la multiplicidad de formas

de guerra que incorpora, desde la violencia interna y externa hasta las opciones de cambio político controlado y *ad hoc.*

El armazón legal de la concepción de Seguridad Hemisférica responde a la visión geopolítica y geoeconómica de Estados Unidos hacia América Latina que busca acceder al control de sus recursos estratégicos. Así, los acuerdos económicos y de seguridad se han ido tejiendo de forma articulada a partir de NAFTA, como matriz originaria. A pesar de la derrota de ALCA en 2005, la estrategia continuó avanzando bajo la modalidad de acuerdos de seguridad bilaterales y subregionales. Así se fueron construyendo Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, Comando Norte, ASPAN, Plan México y Proyecto Mesoamérica, además del entramado de acuerdos comerciales. A través de ellos a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de los países latinoamericanos se les asigna un papel subalterno, haciéndose cargo de la seguridad interna, al tiempo que se garantizan los intereses de Estados Unidos en la región, sin necesidad de desplegar acciones militares explícitas. Serían las tropas de la «nación huésped», tal como se conciben en la guerra de cuarta generación, las habilitadas para dicha función. Esta estrategia de intervención y control profundiza la dependencia en todos los ámbitos, pero especialmente en las políticas de seguridad y defensa. En los casos de México y Colombia se construyó una relación institucionalizada, generando una nueva dinámica hasta ese momento inexistente en el ámbito legal e institucional de América Latina. La intervención se centra en la guerra contra el narcotráfico, la militarización de la seguridad pública y de los cuerpos policiales. No obstante, la estrategia fue adoptada por países que no tenían acuerdos de seguridad con Estados Unidos, como Brasil y Argentina, durante los gobiernos de Lula o Kirchner.

Desde finales de los ochenta la articulación del enemigo descansa en la amenaza del «terrorismo» y del «narcotráfico». La potencialidad de esta concepción, aparentemente despolitizada en relación con el anticomunismo de los sesenta y setenta, radica en la plasticidad del enemigo, en su carácter difuso. Además, se agrega la dimensión de «potencial enemigo», que convierte a la población civil en objetivo político-militar al desdibujar la frontera entre seguridad externa e interna; es decir, entre seguridad nacional y seguridad pública. Desde esta perspectiva, la información cobra una importancia estratégica, fortaleciendo las áreas de inteligencia y el uso de múltiples mecanismos para su obtención, incluida la tortura. Las diversas

reformas legales en materia penal incorporan estos criterios. El caso de México es una muestra, desde la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (1997), la reforma del Código Penal, en la cual se incorpora en 2006 la definición de terrorismo –que retoma literalmente la definición que aparece en la National Strategy for Homeland Security–, hasta la Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente. El Art. 139 del Código Penal mexicano señala como terrorista «a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares… o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, de la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación».

Ante la amenaza de este enemigo difuso y letal, la guerra es concebida como guerra total, con carácter permanente y preventiva. Así se justifica el papel de los cuerpos de seguridad militarizados y la participación directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La ambigüedad de la definición conduce a un proceso de criminalización de la protesta, en tanto el disidente es visto como amenaza al orden social dominante. En último término, se trata de criminalizar al pobre y con ello la pobreza. Por otra parte, es necesario recordar que la concepción actual del «terrorista» se nutre de la existente en los años setenta, asociada a la lucha anticomunista, por tanto, se inserta en un andamiaje ideológico ya existente.

A través de acuerdos económicos y de seguridad se ha creado una arquitectura legal e institucional que no tiene precedentes en la historia de la región. Es decir, no se trata de simples lineamientos, sino de políticas concretas de seguridad, materializadas a través de reformas legales y de la creación de instituciones específicas de control social. Dichos lineamientos se recogen en los documentos emanados de las Cumbres de Las Américas. La Carta Democrática Interamericana (2001) sirvió para justificar el golpe «institucional» en Honduras.

Por otro lado, el carácter multilateral de la seguridad y defensa dio paso a acciones colectivas concretas en la región, lo cual ha supuesto una novedad histórica. En 2004 se justificó la intervención en Haití, contra un gobierno democráticamente elegido. Dicha acción contó con la participación de

fuerzas armadas de diversos países latinoamericanos, cuya presencia se ha mantenido por más de una década. La Declaración Sobre Seguridad de las Américas (2003), uno de los documentos más acabados sobre seguridad para la región, fungió como argumento, ya que apelaba a la institucionalidad creada en el continente para hacer frente a conflictos internos cuando el Estado afectado lo solicite y «coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países».

La política de seguridad estadounidense para el hemisferio se ha ido sofisticando a través de un largo proceso que corresponde con el ciclo neoconservador. La *Iniciativa para las Américas* (1990) y la *Estrategia de Seguridad Nacional para el Nuevo Siglo* (1998) fueron el tronco que condensó la estrategia explícita, militar, política y económica hacia América Latina, cuyos antecedentes están presentes en el Documento de *Santa Fe I* (1980) y II (1988). Otro documento relevante lo constituye el nombrado como *Reconstrucción de la defensa de Estados Unidos. Estrategia, fuerzas y recursos para el nuevo siglo* (2000). Este dio continuidad a la proyección de seguridad hemisférica y al uso de la fuerza para conseguirlo. *Santa Fe IV* (2000) sistematizó las «nuevas amenazas» que se iban integrando en la agenda político-militar para América Latina: defensa, drogas, demografía, deuda, desindustrialización, democracia populista, desestabilización, deforestación y la declinación de Estados Unidos. Varias de estas concepciones están asociadas a pobreza y migración, por lo que son consideradas una amenaza cultural para Estados Unidos. Amenazas que se harán extensivas a «movimientos sociales populistas» y «pandillas», de acuerdo al Comando Sur. También se irán especificando acciones en las esferas de salud y medio ambiente asociadas a la teoría de las catástrofes, amenazas a la infraestructura, seguridad jurídica sobre derechos de propiedad, etc. El colofón: la *Declaración sobre Seguridad de las Américas,* de la cual emanan acuerdos de cooperación e intercambio de información migratoria y policial.

La llamada lucha contra el narcotráfico ha sido la estrategia para la penetración militar y la desestabilización por parte de los Estados Unidos. Es la forma específica que asume la norteamericanización de la seguridad en América Latina. La Estrategia Antidrogas del Hemisferio (1996) institucionalizó políticas de carácter punitivo y militarista, cuyos

antecedentes se remontan a la Directiva de Seguridad Nacional y la Ley contra el Abuso de Drogas. De aquí derivan acuerdos y convenios para compatibilizar las legislaciones nacionales, como las políticas de certificación antidrogas de los años ochenta. Fue el mecanismo unilateral de injerencia de Estados Unidos sobre América Latina, dando lugar al Mecanismo de Evaluación Multilateral (1998). Desde 1989, la Andean Drug Strategy, cuya área de acción se concentró en Perú, Bolivia y Colombia, dio lugar al programa de ayuda militar que puso a las fuerzas armadas de dichos países frente al combate de los productores de coca, legitimando la participación de los cuerpos de seguridad estadounidenses en los mismos. Este sería el andamiaje en el que descansaría, posteriormente, el Plan Colombia (1999) y la Iniciativa Regional Andina (2001), para América del Sur.

En este marco, Colombia será catalogada como un «problema de seguridad regional» para Estados Unidos. El Plan Colombia se presentó, al igual que posteriormente el Plan México, como una iniciativa del presidente Pastrana, anunciada como un «Plan Marshall por la paz». De los 7.500 millones de inversión durante los tres primeros años, 4.000 fueron financiados por Colombia con cargo al presupuesto público, una práctica que luego se repetirá con el Plan México. La mayor parte tendría como destino la asistencia militar (60,4 por 100); solo un 8 por 100 se dedicó a desarrollo alternativo, un 5,2 por 100 a derechos humanos y un 6,7 por 100 para la reforma judicial. El plan sería renovado por un segundo periodo, hasta 2010, en lo que pasó a ser conocido como Plan Colombia II, y sería un gran negocio para las «compañías privadas de seguridad», los mercenarios modernos, con las consecuencias propias de ausencia de control y responsabilidades institucionales que acompañan la privatización de la guerra. Dyncorp se ocupó de las fumigaciones con gas naranja, Northrop Grumman y AirScan de los vuelos de aviones radar y vigilancia aérea. El paramilitarismo colombiano creció al calor de esta estrategia y llegó a insertarse en la estructura del Estado. Los actores armados de la guerra se diversificaron –como sucedió en México–, militares, policías, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes, lo que caracteriza una situación de guerra que reproduce una cultura de guerra. La política de «seguridad democrática», anunciada en el marco del Plan Colombia, fue un decálogo sobre gobernabilidad conservadora y, en este sentido, un paso en

la militarización de la seguridad pública, revestida de defensa de la democracia formal. Sus antecedentes se encuentran en el Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica (1995). El resultado fue un Estado de excepción legalizado con características compartidas con lo que posteriormente han sido los Estados de seguridad del capitalismo de saqueo. La norteamericanización de la seguridad es una garantía de dependencia hacia Estados Unidos. Colombia es el tercer importador de productos estadounidenses y México el primero. La falta de fiscalización sobre el gasto en el combate a las drogas y las acciones de la DEA en Colombia y la región andina es una dimensión más de la dependencia en el ámbito de seguridad, que se entrelaza con la formación militar, los ejercicios militares conjuntos y el establecimiento de siete nuevas bases de Estados Unidos en territorio colombiano tras el cierre de la base de Manta en Ecuador.

A pesar del rotundo fracaso de la política contra el narcotráfico, tanto en la erradicación de la producción como de los cárteles se mantienen los mismos criterios. El Plan Colombia se cerró tras quince años, dando paso al Plan Paz Colombia, sin haber resuelto ni uno solo de los problemas para los que fue creado. El país continúa siendo el primer productor de cocaína en el mundo. El proceso de paz acordado con la guerrilla tuvo modificaciones unilaterales por parte del Gobierno, en 2018, dando paso a una situación compleja en la que uno de los actores armados de mayor peso, el paramilitarismo, no está siendo combatido. Bajo esta coyuntura, la situación puede considerarse como una nueva fase en la guerra de cuarta generación. La militarización y la guerra han dejado un saldo de muerte, violación de derechos humanos, impactos ambientales derivados de las fumigaciones y desplazados. Una situación similar la encontramos en México y Centroamérica.

La Iniciativa Regional Andina (2001) fue un complemento del Plan Colombia que incluyó a los países andinos limítrofes; igualmente, contó con financiamiento y entrenamiento en lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. En ese contexto se creó y entrenó la Brigada XVIII de Arauca, que se encargó de la protección del gasoducto estratégico Caño Limón-Coveñas. En la misma línea, se lanzó la Iniciativa Andina Contra las Drogas, cuya área de acción se amplió a Ecuador, Venezuela, Panamá y Brasil. Dicha política tuvo lugar a la par que los llamados

gobiernos progresistas de la región se distanciaban del neoliberalismo en América del Sur.

La guerra contra el narcotráfico es una guerra contrainsurgente, como señala el Comando Sur y se explicita en los Manuales de Contrainsurgencia 3-24 MCWP 3-33.5, «Insurgencia y contrainsurgencia», y el 100-20, «Operaciones militares en conflictos de baja intensidad»). El exzar antidrogas Levistky decía ante el Congreso estadunidense: «Permítanme ser muy preciso en este punto [en relación con Colombia], porque no hemos vinculado el apoyo económico a la asistencia militar […]. A lo que sí lo hemos vinculado es al desempeño en tareas de contrainsurgencia». No son de extrañar los cruentos resultados de la guerra contrainsurgente cuando sus fundamentos son la guerra total y permanente, lo que convierte a la población civil en objetivo. Las estrategias, los programas de formación, asistencia y cooperación en los que participan las fuerzas armadas latinoamericanas se inscriben así en esta concepción.

En México y Centroamérica, aunque las políticas de seguridad también se estructuraron en torno a la guerra contra el narcotráfico, incluyeron explícitamente lineamientos sobre áreas económicas estratégicas, corredores, infraestructura, medio ambiente, propiedad intelectual. La articulación económica del territorio es explícita. Los acuerdos comerciales con Estados Unidos se vinculan a esta lógica. Para México, se articulan la Iniciativa Mérida, conocida como Plan México, y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en tanto complemento de seguridad de NAFTA. Pero tampoco puede desvincularse del Comando Norte, cuya «área de responsabilidad» se corresponde con el territorio de los países del NAFTA. En 2002, a un año del ataque a las Torres Gemelas, se crea el Comando Norte, quedando México bajo su área de responsabilidad sin que existiera consulta alguna al gobierno de dicho país. Fue una clara señal de la organización de la seguridad, la estrategia geoeconómica y los intereses de Estados Unidos en América Latina. De aquí derivaron acuerdos de cooperación a través de programas de capacitación, formación, entrenamiento y adquisición de equipo (Iniciativa de Proliferación de Seguridad, Iniciativa Operación de Paz Global). Igualmente se establece el intercambio de información y colaboración en inteligencia (Multinational Information Sharing, Participating Nations Network, Combinated Enterprise Regional Information Exchange System);

y control del espacio aéreo, marítimo y terrestre. En la medida en que se institucionalizan los acuerdos –Colombia y México–, la condición de dependencia en el ámbito de la seguridad es semejante a la de un Estado asociado y sus fuerzas armadas pasan a desempeñar un papel subalterno.

ASPAN, Plan México y Proyecto Mesoamérica son la expresión de la norteamericanización de la seguridad en la región norte de América Latina. En este ámbito, México desempeña un papel de operador de los intereses estadounidenses para ampliar la influencia hacia el sur de su frontera, siendo el promotor, primero, del Plan Puebla Panamá y, después, del Proyecto Mesoamérica (2008), el puente con el mundo andino al que se incorporó también Colombia. A diferencia de otros acuerdos económicos y de seguridad, sobre ASPAN y Plan México es poco lo que conocemos; el secretismo y la publicación de resúmenes y fragmentos han sido una constante. ASPAN (2005) incluye no solo temas de seguridad, como lucha antidrogas y combate del terrorismo, sino también aspectos comerciales sobre áreas económicas estratégicas específicas (nanotecnología, electrónica, biotecnología, reglas de origen). Las amenazas sobre salud y catástrofes son incorporadas y se vinculan con estructuras como el Wide Augmentation System (2005), un sistema satelital con cinco estaciones que permite el uso de geoposicionadores en operaciones de aviación, sin que esté claro a quién corresponde el control de estas. El acuerdo incluye cooperación en el intercambio de información y estandarización biométrica de huellas digitales. En 2006 se creó el Consejo de Competitividad de América del Norte, que «representa la incorporación formal de la voz del sector privado en las ASPAN», de acuerdo a sus miembros. Como parte de ASPAN, se recuperan los acuerdos de frontera inteligente, iniciados en 2002 y que regulaban la cooperación, intercambio de información, bases de datos, visados e infraestructura para el control migratorio fronterizo. Sin duda, responden a los intereses de seguridad fronteriza de Estados Unidos.

El Plan México (2008), equivalente al Plan Colombia, no presenta novedades en relación con lo señalado en documentos de seguridad para la región. Pone énfasis en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, migración, crecimiento demográfico, rezago en infraestructura, sequías, corrupción; es decir, las amenazas definidas en el documento de Santa Fe IV. Su importancia radica en su articulación con NAFTA y ASPAN, siendo un proyecto más complejo que el Plan Colombia. En tanto México está bajo

mando del Comando Norte, Centroamérica queda subsumida a los objetivos y necesidades de cooperación que se establecieron en el Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica. El financiamiento principal del plan corrió a cargo de México: de los 1.400 millones de dólares acordados entre 2008-2010, Estados Unidos aprobó 465 millones de dólares en 2008, de los cuales 400 fueron a México y el resto a Centroamérica, República Dominicana y Haití. Las partidas posteriores serían menores; en 2015 solo alcanzaron los 148 millones de dólares. El costo estimado para México fue de 7.000 millones de dólares. Esto significa subvencionar las estrategias de seguridad de Estados Unidos con presupuesto público mexicano. Además de la compra de equipo, el plan aporta «entrenamiento especializado» en Fort Bragg y Fort Benning, con sus correspondientes implicaciones en el marco de la guerra contrainsurgente que caracteriza la formación contraterrorista y de lucha contra el narcotráfico. Por último, la cooperación se extiende del ámbito de seguridad al de justicia.

La aprobación del Plan México tiene lugar el año en el cual se reactiva la IV Flota de los Estados Unidos y se pone en marcha el Proyecto Mesoamérica, que corresponde al área estratégica que vincula el norte con el sur de América Latina, el paso que conecta el Atlántico con el Pacífico a través del canal de Panamá y su alternativa futura en la zona del Istmo de Tehuantepec. En términos de recursos, cuenta con un tercio de los recursos de la biodiversidad, el 62 por 100 de las tierras irrigadas de América Latina; es la segunda subregión de América Latina en cantidad de recursos acuíferos, después de la Triple Frontera, a lo que hay que agregar recursos minerales, de petróleo y gas, sobre todo de México y Colombia. El plan también incluye aspectos geoeconómicos como corredores de infraestructura, comerciales, recursos naturales, biocombustibles, desastres naturales, etc. Además, recupera los antecedentes sobre «seguridad democrática» en Centroamérica, Plan México y el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada, insistiendo en los temas de cooperación y coordinación de las instituciones de seguridad y de justicia. Los objetivos apuntan al control migratorio y criminalización de la pobreza de manera que la contención tenga lugar en las fronteras de dichos países, evitando su llegada a Estados Unidos.

La reorganización y fortalecimiento de Comando Sur apunta a la profundización de la política de cooperación ante la amenaza del

narcotráfico, con especial atención a los países andinos. Se propone reforzar programas como Enduring Friendship y Regional Air Space Integration, bajo el esquema de entrenamiento de fuerzas armadas locales, dando acceso al espacio aéreo y con ello a una importante fuente de información. A partir de 2005, agregó los corredores estratégicos a sus objetivos de seguridad, al garantizar el flujo de energía y la protección de la infraestructura en la región. Sus proyecciones de seguridad y las «amenazas compartidas» para 2018 son homologables a los de *Santa Fe IV.* Se trata de frenar las amenazas en origen a través de una defensa combinada con apoyo multilateral y preventivo, mediante un eficiente sistema de inteligencia y tecnología local. Asimismo, asigna a determinadas ONG y «agencias privadas» un papel central en las estrategias para obtener información, asesoría y asistencia, siendo la USAID el vínculo institucional que las unifica. En ese contexto, han sido tipificados como amenazas el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la CONAIE de Ecuador, el EZLN de México, el movimiento cocalero de Bolivia y el del Alto Huallaga, en Perú.

Los ejercicios militares son una de las estrategias más eficientes de injerencia sobre las fuerzas armadas de la región, tanto a nivel ideológico como en función de la red que se va conformando mediante el «vínculo militar a militar». Su peso en la formación de las fuerzas armadas y en la reestructuración de su rol en acciones de seguridad pública es fundamental. Su lista es extensa: UNITAS, los entrenamientos de miles de militares anualmente en Fort Benning –se calcula que participaron 72.495 militares latinoamericanos entre 1999 y 2003– donde hay ejercicios específicos sobre migración ilegal y tráfico de ilícitos (Tradewinds, FA Panamax), operaciones de mantenimiento de la paz de carácter multilateral, ejercicios de contraterrorismo, como «Fuerzas Comando» o «Cabañas», en los que han participado hasta diecisiete países, o ejercicios para hacer frente a desastres naturales y actuar ante posibles desórdenes internos o una guerra entre dos países. A lo largo de un año se llegan a realizar más de 60 ejercicios con personal de América Latina.

Las bases militares, tanto por la obtención de información como por su rol en la formación y asistencia, desempeñan un papel destacado en la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos. Son centros de operación con un alto nivel de autonomía. Su presencia ha crecido tras el cierre de Howard en Panamá y Manta en Ecuador. Se distribuyen por toda la geografía

latinoamericana: Soto Cano y Palmerola en Honduras, Guantánamo en Cuba, las siete bases militares en Colombia establecidas en 2009 –mismo año del cierre de Manta– que se sumaron a las que ya existían previamente, Concón en Chile, Comapala en El Salvador, Liberia en Costa Rica, Vieques en Puerto Rico, Reina Beatriz en Aruba, Hato en Curaçao. Además, están las bases de Paraguay, Perú y República Dominicana, de las que se niega públicamente su existencia. Las nuevas bases están concebidas para operaciones de «espectro completo» ante lo que consideran amenazas terroristas. Las Forward Operating Location se han multiplicado en la geografía y operan como una red de bases navales y áreas con los mismos fines que las nuevas bases.

El entramado institucional y legal construido durante las últimas décadas a partir de los acuerdos de seguridad no tiene precedente en la relación de América Latina con Estados Unidos. En él descansa el sostén de la estructura de dominación y control del capitalismo de guerra. Las políticas de seguridad referenciadas dan paso a una amplia y eficaz gama de mecanismos de control político, desestabilización e intervención, en la que se combinan todas las opciones y los dispositivos. Se trata de construir Estados de seguridad sostenidos en la militarización explícita o encubierta del orden social. Expresión de lo que se conoce como guerras de cuarta generación, cuya base es la contrainsurgencia no convencional, tal como señala el Manual 100-20 del ejército estadounidense (1981), abarca: contrainsurgencia convencional, lucha contra el terrorismo, operaciones de mantenimiento de paz y operaciones de «contingencia en tiempos de paz», es decir, guerra preventiva. Ante la diversidad de amenazas, insiste, las estrategias serán combinadas (políticas, económicas, de información, militares, psicológicas). También el jefe de estrategia de la oficina del coordinador de contraterrorismo, D. J. Kilcullen, en su trabajo *Tres pilares de la contrainsurgencia* (2006), subraya que: las insurgencias no son necesariamente grupos armados, sino levantamientos populares que crecen y que, a veces, se apoyan en redes preexistentes como pueblos, familias, vecindarios, partidos políticos u organizaciones religiosas de un espacio social.

En tanto uno de los objetivos centrales es el control de la población con aceptación, la obtención de información y el conocimiento sobre la ciudadanía son fundamentales. Para que las estrategias sean exitosas, deben

adecuarse a las especificidades e idiosincrasia del lugar. En este sentido, la relevancia del eje cultural de la guerra está por encima, incluso, de la dimensión estrictamente militar. Será en la «estrategia mental y moral» donde se defina la guerra de cuarta generación; así lo señala W. S. Lind, creador del término «guerra de cuarta generación», en su trabajo «Understanding Fourth Generation War» (2004). Al igual que M. V. Creveld, otro de los teóricos de la guerra actual, reconoce que la disputa por la población civil es fundamental, al punto que este último señala que el control de la población será el resultado de una «mezcla de terror y propaganda». Este es hoy el campo de batalla en el que vivimos. Los casos de Colombia, México y países como Honduras son evidentes; donde la generación del caos y destrucción del tejido social han llegado a una situación de guerra explícita. Son los países que tienen mayor cercanía y vinculación institucional con Estados Unidos. No obstante, el proceso de militarización está presente en buena parte de América Latina a través de la guerra contra el narcotráfico y la militarización de la seguridad pública. Es necesario recordar a E. Blair cuando nos dice que «en el caos de la guerra hay una estrategia organizada». En América Latina, ese caos es el caldo de cultivo para el despojo, saqueo y el control político de su población; en esto radica la funcionalidad de la guerra. Hasta la descomposición y corrupción de los cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las fuerzas armadas, es una dimensión del propio proceso de desestabilización y control externo. En algunos países como México, las fuerzas armadas eran la única institución estatal valorada y respetada por la población; hoy están inmersas en demandas de violación a los derechos humanos y denuncias por corrupción del narcotráfico. Como señala Lind, en el caos de la guerra las instituciones del Estado van siendo destruidas, lo que alimenta el enfrentamiento, siendo muy difícil su reconstrucción. Habría que precisar que, en el capitalismo de guerra, no son todas las instituciones las que se destruyen, sino aquellas instituciones sociales y políticas encargadas de la distribución económica y mediación de los conflictos; de ahí el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y fuerzas armadas. La militarización de la lucha contra las drogas, la militarización de la seguridad pública y la militarización de la política son una expresión de la norteamericanización de la seguridad en una estrategia de guerra de cuarta generación. Sin olvidar el financiamiento indirecto de la política de seguridad de Estados Unidos, al asignar recursos

humanos y presupuesto público, en una estrategia que responde exclusivamente a los intereses de Estados Unidos.

Las implicaciones de la guerra en nuestros días obligan a reflexionar no solo sobre los actores armados, sino sobre los procesos de crueldad y doblegamiento que enfrenta sistemáticamente la población: «Interiorizada la represión, no es necesario el mantenimiento de la violencia masiva porque con la simple anticipación del castigo, con la activación selectiva de la memoria, es suficiente… para regular las prácticas políticas o reivindicativas de los sectores subalternos». La dimensión cultural y psicológica de la guerra es el sostén de la guerra económica contra los pobres.

[1] C. von Clausewitz, *De la guerra. Versión íntegra,* Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, p. 30.

[2] *Ibid.,* pp. 17 y ss. Cursivas del autor.

[3] VVAA, *Miradas sobre la Guerra de la Independencia,* Madrid, Biblioteca Nacional, 2008, p. 204.

[4] E. Hobsbawm, *Guerra y paz en el siglo XXI,* Barcelona, Crítica, 2009, p. 23.

[5] Datos tomados de L. Suárez, *Madre América, op. cit.,* p. 11.

[6] Teniente Coronel D. R. Hughes, «El mito del golpe de Estado y la ayuda militar», en A. F. Varas Augusto y F. Bustamante, *Chile, democracia, fuerzas armadas,* Santiago de Chile, FLACSO, 1980, p. 118.

[7] J. B. MçConaughy, «Latinoamérica. Objetivo Soviético», *op. cit.,* p. 116.

[8] Documento del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos: «U. S. Objectives and Courses of action with Respect to Latin América», 6 de marzo de 1953, cit. por J. Garcés, *Soberanos e intervenidos, op. cit.,* p. 93.

[9] Cit. por A. Mattelart, *Comunicación e ideologías de la seguridad,* Barcelona, Anagrama, 1978, p. 76. Véase T. Roger, *La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas,* Barcelona, Herder, 1965.

[10] A. Golbery do Couto e Silva, *Geopolítica del Brasil,* Buenos Aires, El CID, 1978, pp. 67 y ss.

[11] H. Verbitsky, *El silencio. De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA,* Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 38-39.

[12] K. Popper, *La sociedad abierta y sus enemigos,* vol. I, Buenos Aires, Paidós, 1967, p. 196.

[13] A. Mattelart, *Comunicación e ideologías de la seguridad, op. cit.,* p. 77.

[14] Véase A. Dorfman, *La última aventura del llanero solitario,* San José, EDUCA, 1982; y *Patos, elefantes y héroes. La infancia como subdesarrollo,* México, Ariel, 1997.

[15] Véase P. Watson, *Guerra, persona y destrucción,* México, Nueva Imagen, 1982. Sobre todo cap. IX y ss.

[16] Cit. Por J. Saxe Fernández, «Los fundamentos de la derechización en los Estados Unidos», en *Tiempos Conservadores. América Latina en la derechización de Occidente,* Quito, El Conejo, 1987, pp. 65-80.

[17] S. Finer, *Los militares en la política mundial,* Buenos Aires, Sudamericana, 1969, p. 17.

[18] J. Garcés, *Soberanos e intervenidos, op. cit.*

[19] L. Rozitchner, «Efectos psicosociales de la represión», en I. Martín-Baró (coord.), *Psicología social de la guerra,* San Salvador, UCA, 1990, p. 112.

[20] G. Emerich, «Ejercicio del poder y carácter del régimen de gobierno en América Latina», México, 1987. Cit. por P. González Casanova, *Los militares y la política en América Latina,* México, Océano, 1988, p. 12. Las categorías residuales y sus porcentajes son: gobiernos de juntas cívico-militares (4 por 100); eclesiásticos (0,5 por 100); desconocidos, mixtos o confusos (12,4 por 100) para el carácter de gobierno.

[21] N. Minello, «Ejército y poder en América Latina», en *Cuadernos Políticos,* 6 (1975).

[22] R. Potash, *El ejército y la política en la Argentina, 1928-1945. De Yrigoyen a Perón,* Buenos Aires, Sudamericana, 15.ª ed., 1994, p. 18.

[23] R. Kapuscinski, *La Guerra del Fútbol y otros reportajes,* Barcelona, Anagrama, 2008, pp. 284 y ss.

[24] L. Justo, *Pampas y lanzas. Fundamentos históricos-económico-sociales de la nacionalidad y de la conciencia nacional argentina,* Buenos Aires, Palestra, 1962, p. 169.

[25] *Ibid.,* p. 168.

[26] D. Ribeiro, *Las fronteras indígenas de la civilización,* México, Siglo XXI, 1971, p. 74.

[27] J. M. Sanguinetti, «El charruismo», cit. en A. Giunta, *Feminismo y Arte latinoamericano. Historia de artistas que emanciparon el cuerpo,* Buenos Aires, Siglo XXI, 2018, p. 191. Sobre la matanza, véase R. Pi Hugarte, *Los indios de Uruguay,* Madrid, MAPFRE, 1993.

[28] J. C. JOBET, *Ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile,* Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1951, p. 122.

[29] Aristóteles, *Política,* Madrid, Gredos, 1988, p. 247.

[30] G. Carrera Damas, «Juan Vicente Gómez: personalidad evasora», en J. Labastida (coord.), *Dictaduras y dictadores,* México, Siglo XXI, 1986, p. 193.

[31] F.-X. Guerra, *México: del Antiguo Régimen a la Revolución,* vol. I, México, FCE, 1992, 1.ª reim., p. 154.

[32] M. Argueta, *Tiburcio Carías. Anatomía de una época. 1923-1948,* Tegucigalpa, Guaymuras, 2.ª ed., 1990, p. 123.

[33] G. Selser, *Nicaragua de Walker a Somoza,* México, Mex-Sur, 1984, p. 262.

[34] R. Arévalo Martínez, *Ecce Pericles. La tiranía de Manuel Estrada Cabrera,* San José, EDUCA, 1983, pp. 125-126.

[35] Cit. por E. Gutiérrez Félix, *Trujillo: monarca sin corona,* República Dominicana, Corripio, 4.ª ed., 2009, pp. 120 y ss.

[36] L. Vallenilla Lanz, *Cesarismo democrático y otros textos,* Caracas, Ayacucho, 1991, pp. 94, 126 y 145.

[37] M. Á. Scenna, *Los militares,* Buenos Aires, Belgrano, 1980, p. 153.

[38] G. Selser, *Nicaragua de Walker a Somoza,* México, Mex-Sur, 1984, p. 241.

[39] Los temas que se presenten en este apartado han sido tratados ampliamente en el libro de M.ª J. Rejas Rodríguez, *La norteamericanización de la seguridad en América Latina,* Madrid, Akal, 2017 (coautora de este apartado). El lector podrá encontrar ahí las referencias de los documentos institucionales a los que se alude, las fuentes primarias, datos, cuadros y citas que respaldan y amplían las ideas vertidas en este apartado.

III. GOLPES DE ESTADO, SUBVERSIÓN Y ANTICOMUNISMO

> No se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo yo, que quede claro.
>
> Augusto Pinochet Ugarte. Dictador chileno.

GUERRA GLOBAL, EL GOLPISMO Y EL SOLDADO TRANSNACIONAL

Tras la Segunda Guerra Mundial las intervenciones militares se caracterizarán por un alto grado de homogeneidad ideológica. Los ejércitos del continente se reciclan en la lectura de manuales donde prima la guerra contrainsurgente. La derrota del eje aúpa a los Estados Unidos como potencia líder del «mundo libre». Europa pierde el control político-militar de Occidente. Estados Unidos se yergue victorioso.

La crisis greco-turca enciende la mecha de la Guerra Fría. El discurso pronunciado por el presidente estadounidense Harry Truman ante el Congreso de los Estados Unidos, el 12 de marzo de 1947, sienta las bases de un nuevo tiempo histórico. La cooperación económica y militar se presenta como la opción para evitar el avance de las izquierdas a nivel mundial y de los proyectos articulados al socialismo. «Si dejamos de ayudar a Grecia y Turquía en esta hora decisiva, las consecuencias, tanto para Occidente como Oriente serían de profundo alcance. Debemos proceder resuelta e inmediatamente […]. Pido al Congreso la autorización para ayudar a estos dos países con la cantidad de cuatrocientos millones de dólares […]. Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la paz del mundo…».

En el discurso, Truman define los valores que, a su juicio, forman parte de la identidad sobre la cual se erigen dos proyectos de vida antagónicos y excluyentes. El mundo libre, identificado con la democracia liberal, y el mundo comunista, identificado con el socialismo y el totalitarismo. «Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue

por la existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones limpias, garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión y el derecho a vivir sin opresión política. El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta mediante la fuerza a la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. Creo que Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra presiones exteriores que intentan sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la forma en que ellos decidan. Creo que nuestra ayuda debe ser principalmente económica y financiera, que es esencial para la estabilidad económica y política…»[1].

La amenaza comunista y la debilidad de los países aliados son el pretexto para realizar dos maniobras tendentes a frenar el avance de las fuerzas de izquierdas en el mundo occidental. Primero, conceder apoyo financiero y económico a sus aliados para la reconstrucción y, en segundo lugar, crear una organización militar como escudo disuasorio: la OTAN.

Los bombardeos, el avance aliado y la retirada del ejército alemán provocaron la destrucción entera de ciudades, carreteras, puentes, fábricas, edificios. Dejaron una Europa en ruinas. El escenario de posguerra fue desolador. La creación de un nuevo orden mundial, bajo el paraguas de los acuerdos de Bretton Woods, sella el pacto. «El Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la primera institución que luego, con la Cooperación Financiera Internacional (CFI), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) constituyen lo que hoy se denomina genéricamente como el Banco Mundial». Conglomerado financiero bajo la dirección de Estados Unidos, está vinculado estrechamente a la banca privada. Sus tres primeros presidentes provinieron de compañías de los Rockefeller, Chase National Bank of Nueva York, Ford, First National Bank of Chicago[2]. La adopción del dólar como moneda de cambio internacional consolida la posición de Estados Unidos. Su hegemonía no se cuestiona. Sin embargo, el Banco Mundial no fue la organización más utilizada en la política de reconstrucción. Estados Unidos prefirió los acuerdos bilaterales para un mayor control político e ideológico. También los países aliados se deciden por esta modalidad. «Gran Bretaña nunca estimó que su reconstrucción

dependiera del Banco, sino de otras fuentes de recursos estadounidenses […]. Esta observación puede extenderse a Europa occidental por lo que atañe a la influencia decisiva ejercida por el Plan Marshall y otros programas bilaterales a partir de 1948. Así, mientras el Banco Mundial otorgó menos de 800 millones de dólares en préstamos hasta 1954, los créditos y las donaciones norteamericanos amparados en el Plan Marshall alcanzaron la cifra de 46.8 mil millones de dólares en la misma fecha»[3].

En julio de 1947 se aprueba el Plan Marshall, dotado con más de veinte mil millones de dólares de la época para reconstruir la Europa devastada por la guerra. Y la segunda maniobra, hemos señalado, consistió en fundar la primera organización militar anticomunista occidental, la OTAN, el 4 de abril de 1949, creando un escudo armado capaz de disuadir al enemigo: la llamada seguridad hemisférica.

Las fuerzas armadas latinoamericanas, cuyas estructuras son técnica e ideológicamente dependientes de Estados Unidos, se integran a esta nueva visión mundial. Formarán parte de la retaguardia del «mundo libre». Su misión en la defensa de «la civilización occidental y cristiana» es evitar a toda costa la emergencia de gobiernos progresistas, de izquierda. Considerada América Latina un espacio estratégico para la seguridad estadounidense, la Doctrina Monroe se actualiza acorde con los tiempos de la Guerra Fría. La nueva amenaza extracontinental vendría de la Unión Soviética. A sabiendas de la importancia de la región, y con la derrota nazi-fascista en puertas, Estados Unidos convoca la Conferencia de Chapultepec en Ciudad de México entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 1945.

Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos visualizaron en la Unión Soviética el enemigo a combatir. Los delegados asistentes a la conferencia tenían claros los objetivos: «Laurence Duggan, miembro sobresaliente del equipo del Departamento de Estado que había creado la política del Buen Vecino, hizo la interesante observación de que el deseo de proscribir la influencia soviética en el continente fue uno de los motivos del éxito de la Conferencia de Ciudad de México. Era un factor intangible, algo que ningún delegado declaró abiertamente, y la importancia de este factor, en relación con el deseo latinoamericano directo de cooperación política y económica con Estados Unidos, es imposible de fijar. Tenía más fuerza entre los delegados de países de sociedades feudales estáticas. Desde luego, fue decisivo para ganarse el apoyo de los reaccionarios que anteriormente

se habían mostrado fríos hacia la cooperación interamericana, y puede haber sido la razón aislada más importante para alcanzar la amplia gama de acuerdos sobre asuntos que anteriormente habían sido controvertidos»[4]. Asimismo, el delegado guatemalteco plantea debatir un proyecto sobre: «Defensa y preservación de la democracia de América Latina frente a la eventual instalación de regímenes antidemocráticos en el continente». Eran los primeros trazos de lo que acabaría fraguando en la reunión de Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947: el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR). Entre sus acuerdos, la intervención colectiva de las fuerzas armadas de los países firmantes en caso de agresión proveniente de una potencia extracontinental. Dicha firma anticipa en dos años la creación de la OTAN.

El nuevo enemigo, la Unión Soviética, define el campo de batalla y amplía la cobertura de actuación de las fuerzas armadas quedando entre sus funciones proteger la democracia, fomentar el desarrollo económico y garantizar la seguridad hemisférica. Defensa de la democracia y lucha anticomunista confluyen. Las fuerzas armadas son la avanzada de la guerra contra el comunismo. Un año más tarde, en 1948, reunidos en Bogotá, se firmará el acta de constitución de la OEA. El TIAR y la OEA son los pilares sobre los cuales Estados Unidos desarrolla su política intervencionista en la región. Resultan curiosos los silencios y las resoluciones adoptadas por la OEA. Entre otras, recordamos el apoyo al golpe de Estado de Fulgencio Batista en Cuba en 1952, en 1954, en Guatemala, dando el plácet al golpe que derroca al presidente Jacobo Árbenz. En 1961, ante la invasión de mercenarios en Bahía Cochinos, Cuba. Apoyo al golpe de Estado en Brasil, en 1964, contra Joao Goulart; sin noticias a la hora de condenar el desembarco de las tropas estadounidenses en República Dominicana en 1965. Nuevo silencio ante el golpe de Estado en Uruguay en junio de 1973 y en Chile, en septiembre del mismo año. Ninguna crítica frente a la invasión de Panamá en 1989, nada que decir al apoyo de la guerra contrainsurgente en Nicaragua y su financiamiento a la «contra». En 2002 cerró los ojos ante el golpe de Estado fallido en Venezuela. Baste recordar que en Chile, mientras la dictadura asesinaba, torturaba, cerraba universidades, fomentaba la desaparición de opositores, la OEA inauguraba su VI Asamblea en Santiago de Chile en junio de 1976, siendo México el único país que declinó su participación. Entre los asistentes, Henry

Kissinger; allí fraguó la reunión que dio pie a la *Operación Cóndor,* organización delictiva formada por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, para la desaparición de líderes y dirigentes de la izquierda latinoamericana. La OEA se ha caracterizado por el apoyo irrestricto a los Estados Unidos en las políticas de seguridad estratégica.

La amenaza comunista se convierte en parte consustancial del discurso político, impregna todos los espacios de la vida cotidiana, hasta el extremo de ser el punto de inflexión en las campañas presidenciales. El general Eisenhower había señalado en su campaña presidencial de 1952: «No podremos descansar nunca hasta que las naciones del mundo esclavizadas tengan en la plenitud de la libertad el derecho de elegir su propio camino, porque entonces, y solo entonces, podremos decir que hay un modo de vivir pacífica y permanente con el comunismo»[5].

Conceder un protagonismo a la Unión Soviética en América Latina resultó ser un recurso demagógico. Salvo la adhesión de los partidos comunistas a la Unión Soviética, su presencia no solo era marginal; tras los acuerdos de Potsdam, la Unión Soviética renunciaba a ejercer cualquier tipo de influencia en el continente. Sin embargo, la propaganda anticomunista copó el espacio político a la hora de articular las políticas de defensa hemisférica.

Será uno de los más grandes estrategas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el general brasileño Golbery do Couto Silva, en *Geopolítica de Brasil,* quien señale la nueva dimensión del problema: «Lo que nos amenaza hoy, como ayer, no es una amenaza propiamente dirigida contra nosotros, sino directamente contra Estados Unidos de América, la cual, incluso si queremos subestimarla dando mayor énfasis a la practicabilidad todavía bastante discutible de un ataque transártico, no por eso resulta insubsistente, a más de que, de ninguna manera, puede desmerecer la importancia estratégica del Nordeste brasileño, no para nosotros, sino para Estados Unidos, que ya se han comprometido en la defensa de Europa»[6].

Así, se urde un sistema de seguridad hemisférico donde se fomenta el fluido intercambio de información, educación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en las academias de guerra norteamericanas. Los programas de asistencia militar, la dependencia tecnológica, el adiestramiento en la lucha antisubversiva en la «Escuela de las Américas» (Fort Gulick, Panamá) favorecen la emergencia de un nuevo tipo de acción

militar. Un ejército dependiente, convencido de ser objetivo militar y político de la Unión Soviética, se convierte en escudo ideológico para combatir la nueva amenaza de la civilización occidental.

> Apenas en 1959, los voceros del Pentágono afirmaron que «la amenaza más rotunda a la seguridad del hemisferio es la acción submarina en el Caribe y a lo largo de la costa de Sudamérica». La mayoría de las armas trasportadas a Latinoamérica en este periodo (barcos de guerra sobrantes, aviones patrulleros, cazas interceptores, etcétera) reflejaban esta apreciación de la imagen de la seguridad. Y, si bien América Latina nunca ha enfrentado la amenaza verosímil de un ataque proveniente de fuera del hemisferio, las fuerzas armadas de las principales potencias latinoamericanas han acabado por parecer una versión a pequeña escala de los ejércitos estadounidenses en Europa, el cercano Oriente y Asia[7].

El corolario lo representa un soldado educado para hacer frente a la lucha anticomunista: «Los nuevos dictadores transnacionales son semejantes al subconjunto de un aparato estatal que echa sus principales raíces en el capital monopólico, en el gobierno norteamericano y en las fuerzas burguesas locales, oligárquicas y neocoloniales. El enorme aparato enfrenta diferentes contradicciones internas y no funciona como un simple dispositivo mecánico. Frente a las fuerzas democráticas alcanza una considerable unidad: está coherentemente organizado para controlar las reacciones del pueblo y a quienes quieran encabezarlo cada vez que este se oponga a una política que lo empobrece y lo priva de sus derechos individuales y sociales. Pero en cada país y en cada región el aparato militar actúa según las circunstancias, con un sentido pragmático y flexible»[8].

La doctrina de contención del comunismo y defensa de la democracia, amenazada por un poder «extracontinental», se expande, a tal extremo, que los gobiernos democráticos existentes en la región serán considerados incapaces de enfrentar la guerra ante un enemigo cuya potencialidad para subvertir el orden desde sus entrañas es casi infinita. El marxismo-leninismo y sus variantes, argumentan desde los centros de poder estadounidenses, el Pentágono y la Casa Blanca, tienen capacidad para socavar los fundamentos del Estado de derecho, la libertad y destruir la democracia representativa. Las fuerzas armadas deben estar alertas para evitar que los enemigos del orden democrático instauren regímenes totalitarios. Por consiguiente, nace la necesidad de articular ejércitos que mantengan vivos los valores de civilización occidental, garanticen la

defensa de la patria y el Estado y sean al mismo tiempo motor del desarrollo, la supervivencia y la seguridad nacional.

Nuevamente Golbery do Couto Silva, el general brasileño, define el carácter de la amenaza comunista en Brasil y América Latina: «Lo cierto es que hoy en día las amenazas más probables se limitan a la guerrilla, los conflictos localizados y, sobre todo, la agresión comunista indirecta, que capitaliza a su favor el descontento local, las frustraciones que engendran el hambre y la miseria, y las justas aspiraciones nacionalistas […]. América Latina enfrenta ahora amenazas más reales que nunca, amenazas que pueden conducir a la insurrección, a los estallidos de violencia que procuren implantar (aunque no abiertamente) un gobierno favorable a la ideología comunista, constituyéndose en grave e inminente peligro para la unidad y seguridad de los americanos y del mundo occidental»[9].

El vínculo entre desarrollo y seguridad se convierte en el primer eslabón de la cadena para la militarización de las sociedades. Robert McNamara, secretario de Defensa del presidente John Kennedy, perfila el núcleo de la doctrina: «La seguridad es desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Un país subdesarrollado y que no se desarrolla jamás alcanzará nivel alguno de seguridad, por la sencilla razón de que no puede despojar a sus ciudadanos de la naturaleza humana. Efectivamente, si se necesitan condiciones previas a la seguridad deberían ser un mínimo de orden y también de estabilidad. Ahora bien, sin una evolución interna, por mínima que sea, el orden y la estabilidad son imposibles ya que la naturaleza humana no puede estar frustrada indefinidamente. El hombre reacciona entonces, porque debe hacerlo […]. Al insistir en el hecho de que la seguridad es la hija del desarrollo, no niego que un país en vías de desarrollo pueda verse afectado por una revuelta interna o una agresión externa o una combinación de ambas cosas. Esto sucede, y para poner remedio a las condiciones que permiten este estado de cosas es preciso que este país tenga una potencia militar que responda a este problema específico. Pero el poder de las armas no es sino una faceta menor del vasto problema de la seguridad. Una fuerza militar puede ayudar a asegurar el orden y la ley, pero solamente si estos reposan ya en una base aceptable dentro de la sociedad de que hablamos y si la población está dispuesta a colaborar con ella. La ley y el orden constituyen el escudo tras el cual se puede desarrollar un país y, por

consiguiente, asegurar en gran parte su seguridad. El desarrollo es el progreso económico, social y político»[10].

Los procesos de modernización deben controlarse. Las burguesías locales, proimperialistas y desnacionalizadoras, deben asumir la dirección de los procesos de cambio social. Los proyectos nacionalistas que escapan a su dominio sufrirán los embates de la Guerra Fría, siendo contrarrestados por sendos golpes de Estado. Un año antes del golpe de Estado que derrocase al general Jacobo Árbenz en Guatemala, el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos alertaba de las consecuencias de un nacionalismo infiltrado por el comunismo: «El comunismo debe ser considerado no solo como un movimiento en sí mismo, también como una fuerza que explota y expresa razonadamente las llamadas "aspiraciones nacionalistas", y que provee de orientación organizativa y política a todos los elementos anti-Estados Unidos; aunque es una facción minoritaria en el área, actualmente es un serio problema en Guatemala y posiblemente crece de forma alarmante en Brasil y otros países. Fuera de la ley en varios países, posee no obstante potencialidades peligrosas que caracterizan su presencia en otras partes del mundo. Su doctrina, que es paralela a la doctrina nacionalista en importantes aspectos, tiene fuerte atractivo entre intelectuales y obreros, con el resultado de que han sido penetrados las escuelas y sindicatos»[11].

Solo de esta manera se comprende la acción, en 1954, contra el gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala. Se trata de un plan piloto en la región, donde participa por vez primera la CIA, cuyo director, Allen Dulles, califica al gobierno guatemalteco de «una cabeza de playa soviética en América». Mientras tanto, el Pentágono y el Departamento de Estado inauguran las acciones encubiertas, bajo el subtítulo de «guerra sucia». Desde la llegada de Árbenz a la presidencia, en 1951, se pondrá en marcha el «Plan Fortune» para llevar a cabo un golpe de Estado y acabar con las reformas fuera de los marcos admisibles de la seguridad y el desarrollo en el contexto de Guerra Fría[12].

> A pesar de la naturaleza claramente capitalista de la «revolución», los intereses estadounidenses llegaron a considerarla cada vez más una amenaza. En primer lugar, la «revolución» emprendió la tarea de regular, y más adelante expropiar con indemnización algunas propiedades estadounidenses […]. En segundo lugar, los inversionistas privados estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos se inquietaron por la creciente radicalización de la «revolución» guatemalteca bajo Árbenz. Desde el principio, y a lo largo de esos diez años,

> no había duda de que la «revolución» era controlada y dirigida principalmente por la burguesía nacional y la pequeña burguesía de Guatemala. Sin embargo, la base de la «revolución» fue una alianza entre esa burguesía y ciertos sectores de la clase obrera y el campesinado. Sobre todo después de que el gobierno de Árbenz promulgó una reforma agraria de gran alcance en 1952 […]. En este sentido, Estados Unidos llegó a percibir a Guatemala no solo como una amenaza a intereses estadounidenses específicos, sino también una amenaza general para el orden capitalista internacional. Para empeorar las cosas, la «revolución guatemalteca» se daba en un momento en que Estados Unidos estaba en lo más acentuado de la paranoia macartista de la Guerra fría, y en que los intereses privados estadounidenses se estaban expandiendo rápidamente en el extranjero y, por consiguiente, eran muy susceptibles acerca de cualquier amenaza de expropiación. Estos hechos crearon una situación o contexto en el cual Estados Unidos respondió mediante la intervención de 1954[13].

Apoyado y financiado por Estados Unidos, tropas mercenarias al mando del coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, exiliado en Honduras, despegan de Tegucigalpa y bombardean Ciudad de Guatemala, Puerto Barrios y Puerto San José. El 3 de julio de 1954, Castillo Armas entra en Ciudad de Guatemala en el avión propiedad de la embajada norteamericana. Cinco días más tarde, el 8 de julio, se autoproclama presidente con el beneplácito de la OEA y el TIAR. La derrota del gobierno de Árbenz marca ese punto de inflexión donde se pone en práctica la estrategia de Washington para la seguridad hemisférica.

Comienzan, en América Latina, a sucederse golpes militares, cortados por el mismo patrón, es decir, financiados y apoyados por Estados Unidos y ejecutados por unas fuerzas armadas formadas en los centros de adoctrinamiento norteamericanos. A continuación presentamos el itinerario seguido en la mayoría de los países de la región.

Honduras, país considerado paradigma de la inestabilidad política, con presencia habitual de los militares en la vida política, se enfrenta a los avatares de la Guerra Fría. Posee una economía de enclave, controlada por la *United Fruit Company* (UFCO), multinacional norteamericana del banano, y una clase dominante subordinada a su voluntad; cualquier gobierno que ponga en cuestión su poder será sometido a presiones y amenazas. Las políticas reformistas son abortadas, llegando a ser imposible que una propuesta democrática cuaje. Así lo relata un funcionario de los Estados Unidos: «La United controla el gobierno hondureño en una extensión sin precedentes e increíble. Es seguro que no hay importante funcionario del gobierno de su zona en la Costa Norte que no esté bajo las

obligaciones de la compañía de una u otra manera. No solamente están los funcionarios bajo la influencia, sino que a través de un gran número de personas que están en sus plantillas, o bajo su dominio en otras formas, mantiene un efectivo control sobre los medios de acción, así como sobre las fuentes de información»[14]. Este tipo de dominio omnímodo tuvo su máxima expresión bajo la dictadura del general Tiburcio Carias (1933-1948). Para el dictador, el ejercicio del poder consistía en eliminar cualquier tipo de oposición. Sus postulados fueron «encierro, destierro y entierro». Para evitar malos entendidos sobre la posible apertura democrática y crear falsas expectativas sobre una factible retirada del general, el presidente del parlamento de la época, Plutarco Muñoz, advierte: «Solamente el General don Tiburcio Carías Andino es el ciudadano capacitado que, alejado de todos los vicios mundanales y portando una honradez sin mácula, puede conducir nuestro pueblo por el sendero de la paz y del engrandecimiento nacional. Se ha hablado aquí de pecados sin explicar si son pecados capitales o veniales pero […] Dios me perdonará, porque hasta el mismo Dios es continuista porque no ha tenido alternabilidad en el poder».

Tras la Segunda Guerra Mundial, son los intereses de las compañías bananeras, que en su día auparon a Carías al sillón presidencial, quienes deciden darle la jubilación forzosa al viejo general. La nueva política exterior del Departamento de Estado norteamericano sirve como excusa. Ha llegado la hora del relevo. Democracia y desarrollo son las banderas enarboladas en medio de la Guerra Fría para contrarrestar las posibilidades de una alternativa popular y socialista. Sin traumas y de manera ordenada accederá a la presidencia el ministro de Guerra y abogado de la United Fruit, Juan Manuel Gálvez (1948-1954). El anticomunismo es la bandera que acota las reformas. En esta etapa se da prioridad a la modernización de las fuerzas armadas. Sus mandos no pueden depender de febriles déspotas que ejercen el total control sobre la institución militar. Bajo este nuevo proyecto, se firman los convenios militares de cooperación con Estados Unidos, garantizando la formación e instrucción de oficiales. Hasta 1969, gracias a los programas de asistencia militar, son entrenados un total de 391 oficiales y 689 soldados en la zona del canal[15].

Las fuerzas armadas hondureñas nacen bajo la dirección del Pentágono, tanto en lo orgánico como en lo tecnológico. Tras la presidencia de Gálvez, el gobierno conservador de Julio Lozano durará escasos dos años. El 21 de

octubre de 1956 las fuerzas armadas deciden ponerle fin. Sus mandos asestan su primer golpe de Estado de la era anticomunista de Guerra Fría. En su proclama llaman a restaurar el orden y celebrar elecciones. Esto último fue recurrente en todos los pronunciamientos militares. Las elecciones se reivindicaron como un ritual legitimador de la intervención castrense. En 1957, asume la presidencia el liberal Dr. Villeda Morales, «quien recrudeció el anticomunismo que practicaba subrepticiamente y acató con disciplina los dictados emitidos desde Washington, a través de la administración Kennedy». Su gobierno cae de lleno bajo el influjo de la Revolución cubana. En 1959, Villeda Morales declara la prohibición de editar y facilitar la «circulación de publicaciones escritas o habladas que prediquen y divulguen doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del Estado democrático». El 3 de octubre de 1963, se pone fin al gobierno liberal de Morales. La decisión estaba tomada. La proclama de las fuerzas armadas no deja lugar a dudas. Había que ser más enérgico contra el comunismo: «La siniestra amenaza que representa la infiltración de agitadores comunistas y de guerrilleros de tal tendencia, cuyas actividades han sido denunciadas en vano al gobierno de la república, las cuales ponen en serio peligro nuestra vida institucional y la paz y tranquilad de las repúblicas vecinas de Centro América»[16]. Y, por primera vez, se alude directamente a la Revolución cubana como un factor desestabilizador en la región, para justificar la intervención. Así aparece en el mensaje del nombrado jefe de gobierno, Coronel Oswaldo López Arellano: «La infiltración de elementos marxistas en las esferas del gobierno, hecho denunciado con fundamento fuera y dentro de Honduras; la actividad contra la democracia desarrollada en forma sistemática; oír periódicos hablados y escritos, mediante mítines de sectores universitarios y por medio de la amplia e incontrolada difusión de propaganda comunista; la permanente amenaza de frustrar los ideales de conciliación de la familia hondureña que siempre han querido convertir en realidad las fuerzas armadas; el viaje constante de elementos hondureños hacia Cuba, la Unión Soviética y los países tras la cortina de hierro […]. Todo era indicativo de que el país se encaminaba hacia una segura agresión de las fuerzas comunistas, con el consiguiente peligro para la democracia representativa»[17].

En Paraguay se desencadena otro proceso similar. Su historia hunde raíces en las estructuras de poder nacidas y reforzadas tras la Guerra del Chaco

(1932-1935). El ascenso de Alfredo Stroessner en 1954 se produce ante un continuo ir y venir de golpes de Estado. Hasta el *stronato* podemos recapitular la historia de Paraguay partiendo de la revolución inaugurada el 19 de febrero de 1936, y encabezada por el coronel Rafael Franco, militar reformista que introduce los derechos laborales y sindicales, dando inicio a un tibio proceso de reforma agraria. Ambas políticas, reforma agraria y derechos laborales a las clases trabajadoras, fueron interpretadas como marxistas y comunistas. Su puesta en marcha acarreó la contrarrevolución conservadora, instaurándose un régimen tiránico en 1937. Una de las primeras decisiones fue el asesinato de cientos de militantes comunistas y febreristas, como parte de la estrategia restauradora. En 1940 se aprueba la Constitución neofascista bajo José Félix Estigarribia. Su muerte, a los pocos meses, lleva al poder a otro militar, Higinio Morinigo. Partidario de un régimen fascista, puso en marcha campos de concentración donde hacinó, torturó y asesinó a los militantes de izquierda, socialistas, comunistas y opositores. El entonces embajador de Estados Unidos en Asunción, Howard Findley, se quejaba a Washington en 1941 al señalar las actitudes contradictorias del mandatario y su apoyo a los nazis-fascistas: «Howard informaba que Morinigo se hallaba rodeado de simpatizantes del eje, como el jefe de policía teniente coronel Mutshuito Villasboa, quien había puesto a su hijo el nombre de Adolfo Hirohito en homenaje a dos de sus principales personajes. Acusaba, asimismo, de fascista al capitán Rolando Degli Uberti, director de la escuela de policía y notorio mussoliniano, bajo cuya dirección los cadetes de la policía usaban esvásticas e insignias en sus uniformes. Marcos Fuster, jefe de Investigaciones, era también sindicado como íntimo de agentes nazis en Paraguay»[18]. «Sin ser nazis –dirá Morinigo–, simpatizábamos con el ejército germano».

En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, en un intento por mantenerse en el poder, introdujo reformas y buscó aliados. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría le hizo cambiar de parecer: «Sensible a los cambios de la política exterior norteamericana, el dictador eliminó a los febreristas de su gabinete, reimplantó el estado de sitio y entronizó el terror»[19]. La creación de comandos anticomunistas y de milicias regulares supuso la aniquilación de gran parte sus militantes y simpatizantes de la izquierda paraguaya. En 1949 se hizo con la presidencia interina Federico Chaves. Elegido en 1950, su gobierno tomó un giro nacionalista, se enfrentó a las

políticas del Fondo Monetario Internacional y, en un alarde de autonomía, abrió espacios democráticos, liberando a los presos políticos. Asimismo, favoreció la sindicalización de campesinos y trabajadores. Los Estados Unidos consideraron su actitud un agravio, al igual que lo fuese el proyecto de Jacobo Árbenz en Guatemala. Comenzaron el plan desestabilizador. La política exterior norteamericana, liderada por John Foster Dulles, tuvo un peso decisivo en el golpe de Estado de 1954.

«Ya en 1953 el Departamento de Defensa norteamericano invitó al entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Alfredo Stroessner, a visitar unidades militares de los Estados Unidos […]. Los logros de los objetivos golpistas consiguieron la neutralización de posibles factores adversos y contaron con el apoyo de la política exterior norteamericana que estaba desarrollando su propia estrategia de defensa para un potencial conflicto convencional con la Unión Soviética»[20]. El golpe militar de Stroessner el 4 de mayo de 1954 lo entronizará como presidente hasta 1989. En 1955, y ya como presidente, «promulga la ley de defensa de la democracia que permitía a la policía efectuar registros domiciliarios y detener a comunistas sin tener una orden judicial, a la vez que se reservaba para el gobierno la decisión de quién era comunista. El Congreso también amplió indefinidamente el estado de sitio, lo cual le permitió al ejecutivo suspender el hábeas corpus, impedir que se celebraran mítines políticos y censurar la prensa»[21]. En 1957, a un año de las elecciones presidenciales, Stroessner se hace elegir candidato del Partido Colorado en la convención del partido para el periodo 1958-1963. Para ello se firma el Acta de Cerro León, en la cual se «expresa la voluntad mayoritaria de la nación que ha visto en el General Stroessner al realizador de la unificación colorada, al gestor de grandes obras de cultura y progreso nacional, al fundador de instituciones fundamentales para el desenvolvimiento de la república, al consolidador de la paz pública y partidaria y al celoso defensor de la soberanía y dignidad de la patria, en el orden internacional». Reelecto, en 1959, recurre al autogolpe. Aprovechando una manifestación estudiantil donde se reclamaba la subida en el trasporte público, y en vistas de una declaración de miembros de su partido exigiendo el fin del estado de sitio, la amnistía y la plena vigencia de los derechos de reunión, asociación y expresión, entre otras, Stroessner desmantela el Congreso, expulsa a los colorados disidentes de su partido,

reprime y acaba entronizándose en el poder. Ya nadie discutiría ni se atrevería a cuestionar sus decisiones.

La política anticomunista llegó a Costa Rica tempranamente; corría el año 1948. Sus estrategas pusieron en funcionamiento uno de los planes más elaborados que se han conocido en la región. El objetivo fue acabar con la alianza popular que gobierna el país desde 1940, en la cual participaba el Partido Comunista, la Iglesia y la burguesía progresista. Como siempre, el caballo de batalla del gobierno progresista fue la reforma agraria, base real del poder de la oligarquía cafetalera costarricense. La plutocracia llamó a las puertas del Pentágono y alertó del peligro de tener una Costa Rica convertida en un país comunista. Con el plácet de Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata, creado en 1945 y liderado por José Figueres, anticomunista de pro, comenzó la labor desestabilizadora. Durante tres años combatió, en alianza con el Partido Demócrata, representante la derecha reaccionaria y profascista, al gobierno de Teodoro Picado: «No se moderaron en su abierto boicot contra el gobierno por todos los medios a su alcance: desde la manipulación económica hasta la violencia. La culminación del boicot vino con el cierre empresarial, conocido como la "huelga de brazos caídos", realizado por la mayoría de los empresarios en 1947. Este cierre empresarial paralizó la economía del país»[22].

El miedo de la población, urdido en una campaña de terror y descrédito del gobierno de Picado, fue el punto de inflexión. El anticomunismo, el pretexto para reconducir las reformas populares. A los pocos días de hacerse con el poder, se puso en evidencia el sentido oculto del golpe de mano: «Inmediatamente la Junta de Figueres arrestó a varios cientos de comunistas y, en julio de 1948, proscribió el Partido Comunista. La Asamblea Constituyente, reunida en 1949 […], aprobó el Artículo 98, el cual prohibía: la formación y funcionamiento de partidos que, por sus programas ideológicos, métodos de acción y conexiones internacionales, tiendan a destruir las bases de la organización democrática de Costa Rica, o que ataquen la soberanía nacional. Esta disposición estaba claramente dirigida contra el Partido Comunista, Vanguardia Popular»[23].

Figueres se convirtió en el adalid de la represión y la desestructuración del movimiento obrero y sindical. La historia de Costa Rica transformó este momento de ignominia en un relato épico de «guerra civil». Una guerra civil contra los «caldero-comunistas». Para rematar la maniobra, disolvió

las fuerzas armadas, declarando a Costa Rica, el primer y único país latinoamericano en hacerlo, adoptando el mote de «la suiza de Centroamérica». La realidad es muy otra. No hubo guerra civil, fue una guerra anticomunista. La oligarquía cafetalera podía estar tranquila, no habría una ruptura, ni reforma agraria que afectase a su poder. Esta vez, se enrocaba, dejando que fuesen los sectores modernizantes quienes tomaran las riendas del país y lo limpiasen de la amenaza subversiva[24].

En Colombia, el asesinato, el 9 de abril de 1948 de Jorge Eliecer Gaitán, es otro referente histórico para la región. Militante liberal, fundador e impulsor del Partido Socialista Colombiano, había logrado captar el sentido común del pueblo, ávido de transformaciones democráticas. En poco tiempo su prestigio lo encumbraba como posible presidente desde la alcaldía de Bogotá. Era un peligro, debía ser eliminado. Estados Unidos entra en liza y apoya la acción. Para despistar, en la guerra de información, achaca el asesinato a los comunistas, buscando con ello una razia que les facilite la labor de aniquilamiento, bajo la formación de hordas callejeras. Nada más conseguido el objetivo, los partidos conservadores comenzaron a perseguir a los socialistas-marxistas y los comunistas. «El Bogotazo, como se conoce la explosión social siguiente al asesinato de Gaitán, se atribuye al comunismo desde las primeras horas… En su mensaje Mariano Ospina López, presidente, lo ratifica oficialmente. Los cuadros conservadores hacen un llamado a la formación de un frente anticomunista que reúna las fuerzas de orden que existen en el país, con el fin de defender los principios tutelares de la nacionalidad y los valores de la civilización cristiana»[25]. En 1953 y tras reprimir al movimiento obrero y sindical, se prefiere pasar a la técnica del golpe de Estado para asegurar el control del país. El general Rojas Pinillas asume el poder del Estado, desplegando una de las políticas de lucha antisubversiva más violentas que se conocen. En 1958, un acuerdo entre liberales y conservadores permitirá en elecciones fraudulentas el bipartidismo, asentado, curiosamente, en un estado de sitio permanente.

En Perú, la oligarquía y los militares favorecen la llegada al poder de Manuel Odría (1948-1956) por la vía rápida del golpe de Estado. Su primera medida, como no podía ser diferente de sus contemporáneos regionales, será declarar ilegal al Partido Comunista, al APRA y las organizaciones populares antiimperialistas. «El nuevo gobierno presidido por Odría puso en práctica todas y cada una de las exigencias

oligárquicas… Para crear el necesario clima de confianza persiguió descarnadamente a los movimientos antioligárquicos y al Partido Comunista, así como a las organizaciones populares que se habían creado en el corto lapso democrático»[26].

En Argentina, el general Juan Domingo Perón, nacionalista y hombre que coqueteó con el fascismo mientras fue agregado militar en la Italia de Benito Mussolini entre 1939 y 1941; vicepresidente y ministro de trabajo (1943-1945) de la llamada *revolución del 43,* durante el gobierno militar encabezado por Edelmiro Farrell, será elegido presidente en 1946 y reelecto en 1952. Sin embargo, el 21 de junio de 1955 es bombardeado el palacio presidencial, La Casa Rosada, produciendo centenares de muertos. El 16 de septiembre un golpe de Estado, autodenominado *Revolución Libertadora,* clausura el Congreso, depone a los miembros de la Corte Suprema, interviene el poder judicial y destituye a las autoridades civiles provinciales, municipales y universitarias. El 23 de septiembre, asume el poder el general Eduardo Lonardi. No durará mucho. El general Pedro Eugenio Aramburu, mediante otro *pusch* militar, asume la presidencia hasta 1958, año en que triunfa en elecciones Arturo Frondizi, víctima de otro golpe de Estado militar el 29 de marzo de 1962. Tras un pequeño interregno, será elegido presidente Arturo Illia, quien sufrirá otro golpe de Estado el 28 de junio de 1966, llevando a la Casa Rosada al general Juan Carlos Onganía (1966-1970). Entre 1970 y 1973, dos generales se suceden en la presidencia: Roberto Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973).

En 1972 se produce un primer viaje a Buenos Aires de Juan Domingo Perón. Exiliado primero en Paraguay, pasó a Panamá, República Dominicana, Nicaragua, para radicarse definitivamente en la España franquista. Durante su primer mandato, dejó claro el límite de las reformas y su ideología política, haciendo uso del discurso anticomunista, bajo el concepto de enemigo múltiple: «Los descamisados han anulado el empeño de los comunistas y socialistas por infiltrarse en sus masas y sabotear, con huelgas y maniobras inconfesables, la conquista del pueblo […]. Si las masas obreras que me apoyan han vencido a aquellos otros elementos en todos los terrenos, es porque su fe es superior a todo espíritu del mal que domina a las fuerzas rojas ocupadas en lanzar el veneno del caos sobre los pueblos»[27]. Esta visión se complementa con la doctrina justicialista de la sociedad organizada, que tendría como finalidad suprema alcanzar la

felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Con una fuerte influencia de la Falange española y su fundador, José Antonio Primo de Rivera, Perón apunta: «Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por un acuerdo justo entre obreros y patronos, al amparo de la justicia que emane del Estado»[28].

Héctor Cámpora, electo presidente 11 de marzo de 1973, mano derecha de Perón, con el Partido Justicialista salido de la ilegalidad, renuncia y convoca nuevas elecciones. En septiembre de 1973 la candidatura de Juan Domingo Perón, en dupla con su esposa, María Estela Martínez de Perón como vicepresidenta, obtiene el triunfo. Perón morirá en menos de un año, el 1 de junio de 1974. Le sucede en el cargo su mujer. El 29 de mayo de 1976, un golpe militar inaugura una de las dictaduras más sangrientas de la historia de Argentina y América Latina, encabezada por el general Jorge Rafael Videla.

Bolivia seguirá el ejemplo de Costa Rica, configurando una alianza anticomunista y antirreformista. La insurrección de abril de 1952, origen de la Revolución boliviana, se desprende de los sectores populares, obreros, socialistas que habían participado en ella, logrando poner en jaque el orden oligárquico. Entre 1953 y 1956 el proceso sufre una involución. Luchas internas entre los sindicatos obreros y los partidos de clase facilitan la dirección del proceso revolucionario a un partido nacionalista que aglutina la mayoría de las fuerzas insurgentes: el Movimiento Nacionalista Revolucionario, fundado en 1945 (MNR). Sus dirigentes, fervientes anticomunistas, reconstruyen el poder político desde los principios de la seguridad nacional, enarbolando un discurso nacionalista y anti-oligárquico. «Como es clásico en este tipo de revoluciones, el nuevo poder desarma a las masas que le han dado el poder. La reorganización del ejército es la forma que adquiere ahora el desarme de las masas, la sustitución de un aparato represivo por otro. La fase semibonapartista, que cumple con el doble papel de suprimir la crisis económica…, se asienta en la alianza entre la burocracia civil (MNR) y la burocracia militar. De hecho, ya se trata de una dictadura […]. La reorganización del ejército es una de las condiciones del reconocimiento por parte del imperialismo. Puesto que su propia existencia y la totalidad del equipamiento provinieron de los Estados Unidos, es un

ejército que se organiza en los términos de aquellos que existen bajo el control neocolonial norteamericano y así ocurrirá aún en aspectos de tanta injerencia local como lo que se llama doctrina militar»[29]. Paz Estensoro y Siles Suazo, fundadores del MNR, reprimen al movimiento obrero y a su dirigente más carismático, Juan Lechín. El general René Barrientos seguirá los pasos, en 1964. Instaura una dictadura con el beneplácito del MNR y la embajada de Estados Unidos. Más tarde otro general, Alfredo Ovando, le sucederá. Ambos se reivindican doctrinariamente del MNR. La historia de Bolivia, sus quiebres e inflexiones durante la Guerra Fría, se vuelve la historia de los golpes de Estado. «Un golpe de Estado desencadenó la insurrección de abril de 1952, y un golpe de Estado puso fin al proceso de la Revolución Nacional iniciado por esa insurrección […]. El acto de masas que fue la huelga de hambre en 1977 puso término a la dictadura de Banzer mediante golpe de Estado que indujo y otro golpe de Estado como este sepultó la impostura de Pereda, que la había sustituido. Golpe también fue el de García Meza, que rompió la breve fase del auge democrático representativo que se había iniciado con aquella memorable huelga de hambre de las mujeres mineras. Por eso importa tan poco la forma *coup d'état* y tanto, como contraparte, lo que cada uno de ellos convoca, contiene o remata»[30].

La mayoría de los gobiernos reformistas siguen la suerte de Costa Rica en 1948 o Guatemala en 1954. Por esos años, comienzan a tomar cuerpo las primeras concepciones eurocéntricas del desarrollo. Las ciencias sociales son receptáculo para introducir las visiones del anticomunismo. En los años sesenta W. W. Rostow, historiador de la economía, a solicitud del presidente Kennedy, asume la tarea de elaborar una estrategia alternativa al desarrollo socialista. En 1963 ve la luz su obra *Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no-comunista.* Su edición marca un antes y un después en los estudios e interpretaciones sobre el desarrollo. Será manual en todas las universidades del mundo y organismos internacionales durante décadas. Así entiende Rostow el problema: «Marx, llevado –en palabras de su padre– por un "egoísmo demoniaco", por una identificación con los desvalidos y un odio hacia los mandamases, pero disciplinado también en cierta medida por una pasión por ser "científico" en lugar de sentimental, Marx creó su notable sistema, un sistema lleno de fallos, pero también de ideas parciales, una gran contribución formal a la ciencia social, una monstruosa guía para

los poderes públicos. Uno de los fallos del sistema de Marx comenzó a ponerse de manifiesto antes de que muriera, y no supo cómo resolverlo. Hay quienes piensan que el reconocimiento interno de este fallo es el responsable del hecho de que *El capital* sea un libro inacabado. El fallo se puso de manifiesto con la subida de los salarios reales industriales en Europa occidental y con el hecho absolutamente evidente de que las clases trabajadoras de Gran Bretaña y Europa occidental se sentían inclinadas a aceptar las mejoras, a aceptar los términos del capitalismo democrático en lugar de concentrar sus esfuerzos en la sangrienta confrontación última, en apoderarse de las propiedades y entregárselas al Estado, el cual podría ser controlado, entonces, según Marx, por los trabajadores […]. Los líderes sindicales le volvieron la espalda a Marx y trataron de introducir reformas graduales dentro de sus propias sociedades. Y de esa forma Marx, y Engels, terminó teniendo una idea algo desilusionada del obrero industrial con el que tanto contaba para hacer realidad su dialéctica: el trabajador se conformaba con un poco de progreso bastante estable; tenía la sensación de que las cosas estaban mejorando para él y para sus hijos y de que, en general, estaba recibiendo una parte justa de lo que producía la sociedad en su conjunto; estaba dispuesto a luchar por lo que él deseaba dentro de las reglas de la democracia política, en un sistema de propiedad privada; tendía a identificarse con su sociedad nacional más que con el mundo abstracto de obreros industriales supuestamente oprimidos de todos los lugares; estaba dispuesto, a pesar de los conflictos y de la falta de equidad, a vivir con sus semejantes, los hombres, en lugar de conspirar para asesinarlos. Y es ahí donde comienza la historia de Lenin y del comunismo moderno»[31].

No olvidemos que este cuadro pintado por Rostow fue el vademécum utilizado por economistas, politólogos, historiadores y sociólogos para explicar el desarrollo capitalista en las universidades, instituciones internacionales y organizaciones gubernamentales. Son clásicas las cinco etapas con las cuales bautizó el proceso de desarrollo: i) la sociedad tradicional, ii) la creación de las condiciones previas necesarias para el despegue, iii) el despegue, iv) la marcha hacia la madurez y v) la era del consumo de masas. De sus páginas se extraen los conceptos «países en vías de desarrollo», la nada neutral «ayuda al desarrollo del 0,7 por 100» o el concepto de guerra preventiva.

Las administraciones de los gobiernos de Roosevelt y Kennedy se dieron al trabajo de buscar científicos sociales en todas las disciplinas para construir un andamiaje teórico y hacer frente a la teoría socialista del desarrollo. Se trató de presentar una alternativa creíble a las clases trabajadores de los países occidentales como opción a la revolución socialista. Las universidades estadounidenses se convirtieron en semillero anticomunista. Era necesario legitimar con un discurso académico las intervenciones militares.

> La ayuda que el historiador de Harvard Arthur Schlesinger Jr. prestó al desarrollo de los países subdesarrollados no consistió sino en escribir el ahora famoso *Libro Blanco* sobre Cuba, que trataba de justificar la próxima invasión de ese país a través de Playa Girón. Posteriormente, él admitió haber mentido con respecto a la invasión en beneficio del «interés nacional». El economista de Stanford Eugene Staley escribió *The Future of Underdeveloped Countries* y llevó sus ideas a la realidad del famoso plan Staley-General Maxwell. Taylor, para encerrar a 15 millones de vietnamitas en los campos de concentración, bautizó el proyecto con el nombre de «aldeas estratégicas». […] El historiador económico del MIT, Walt Whitman Rostow […] escribió –sobre las etapas– en el Centro para Estudios Internacionales financiado por la CIA situado en río Charles Boston, y ha estado manejándolas en el río Potomac en calidad de director de política y planificación del Departamento de Estado, nombrado por el presidente Kennedy y como consejero sobre Vietnam del presidente Johnson[32].

La caída de Fulgencio Batista en Cuba, el 1 de enero de 1959, a manos del Movimiento 26 de Julio, precipita decisiones e inaugura un segundo momento en los golpes de Estado y la lucha contra las izquierdas en la región. En primer lugar, la Revolución cubana pasa a ser la última gran revolución nacionalista del continente y, en segundo término, la primera socialista, al declarar inmediatamente su carácter popular y antiimperialista. Las lecciones para el imperialismo estadounidense son claras. No habrá una segunda Cuba en el continente. Si el proceso de reformas se escapa de las manos, mejor un golpe de Estado que permitir el ascenso de revolucionarios y comunistas.

El primer país en sufrir el cambio de estrategia será Ecuador. Desde 1948 hasta 1960, tres gobiernos, cuyas ideologías transitan del progresismo modernizador, Galo Plaza (1948-1952), al liberal-populismo anticomunista, Velazco Ibarra (1952-1956), llegando a reincidir en el conservadurismo tradicional de Camilo Ponce (1956-1960), se dan el relevo. En 1960, el triunfo de Velazco Ibarra desata la intranquilidad en las fuerzas armadas. Para algunos, sobre todo la derecha clerical, su anticomunismo debería

haber sido suficiente garantía. Ibarra lo expresó por activa y pasiva, uniendo su aversión al marxismo. No hubo discurso en el cual no lo dejase claro: «Lo primero que haría el marxismo triunfante –como lo demuestran en la Europa Oriental las llamadas democracias populares– sería eliminar con el asesinato, la prisión y el destierro a los cristianos que hoy lo proclaman, si no los sintiera anteriormente adictos al simplismo y maquiavelismo marxista: la conciencia es el resultado de lo económico; para el triunfo de la regulación económica marxista son lícitos todos los medios, incluyendo la traición y la mentira. He aquí en su esencia la doctrina marxista. Entre el marxismo y el cristianismo hay esencial, radical oposición […]. Para el cristiano, la conciencia es cosa del espíritu y es capaz de determinarlo todo, es capaz de crearlo todo y determinarlo todo. Es […] la voluntad del inspirado, del enamorado, del amante, del artista, del apóstol, de Héctor, de Aquiles; ha realizado milagros y permitido que los hombres se sientan señores, árbitros de la familia de Dios»[33].

Velazco Ibarra, caudillo populista, intelectual y católico, apodado «papá Velazco», era a los ojos de la oligarquía una mezcla explosiva, incontrolable. Aun gobernando para la plutocracia terrateniente, esta no se sentía segura. El 7 de noviembre de 1961, fue obligado a dimitir. Velazco señaló: «Me precipité a las botas de los militares». Temporalmente, el poder pasó a Carlos Julio Arosemena, su vicepresidente. A poco de su andadura, perdió la confianza de militares y oligarcas, siendo acusado de mantener posiciones filocomunistas. Considerado un peligro en ciernes, debió hacer frente a una virulenta campaña anticomunista e histérica, alentada desde la Embajada de los Estados Unidos. La mano ejecutora recayó sobre la Iglesia y el clero. Los jefes militares depusieron al presidente, inaugurando una nueva dictadura[34]. La Junta Militar de Gobierno que sustituyó a Carlos Julio Arosemena, el 11 de noviembre de 1963, no deja dudas de la inspiración ideológica que la guió: «Les digo que estamos en el poder en virtud de un imperativo superior de Seguridad Nacional que obligó a las fuerzas armadas a salirse de sus específicas funciones para salvar al país del deshonor, del comunismo y del caos. La Junta Militar…, se propone erradicar completamente el comunismo, salvando así al país de la confusión y el desorden»[35].

Agustín Cueva, uno de los más destacados intelectuales ecuatorianos del siglo XX, afirma: «El clero se encargó de encabezar la cruzada,

organizando manifestaciones gigantescas, especies de procesiones destinadas, dizque, a desagraviar a Dios por las ofensas del comunismo y pedir el rompimiento de las relaciones con Cuba […]. Arosemena rompió relaciones con Cuba en abril de 1962, pero no fue suficiente. La escalada continuó el 11 de julio de 1963, los militares asumieron directamente el poder. En realidad, este golpe no fue sino una de las tantas medidas "contrainsurreccionales" acordadas por el Pentágono y los monopolios en defensa de los intereses imperiales. Como la estrategia comprendía, además de las medidas específicamente represivas, ciertas acciones de carácter económico y social, se imprimió a la nueva dictadura no solo una orientación anticomunista, sino también una tónica reformista conforme a los planes de la "Alianza para el Progreso". Por ello, al mismo tiempo que se encarcelaba, desterraba o torturaba a los hombres de izquierda y clausuraba universidades y sindicatos, la junta militar de gobierno anunció una serie de reformas estructurales que, para marcar tono de tragicomedia, empezó por la nacionalización de las altas cumbres andinas»[36].

En 1964, Brasil se convirtió en el prototipo de golpe militar nacido al interior de la Doctrina de la Seguridad Nacional posrevolución cubana. Para hacernos una idea cabal de esta afirmación, comencemos repasando su historia política. Desde la independencia a finales del siglo XIX, su poder se entrecruza con alianzas cívico-militares. Se puede, al igual que en Bolivia, asumir la propuesta de René Zavaleta, no son los *coup d'état* lo que amerita un estudio, sino lo que cada uno de ellos contiene, convoca o remata. Costa Pinto escribe, aludiendo a los golpes de Estado en Brasil: «Las clases dirigentes de Brasil, como "partido del orden", en nombre del "ultraorden" habían promovido el desorden institucional, estableciendo en 1937 una dictadura de tipo fascista, con fuerte respaldo militar, abandonando su viejo lema "Libertad, igualdad y fraternidad", por "Caballería, infantería y artillería". En 1946, pasada la que definían como crisis y siempre en nombre del "restablecimiento del orden" volvieron al régimen representativo y democrático, que usaron hasta 1964, en que nuevamente lo congelaron, y los militares, para superar la "crisis" y restablecer el "orden", una vez más se instalaron en el poder»[37].

Hay países, y Brasil es uno de ellos, donde la figura política de un caudillo permea gran parte de su historia. Desde los años treinta del siglo XX, Getulio Vargas, para unos dictador, para otros un caudillo populista,

representa un antes y un después en la historia contemporánea de Brasil. Tildado de bonapartista, fascista, nacionalista o antiimperialista, no deja a nadie indiferente. Desde su aparición en la escena política en 1930, hasta su trágico final, suicidándose el 24 de agosto de 1954, pasando la promulgación de la constitución fascista del Estado Novo (1937-1945) y su triunfo electoral en 1950, es considerado uno de los «padres» del Brasil contemporáneo. En la actualidad, facilita la explicación del país en direcciones contrapuestas, partiendo del consenso que ubica el Estado Novo como punto de partida de la tradición del populismo posterior. Tradición que, según los principales sociólogos brasileños, cae bajo los principios del nazifascismo: «La organización de tipo corporativo bajo la cual Vargas articuló la representación frente al Estado de las distintas clases estaba inspirada en los moldes nazifascistas vigentes de la época, que sin duda despertaban la admiración del dictador criollo […]. Concedió a la clase obrera una legislación laboral y una previsión social. Creando, también, un nuevo sindicalismo amarillo a través del cual pasó a ejercer el control estatal sobre el movimiento obrero […]. El varguismo creó, por lo tanto, la tradición política del populismo en Brasil»[38].

Sin duda, hay muchas similitudes con otros dictadores de la época. Su simpatía con el nazifascismo lo acerca a Francisco Franco en España, António de Oliveira Salazar en Portugal o Juan Domingo Perón en Argentina. Getulio Vargas sufre su primer traspié en 1945, siendo derrocado por un golpe de Estado. Sin embargo, ello no lo aparta del poder. Seguirá manejando los hilos desde la tramoya. En este contexto, verán la luz dos partidos políticos, invención del propio Vargas. El Partido Social Democrático, comandado por su ministro de Guerra, el general Enrico Gaspar Dutra, simpatizante nazi; y el segundo, El Partido Trabalhista Brasileño, liderado por Vargas. El Partido Social Democrático agrupa los sectores conservadores agrarios, terratenientes y latifundistas, lo cual facilita el control del voto clientelar de campesinos y proletariado rural. El Partido Trabalhista Brasileño funciona como un escaparate para difundir la obra del caudillo y controlar parte del aparato estatal.

Tras el golpe militar que destituye a Vargas, se produce un llamado a celebrar elecciones. Recordemos que fue un ritual que acompañó la doctrina anticomunista diseñada por la Casa Blanca. Sin censura de prensa, decretando la libertad de presos políticos y la inscripción de los partidos, se

convocan las presidenciales. El ganador, Enrico Gaspar Dutra, anterior ministro de Guerra de Vargas, se proclama vencedor. Anticomunista confeso, entre sus primeras medidas estuvo declarar fuera de la ley al Partido Comunista en 1947. Bajo su mandato se crea la Academia Superior de Guerra, cuyos programas acaban siendo la base ideológica, política de la futura Doctrina de la Seguridad Nacional, inspirando el golpe militar del 1 de abril de 1964.

El derribo del presidente Joao Goulart en 1964 expresa el devenir de la alianza entre la oligarquía y la burguesía desarrollista, construida en los años treinta, con los militares desempeñando el papel de gendarmes, cuando las clases populares irrumpen en la escena y ponen en cuestión el orden político. «Si observamos el proceso brasileño desde una perspectiva amplia, el rasgo más significativo del periodo que se inicia en 1930 es el esfuerzo en la búsqueda de un compromiso entre la democracia formal y un control suficientemente extenso del poder por la oligarquía de base latifundista. El régimen federal, que prevaleció en las diversas constituciones promulgadas u otorgadas entre 1934 y 1966, permitió siempre que el control del Parlamento permaneciese en manos de los grupos oligárquicos […]. A partir de los años cincuenta, cuando se acelera el proceso de industrialización, se hace evidente el dislocamiento del eje central de la política brasileña. El conflicto tradicional entre grupos oligárquicos, que pretendían monopolizar el estado para su propio uso, y los grupos medios que esperaban la democracia formal, el instrumento de modernización de la sociedad brasileña, desaparece como fuerza social capaz de alimentar el proceso político […]. En la medida en que los movimientos de masas iban ganando autonomía, se modificaba el contenido y la forma del proceso político, pasando a un primer plano la problemática de las reformas. La propia resistencia que la oligarquía ofrecía en el Parlamento creaba condiciones para que la politización y la movilización de las masas se intensificasen. De esta forma, la presión en el sentido de modernización institucional se ejercía por los propios canales de la política. Estaba así abierta la puerta al reformismo institucional. Fue el temor a que esa puerta se ampliase demasiado rápidamente lo que llevó el pánico a la clase dirigente, que apeló a las fuerzas armadas a fin de que estas desempeñasen el papel de gendarme del *statu quo* social, cuya preservación pasará a exigir la eliminación de la democracia formal»[39].

El golpe de Estado del 1 de abril de 1964, asestado al gobierno democrático de Joao Goulart por las fuerzas armadas al mando del general Castelo Branco, se transforma en la imagen perfecta de la unidad existente entre modernización y autoritarismo en América Latina. Introduce el principio de *objetivos nacionales,* espacio de poder donde toma cuerpo la Doctrina de la Seguridad Nacional vinculada a combatir la amenaza exterior y el enemigo interno, visualizados como la Unión Soviética, el comunismo y la subversión. En ella, por primera vez, se practica la tortura sistemática, utilizando métodos y técnicas provenientes de las experiencias francesa, estadounidense e israelí. Torturadores profesionales se convierten en instructores y se hacen cargo de los interrogatorios. Los servicios de inteligencia actúan poniendo en movimiento las estrategias de «guerra sucia».

Hasta 1985, los generales que son cabeza visible de la dictadura, Castelo Branco (1964-1966), Costa e Silva (1967-1969), Garrastazú Médici (1979-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) y Batista Figueiredo (1979-1985), actuaron en perfecta sintonía con terratenientes, oligarcas y la burguesía local. La alianza cívico-militar fue perfecta. El expansionismo brasileño y su poder emergente hunden sus raíces en el golpe militar de 1964. Las primeras elecciones libres no serán democráticas. El presidente será elegido por voto indirecto. Las fuerzas armadas seguirán controlando el proceso. «En Brasil, las fuerzas armadas han retenido el control sobre el principal servicio de inteligencia, el SNI, y sobre el Secretariado General del Consejo de Seguridad Nacional. Estos son dos de los grupos administrativos más poderosos adjuntos a la Presidencia. El hecho de que un presidente civil utilice reiteradamente estas instituciones controladas por los militares contribuye a la "militarización" de la oficina de la presidencia. También ayuda a legitimar la participación regular de las fuerzas armadas en el manejo estatal del conflicto interno [...]. No se ha hecho nada para reducir el control militar inicial sobre las partes del aparato estatal que manejan el conflicto interno. El ejecutivo tampoco ha hecho nada para alterar la Doctrina Militar de la Seguridad Nacional, o para modificar las creencias de las fuerzas armadas sobre su rol...»[40]. Los militares brasileños quedarán libres de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. La historia de Brasil se llena de claroscuros.

GEOPOLÍTICA, DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y MODERNIZACIÓN AUTORITARIA

En los años sesenta, las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe protagonizan una revolución que no pasa desapercibida. Tendrán un protagonismo excepcional en la vida política, participando de lleno en su modernización económica y social. Nada les será ajeno.

La geopolítica les brinda el marco para reinterpretar su papel en el interior del Estado: «La concepción tradicional de las fronteras con "bordes nacionales" es válida y correcta. Pero resulta insuficiente en el mundo contemporáneo, ya que excluye un ámbito cada día más interrelacionado con el mundo exterior. Nos referimos a la cultura nacional, verdadera frontera interior […] y, como tal, exige ser preservada, perfeccionada y desarrollada… La cultura nacional como frontera geopolítica es bidimensional, pues presenta dos componentes: uno espiritual y otro material. Entre los factores del primero señalamos a la ciencia, lo moral, lo intelectual, estético, religión, tradición, modalidades socio-políticas y estilo de vida. En los factores del segundo, la técnica, modos de producción y sistemas económicos»[41].

La Escuela Superior de Guerra de Brasil adecuó a las circunstancias de la guerra anticomunista su estrategia de actuación. El pensamiento geopolítico latinoamericano hizo su propia aportación: *la Doctrina de la Seguridad Nacional.* Elaborada por el general Golbery do Couto Silva, recuperó la tradición alemana de la geopolítica y presentó al Estado como «un organismo vivo, con intereses, instinto de conservación, la voluntad de crecer, la voluntad de vivir y la voluntad de poder»[42]. Así, las fuerzas armadas tienen la misión de perseguir objetivos nacionales a través de todas las actividades políticas, económicas, psicosociales y militares que formen las directrices gubernamentales. Su instrumento es el uso indiscriminado del poder nacional. Por consiguiente, la «política nacional» será considerada el conjunto de actividades que abarcan toda la vida de la nación en plano interno y externo.

La imagen de unas fuerzas armadas vinculadas a las estrategias de desarrollo les proporcionó la excusa adecuada para ganar presencia en la vida nacional. Las escuelas militares hicieron campañas de captación en

medio de la guerra contrainsurgente. Estudiantes de bachillerato y universitarios son estimulados a dejar la vida civil e incorporarse a las escuelas de oficiales y suboficiales. Médicos, ingenieros, sociólogos, biólogos, abogados, economistas, matemáticos, químicos, etc., se deciden por los cuarteles. Ya no habría un distanciamiento entre militares y civiles. Los países requerían su presencia. Los necesitaban. Las fuerzas armadas eran una palanca para la transformación social. Es el nacimiento de la alianza cívico-militar capaz de ensamblar la estrategia anticomunista y la desarticulación de las izquierdas. Nacida en los años sesenta, proporciona argumentos legales que sirven en bandeja de plata y legitiman las dictaduras, cuando escuchan el llamado de socorro emitido por la sociedad contra el comunista que acecha y destruye los valores del Estado patrio.

Los militares se vuelven imprescindibles en todos los espacios de la vida nacional. Se construyen relatos épicos. Reciben honores y medallas. Todo forma parte de una estrategia, la construcción de un imaginario en el cual las fuerzas armadas se comprometen a defender los valores patrios y la nación, participando en los planes de desarrollo y modernización. Las fuerzas armadas se convierten en representación del «interés general» de la nación. Tienen metas y objetivos. Sus intervenciones no se producen en el vacío, ni son producto de mentes calenturientas. Sus acciones responden al rol protector asignado en la geopolítica de la seguridad nacional, para levantar el Estado militar.

Los «estados de seguridad nacional» forman parte del entramado construido en torno al nacimiento de la geopolítica. Sus orígenes no se encuentran en Golbery do Couto Silva, sino en el alemán Karl Haushofer, creador del concepto. Su principio es retomado por la escuela latinoamericana, haciendo suyo el postulado sobre el cual levanta la doctrina: «La base científica del arte de la actuación política es la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital»[43].

Osiris Villegas, general argentino, ubica su pensamiento en este plano de análisis, agregándole la tarea de luchar contra el enemigo comunista: «Al estudiar el proceso de adecuación de la infraestructura, en vista del país futuro, frente a una economía distorsionada e ineficiente, se descubren puntos vulnerables a la agresión económica y capaces de generar tensiones sociales e internacionales y servir de vehículo de corrientes ideológicas extremistas. Por otro lado, la subversión comunista, con un pie en América

y apoyada en cuantiosos recursos económicos, puede aprovechar bajos estándares de vida para aumentar su esfera de acción en nuevos países. La propaganda, la infiltración en las más diversas instituciones (políticas, culturales, gremiales, universitarias, vecinales) y las guerrillas, de las cuales ya tuvimos algunos amagos en nuestro país y que han merodeado en nuestras fronteras, son algunas de las etapas que caracterizan dicha subversión. En tal sentido, por afectar el estilo de vida argentino y, por tanto, ser parte del interés nacional, la Seguridad Nacional lleva implícita impedir que el comunismo pueda actuar impunemente en nuestro territorio»[44].

La coordinación regional de los mandos militares latinoamericanos dio fluidez a la doctrina de contención y lucha antisubversiva, unificando ideológicamente sus acciones como garantes del espacio hemisférico y retaguardia defensiva de la democracia. En esta lógica, el TIAR unifica las fuerzas armadas latinoamericanas y pone en evidencia la complicidad de intereses entre las compañías multinacionales, las clases dominantes y la política de seguridad hemisférica impulsada por el imperialismo estadounidense. La invasión de los marines a República Dominicana, en 1965, lo demuestra. Su objetivo, desarticular la insurrección popular encabezada por el coronel Alberto Caamaño, nombrado presidente de la República en medio de una lucha por reponer al presidente Juan Bosch, destituido en abril de 1963. Los Estados Unidos, utilizando la OEA y el TIAR, fomentan la creación de una Fuerza Interamericana de Paz para sofocar el levantamiento popular. Trece países latinoamericanos, encabezados por Brasil, lo secundaron, siete de ellos mandaron tropas; el objetivo no podía ser otro que luchar contra el comunismo y «restaurar la paz y la democracia en República Dominicana». Juan Bosch, presidente de República Dominicana, sentencia: «En Santo Domingo se desató el terror "anticomunista" que se había aplicado en Vietnam del Sur en los tiempos de Diem. En los días que siguieron a la intervención pentagonista en Santo Domingo se descubrió un cementerio de víctimas del terror. Según un estimado conservador, las matanzas de la parte norte de la capital dominicana, ocurridas en el mes de mayo, alcanzaron a unas 2.000. A esas matanzas se las llamó *Operación Limpieza,* hecha, al parecer con autorización de la OEA, por las tropas dominicanas bajo dirección norteamericana. Nunca se le dio publicidad a la ola de crímenes que se

extendió por todo el país después de haber terminado la negociación entre el gobierno del coronel Caamaño y la OEA, esto es, inmediatamente después que se estableció el gobierno provisional encabezado por el Dr. García Godoy. Esa ola de sangre seguía azotando el pequeño país antillano en agosto de 1967»[45].

El carácter intervencionista de las fuerzas armadas es de importancia trascendental, ya que son los ejércitos quienes se arrogaron la condición de juez y parte a la hora de valorar qué gobiernos caían bajo la consideración de «democráticos» y cuáles bajo el calificativo de «procomunistas» o «marxistas». El poder real de las fuerzas armadas se incrementó. Los generales miembros de las Juntas de Estado Mayor se presentan como verdaderos guardianes de la «civilización occidental». Sus mentes habían sido preparadas para asumir esta función redentora. Adoctrinados por Estados Unidos en zona del canal de Panamá, generaciones de oficiales de todos los países de América Latina pasan por las aulas de la tristemente famosa «Escuela de las Américas». Allí tuvieron como lectura obligada títulos que no dejan lugar a dudas acerca de cuál era el enemigo:

> Así es el comunismo. Cómo funciona el Partido Comunista. El dominio del Partido Comunista. Conquista y colonización comunista. El dominio del Partido Comunista en Rusia. La respuesta de una nación al comunismo (redactado por J. Edgard Hoover, exdirector del FBI). Cómo logran y retienen el poder los comunistas. La democracia contra el comunismo, ¿qué hacen los comunistas en libertad? y Cómo controla el comunismo las ideas de los pueblos.

Los cursos, sesgados ideológicamente, forman parte de los planes de estudio. Cada uno dirigido en función del grado militar de los alumnos y su especialización. Las asignaturas y los seminarios para oficiales de información e inteligencia, cuya duración sobrepasaba los quince días, contenían la unidad didáctica: «Comunismo versus Democracia». La existencia de un temario específico de Operaciones de Contrainsurgencia estaba dirigida a tenientes y capitanes; en dicho temario sobresale la asignatura: «Introducción a la guerra especial» o ítems como «Las doctrinas comunistas». En el curso destinado a los coroneles se incluye la unidad temática: «Ideología comunista y objetivos nacionales». Tampoco quedan fuera los policías militares. Para ellos, había una asignatura de título sugestivo: «La amenaza comunista»[46].

De esta guisa, las fuerzas armadas interiorizaron los lineamientos estratégicos diseñados por el Pentágono. En este itinerario diseñado prolijamente se contempla el apoyo *in situ,* además de facilitar el armamento y los pertrechos para cumplir tan destacables misiones. La dependencia del conglomerado industrial militar de Estados Unidos es la puntilla que maniata, definitivamente, las fuerzas armadas latinoamericana.

Así, originalmente, los suministros a las fuerzas armadas latinoamericanas en el periodo de posguerra, dentro del Programa de Ayuda Militar, tomaron el formato de donaciones desinteresadas. El comercio de armamento se realiza bajo el epígrafe de «ventas militares al extranjero». Ambos programas estaban destinados a fortalecer las defensas frente la agresión comunista. «[…] Después del triunfo de la Revolución cubana, la apreciación de Washington de la amenaza a la seguridad en Latinoamérica sufrió una rápida modificación. Cuando el presidente Kennedy asumió su cargo en 1961, los objetivos del Programa de Ayuda Militar y de Ventas de Armas al extranjero fueron completamente trastocados […]. Las bases para la ayuda militar a Latinoamérica cambiaron bruscamente de la defensa hemisférica a la seguridad interna, de la protección de costas y de la acción bélica antisubmarina a la defensa contra la guerra de guerrillas comunista-castrista. El armamento pesado de contrainsurgencia (helicópteros, trasportes blindados, aviones de apoyo cercano, etcétera) encabezaba ahora la lista de armamentos suministrados. […] El secretario de defensa, Robert McNamara, dijo al Congreso en 1967 que “nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas capaces de proporcionar, en unión a la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”. El programa de ayuda del año fiscal de 1968 añadió: “No proporcionará tanques ni artillería, ni cazabombarderos o barcos de guerra. Se hará hincapié en vehículos y helicópteros para la movilización interna y en un equipo de comunicaciones que sirva para una mejor coordinación de los esfuerzos de seguridad dentro del país”»[47].

Con la Guerra Fría en pleno apogeo y la doctrina Truman vigente, la política militar exterior de los Estados Unidos hacia América Latina presentó dos fases: «La primera, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, llega a 1961, cuando se instala en el gobierno estadounidense la administración demócrata presidida por John F. Kennedy.

En ese lapso aquella política puso el acento en la defensa colectiva, fundada en la solidaridad continental, frente a un eventual ataque extracontinental. Tal doctrina permitió a los Estados Unidos lograr, en el plano político, la suscripción en 1947 del TIAR, y en el plano económico, la colocación en el mercado latinoamericano de una parte del material bélico estadounidense sobrante de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. En el segundo periodo, claramente definido a partir de 1961, en que los Estados Unidos inician una redefinición del papel que las fuerzas armadas latinoamericanas tienen que desempeñar en el continente y en sus países, pretendiéndoseles asignar exclusivamente la misión de guardianes del orden interno»[48].

El ideal de una sociedad ordenada, libre de la amenaza comunista y sin el peligro que representaba el socialismo-marxista se teorizó en el encuadre de la guerra total y el estructural-funcionalismo radical. Las reivindicaciones democráticas, nacidas a la luz de las luchas por la independencia económica, la soberanía política, serán demonizadas y consideradas parte de un plan desestabilizador urdido por la infiltración del marxismo-leninismo. «En este contexto es fácil comprender que los mecanismos de control social o de mantenimiento del orden social sean vistos en términos de una "cirugía social primitiva". Las relaciones sociales y complejas y lentas deben estar ahora regidas por el principio fundamental de la eficiencia, en razón de objetivos superiores fijados jerárquicamente. Si el consenso es difícil de lograr, si la racionalidad democrática constituye un campo de juego de fuerzas demasiado incontrolable, entonces hay que aplicar el "bisturí social". Hay que aplicar herramientas de la guerra a la interacción de los colectivos sociales»[49].

Bajo este razonamiento, la frase atribuida a Henry Kissinger, aludiendo al dictador Augusto Pinochet, «necesitábamos un cirujano y contratamos a un carnicero», cobra fuerza. Y si hubiese dudas, es el dictador Augusto Pinochet quien lo aclara en su discurso de conmemoración del golpe en 1976: «Como otros países del mundo y especialmente América Latina, Chile ha recibido el embate del marxismo leninismo y ha decidido enfrentarlo y combatirlo hasta su total derrota. Pero ante ello cabe hoy detenerse un instante a reflexionar sobre un problema capital: ¿en qué consiste exactamente este enemigo en el mundo de hoy? El marxismo no es una doctrina simplemente equivocada, como ha habido tantas en la historia.

No, el marxismo es una doctrina intrínsecamente perversa. Es además una agresión permanente, hoy al servicio del imperialismo soviético». Los aplausos llenaron el recinto. Tres años habían pasado desde que otro de los golpistas, miembro de la Junta Militar, el comandante de la fuerza aérea, Gustavo Leigh, pronunciara su objetivo: «Tenía que erradicar el cáncer marxista de raíz».

Esta percepción generalizada entre miembros de las fuerzas armadas trajo consigo una interpretación maniquea: cualquier demanda política, social o económica se consideró un síntoma de infiltración comunista. Muchos gobiernos democráticos-burgueses fueron víctimas de golpes de Estado inducidos por tal visión apocalíptica. La acción conjunta de Estados Unidos y las burguesías criollas, amenazadas por un desborde popular, no aceptaban reformas ni cambios democráticos fuera de su control.

Hemos analizado la ascensión de Manuel Odriá en Perú (1950), Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954), Carlos Castillo Armas en Guatemala (1954), Oswaldo López Arellano en Honduras (1963) y nuevamente en Guatemala, impidiendo la elección de Arévalo en 1963. Igualmente, la invasión a República Dominicana, tras el golpe de Estado que apartó a Juan Bosch del poder en 1963. La plaga de golpes de Estado se extiende hasta los años setenta del siglo XX. Pocos países se salvan. La Doctrina de la Seguridad Nacional deja una secuela de dictaduras: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras.

La guerra interna abrió las puertas a la militarización de la sociedad. La seguridad se entendió como parte de una guerra donde la subversión y el comunismo roían las bases democráticas de las instituciones. Son las bases de una política que hoy sobrevive en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico o los movimientos antisistema.

La cuasi uniformidad –en el contenido y el discurso– de los golpes de Estado fue expresión de un fascismo criollo representativo del accionar político de los ejércitos latinoamericanos. Como vimos, educadas en la Escuela de las Américas y bajo el estricto control del Pentágono, promociones enteras de oficiales pasaron por sus aulas. Hasta 1975 se habían graduado en sus instalaciones: «33.147 alumnos en la USARSA, muchos de ellos ocuparon cargos en sus gobiernos. En octubre de 1973, más de 170 graduados eran jefes de gobierno, ministros, comandantes,

generales o directores de los departamentos de inteligencia de sus respectivos países»[50].

El Estado militar adquiere consistencia política. Las fuerzas armadas se posicionan ante la nueva tarea que el deber les impone. La frase del general Juan Carlos Onganía «no tengo plazos, sino objetivos», pronunciada al derrocar al presidente Humberto Illia, en 1966, responde a un tipo de golpe en el cual las fuerzas armadas se consideran fundantes de un orden social. No actúan para restaurar o reponer a las viejas oligarquías y las burguesías modernizadoras. Bajo la geopolítica de la frontera ideológica se plantean recomponer el mapa de las fuerzas vivas del Estado en su misión regeneradora. El marxismo, el comunismo internacional y la subversión son el enemigo a combatir, amenazan la seguridad interna, a lo cual se suma la agresión extracontinental, ideológica, económica dirigida por la Unión Soviética. La militarización del Estado, supuso

> una ruptura y planteó la exigencia de distinguir estas modernas dictaduras militares latinoamericanas de las formas «clásicas» de intervención militar […]. En la situación actual de América Latina, la intervención de las fuerzas armadas tiene un significado bien diferente: no se trata ahora del pronunciamiento de un caudillo militar, sino de la propia institución castrense en su totalidad, la que «ocupa» militarmente los aparatos de Estado proyectando su propia estructura jerárquica del poder sobre el escenario de la organización estatal. Aquí aparece entonces un fenómeno que nos parece inédito, a saber: *el surgimiento de las fuerzas armadas como el partido orgánico de la gran burguesía monopólica y sus fracciones aliadas afrontando un periodo de crisis hegemónica. Es, pues, la propia institución militar la que aparece como «el partido del orden» en un momento en que entran en crisis las diversas formas populistas con las cuales pretendió resolver, durante varias décadas, la quiebra del estado oligárquico.* La cuestión de la hegemonía burguesa es entonces resuelta provisionalmente por el capital monopólico internacional, que dirige una coalición que también incorpora a otros sectores de las clases dominantes y algunas capas de la pequeña burguesía. Por consiguiente, el «estado militar» pasa a ser el recurso mediante el cual se pone fin a un extenso periodo de crisis orgánica y se refunda la supremacía burguesa[51].

La institución militar presenta metas políticas. Las fuerzas armadas han llegado para quedarse y cumplir un programa preestablecido. El orden institucional vigente lo consideran caduco. En su lugar deben levantar un modelo capaz de hacer frente a la amenaza de las izquierdas, el marxismo-socialista y el comunismo internacional. «La construcción de este nuevo orden es presentada como una tarea a larguísimo plazo, que ellos mismos

definen como una revolución, que debe ser comandada por un gobierno militar-tecnocrático»[52].

En ocasiones, dicen actuar obligados ante el clamor del pueblo que pide angustiado su intervención salvadora. Pinochet declara en 1974: «Ustedes saben que el pueblo oraba por su salvación y que hoy se siente libre y apartado del mal» y, en otro discurso: «Ustedes deben saber que el movimiento del 11 de septiembre fue especialmente dirigido a salvar la parte espiritual del país… porque estábamos cayendo en el marxismo materialista ateo donde se pierde lo más grande que tiene el hombre, que es la parte espiritual […]. Es así que quien analiza el pronunciamiento militar de 1973 y estudia causalmente cómo se produjo llega al convencimiento de que aquí estuvo presente la mano de Dios»[53].

Bresser Pereira, sociólogo brasileño, acuñará el concepto de *tecnoburocracia militar* para definir el sentido y papel que se arrogan las fuerzas armadas para justificar los golpes de Estado: «Los militares asumen el poder político no solo en nombre de su competencia militar, sino también en nombre de su competencia civil. Esto no significa que los grupos civiles no sean capaces de administrarse a sí mismos. En un país como Brasil, por ejemplo, la primera revolución militar del tipo que estamos analizando ocurrió en 1930. Pero los militares, en esa ocasión, restituyeron el poder a los civiles. En 1964, cuando el poder civil y el esquema político establecidos treinta y cuatro años atrás entraron en crisis y se produjo un vacío de liderazgo civil en el país, los militares, ya plenamente tecnoburocráticos, asumieron el poder con ánimo de conservarlo»[54].

Nuevamente, Augusto Pinochet expone esta tesis con claridad meridiana en el discurso considerado el más importante de la dictadura, pronunciado en ocasión del Día de la Juventud, el 9 de julio de 1977, en Cerro Chacarillas. Rodeado de sus incondicionales y en medio de la noche con banderas al viento y antorchas, al mejor estilo fascista, el dictador puso las cartas boca arriba: «Para un adecuado enfoque […] es conveniente reiterar que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo y fracasado, sino que representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo […]. Estamos frente a una tarea que, por su naturaleza y envergadura, debe ser gradual. De este modo, nos alejamos por igual de dos extremos: el del estancamiento, que más tarde o más temprano

siempre conduce los procesos sociales a rupturas violentas, y el de la precipitación, que traería consigo la rápida destrucción de todo nuestro esfuerzo, el retorno del régimen anterior con sus mismos hombres y vicios y, muy pronto, un caos similar o peor al que vivimos durante el gobierno marxista. El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la recuperación, la transición y la normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las fuerzas armadas y de orden, y a la civilidad, por otro».

La modernización autoritaria se convirtió en parte del debate teórico y político. La discusión tuvo distintos matices. ¿Cuál era el carácter de las dictaduras? ¿La Doctrina de la Seguridad Nacional, reproducía la geopolítica del fascismo? ¿Las fuerzas armadas propugnaban un modelo económico específico? ¿Cabía la categoría fascismo dependiente? ¿Qué tipo de relaciones sociales producían? Las ciencias sociales latinoamericanas, en los años setenta y ochenta del siglo XX, se volcaron en satisfacer y responder dichas preguntas[55].

Las fuerzas armadas se hicieron cargo del «combate» contra el comunismo, la subversión y, de paso, tomaron en sus manos las directrices de la política económica. Las experiencias golpistas en Brasil, en 1964, Argentina, en 1966 y en Uruguay y Chile en 1973 originan la definición que caracteriza a los regímenes políticos vinculados a la Doctrina de la Seguridad Nacional como creadores del nuevo Estado Autoritario Burocrático. Tal definición fue propuesta por Guillermo O'Donnell: «El término "burocrático autoritario" (BA) no tiene virtud estética, pero sirve para sugerir algunas de las características utilizables para delimitar un tipo de Estado que debe ser distinguido de otros, también autoritarios, que han sido mucho más estudiados –el autoritarismo tradicional, el populismo y el fascismo–. En América Latina el Estado BA surgió en la década de los sesenta en Brasil y Argentina, y algo más tarde en Uruguay y Chile […]. Las características definitorias del tipo BA son: a) las posiciones superiores de gobierno suelen ser ocupadas por personas que acceden a ellas luego de exitosas carreras en organizaciones complejas y altamente burocratizadas: fuerzas armadas, el Estado mismo, grandes empresas privadas; b) son sistemas de exclusión política, en el sentido de que apuntan a cerrar canales de acceso al Estado al sector popular y sus aliados, así como a desactivarlos políticamente, no solo mediante la represión, sino también por medio del

funcionamiento de controles verticales (corporativos) por parte del Estado sobre los sindicatos; c) son sistemas de exclusión económica, en el sentido que reducen y postergan hacia un futuro no precisado las aspiraciones de participación económica del sector popular; d) son sistemas despolitizantes, en el sentido que pretenden reducir cuestiones sociales y políticas públicas a problemas "técnicos", a dilucidar mediante interacciones entre las cúpulas de las grandes organizaciones arriba referidas; e) corresponden a una etapa de importantes transformaciones en los mecanismos de acumulación de sus sociedades, las que a su vez son parte de un proceso de "profundización" de un capitalismo periférico y dependiente, pero –también– dotado ya de una extensa industrialización»[56].

El proceso de transnacionalización y desnacionalización llevado a cabo por las dictaduras militares en los años 70 y 80 no siempre fue acompañado por la aplicación irrestricta de políticas neoliberales. Las dictaduras de los años sesenta se inscriben en la modernización autoritaria bajo patrones keynesianos. Brasil impulsó la participación del Estado en las políticas industrializadoras, acorde con su estrategia geopolítica de expansión del ideario nacionalista. Fue llamado «el milagro brasileño». Igual sucedió con las dictaduras de Juan Carlos Onganía en Argentina, o las preexistentes de Stroessner en Paraguay y Banzer en Bolivia. Fue la llegada de los «chicago boys», impulsores ideológicos del golpe de Estado en Chile, quienes asumieron la tarea de alterar el modelo de desarrollo hegemónico conocido como sustitución de importaciones o crecimiento hacia adentro. Dejemos que sean ellos quienes hablen:

> A contar de 1975 los economistas se despliegan en el gobierno y ocupan palancas de mando. Todo se hace bajo la conducción del presidente de la República. Él es el que nombra, dirige, vigila y sanciona. Cabe preguntarse por la causa o las causas que determinan la actitud del presidente en favor de esta línea económica, apoyada por él hasta donde le ha sido posible políticamente. En los economistas con estudios en la Universidad de Chicago y en la Universidad Católica, así como gremialistas de la misma universidad que dirige Jaime Guzmán, se aprecia una línea intransigente de oposición a la Unidad Popular, al socialismo y a los valores, normas y prácticas que configuran el modelo chileno de los últimos cincuenta años. Forman una neoderecha, una resurrección de principios inherentes al liberalismo, así como una reviviscencia de fórmulas autoritarias portalianas, a la que sus mentores atribuyen raíz hispana y monárquica […]. Estos comandos constituyen […] la vanguardia que abre el camino al avance de la revolución nacional que preconiza Pinochet y que vive en el anhelo de las fuerzas armadas, tal vez inconsciente, de una revolución nacional –no necesariamente nacionalista– […]. No es fácil que este comando político, y sobre todo económico, surja de las fuerzas armadas originalmente.

> Los militares tienen otra misión […]. Son los civiles los encargados de quebrar prejuicios y remozar la política[57].

Fue el comienzo de una nueva fase. El modelo chileno gana terreno. Privatizaciones, desregulaciones, preeminencia del capital privado en la asignación de recursos, flexibilización del mercado laboral, apertura financiera y comercial. Un nuevo marco institucional recibe la reforma neoliberal. Los años ochenta están marcados por su hegemonía. Para que esta estrategia diera sus frutos, se construyó una renovada alianza entre militares y civiles. Se atacó el poder de una parte de las burguesías nacidas al calor del desarrollismo. El mejor ejemplo de esta nueva realidad lo marcó la posición de la democracia cristiana chilena. Primero, participando en el golpe militar bajo el discurso antimarxista y luego, al ver cómo sus empresarios y dirigentes más señalados eran desplazados a la hora de articular las nuevas políticas económicas, mostró sus discrepancias. Eso no fue óbice para que muchos de sus dirigentes se incorporaran a prestar servicios a la dictadura desde una postura apartidista. Su apoyo a la dictadura lo deja claro el expresidente Eduardo Frei Montalva en carta al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana de fecha 8 de noviembre de 1973, es decir, a dos meses del golpe: «Todos los chiles, o al menos la inmensa mayoría, estamos vitalmente interesados en que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Y para esto es necesario que el país salga del caos y que, en consecuencia, el gobierno actual tenga éxito. Las fuerzas armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición. Su fracaso sería el fracaso del país y nos precipitaría a un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de consideración partidista, quieren ayudar porque creen que esta es la condición para que se restablezcan la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida»[58].

Orlando Leterier, exministro de Allende, asesinado en Washington por orden del dictador, dentro de la *Operación Cóndor,* aclaró cuál era el sentido de esta misteriosa alianza: «Mientras los *Chicago boys* han proporcionado una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de *laissez faire* y a la codicia política de la oligarquía terrateniente y de la alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han

usado la fuerza bruta requerida para su implementación. La represión de las mayorías y la “libertad económica” para un reducido número de grupos privilegiados son en Chile dos caras de una misma moneda»[59].

Desde entonces y hasta hoy, esta alianza se ha mantenido en Chile y el continente, solo que las fuerzas armadas se han retirado a sus cuarteles de invierno como gendarmes del proceso. Los casos de Honduras y Paraguay son un ejemplo de lo expuesto. Donde las políticas neoliberales han sido derrotadas en las urnas, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador, las burguesías gerenciales desplazadas del poder, con apoyo del imperialismo norteamericano y ahora las democracias europeas, fieles aliadas de sus intereses, buscan su reversión apoyando procesos desestabilizadores.

CHILE, HISTORIA DE UN GOLPE DE ESTADO. LA FORMACIÓN DE LA NUEVA DERECHA

A mediados de los años sesenta del siglo XX la burguesía chilena decidió poner fin al régimen político existente, no importando que gobernase la Democracia Cristiana con su «revolución en libertad» o la izquierda, liderada por Salvador Allende. Su crítica era de fondo: había que cambiar el orden constitucional y dotar al país de una nueva institucionalidad. Según su diagnóstico, la democracia había sido penetrada por ideologías disolventes de la identidad nacional. Su objetivo, instaurar un orden totalitario marxista-leninista, mediante la dictadura del proletariado, atizando el odio y promoviendo la lucha de clases. Era obligado actuar en consecuencia.

En 1966, los partidos liberal, conservador y acción nacional confluyen en un proceso refundacional. La naciente organización se proclama nacionalista, defensora de la empresa privada, del progreso personal, el esfuerzo individual, antiestatista, promotora de la economía de mercado y contraria al discurso político condescendiente con el comunismo. En su declaración de intenciones llaman a «todos los chilenos a participar en una gran lucha para vencer su sensación de inferioridad y de fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, a entregarse a ideologías foráneas y a

sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estatismo deprimente». La organización tomó el nombre de Partido Nacional.

En 1968, Mario Arnello, uno de sus líderes del Partido Nacional, subrayaba: «Nadie que sea partidario o aliado del marxismo, que pretenda imponer el socialismo y un estatismo absorbente, puede ser defensor de la clase media. La clase media es fruto de la libertad personal, del respeto a la ley y al derecho, y, en especial, de la libertad de trabajo y de la iniciativa individual. Y solo en este ambiente puede la clase media desenvolverse y prosperar». Mientras tanto, su presidente, Sergio Onofre Jarpa, baluarte de la trama civil del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, escribía, ese mismo año: «Estamos al fin de un mundo, del mundo que nació con la Revolución francesa y que ha culminado con la revolución comunista, demostrando el fracaso de los anhelos de la libertad en la lucha contra el absolutismo […]. Al final de esta era se ofrece un nuevo absolutismo, más odioso y más denigrante […]. El socialismo no es el mundo nuevo, es la última etapa de una edad ya vivida y de una civilización que ha culminado con una filosofía materialista, que no responde a los anhelos del hombre actual»[60].

A partir del 4 de septiembre de 1970, el Partido Nacional se dio a la tarea de boicotear el proyecto de la Unidad Popular, mostrando su furibundo rechazo a las medidas tomadas por el gobierno de Salvador Allende. Conspiraron. Tras el golpe de Estado, su dirección tomó la decisión de autodisolverse; la razón, su programa político, dirían, estaba siendo desarrollado por las fuerzas armadas y la Junta Militar de Gobierno. Sus miembros se incorporaron a la dictadura ocupando diferentes puestos de responsabilidad[61].

Por otro lado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, un grupo de jóvenes estudiantes desafectos de la política tradicional, cuyo papel será determinante en el golpe de Estado, emerge con fuerza en 1967; son los *«gremialistas».* Liderados por Jaime Guzmán, ideólogo de Pinochet y coautor de la vigente Constitución chilena, se declararon apolíticos. Y desde su manifiesto contra la Reforma Universitaria desplegaron sus banderas. «El frente gremialista se opone a un determinado concepto ideológico partidista de la Universidad; en otras palabras, postulamos la apoliticidad de la Universidad y los organismos gremiales de ella. ¿Cómo enfrentamos esto? Los gremialistas queremos una Universidad que no sea

ni comunista, ni nacional, ni socialista, ni radical. Estimamos que ella debe ser pluralista en lo ideológico, democrática en el más puro sentido de la palabra»[62]. Admiradores de la dictadura de Francisco Franco, encuentran su ideario en Ramiro de Maeztu y José María Pemán. Detractores del Estado liberal se atrincheran en las concepciones tradicionalistas de la Iglesia católica y el hispanismo, cuyo representante en Chile fue el historiador Jaime Eyzaguirre. Su propuesta consistía en instaurar una democracia autoritaria, corporativa y sin la tutela de los partidos políticos. Sus planteamientos tuvieron cabida en la Constitución de 1980, donde Chile se definía como una «democracia protegida y autoritaria». Profundamente antiestatistas, su gremialismo «estaba inspirado en el corporativismo y el funcionalismo […]; creían en el protagonismo de los cuerpos intermedios, ajenos a toda interferencia política partidaria o ideológica, dando al Estado un rol subsidiario». Sus publicistas señalaban que «el corporativismo había nacido como una alternativa al liberalismo y al marxismo, tal como lo reflejaba la encíclica *Quadragessimo anno*»[63]. Convergentes con el Partido Nacional, tomaban distancia y minimizaban, cuando no despreciaban el papel del Estado y los partidos políticos. Fueron los primeros en impulsar la movilización popular bajo la fórmula del gremialismo y el apoliticismo. Algo totalmente nuevo para una derecha que menospreciaba la acción de masas.

Entre 1970 y 1973, tomaron las calles de todas las ciudades de Chile. Suya será la convocatoria de las mujeres a manifestarse el 2 de diciembre de 1971 contra el gobierno del presidente Salvador Allende, conocida como «Marcha de las Cacerolas Vacías». El gremialismo y los partidos de la derecha tenían experiencia. En 1963 se crea el colectivo «Acción de Mujeres de Chile» para luchar contra el comunismo. En 1964 apoyan la candidatura de la derecha y se incorporan a la campaña del terror, aduciendo que las madres, si triunfa el marxismo, serían obligadas a entregar a sus hijos al Estado. Tras la Marcha de las Cacerolas Vacías, sus principales líderes, María Correa, dirigente del Partido Nacional, Elena Larraín, Carmen Sáenz y Teresa Maillet, cercanas a la democracia cristiana y el gremialismo, fundan la organización Poder Femenino.

> Las representantes del Partido Nacional, del Partido Demócrata Cristiano y del gremialismo ejercieron fuerte influencia en Poder Femenino. Cada una de estas mujeres y los grupos que

> representaban contribuyeron con determinados elementos que acentuaron la capacidad de Poder Femenino para organizar un movimiento femenino militante, diversificado, opuesto a Salvador Allende. Las representantes del PN ante PF llevaron consigo su inamovible determinación de sacar a Salvador Allende del poder. Durante el año y medio siguiente, su claridad de visión les permitió defender actuaciones cada vez más militantes contra el gobierno. Además, por su militancia en el Partido Nacional, tenían acceso a recursos económicos, a los medios de comunicación, la elite y las fuerzas armadas. Por ejemplo, Silvia Alessandri, quien obtuvo el permiso para la Marcha de las Cacerolas Vacías y trabajaba en Poder Femenino, era diputada por el Partido Nacional e integrante de la Comisión de Defensa del Congreso. En tal calidad, se reunía con frecuencia con oficiales del ejército y analizaba la situación política. Las representantes de la Democracia Cristiana dieron fuerte apoyo a las iniciativas del Poder Femenino por ampliar la movilización más allá de las bases de clase media y alta. Con la influencia que tenían en los Centros de Madres, impulsaron a numerosas mujeres pobres y de clase obrera a tomar parte en el movimiento antiallendista […]. El partido animaba a esas mujeres tanto a asistir a las marchas antiallendistas como a oponerse a las iniciativas de la Unidad Popular en escala comunitaria […]. Las representantes del movimiento gremialista ampliaron aún más los vínculos de Poder Femenino y facilitaron el contacto entre el movimiento y muchos de los gremios profesionales (médicos, abogados, ingenieros y periodistas); los pequeños empresarios, especialmente los combativos dueños de camiones y los empleados de oficina, se adhirieron al grupo. Con estas relaciones, la red de Poder Femenino pudo extenderse más allá de la clase alta y facilitó a sus integrantes una gama más amplia de asuntos en los cuales centrar su movilización. Por ejemplo, en octubre de 1972 y en agosto de 1973, cuando los camioneros se declararon en huelga, Poder Femenino organizó una colecta de puerta en puerta dirigida a reunir alimentos para los huelguistas. Durante los años de la Unidad Popular, Elena Larraín, dirigente del Poder Femenino, sostuvo reuniones semanales con destacadas figuras de la derecha independiente, para analizar la situación política y planificar las próximas actividades. A la hora de almorzar, conversaba sobre tácticas y estrategia de oposición con Jorge Alessandri, expresidente (1958-1964) y excandidato derrotado, Eduardo Boetsch, exdirigente de Chile Libre y Jaime Guzmán, dirigente e ideólogo del gremialismo. Elena Larraín sirvió de canal entre Poder Femenino y este importante sector de oposición en materia de información y planificación[64].

El gremialismo participó activamente en las huelgas de comerciantes, camioneros, mineros y estudiantes. Tras el golpe militar, se convierten en los hacedores del proyecto de un «nuevo Chile». Desde la Secretaría General de la Juventud, ejercieron su influencia política. De ambas tradiciones, nacionales y gremialistas, nacerán, tras las grandes protestas iniciadas en 1983, los dos grandes partidos que hoy identifican a la derecha chilena: Renovación Nacional (RN), cercano al primero, y Unión Demócrata Independiente (UDI), al segundo.

En medio de esta polémica refundación, la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei como presidente del país (1964-1970), decía encarnar los valores de una sociedad libre, democrática y cristiana. Se autoproclama la

tercera vía. Ni comunista ni capitalista. Partido adscrito a la doctrina social de la Iglesia, estaba fuertemente influenciado por Falange Española. Su uniforme militante era la camisa azul y como insignia portaban una flecha con dos barras en su cuerpo central. Con el triunfo de la Unidad Popular, su dirección nacional se deslizó a posiciones golpistas. Su líder, Eduardo Frei Montalva y «colaboradores», Patricio Aylwin, Andrés Zaldívar y Juan de Dios Carmona, desplazaron a los sectores «constitucionalistas». Sus acciones para evitar el triunfo de Salvador Allende fueron financiadas por el Pentágono y la Casa Blanca. En 1972, el periodista Jack Anderson las sacó a la luz. Se conocieron como *Los documentos de la CIA y la ITT en Chile.* En ellos aparece la trama urdida por la administración Nixon- Kissinger, con la anuencia del presidente Frei, para impedir la llegada de Allende a La Moneda. Su objetivo era comprometer a las fuerzas armadas en un golpe de Estado preventivo. Así se lo hizo saber Frei a Kissinger: «El presidente Frei ha dicho privadamente a sus más allegados colaboradores, a Alessandri y a un enviado del Departamento de Estado, durante el último fin de semana en Viña del Mar, que el país no puede ser entregado al comunismo y que es preciso impedir que Allende asuma el gobierno»[65].

Una vez ratificado el triunfo de la Unidad Popular con el 36,4 por 100 de los votos, el 4 de septiembre de 1970, se buscó colapsar la economía del país. En boca de Richard Nixon, había que hacer temblar la economía chilena. A lo cual Henry Kissinger, secretario de Estado, apostilló: «No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo». El mercado negro del dólar y el bloqueo económico fueron sus opciones. El entonces ministro de Hacienda de Frei, Andrés Zaldívar, en discurso televisado el 23 de septiembre de 1970, pintó un panorama desolador, culpando de la situación económica al triunfo de la Unidad Popular. Era la carta para inducir a los militares a tomar una decisión fundamentada en el papel asignado a las fuerzas armadas en la formación de la identidad chilena: «El ejército, impregnado del alma colectiva de la nación, constituye la organización que se da el pueblo para su defensa […]. Pero no solo la defensa física, sino también la defensa de lo permanente y de la esencia de los valores de la patria, cuya salvaguardia se configura especialmente en el Ejército»[66].

Entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre, fecha en la cual el Congreso debía ratificar los resultados electorales, Estados Unidos, en complicidad con Eduardo Frei, buscó crear el caos, provocando el cierre de entidades financieras y grandes empresas, azuzando la bandera del comunismo que venía. En el memorando enviado a Hal Hendrix, sito en el cuartel general de ITT, el 29 de septiembre de 1970, Roberto Berrellez, coordinador en Buenos Aires, detallaba la maniobra: «Las actuales posibilidades de frustrar la asunción del poder por Allende se sostienen fundamentalmente en el colapso económico estimulado por algunos sectores de la comunidad política y por el mismo Presidente Frei. A este respecto, las próximas semanas serán decisivas. Hay poco dinero en efectivo. Pero el gobierno está imprimiendo más dinero. Hay un activo mercado negro; el escudo se cotizaba a 28 por dólar en lunes 28 de septiembre, ha bajado a 26.50 el viernes. El precio antes de las elecciones era de 20/21 escudos por dólar. Se realizan esfuerzos clandestinos para lograr el quiebre de una o dos de las asociaciones de ahorro y préstamo más importantes. Se espera que esto desencadene una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas para producir desempleo. […] Frei le dijo a alguno de sus ministros que estaría dispuesto a ser derrocado por un golpe militar. Esto lo absolvería de cualquier complicidad en un golpe que, a su vez, liquidaría a Allende…»[67].

Fracasaron. Pero se guardaron una carta: el secuestro del general en jefe del ejército, René Schneider, a manos de miembros de las fuerzas armadas encabezados por el general Viaux. Su objetivo, decantar la decisión del Congreso eligiendo a la segunda mayoría relativa, Jorge Alessandri, quien obtuvo el 34, 4 por 100 de los votos. La resistencia que opuso el general Schneider, haciendo uso de su arma reglamentaria, acabó en asesinato. Desde ese instante, el imperialismo, la derecha política, la oligarquía terrateniente y la burguesía chilena unieron fuerzas. El 11 de septiembre de 1973, su estrategia había triunfado. Las fuerzas armadas alzaban sus armas contra el gobierno legítimo y constitucional, y recibían el apoyo del pueblo chileno, enarbolando, para la ocasión, los valores patrios amenazados por el marxismo-leninismo y la subversión comunista. Así lo hizo saber en el *Bando* n.º 5 del 11 de septiembre de 1973:

> Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general, a una digna y segura subsistencia; que el gobierno ha quebrantado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probablemente fracasadas […], las fuerzas armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría social, la cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y, por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone a cumplir.

Tres fueron los elementos esgrimidos por las fuerzas armadas para romper el orden constitucional: I) el caos económico y la violencia política; II) la inconstitucionalidad del gobierno en el ejercicio del poder, y III) un supuesto autogolpe, adjetivado como Plan Zeta, orquestado por la Unidad Popular para tomar el poder, destituir a la cúpula del ejército y los partidos políticos de la derecha, decretando la instauración de la República Popular bajo la bandera de la dictadura del proletariado y, de paso, asesinar a los principales opositores. Estos tres elementos fueron urdidos como parte de la estrategia para dar «legitimidad» al golpe de Estado del 11 de septiembre. El primero, el caos económico y la violencia política, sigue vigente para explicar la política económica de la Unidad Popular. Sus argumentos se centran en la condescendencia mostrada por el gobierno hacia la toma de terrenos urbanos por los pobladores sin casa, la ocupación de latifundios por campesinos e industrias por trabajadores. Todo aderezado con la crítica a la nacionalización y expropiación de grandes empresas, provocando –dirán– inseguridad jurídica y un ataque a la propiedad privada. Nada dicen del acaparamiento de mercancías, repuestos automotrices, alimentos, etcétera, destinados a fomentar el mercado negro y el desabastecimiento. Una trama perfectamente diseñada para provocar desazón popular y desafección al gobierno.

Los primeros productos en desaparecer de los establecimientos fueron aquellos que psicológicamente producen un estado de ánimo bronco: el jabón, la pasta de dientes, el azúcar, el papel higiénico, la harina, el aceite, el té o el tabaco. Así lo señala Eduardo Frei a la hora de justificar el apoyo

de la Democracia Cristiana a la Junta Militar de Gobierno y a Pinochet, en carta dirigida a Mariano Rumor el 8 de noviembre de 1973, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: «¿Era la Democracia Cristiana fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, el mercado negro, a la escasez y el hambre? Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberían venir y recorrer las poblaciones periféricas, los campos y las ciudades y preguntar cómo eran necesarias hasta diez horas de colas para conseguir 1/4 de litro de aceite, cuando se conseguía, o un kilo de pan, cuando se conseguía, o medio kilo de azúcar, cuando se conseguía. ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, escasez y el mercado negro? ¿Es fascismo y golpismo denunciarlo? […] Las fuerzas armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar porque creen que esta es la condición para que se restablezcan la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida»[68].

La Unidad Popular pasó a la historia oficial como articuladora de un proyecto económico fracasado, totalitario y estatista, generador del caos. De tal manera, las fuerzas armadas estarían facultadas para intervenir, restablecer la estabilidad económica, la libertad de mercado y la paz social. Así nació el discurso neoliberal de un nuevo Chile ganador, de un país diferente al resto de América Latina, y moderno, precursor de la globalización gracias a la acción eficaz de las fuerzas armadas[69].

El segundo argumento, la ilegitimidad del gobierno en el ejercicio del poder, se fue construyendo poco a poco. Solo hacía falta poner en consonancia el poder judicial, el legislativo y la Contraloría General del Estado, a lo que se sumarían colegios profesionales, Universidades y medios de comunicación controlados por la derecha. Sin pudor se trató de arrinconar y vetar todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo, cuestionando la posible constitucionalidad de sus medidas. Primero fueron acusaciones a sus ministros y una campaña mediática perfectamente orquestada. Y a partir del frustrado intento de la derecha de conseguir los dos tercios del Congreso para destituir constitucionalmente al presidente en

elecciones del 4 de marzo de 1973, se opta por el golpe de Estado. La intentona del 29 de junio representó un punto de inflexión. Lo siguiente fue elaborar un estudio demostrando el fraude electoral cometido por la Unidad Popular en las legislativas de marzo. Dicho estudio se financió desde la Universidad Católica y fue presentado a la opinión pública en julio de 1973. Sus argumentos, la progresión de los votos de la Unidad Popular, según ellos, iba en franco retroceso y no podía, salvo fraude, obtener más del 35 por 100. Cualquier cifra superior, llegó al 47 por 100, significaba que el censo electoral había sido modificado en su beneficio. Las elecciones eran papel mojado. Nada más que decir. Para corroborar su hipótesis, apostillaban que el sentir mayoritario de los chilenos era destituir al presidente. El documento circuló profusamente entre las fuerzas armadas. A continuación, como parte de la trama, la Contraloría General del Estado declaró parcialmente inconstitucional el decreto que reformaba las tres áreas de la economía presentado por el ejecutivo. Nada más producirse ese hecho, el 8 de julio, Eduardo Frei, presidente del Senado y en conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, en declaración conjunta, señalaron que Chile vivía un momento de crisis de extrema gravedad, debido a que una minoría había querido «imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza». A continuación, el colegio de abogados declaró que en Chile se había roto el ordenamiento jurídico. Y en un acto sin precedentes, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redactó una declaración cuyo destinatario era el presidente Allende. En su interior se subrayaba la ilegitimidad del gobierno. En su epígrafe 5.º y 6.º señalan: «5.º […] es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; 6.º Que para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república y permitiendo y

amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho».

La respuesta de Salvador Allende no se hizo esperar: «[…] Los diputados de oposición han exhortado formalmente a las fuerzas armadas y carabineros a que adopten una posición deliberativa frente al poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas […]. Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria».

El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de carabineros echarían mano de todo este aparato conceptual proporcionado por quienes urdieron la trama civil del golpe. Será el contraalmirante Ismael Huerta, el 9 de octubre de 1973, como ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, quien lo haga explícito en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Utilizando todos los argumentos ya citados, concluye: «Después de las elecciones de marzo del año en curso y en cumplimiento de nuestro sagrado deber de preservar el régimen democrático, en múltiples oportunidades hicimos saber a quienes dirigían la marcha del país el peligrosísimo camino por el cual se estaba conduciendo a Chile. Se nos respondía con promesas que nunca se cumplieron […], mientras entraban en el país agitadores profesionales, armas y otros elementos de alto poder destructivo, con el preciso objeto de preparar el sangriento golpe de gracia a nuestro sistema democrático».

Así, aparece el tercer elemento, el Plan Zeta y el autogolpe. Bajo este principio se justifica la violación de los derechos humanos y el Estado de guerra interno. «Ellos o nosotros». Había que actuar primero impidiendo la masacre orquestada por los dirigentes de la Unidad Popular. Chile, plagado de terroristas internacionales, adiestrados por los cubanos, en un número según señala Pinochet, unas veces de 15.000 y otras de 30.000, con armas de grueso calibre, tenían la orden de actuar. Existía, dijeron, un plan concebido para deshacerse de la oposición y miembros de las fuerzas armadas contrarios a la Unidad Popular. El autogolpe tendría lugar el 18 y

19 de septiembre de 1973. Hubo que adelantarse. Era necesario actuar, de lo contrario Chile caería en manos del comunismo internacional. La Junta Militar encargaría al historiador conservador Gonzalo Vial Correa la fabricación de las pruebas apócrifas con el fin de dar a conocer dicho Plan Zeta y el autogolpe. A finales de 1974, apareció el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. Su objetivo era dar credibilidad a la existencia del Plan Zeta, del autogolpe y la decisión de matar a los miembros relevantes de la oposición política. Por sus servicios, Vial Correa ocupará entre 1978 y 1979 el cargo de ministro de Educación de la dictadura. Durante la redacción del *Informe Rettig* de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, donde participó Vial Correa, se reconocerá que fue una acción de propaganda en la cual se montaron las pruebas y se alteraron los hechos.

Tras el golpe de Estado, los objetivos que se propusieron sus ejecutores, tanto las fuerzas armadas como los civiles que participaron, se han cumplido. Nada del viejo sistema republicano, democrático y participativo, vigente en Chile por más de medio siglo, quedó en pie. Como sucediese con los imperios coloniales, los conquistadores impusieron su proyecto cultural de dominación política y explotación económica a sangre y fuego, arramplando con todo. Baste recordar el genocidio y exterminio de los pueblos originarios de nuestra América. Sus tierras fueron expropiadas, sus mujeres violadas y su cultura arrinconada, menospreciada bajo el mito de la superioridad étnico-racial. Las luchas de resistencia del pueblo Mapuche se homologan y suman con su ancestral grito de dignidad, sentido ético y restitución de la verdad de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Es necesario comprender las razones del golpe militar. La fundamental, romper la institucionalidad, evitar la consolidación de la vía pacífica y democrática al socialismo y asesinar a su presidente Salvador Allende. Uno de los pilares del Chile actual, orgullo de la elite política de la Derecha y la Concertación, lo constituye los 1.556 centros de tortura, detención y muerte, diseminados por todo el territorio según consta en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2004, así como los casos de asesinato político y violencia de Estado sobre 2.279 personas reconocidos en el *Informe Rettig.* A los cuales hay que agregar los detenidos, exonerados y torturados del *Informe Valech.* Pocos quieren señalar los estrechos vínculos entre el Chile actual, tan neoliberal, con la

dictadura. Hay un pacto de traición. Sirva como ejemplo el comportamiento espurio de los dos ministros de Exteriores que actuaron de manera abierta en defensa del dictador, mientras se encontraba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. José Miguel Insulza, hoy secretario general de la OEA, espetó: «Defiendo al Senador Pinochet, no al exdictador». ¿Esquizofrenia? No. Juan Gabriel Valdés, su homólogo, precisó: «Si Pinochet se aleja de la vida política y los exámenes médicos confirman lo que han dicho los británicos es muy probable que no tenga que afrontar juicios».

Era una forma de tranquilizar a las fuerzas armadas y, de paso, a sus correligionarios democristianos que veían con escándalo la detención del tirano, amén de socialistas, radicales y otros socialdemócratas que, de manera repentina, sufrieron amnesia colectiva. No olvidemos que, entre otros actos de ignominia, está la nominación como candidato a diputado de la «Concertación» de Federico Willoughby, primer portavoz de la Junta Militar de Gobierno, coautor del Plan Z. Patricio Aylwin, a las pocas semanas del golpe, pedía comprensión hacia las fuerzas armadas en su labor de erradicar el cáncer marxista de raíz. Estas fueron sus palabras: «Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena al socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular, y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Salvador Allende, y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejemplo paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder; en esas circunstancias, pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista». Aylwin, nada más electo presidente, devolvió el favor a Willoughby, y lo nombró su asesor personal. ¿Casualidad?

Otro pilar básico del actual régimen es el mantenimiento de la Constitución de 1980, engendro político y vergüenza para cualquier ciudadano que se considere demócrata. Chile se rige por un aparato legal nacido de las entrañas de la dictadura. Su elite política parece sentirse cómoda. La remoza para evitar la ignominia, creyendo que borrar la firma de Pinochet y sustituirla por la del expresidente Ricardo Lagos es suficiente para olvidar su origen. Imposible soslayar la falta de libertad de prensa. La

crítica al «modelo» se convierte en una acción osada y temeraria, supone la marginalidad. Poco a poco las revistas y publicaciones que poblaban Chile a finales de los años ochenta fueron estranguladas en los años de la «concertación». Baste recordar dos casos, la revista *Análisis,* pilar de la lucha democrática durante la dictadura, dirigida por Juan Pablo Cárdenas, y el secuestro del diario *Clarín* desde el 11 de septiembre de 1973. Hoy, existe una sentencia condenatoria contra el Estado chileno, dictada por el CIADE, organismo del Banco Mundial, obligando a pagar las costas del juicio a su legítimo propietario Víctor Pey y negociar una indemnización con sus abogados. Chile se niega a pagar. Sus instalaciones siguen en manos de las fuerzas de carabineros. Lo cual muestra el acuerdo y compromiso de todos los partidos políticos, avalados por el poder ejecutivo, legislativo, judicial y Contraloría General del Estado, con los dos grupos monopólicos que controlan la prensa en Chile, pertenecientes a los empresarios Agustín Edwards (grupo Mercurio) y Álvaro Saich (Copesa).

¿Y qué hay de las fuerzas armadas? Salvo casos excepcionales, todos los encausados lo han sido por querellas particulares; la fiscalía no actúa o se inhibe. La amnistía de 1978 les da cobertura. No hay posibilidad de avanzar hacia una sociedad democrática si los responsables de crímenes de lesa humanidad transitan por las calles de las ciudades, sabedores de una ley de amnistía que les protege y les hace inmunes. Así, mantiene sus prerrogativas y permite que el comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, diga sin ruborizarse que se debe tener «una mirada humanitaria» con los miembros de las fuerzas armadas condenados por violación de los derechos humanos, dada su avanzada edad.

La dictadura sigue vigente, entre otras razones porque la Concertación y la derecha pinochetista han dado continuidad al proyecto. Chile vive una farsa y una borrachera de poder, donde la amnesia y la infamia son pilares sobre los cuales se construye un relato épico e idílico que justifica el asesinato y la tortura, bajo el eslogan «Chile modelo de democracia, libre mercado y éxito neoliberal».

REFORMISMO MILITAR Y GOLPES DE ESTADO: PERÚ Y PANAMÁ

En tiempos del fascismo criollo y la Doctrina de la Seguridad Nacional, emergen experiencias, *manu militari,* rupturistas. Son regímenes militares antiimperialistas, de corte marcadamente popular, reformistas y, por qué no decirlo, con rasgos anticapitalistas. Sus gobiernos fueron contrarios a practicar la Doctrina de la Seguridad Nacional, en su versión estadounidense, tamizada por la escuela brasileña. Su emergencia en América Latina rompe la dinámica del golpismo subordinado a los intereses de la seguridad hemisférica de Estados Unidos. Bien es cierto que tuvieron claroscuros, pero hay unas diferencias que impiden homologarlos a sus primos hermanos. Son golpes de Estado que reivindican la apertura política, la ampliación de los espacios de organización de la sociedad civil, rechazan la tortura, la detención arbitraria y, sobre todo, no practican la desaparición de opositores. Sus gobiernos no presentan un currículum fundado en la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tal vez estas cualidades sean suficientes para analizar brevemente su accionar. En 1968, dos países de la región, uno situado en el Cono Sur, Perú, y otro en Centroamérica, Panamá, vivirán esta experiencia reformista.

En Perú, el régimen oligárquico creció entre dictaduras y gobiernos plutocráticos. Sin embargo, su dominio comienza a resquebrajarse a partir de los años cincuenta. En esta década se suceden los intentos de apertura política democrática: «La ascendente fracción industrial y los sectores medios, ampliados a partir de la expansión burocrática, educativa y, en general, urbana, significan una progresiva demanda de cambio que concluye dividiendo la escena en las opciones oligárquica y antioligárquica. Ello, si bien no producirá cambios en la forma de Estado durante el periodo 1950-1968, sí alterará el régimen político. La insurgencia de los grupos reformistas descansa en la dinamización de otras fuerzas sociales (como el movimiento campesino) y en tendencias estructurales de modernización de la economía, pero no serán suficientes los cambios en el régimen político y así, tras largo empate, la crisis se resolverá con una nueva intervención de las fuerzas armadas […]. De esta forma, el régimen oligárquico diseñado por y para el Estado oligárquico llega al punto máximo de la crisis. Expresa, en el deterioro de sus instituciones, no solo la lucha interburguesa, sino la incapacidad de incorporar las fuerzas sociales en ascenso […]. Al tomar el poder la fuerza armada, en octubre de 1968, el régimen político sufre una

variación sustancial […], se inicia un periodo de transición que parte de la cancelación del estado oligárquico»[70].

La dinámica del gobierno del general Velasco Alvarado viene definida por una de sus primeras medidas, las nacionalizaciones. Expulsa a las compañías multinacionales que monopolizan el sector estratégico de la economía. Se trata de la International Petroleum Company, filial de la Standard Oil. Su expulsión del territorio peruano provoca un revuelo en Estados Unidos. No tarda mucho su recién estrenado flamante presidente Richard Nixon (1969-1974) en tildar al gobierno militar de Velazco Alvarado como procomunista. Le es declarada la guerra.

El entonces ministro de Energías y Minas de Perú, el general Jorge Fernández Maldonado, defiende el conjunto de medidas impulsadas contra las empresas norteamericanas expropiadas, señalando que: «su expulsión fue un acto de justicia revolucionaria, puesto que detentaba, sin título valedero alguno, los yacimientos que pertenecen al pueblo del Perú. Pero, luego vinieron otras realizaciones. La reforma agraria marcó el comienzo de la transformación de la sociedad peruana. Se inició con las haciendas azucareras de la costa, la propiedad de capitalistas poderosos y sectores ligados al imperialismo. Luego vino la reforma minera, haciendo revertir los yacimientos mantenidos como reservas estratégicas del imperialismo al Estado peruano revolucionario para su explotación más conveniente. Enseguida vino la ley de industrias que creó la primera comunidad laboral. Se estableció la refinación y la comercialización, también por el Estado, de la harina y aceite de pescado. Se crearon nuevas comunidades laborales en el sector minero, pesquero, de telecomunicaciones, electricidad y petróleo. La banca en su gran mayoría se encuentra con los resortes crediticios en manos del Estado […]. Se ha promulgado un estatuto de libertad de prensa [que reconoce] a quienes sean atacados por la prensa reaccionaria su derecho a exigir rectificaciones y se estableció también el derecho que tienen los periodistas a expresar su opinión en columnas especiales, en cuanto difieran de la opinión de los empresarios periodísticos. Se ha ido pues a una auténtica libertad de prensa y no de empresa […]. Se han nacionalizado los servicios públicos esenciales, tales como la electricidad, las telecomunicaciones, la compañía de teléfonos y los ferrocarriles»[71].

En esta lógica, la revolución adquiere connotaciones nacionales. Procede a realizar la reforma agraria, postergada durante décadas, destruyendo el

poder de los gamonales y distribuyendo las tierras en manos de los terratenientes a más 360 mil familias en forma de cooperativas. Asimismo, amplía el rol del Estado, desarrollando políticas públicas para fomentar la participación social popular de las clases trabajadoras. Para tal efecto se crea el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS. En su interior participarán organizaciones sociales de diferente índole, campesinos, trabajadores, estudiantes, intelectuales. Su nacimiento es analizado por Carlos Delgado, uno de sus máximos impulsores: «Luego de producida la revolución, existían tres maneras de encarar el problema de la participación popular en el proceso revolucionario. Primero, organizar un partido político oficial. A nuestro juicio, esto habría significado un error muy grande. La experiencia histórica de otros países en los cuales se han organizado partidos políticos oficiales es suficientemente desastrosa como para que esta alternativa hubiera sido preferida. Por lo tanto, la posibilidad de expresar políticamente la revolución a través de un partido oficial fue desechada. Segundo, hacer que la revolución se expresara políticamente a través de uno o más de uno de los partidos políticos tradicionales […] era una alternativa fundamentalmente desechable. Desechados estos dos posibles caminos, solo quedaba uno tercero, el de aventurar una alternativa enteramente nueva que no se hubiera ensayado en ningún otro país ni en ningún otro proceso revolucionario. SINAMOS es esa tercera alternativa»[72].

El anticapitalismo será otra de las banderas izadas por la revolución, situando el proceso político en la tradición emancipadora latinoamericana, cuyo objetivo es lograr la plena soberanía nacional. Así define el programa de gobierno la situación internacional del Perú: «Política exterior tímida y dependiente, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica; relaciones internacionales solo con países capitalistas; falta de conciencia del rol que le corresponde al Perú en el grupo de países del Tercer Mundo; falta de agresividad e iniciativa en la defensa de la doctrina de las 200 millas en el mar territorial; intercambio comercial condicionado a las presiones e intereses económicos extranjeros».

La experiencia peruana muestra sus virtudes al defender una actitud antidogmática como garantía de la libertad ideológica-política. Pero dejemos que sea el propio Velasco Alvarado quien defina el alcance del proceso político: «En el caso de Perú, nuestra revolución se orienta a la

creación de un sistema económico social distinto del que siempre existió entre nosotros. Para que este nuevo sistema pueda existir es necesario que el Perú deje de ser un país subdesarrollado y dependiente. Por eso luchamos contra el subdesarrollo y la dominación extranjera. Y por eso nuestra revolución inevitablemente entraña una opción de carácter no capitalista. Porque fue dentro del capitalismo que históricamente se originaron nuestro subdesarrollo y nuestra dependencia del imperialismo. En consecuencia, ideológicamente la posición de la Revolución peruana es incompatible con el mantenimiento del sistema capitalista en Perú»[73].

¿Por qué las fuerzas armadas peruanas se alejan de las políticas contrainsurgentes y anticomunistas de esos años? La respuesta se puede encontrar en la propia extracción de clase de quienes llevaron a cabo el proyecto revolucionario. Muchos miembros de la oficialidad provenían de las clases populares y los sectores medios desplazados. Sus expectativas se veían truncadas por la existencia de orden social oligárquico. Además, las fuerzas armadas habían sido el escudo represor utilizado una y mil veces contra el pueblo. Carlos Delgado, uno de los intelectuales más prestigiosos del Perú y principal apoyo del régimen reformista militar, da una explicación completa del cambio: «[…] Existen varios elementos explicativos del cambio posicional de los Institutos Armados del Perú: las actividades desarrolladas en el Centro de Altos Estudios Militares, la creciente claridad con que la fuerza armada empezó a ver la inseparabilidad de los problemas del frente interno y los de la seguridad nacional; el abandono del apoliticismo castrense; la necesidad de comprender y resolver los problemas del país a partir de la convicción de que solo a través de la política podían ser resueltos; la dramatización de los problemas campesinos puestos en evidencia por todo el movimiento guerrillero; las convicciones de que la viabilidad del Perú como nación era incompatible con el mantenimiento de una estructura económico-social arcaica, primitiva, que privilegiaba a un grupo de gentes poderosas al mismo tiempo que marginaba a los sectores mayoritarios del país; el creciente agudizamiento de los problemas sociales y económicos del pueblo peruano; la comprobación de que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Todo ello contribuyó a lo largo de un periodo de varios lustros a que la fuerza armada, como institución, cambiara de posición y redefiniera su propio papel institucional»[74].

Lo anterior nos facilita comprender el Plan INCA, propuesta fundacional y programa de gobierno elaborado por las fuerzas armadas y dado a conocer el 28 de julio de 1974 con motivo del 153 aniversario de la Independencia del Perú: «Esta revolución será nacionalista, independiente y humanista. No obedecerá a esquemas o dogmas. Solo responderá a la realidad peruana.»

La dinámica política del proceso revolucionario peruano supuso, asimismo, un aporte en el ámbito de la geopolítica y estrategia de la seguridad nacional. Frente a la Academia de Guerra Brasileña, el Centro de Altos Estudios Militares Peruanos produjo abundantes trabajos que desmitificaban la Doctrina de la Seguridad Nacional como argumento para intervenir y derrocar gobiernos democráticos, acusados de infiltración comunista. Fue al tiempo una crítica mordaz a la visión estadounidense aplicada mecánicamente por las fuerzas armadas del continente. En esta faceta desmitificadora, desempeña un papel destacado el general Edmundo Mercado Jarrín primer ministro y comandante en jefe del ejército durante el proceso revolucionario hasta 1975. En su obra *Seguridad, política y estrategia,* apunta: «El *leitmotiv* de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos era el de la seguridad de ese país. […] La seguridad de las grandes potencias no es la seguridad latinoamericana. La seguridad para nuestros pueblos será el logro del desarrollo integral y autosostenido, en todas sus formas, y porque nuestro subdesarrollo no es un fenómeno local y nuestra decisión de superarlo irrevocable, los esfuerzos que se requieran, sea en el plano interno o en el internacional, deberán ser emprendidos. La frustración no debe continuar siendo la principal característica de la mayoría de la humanidad y de América Latina»[75].

Huyendo del maniqueísmo anticomunista, Jarrín señala que es una cortina de humo para reprimir a los pueblos latinoamericanos, maniatándolos a una dependencia que ahoga e impide ejercer el derecho de autodeterminación y soberanía, condenándolos a un subdesarrollo estructural: «El anticomunismo es una actitud que no ha podido, ni podrá llegar a constituirse en el interés general de los pueblos de América como objetivo continental […]. Los cambios y, en general, los procesos revolucionarios en América Latina han puesto en evidencia que una posición anticomunista ha servido de justificación para adoptar y mantener en lo interno actitudes y posiciones conservadoras y, en lo externo, de pretexto para el establecimiento de cierto tipo de seguridad colectiva y el surgimiento de

una embrionaria estrategia militar amparada en actitudes interesadas. El anticomunismo no se identifica con el interés nacional, ni con el interés latinoamericano, sino con intereses que defienden el orden tradicional que de ninguna manera significan la lucha por la justicia social o por un nuevo orden internacional»[76].

El proceso revolucionario peruano tuvo que sobrevivir en la convulsa América Latina del primer lustro de los años setenta. En 1973, los golpes de Estado en Uruguay y Chile marcan un punto de inflexión que afecta necesariamente a la continuidad de la Revolución peruana. La derecha se rearma y comienza a contraatacar. Empresarios, oligarquía y militares articulados a los grupos políticos tradicionales se unen para derrocar al general Velasco Alvarado. En agosto de 1975, fruto de las presiones, una junta militar toma el relevo. Encabezada por el general Francisco Bermúdez, los generales reformistas son destituidos. Inmediatamente se procede a la desmovilización de SINAMOS y comienza la represión sobre las clases trabajadoras, los sindicatos, campesinos y estudiantes. Se prohíben las huelgas en los sectores estratégicos y se declara el Estado de emergencia en 1976 para frenar y desarticular la respuesta del pueblo peruano a la contrarrevolución de Francisco Bermúdez. Las relaciones con Estados Unidos son «normalizadas» y, al poco de andar la junta militar, se aplican los planes de ajuste del FMI. Entre 1975 y 1980 Bermúdez desmonta la revolución y, paradojas de la vida, entrega el poder al mismo presidente representante de la oligarquía, destituido en 1968, Fernando Belaúnde Terry. La política antiimperialista, de no alineamiento, integración regional y apoyo a las luchas de liberación de los países del tercer mundo se trastoca en un nuevo ciclo de subordinación a los Estados Unidos. El sueño se torna pesadilla.

Mientras tanto, Panamá, un país de tópicos, cuyo origen se encuentra ligado a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, conocido por facilitar la unión de dos océanos, Pacífico y Atlántico, ser zona de paso entre la cuarta y sexta flota de la armada de Estados Unidos, se rebela. No olvidemos que en su territorio se sitúa la escuela de formación anticomunista y de guerra antisubversiva más importante del mundo, que la zona del canal estaba administrada por marines y autoridades militares norteamericanas y que ha sido un país celosamente custodiado por los Estados Unidos. En este contexto, jóvenes oficiales de la Guardia Nacional

promueven y llevan a cabo un golpe de Estado cuyas proclamas y acciones lo acercan a la experiencia peruana y distancian de Brasil.

El 11 de octubre de 1968, es derrocado Arnulfo Arias Madrid, figura recurrente en la historia de Panamá. En tres ocasiones sería investido como presidente. Nunca acabó sus mandatos. En la primera no duró un año, siendo destituido y obligado a exiliarse. De formación anticomunista, católico conservador, creó su propio partido, cambiándole en tres ocasiones el nombre, de acuerdo a sus necesidades. Primero, Nacional Revolucionario (1940), luego, Revolucionario Auténtico (1949) y, por último, simplemente Panameñista (1968).

Para entender el significado del golpe de Estado de 1968, debemos retrotraernos a los años cuarenta del siglo pasado. Arnulfo Arias, etiquetado como populista, nacionalista, anticomunista y racista, agitaba a conveniencia la mezcla según soplaba el viento a derecha o izquierda. En su primer mandato (1940-1941), llegó a prohibir la inmigración de chinos y negros al considerarlas razas ajenas a la cultura nacional. Para justificar tal medida, dijo que su presencia afectaba directamente a la mejora biológica de la raza panameña. Regresaría en 1949, siendo electo y destituido en 1951 por el Congreso, acusado de nepotismo y pillaje. En esta etapa se adueñó, entre otras propiedades, de la mayor finca de plantación de café del país, convirtiéndose en uno de los más grandes terratenientes. Despojado de sus derechos políticos, acabó un tiempo en la cárcel.

En otro orden de cosas, hay que subrayar que, hasta 1953, Panamá carecía de fuerzas armadas. Su aparato militar represivo estaba compuesto por una policía militarizada. Era la manera que Estados Unidos tenía de mantener el control del país, siendo los marines quienes desempeñaban las funciones de represión mayor. José Antonio Remón Cantera, hombre fuerte de la policía en 1953, dio un golpe de mano, siendo el punto de inflexión que cambió la historia de Panamá. Derrocado Arnulfo Arias, se creó la Guardia Nacional. Su papel primigenio se ciñó a ejercer la represión política, sobre todo en las ciudades terminales del canal, donde el movimiento obrero era fuerte y arreciaban las huelgas y los conflictos sindicales. El periodo comprendido entre 1953 y 1968 se conoce como el tiempo de la «guardia pretoriana». Su rol, no lo olvidemos, se inscribe en el proyecto de la burguesía dependiente panameña. Sin obviar que sus gobiernos se rigen por la política de seguridad hemisférica diseñada por Estados Unidos. «Para darle a las

fuerzas armadas esa dignidad cargada de contenido político, Torrijos insistió en que debían divorciarse de los intereses de la oligarquía-imperialismo. Solo entonces podrán unirse “en segundas nupcias” con los intereses populares. “Es diabólico –decía– el talento de los explotadores que ha sabido armar al pueblo contra el pueblo mismo”. Ese es el papel que desempeñan las fuerzas armadas. Y el que deben jugar es el de “cambiar la dirección de sus fusiles”. Es decir, cambiarse de bando»[77].

En este periodo de la «guardia pretoriana», se intercambian gobiernos civiles bajo la supervisión de Estados Unidos. «La intervención norteamericana evitó que la burguesía nacional, en pleno control del Estado a partir de 1952, buscara fórmulas de entendimiento con los sectores populares. La supresión de la participación democrática y la manipulación de los torneos electorales se justificaban bajo el manto ideológico del anticomunismo. En la década de los sesenta, frente al reto representado por la Revolución cubana, la represión fue complementada con un nuevo discurso»[78].

En pleno apogeo de la Guerra Fría, con la crisis cubana de los misiles y el bloqueo económico a la isla, en 1963, el presidente estadounidense Lyndon Johnson y el panameño Roberto Chiari firmaron los acuerdos que constituyeron el principio desencadenante de la gran oleada nacionalista posterior. Entre sus puntos, una reivindicación sentida por años por el pueblo panameño: poder izar la bandera en la zona del canal, administrada por USA. La medida, celebrada con júbilo, entró en vigor el 1964. Su cumplimiento, sin embargo, no gustó a los marines, quienes mostraron su desacuerdo, arriando la bandera y pisoteándola. Dicho acto de agravio motivó el levantamiento popular por la honra nacional. Estudiantes y trabajadores entraron a la zona del canal, enfrentándose a los marines y tratando de reponer la enseña en su mástil. Soldados estadounidenses sorprendidos decidieron abrir fuego con sus ametralladoras. El resultado, veintiún muertos y más de quinientos heridos. El nacionalismo panameño cobró carta de ciudadanía en esta acción reivindicativa.

> Sin duda alguna estos hechos fueron uno de los elementos que precipitaron el golpe de Estado de 1968; aunque muchas veces se haya recurrido a explicaciones unilaterales y simplistas, respecto a las causas que lo motivaron. En verdad el país vivía una crisis estructural del sistema político y social, que afectaba tanto al poder oligárquico como a la presencia colonial de Estados Unidos en el istmo. Este agotamiento del sistema oligárquico-imperialista en Panamá era

> consecuencia de las luchas populares y de nuestros profundos anhelos de soberanía e independencia. Este es el significado histórico del 9 de enero de 1964[79].

En este ir y venir, por enésima vez entra en escena Arnulfo Arias. Con un ambiente de fervor nacionalista, Arias levanta su bandera, facilitando su reelección en 1968. Sin embargo, su gobierno nace débil. La situación nacional que lo aúpa al poder, le supone realizar múltiples concesiones, apoyándose en una frágil alianza con la guardia nacional, que en los hechos era el sostén del presidente y su gobierno. Sabedor de sus límites para gobernar, decide romper el compromiso de no remover los mandos de la Guardia Nacional, destituyendo a todo alto mando de la misma. Tal decisión sella su acta de defunción política. Arnulfo Arias será derrocado el 11 de octubre de 1968. Su impulso lo lleva a refugiarse en la Zona del Canal y declarar que ha sido víctima de un golpe de Estado «procomunista».

Una junta, compuesta por oficiales jóvenes, asume el poder. Entre ellos, un coronel, Omar Torrijos. Entrenado por Estados Unidos en la guerra antisubversiva, había participado en las acciones contrainsurgentes a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, en el cerro de Tute. Su presencia lentamente va ganado fuerza dentro de los oficiales que habían participado del golpe. Su persona cobra relevancia en el año de 1969, cuando declara la necesidad urgente de refundar el país, bajo la dirección del «Movimiento Nuevo Panamá». En ese mismo instante, los acontecimientos se precipitan. El Pentágono, aprovechando un viaje de Omar Torrijos a México, el 13 de diciembre de 1969, prepara un contragolpe, apoyándose en algunos miembros de la junta militar y la oligarquía. La historia posterior fue como sigue: Omar Torrijos, «junto con los militares y civiles que le acompañaron a México, logró alquilar una avioneta con la cual emprendió secretamente el regreso. Llegó a la capital de Chiriquí, al frente de cuya guarnición militar se hallaba el teniente coronel Manuel Antonio Noriega. Este se puso a sus órdenes y desde ese lugar se requirieron pronunciamientos de los jefes militares de otros destacamentos castrenses. Se confirmaron así las adhesiones y, a partir de ese momento, Torrijos emprendió, junto con sus tropas, el viaje por tierra a la capital»[80].

Así da comienza la era Torrijos. El 16 de diciembre, nada más reasumir la comandancia de la Guardia Nacional y el gobierno, declara: «Ahora nadie podrá detener los principios democráticos de la gesta de octubre, porque las presiones a nuestro gobierno revolucionario no podrán detener la marcha sin límites de nuestras convicciones y principios republicanos, que tendrá como único objetivo el bienestar de todos los panameños, sin distingos de credos ni de banderías políticas»[81].

El régimen *torrijista* puede dividirse en cuatro etapas. Una primera con ribetes represivos, desde 1968-1972; otra de auge reformista, 1972-1977; una tercera de expansión democrática inclusiva y un último periodo abierto con su muerte hasta la invasión de Estados Unidos, perpetrada el 20 de diciembre de 1989. El punto de inflexión fue la promulgación, en 1972, de la Nueva Constitución. Hecho que se traduce en la institucionalización del proceso, articulando nuevas formas de participación popular. En un primer momento, los partidos políticos, declarados ilegales, fueron relegados de su función canalizadora de las reivindicaciones de la sociedad civil. Sin embargo, siguieron actuando a la luz pública sin ser reprimidos o provocando exilio forzoso. Sus dirigentes se acomodaron a las nuevas circunstancias, hasta 1978, cuando fueron legalizados nuevamente.

> La cuestión política se zanjó a partir de una reestructuración original y sin precedentes de sectores del aparato estatal. La nueva Constitución de 1972 es producto de la elección directa, sin mediación de los partidos políticos, de 505 representantes de los 505 corregimientos de que consta la República. A la fuerza pública y a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad correspondió garantizar la lealtad al nuevo régimen de los candidatos representantes y constituyentes, ya que ambas entidades públicas se encontraban presentes y ejerciendo su influencia a lo largo y ancho de la geografía del país. En tal virtud, ninguna organización política, partidaria o no de la plutocracia, estaba en condiciones de disputarle al gobierno ningún sector importante de la nueva asamblea constituyente […]. Creó estructuras de poder popular originales como juntas comunales correspondientes a cada uno de los 505 corregimientos y las juntas locales, que podían ser formadas en cualquier vecindad donde se expresara la voluntad autogestora de las masas[82].

En el orden interno, el gobierno de Omar Torrijos reformó el Código de Trabajo y Seguridad Laboral. Nacionalizó el sector de la electricidad. Inició una reforma agraria y expropió la filial de la United Fruit Company. En política internacional, normalizó las relaciones con Cuba y puso a la orden del día la recuperación de la zona del Canal, logrando en 1977 la firma de

los tratados Torrijos-Carter que retornaba la propiedad del Canal en 2000 al pueblo panameño.

Así resume Torrijos el carácter de la Revolución panameña: «Esta revolución no se ha hecho para desplazar un grupo y ponerse otro; no señores, no es esa mi intención […]; esta revolución se ha hecho para, conjuntamente con ustedes, y todo el pueblo panameño, corregir los males que ya nos tenían al borde de la desesperación. Esta revolución no la hemos hecho militares, para provecho de militares. Esta revolución la hemos hecho los militares con el apoyo de las mejores credenciales de patriotismo y de educación que el país tiene, para beneficio del pueblo. Pero va pasando el tiempo y me impacienta que no logremos romper estructuras; las estructuras se mantienen intactas y no podemos romperlas. El caciquismo en los corregimientos sigue y sigue; el favoritismo sigue; las injusticias siguen; el avasallamiento al campesino sigue. Y eso es lo que me tiene a mí reunido aquí para pedirles a ustedes que por favor me ayuden a romper este tipo de estructuras»[83].

Se vinculó al movimiento de no alineados, y desarrolló una política beligerante contra las dictaduras del Cono Sur. Desde 1979, con el triunfo de la Revolución sandinista, se comprometió con los proyectos de paz regionales. Fue impulsor del grupo de mediación para la paz en Centroamérica, conocido como Contadora. El gobierno de Ronald Reagan lo consideró un peligro para los intereses estadounidenses en la región.

El retorno de los partidos políticos al escenario nacional y la convocatoria de elecciones en el nuevo marco constitucional concluyen con la creación, en 1979, del Partido Revolucionario Democrático, PRD. Las circunstancias nacionales y regionales lo ameritan. Partido político de ideario nacionalista e influido por Torrijos, asume la función de unir las fuerzas populares y el movimiento de liberación nacional. Era el intento más serio de evitar el retorno de la derecha, liderada por un «rejuvenecido» Arnulfo Arias.

> En la coyuntura misma el PRD ha significado un hecho de importancia para el futuro del movimiento panameño de liberación nacional, en la medida que ha permitido privar a los aparatos políticos y civiles de los sectores oligárquicos tradicionales de la burguesía panameña de alguna de sus posibles bases sociales de apoyo en su lucha contra el Estado de transición. En efecto, dada la incapacidad objetiva de la izquierda panameña para captar ese sector intermedio del movimiento popular, el PRD significa, por su misma naturaleza, una mínima garantía inicial del mantenimiento del espacio político en el que esa izquierda podría aspirar a ganar fuerzas

> para el futuro. Pero es necesario reconocer que ese espacio, abierto por necesidad a todas las fuerzas políticas del país, ha sido aprovechado en mucha mayor medida por la derecha oligárquica a través del Frente Nacional de Oposición (FRENO), y ahora la ADO (Alianza de Oposición), que aglutina a viejos y nuevos partidos derechistas y organismos patronales en torno al Partido Panameñista Auténtico, del anciano caudillo Arnulfo Arias, derrocado por los militares en 1968. Arias es, en efecto, el último de los caudillos de la oligarquía, dotado de prestigio desde posiciones de un nacionalismo con características racistas y expresiones ideológicas fascistoides[84].

El proceso político abre las puertas a la elección presidencial. En 1978, se proclama ganador, por seis años, al jurista y candidato del PRD, Arístides Royo. Su mandato será objeto de un hostigamiento continuo por parte de la administración norteamericana. Sobre todo en los últimos tres años, etapa que confluye con el triunfo de la nueva derecha en Estados Unidos y el acceso de Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1981. Su llegada a la Casa Blanca cambia la coyuntura de distensión creada bajo el mandato del demócrata James Carter. Omar Torrijos se transforma en el gran enemigo y culpable de todos los males de la región. El *Documento de Santa Fe I* definió el gobierno de Panamá «como una dictadura de extrema izquierda». Unos meses más tarde, en julio de 1981, Omar Torrijos muere en extraño accidente de aviación. Otro presidente latinoamericano, en esta ocasión el ecuatoriano Jaime Roldós, tendrá el mismo fatal destino, un par de meses antes. Un 24 de mayo su avión se desploma a tierra, muriendo en el acto. Curiosamente, también el *Documento de Santa Fe I* consideraba la doctrina Roldós un peligro para restablecer la paz americana.

La administración Reagan dará un vuelco diseñando su estrategia de seguridad hacia América Latina. La Doctrina de la Seguridad Nacional se complementa con *las guerras de baja intensidad.* En plena ebullición de las luchas de liberación nacional en Centroamérica, entra en juego un nuevo factor que redefine los conflictos regionales. No se trata solo de dar golpes de Estado, ahora se busca revertir procesos, apoyando la formación de ejércitos mercenarios, financiando la oposición de manera abierta y sin tapujos y preparando nuevas invasiones a través de las fuerzas de despliegue rápido, que se unen a los marines. La primera acción que se llevó a cabo fue la invasión a la Isla de Granada en octubre 1983 y, un año más tarde, se da luz verde a la contrarrevolución en Nicaragua, apoyando la formación de un ejército mercenario, *la contra,* por la vía de una doble

financiación: el narcotráfico y la venta de armas. Este operativo fue conocido como el escándalo Irán-Contra.

La muerte del general Omar Torrijos es el principio del fin de la Revolución panameña. En 1984, las elecciones presidenciales dan como ganador a Ardito Barleta, hombre débil y sin carácter que, presionado, renuncia en favor de Eric del Valle, ambos ultraconservadores, anticomunistas y pronorteamericanos. La derecha recupera el poder perdido en 1968. Solo queda un escoyo a salvar: el hombre fuerte de la Guardia Nacional, Antonio Noriega. Para quitárselo de encima, la oligarquía, aprovechando la nulidad de los resultados de las elecciones del 7 de mayo 1989, dictada por el Tribunal Electoral, llama abiertamente a la invasión. La democracia cristiana, la Iglesia católica y la oligarquía declaran a su candidato Guillermo Endara vencedor y piden la cabeza de Noriega. Estados Unidos no pierde el tiempo. Endara se autoproclama vencedor de las elecciones, acusando al general Antonio Noriega de narcotraficante y de financiar a la guerrilla centroamericana. La noche del 19 de diciembre de 1989, tropas estadounidenses bombardean las principales ciudades de Panamá, cebándose en los barrios populares de la capital. Asesinan a más de 3.000 personas que habían resistido con heroicidad la invasión. Como sucediese en República Dominicana en el año de 1965, la clase dominante panameña celebra la presencia de los marines y el ejército estadounidense. Guillermo Endara es proclamado presidente en la base Clayton, jurando el cargo ante oficiales norteamericanos. Las reformas iniciadas en 1968 bajo el gobierno de las fuerzas armadas panameñas tocan a su fin. La Guerra Fría yace moribunda. Nacen las guerras de baja intensidad.

Otras experiencias reformistas con participación de las fuerzas armadas tuvieron lugar en América Latina. Su final fue siempre trágico y acabaron ahogadas en baños de sangre. Sus dirigentes fueron perseguidos y el movimiento popular reprimido. Seguramente ninguno de ellos fue comunista, ni falta hacía. Incluso Omar Torrijos y Velasco Alvarado habían señalado en muchos de sus discursos el alejamiento del comunismo y del socialismo. Así lo expresa Velasco Alvarado: «Somos conscientes de que lo que está en juego no es otra cosa que el signo y el rumbo de la futura historia del Perú. Nuestra dependencia, nuestro subdesarrollo, nuestra pobreza y nuestro atraso son el producto de un sistema económico, político y social cuyo mantenimiento hace lógicamente imposible superar esos

males profundos del Perú. Si el sistema genera esos males, el sistema como tal tiene que ser abandonado. Modernizarlo únicamente equivaldría a prolongar su vida como fuente de origen de los grandes problemas que nuestra revolución ha propuesto solucionar. Por eso el gobierno de la fuerza armada sabe que cumplir el compromiso que ella ha contraído con el país significa, necesariamente, el definitivo abandono del sistema socio-económico imperante hasta el 3 de octubre de 1968. Solo así será posible sentar las bases del nuevo ordenamiento que la revolución se propone construir […]. Y en este sentido, ni el punto de partida conceptual, ni el proceso de nuestro desarrollo revolucionario, ni el objetivo de la revolución obedecen a los moldes tradicionales de los sistemas capitalistas o comunistas […]. No es pues nuestro ideal ni un sistema que aliena al hombre, aherroja su libertad y le impide ser el verdadero constructor de su destino, ni tampoco un Estado todopoderoso, burocratizado y dogmático que absolutistamente rige la vida de un sistema social también deshumanizante»[85].

Su postura no era contraria a lo que en ese momento histórico se debatía. Internacionalmente ligado a los países no alineados, fue crítico de la Unión Soviética y se mantuvo cercano a la Revolución cubana, los gobiernos nacionalistas, antiimperialistas, a la vez que populares.

Este apartado no podría concluir sin hacer una mínima referencia a la experiencia boliviana del general Juan José Torres. Su gobierno reformista militar va del 7 de octubre de 1970 al 21 de agosto de 1971. En ese breve lapso de tiempo, Juan José Torres emprendió un conjunto de medidas que lo ubican en el terreno de los proyectos antiimperialistas. Procedió a nacionalizar la gran minería, crear el Banco de Desarrollo y fundar la Corporación Estatal de Empresas Nacionales. Asimismo, en el campo cultural y educativo, potenció la educación pública y planificó campañas de alfabetización, transformando, igualmente, la enseñanza media y universitaria, destinando más fondos y ampliando el presupuesto ministerial. Por otro lado, durante su mandato se introdujeron cambios en la legislación laboral y se elevó el nivel de vida de la clase obrera, con subidas de sueldos y salarios desconocidas para Bolivia. En medio de los cambios, Estados Unidos y la plutocracia boliviana conspiraron para acabar con la primavera reformista. La noche del 20 de agosto de 1971 estaba todo preparado. Al día siguiente, un general, educado en la mejor tradición

anticomunista de la Escuela de las Américas, Hugo Banzer, se hizo con el poder. Juan José Torres se exilió en Argentina. Años más tarde, fue asesinado siendo víctima de la *Operación Cóndor* en Buenos Aires el 2 de junio de 1976. Su instigador fue Hugo Banzer. En Argentina ya mandaba otro «flamante» dictador, Jorge Rafael Videla.

LAS GUERRAS DE BAJA INTENSIDAD, ÚLTIMA ETAPA DE LA GUERRA FRÍA Y EL AMANECER DE LA GLOBALIZACIÓN

A finales de los años ochenta del siglo XX, en las esferas militares, se generaliza el concepto «guerra de baja intensidad» o «conflicto de baja intensidad». Su novedad alude a la modalidad de guerra utilizada para enfrentar los conflictos en el Tercer Mundo. Nace del llamado «síndrome de Vietnam», tras la retirada total de las tropas estadounidenses del sudeste asiático en 1975. La derrota militar obliga a los estrategas militares a una revisión de las formas de intervención en el Tercer Mundo. Su principio, la contención del comunismo, deber ser llevado a cabo por fuerzas «nativas» aliadas, evitando, así, los altos costes en vidas humanas y un descontento interno que movilice a los grupos pacifistas. El Pentágono señala que se debe minimizar la intervención de sus tropas, tendiendo a fortalecer los ejércitos aliados, siendo estos los encargados de llevar a cabo la misión de guerra contrainsurgente. El segundo cuestionamiento se refiere al gradualismo militar; el ataque debe ser frontal, directo y total. Lo contrario favorece al enemigo, acrecentando el ideario nacionalista, al contar con la población que lucha para rechazar las fuerzas de ocupación bajo la estrategia de liberación nacional. Esta acción militar de guerra fue utilizada por el ejército del Viet Cong, en cuanto el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono encontraban resistencias políticas y sociales para el envío masivo de tropas a una guerra que veían lejana.

Una solución para contrarrestar la debilidad frente al enemigo fue aplicada en tiempos de la administración de James Carter. Durante su mandato se crean las fuerzas de despliegue rápido, entrenando tropas de combate y buscando que los contingentes den una solución expedita al

conflicto, acudiendo al escenario de guerra de forma inmediata. El ejemplo de este tipo de actuación de las fuerzas de despliegue rápido lo tenemos en la invasión a la isla de Granada, en octubre de 1983, con la administración Reagan. Las guerras de baja intensidad surgen como la alternativa dentro de las guerras regionales, con escenarios limitados y armamento de última generación no nuclear. Fue la doctrina oficial de la administración de Ronald Reagan durante su segundo mandato (1985-1989), para la contención del comunismo en América Latina y el Tercer Mundo.

La guerra de baja intensidad presenta tres principios articulados para resolver los conflictos acorde a las nuevas necesidades, modificando el espacio, el tiempo y la fuerza. 1) El llamado *Rollback,* consistente en la posibilidad de revertir procesos revolucionarios triunfantes; 2) El desarrollo de la contrainsurgencia, utilizado cuando el enemigo desarrolla estrategias revolucionarias de liberación nacional; y 3) la lucha o enfrentamiento contra el terrorismo y el narcotráfico. Esta última dimensión destaca sobre las dos anteriores. Por primera vez el terrorismo y el narcotráfico son concebidos como una «amenaza» a la seguridad nacional de Estados Unidos. Su enunciado abre las puertas a la integración de las fuerzas armadas en la lucha contra el llamado crimen organizado, cuya responsabilidad, hasta ese momento, recaía exclusivamente en organismos estatales, de inteligencia civil y cuerpos de policía. Bajo estos tres principios, el espacio de guerra se modifica, siendo el lugar de operaciones militares el conjunto de la nación. Asimismo, el tiempo de guerra se difumina, prolongándose *ad infinitum,* la guerra no se resuelve en términos militares.

El primer escenario, la reversión de procesos, implica sostener e impulsar como eje central del esfuerzo de guerra la creación de fuerzas militares compuestas por connacionales. Los Estados Unidos se comprometieron, en esta lógica, a prestar el apoyo necesario en armamento, inteligencia y tecnología, tanto como en lo referente al financiamiento. La creación de fuerzas contrarrevolucionarias es la opción más utilizada. Nicaragua, en Centroamérica, fue un caso ejemplar.

En la segunda modalidad, la guerra contrainsurgente, se busca evitar que el gobierno aliado caiga en manos del enemigo y sea derrotado política y militarmente. En este sentido los esfuerzos están destinados a fortalecer las

fuerzas armadas nativas, dotándolas de material imprescindible para enfrentar la lucha contrainsurgente.

El tercer y último escenario se centra en impedir que actos terroristas puedan afectar a la seguridad nacional. Desde el ataque a las Torres Gemelas podemos observar cómo gana enteros. Igualmente al incluir en esta dimensión la lucha contra el crimen organizado, identificado como narcotráfico, se favorece la militarización de países como México o Colombia, donde las fuerzas armadas patrullan continuamente, día y noche, las ciudades y pueblos, siendo su presencia parte del paisaje natural.

Las guerras de baja intensidad han dado pie a nuevos golpes de Estado, sin necesidad de tener que recurrir al asalto de los palacios presidenciales. La lucha contra un enemigo que se muestra gelatinoso, sin contornos fijos, que ya no es solo una amenaza ideológico-política, abre la guerra a un campo peligroso, ya que define el radio de actuación como la sociedad toda. Las fuerzas armadas se adueñan de la sociedad, sin abandonar los cuarteles y sin tomar el poder. No lo necesitan, ellos son el poder[86].

El espacio-tiempo de la guerra es total, no se permiten concesiones. Las acciones están definidas por los objetivos globales. Una especie de totalitarismo invertido emerge tras las guerras de baja intensidad. Tomada como doctrina oficial de los Estados Unidos y siendo uno de sus primeros impulsores Henry Kissinger, entre sus difusores destacan Caspar Weinberger, secretario de defensa, y George Shultz, secretario de Estado en el gobierno de Ronald Reagan. Durante las distintas administraciones republicanas y demócratas, incluida la de Barack Obama, la doctrina ha sido reforzada. Uno de sus divulgadores en el terreno político y de las relaciones internacionales fue el ideólogo, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Samuel Huntington. No por casualidad sus obras son el vademécum en las universidades de casi todo el mundo. Huntington, no olvidemos, fue uno de los grandes estrategas durante la Guerra de Vietnam; apoyó los bombardeos B-52 y el uso de Napalm sobre la población civil de Vietnam del Norte, así como la instalación de las «aldeas estratégicas» de exterminio de la población norvietnamita.

En la actualidad, la estrategia de guerras de baja intensidad está vigente en los países latinoamericanos, aplicando sus dimensiones en función del problema. En Venezuela, Ecuador y Bolivia, se practica el principio de reversión de procesos. Con éxito ya se pudo realizar en Honduras y

Paraguay, potenciando sendos golpes de Estado, definidos como constitucionales o de guante blanco. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se desarrolla en México, Colombia o Perú. Igualmente, la guerra contrainsurgente tiene su concreción en Colombia y México.

Como nueva guerra total dentro de los conflictos de baja intensidad, el caso mexicano se aúpa al primer puesto. Así, en su territorio se practica la guerra contrainsurgente: «Los tres últimos gobiernos mexicanos, incluido el de Vicente Fox, han actuado contra la lucha indígena con una estrategia de contrainsurgencia, basada en la presencia masiva del ejército y la utilización de fuerzas paramilitares con el objetivo de desgastar al movimiento insurgente y desarticular sus bases de apoyo. El paramilitarismo se convirtió en una forma continuada de desgaste de las fuerzas insurgentes. Con base en diferentes tácticas de guerra irregular se pretende pasar del control de la población indígena a su aniquilamiento y posterior ocupación de sus territorios»[87].

En segundo lugar, se practica la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común y la inseguridad ciudadana, según establece el guion de las guerras de baja intensidad. «La tesis reaganiana de considerar el tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, establecida en 1986, logró imponer un cierto esquema y determinadas categorías de percepción independientemente de las características históricas y estructurales del fenómeno del tráfico de drogas en los distintos países. En primer lugar, parece generalizar que lo que es válido para Estados Unidos también lo es para el resto del mundo bajo su influencia. En segundo, el discurso dominante concibe el surgimiento del tráfico y los traficantes como una actividad y como agentes sociales necesariamente ajenos a las estructuras del poder político en todo tiempo y lugar… En tercero, el enfoque jurídico y policiaco con el que se inicia la era moderna de las prohibiciones de ciertos fármacos en Estados Unidos, a partir de 1914, se ve reforzado hoy en día con la participación directa, abierta y legítima de los militares en los mandos de dirección y operativos del combate antidrogas. El ejército es por excelencia la institución que salvaguarda la seguridad nacional y, si se establece como dogma de observancia universal que el tráfico de drogas es una amenaza para esta, entonces de allí deriva el corolario lógico de la presencia militar activa, su necesidad […]; en cuarto, el entrenamiento del personal militar de los

Estados Unidos que asumen la misma visión y establecen convenios de cooperación con Estados Unidos es proporcionado por el ejército de este país. Los cursos de preparación están diseñados simultáneamente para la lucha contrainsurgente y el combate al tráfico de drogas»[88].

El 5 de diciembre de 2006, el expresidente Felipe Calderón subrayó que su país se encontraba en guerra, una guerra cuyo enemigo conceptualizó como *la delincuencia organizada.* Un año más tarde, el 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, utilizó en cuatro ocasiones el término guerra para definir el estado de la nación: «La sociedad reconoce de manera importante el papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad… La lealtad y eficacia de las fuerzas armadas son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella… Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento…, así son precisamente las guerras… y el 12 de septiembre de 2008, durante la ceremonia de apertura y clausura de los Cursos del Sistema Educativo Militar, subrayó que: "Hoy nuestro país libra una guerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes de 1810, una guerra distinta a la que afrontaron todos los cadetes del Colegio Militar hace 161 años… Por eso en esta guerra contra la delincuencia… es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México… Esta guerra la vamos a ganar"»[89].

En enero de 2011, el subcomandante insurgente Marcos, del EZLN, en intercambio epistolar con el filósofo Luis Villoro sobre ética y política, redacta su primera misiva haciendo hincapié en el tipo de guerra planteada por el Estado Federal contra «la delincuencia organizada». Su reflexión la tituló «Apuntes sobre las guerras». En ella desarrolla los objetivos de la guerra total posmoderna, señalando que: «No son las que ponen en el terreno armas más sofisticadas…, sino las que son llevadas a terrenos donde la calidad y cantidad del poder militar no es el factor dominante […]. Las guerras ahora no se conforman con conquistar un territorio y recibir tributo de la fuerza vencida. En la etapa actual del capitalismo es preciso destruir el territorio conquistado y despoblarlo, es decir, destruir su tejido social. Hablo de la aniquilación de todo lo que da cohesión a una sociedad. Pero no se detiene ahí la guerra de arriba. De manera simultánea a la destrucción y

el despoblamiento, se opera la reconstrucción de ese territorio y el reordenamiento de su tejido social, pero ahora con otra lógica, otro método, otros actores, otro objetivo. En suma, las guerras imponen una nueva geografía»[90].

La «guerra contra el crimen organizado» es fomentada por el poder y los Estados Unidos; en México, impregna todos los espacios de la vida cotidiana. Las fuerzas armadas están presentes en las calles, los centros comerciales, son visibles a los ojos del ciudadano que se atemoriza, aísla, vuelve huraño, desconfiado, se considera indefenso. Ya no le extraña oír sirenas de coches policía, compartir espacios de esparcimiento y ocio con soldados armados de metralletas de grueso calibre y chalecos antibalas. Su último refugio, la casa, también es invadida con redadas y patadas en la puerta. La policía y el ejército gozan de impunidad para romper la privacidad sin más explicaciones que buscar narcotraficantes.

En esta guerra cambian las reglas. La seguridad, se dice, no es posible garantizarla al 100 por 100. En cualquier momento se puede ser víctima de un secuestro exprés, motivo de una violación o recibir una petición de extorsión. Proliferan los infanticidios o feminicidios. Ningún sector se encuentra a salvo. El exsecretario de México pone al descubierto las cifras: «De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de los cuales 30 mil 913 son casos señalados como "ejecuciones"; tres mil 153 son denominados como "enfrentamientos" y 544 están en el apartado "homicidios-agresiones"». La respuesta: más policía en las calles, como si la solución fuese aumentar el número de soldados por habitantes. Los conflictos de baja intensidad cambian la dinámica política y social, hostigan a la ciudadanía hasta licuarla en la nada. Para lograr tan estimable fin se arguye la inseguridad ciudadana para aumentar el presupuesto en seguridad.

> En los primeros cuatro años de la «guerra contra el crimen organizado» (2007-2010), las principales entidades gubernamentales encargadas (secretaría de la Defensa Nacional –es decir: ejército y fuerza aérea–, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública) recibieron del presupuesto de Egresos de la Federación una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos (unos 30 mil millones de dólares). Las 4 dependencias gubernamentales federales recibieron en 2007 más de 71 mil millones de pesos; en 2008, más de 80 mil millones; en 2009, más de 113 mil millones y en 2010 fueron más de 102 millones de pesos: a eso habrá que sumar los más de 121 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) que recibirán en este año de 2011»[91].

Sin duda, al hacerlo se consigue que unos pocos se lucren en la guerra contra «el crimen organizado». Siempre hay beneficiarios. Los altos mandos incrementan sueldos. Estados Unidos ve cómo el complejo industrial-militar consigue pingües réditos suministrando el arsenal necesario para hacer frente a un enemigo que está en todas partes y en ninguna. No olvidemos que el objetivo es destruir la cohesión social, los elementos que determinan la identidad nacional.

«Lo que hay es una imposición, por la fuerza, de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que estos colectivos se reflejan.» Con tal perspectiva, la pregunta salta inmediatamente: «¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de "sálvese quien pueda"? La respuesta es simple: "De esta guerra no solo van a resultar miles de muertos… y jugosas ganancias económicas. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente"»[92].

La unión entre guerras de baja intensidad, reversión de procesos, desarticulación social, redimensiona la figura del enemigo interno. Mientras más difusa sea su figura, el enemigo a destruir se agiganta. El cierre de espacios democráticos es el objetivo. Ya nada es lo que era. Los golpes de Estado no requieren de las botas militares. La sociedad entera se ha convertido en un escenario de guerra.

[1] Véase el Discurso de Harry Truman ante el Congreso de Estados Unidos, Washington, 12 de marzo de 1947.

[2] S. Lichtensztejn y M. Baer, *Políticas globales en el capitalismo. El Banco Mundial,* México, CIDE, 1982, pp. 10 y ss.

[3] *Ibid.,* p. 15.

[4] G. Connell-Smith, *El sistema interamericano,* México, FCE, 1982, p. 168.

[5] S. Ambrose, *Hacia el poder global. La política exterior norteamericana desde 1938 hasta Reagan,* Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano, 1992, p. 113.

[6] A. Golbery do Couto e Silva, *Geopolítica do Brasil,* Río de Janeiro, José Olimpo. p. 53.

[7] M. Klare y N. Stein, *Armas y poder en América Latina,* México, ERA, 1978, p. 34.

[8] P. González Casanova, *Los militares y la política en América Latina,* México, Océano, 1988, pp. 23-24.

[9] A. Golbery do Couto e Silva, *Geopolítica do Brasil, op. cit.,* pp. 198-199.

[10] J. Comblin, *El poder militar en América Latina,* Salamanca, Sígueme, 1978, p. 79.

[11] Cit. por J. Garcés, *Soberanos e Intervenidos, op. cit.,* p. 93.

[12] Véase G. Selser, *El guatemalazo. La primera guerra sucia,* Buenos Aires, Iguazú, 1961.

[13] S. Jonas Bodenheimer, *Guatemala: plan piloto para el continente,* San José, EDUCA, pp. 36-37.

[14] M. Posas y R. del Cid, *La construcción del sector público y del Estado nacional en Honduras. 1876-1979,* San José, EDUCA, p. 109.

[15] Véase *Fuerzas armadas 1988. Contrainsurgencia interna y disuasión regional,* México, Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de Honduras, s/f.

[16] L. Salomón, *Militarismo y reformismo en Honduras,* Tegucigalpa, Guaymuras, 1982, p. 43.

[17] *Ibid.,* p. 182.

[18] A. Seiferheld, *Nazismo y fascismo en el Paraguay. los años de la guerra 1936-1945,* Asunción, ServiLibro, 2012, p. 397.

[19] O. Díaz de Arce, «El Paraguay Contemporáneo», en P. González Casanova (comp.), *América Latina: historia de Medio Siglo,* vol. I, México, Siglo XXI, 1977, p. 358.

[20] C. M.ª Lezcano, «El régimen militar de Alfredo Stroessner. Fuerzas Armadas y política en Paraguay 1954-1989», en *Revista Síntesis* 10, enero-abril de 1990, p. 170.

[21] P. Lewis, «Paraguay, 1930-1990», en L. Bethell (ed.), *Historia de América Latina,* vol. 15, Barcelona, Crítica, 2002, p. 206.

[22] J. Schifter, *La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica,* San José, Educa, 1981, p. 73.

[23] S. Jonas Bodenheimer, *La ideología socialdemócrata en Costa Rica,* San José, Educa, 1984, p. 54.

[24] Véase J. Schifter, *Costa Rica 1948. Análisis de documentos confidenciales del Departamento de Estado,* San José, EDUCA, 1982; *La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica,* San José, Educa, 1981.

[25] D. Pécaut, *Orden y Violencia: Colombia 1930-1954,* vol. II, Bogotá, Siglo XXI, 1987, p. 532.

[26] J. Cotler, «Perú: estado oligárquico y reformismo militar», en P. González Casanova (coord.), *América Latina, Historia de medio siglo,* México, Siglo XXI, 1977, 20.ª ed., pp. 389-390.

[27] S. Sigal y E. Verón, «Perón: discurso político e ideología», en A. Rouquié (comp.), *Argentina Hoy,* Siglo XXI, México, 2.ª ed., 1982, p. 188.

[28] C. Buchrucker, *Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial 1927-1955,* Buenos Aires, Sudamericana, 1987. Citas de Juan Domingo Perón, pp. 330-331.

[29] R. Zavaleta Mercado, *Clases sociales y conocimiento,* La Paz, Los Amigos del Libro, 1988, pp. 46-47.

[30] R. Zavaleta Mercado, «Las masas en noviembre», en R. Zavaleta Mercado (comp.), *Bolivia Hoy,* México, Siglo XXI, 1983, p. 16.

[31] W. W. Rostow, *Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista,* Madrid, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 220 y ss.

[32] A. Gunder Frank, *América Latina: subdesarrollo o revolución,* México, ERA, 2.ª ed., 1976, pp. 42-43.

[33] J. M.ª Velazco Ibarra, *Una antología de sus textos,* selección e introducción de E. Ayala Mora, México, FCE, 2000, p. 357.

[34] E. Ayala Mora, *Resumen de Historia del Ecuador,* Quito, Corporación Editora Nacional, 3.ª ed., 2008, p. 111.

[35] J. Astudillo Romero, *Mito y realidad de la seguridad nacional en el Ecuador,* Cuenca (Ecuador), Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1981, p. 61.

[36] A. Cueva, *El proceso de dominación política en el Ecuador,* Quito, Planeta, 1997, p. 68.

[37] L. A. Costa Pinto, *Nacionalismo y militarismo,* México, Siglo XXI, 3.ª ed., 1974, p. 56.

[38] V. Bambirra y Th. dos Santos, «Brasil: nacionalismo, populismo y dictadura. 50 años de crisis social», en P. González Casanova (coord.), *América Latina, historia de medio siglo,* México, Siglo XXI, 2.ª ed., 1979, p. 143.

[39] C. Furtado, «Brasil, de la república oligárquica al estado militar», en VVAA, *Brasil Hoy,* México, Siglo XXI, México, 4.ª ed., 1975, pp. 13 y ss.

[40] A. Stepan, *Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado,* Argentina, Planeta, 1988, pp. 165-166.

[41] General J. E. Guglialmelli, *Geopolítica del Cono Sur,* Argentina, El Cid Campeador, 1979, p. 111.

[42] A. Golbery do Couto e Silva, *Geopolítia do Brasil, op. cit.,* p. 17.

[43] Definición citada por A. Cavalla, *La geopolítica y el fascismo dependiente,* México, Casa Chile, 1977, p. 13.

[44] G. O. Villegas, *Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional,* Buenos Aires, PLEAMAR, 1969, pp. 106 y 107.

[45] J. Bosch, *El pentagonismo, sustituto del imperialismo,* Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1968, p. 110.

[46] A. Briones, *Economía política del fascismo dependiente,* México, Siglo XXI, 1978, pp. 302-303.

[47] T. M. Klare y N. Stein, *Armas y poder militar en América Latina,* México, ERA, 1978, p. 35.

[48] H. Veneroni, *Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina. La dependencia militar,* Buenos Aires, Periferia, 1973, p. 74.

[49] I. Balbontín Arteaga, «Las posibles consecuencias…», *op. cit.,* p. 87.

[50] M. Klare y N. Stein, *Armas y poder en América Latina,* México, ERA, 1978, p. 121.

[51] A. Borón, *Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina,* Buenos Aires, CLACSO, 2004, pp. 80-81 (cursivas en el original).

[52] L. A. Costa Pinto, *Nacionalismo y militarismo,* México, Siglo XXI, 3.ª ed., 1974, p. 111.

[53] Todas las frases del dictador Pinochet están tomadas del excelente texto de: H. Lagos Schuffeneger, *El general Pinochet y el mesianismo político,* Santiago de Chile, LOM, 2001.

[54] L. C. Bresser Pereira, *Ideología y tecnoburocracia,* Buenos Aires, Paidós, 1975, p. 74.

[55] En este debate sobresalen obras colectivas como *El control político en el Cono Sur* (México, Siglo XXI); V. Beltrán (coord.), *El papel político y social de las fuerzas armadas en América Latina* (Caracas, Monte Ávila); A. Varas (coord.), *La autonomía militar en América Latina* (Caracas, Nueva Sociedad); A. Cavalla (comp.), *Geopolítica y seguridad nacional en América* (México, UNAM). Y entre las obras de autor, J. Comblin, *El poder militar en América Latina,* Salamanca, Sígueme; A. Rouquié, *El Estado Militar en América Latina,* México, Siglo XXI; M. Estaban Carranza, *Fuerzas armadas y estados de excepción en América Latina,* México, Siglo XXI; A. Stepan, *Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado,* Buenos Aires, Planeta. Destacando el señero ensayo de G. O'Donnell, *Modernización y autoritarismo.*

[56] G. O'Donnell, «Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario», en *Revista Mexicana de Sociología* 1 (1977), pp. 13 y 14.

[57] A. Fontaine Aldunate, *Los economistas y el presidente Pinochet,* Santiago de Chile, ZIG-ZAG, 1988, pp. 103-104.

[58] VVAA, *Documentos del siglo XX chileno,* Santiago de Chile, Sudamericana, 2001, «Carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor».

[59] *Orlando Leterier: el que lo advirtió. Los chicago boys en Chile,* Santiago de Chile, LOM, 2011, p. 32.

[60] V. Valdivia, *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973,* Santiago de Chile, LOM, 2008, p. 107. Durante la dictadura, Jarpa ocupará varios puestos de

responsabilidad, entre otros el de ministro de Interior.

[61] Véase V. Valdivia, R. Álvarez y J. Pinto, *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981),* Santiago de Chile, LOM, 2006.

[62] V. Valdivia, *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha chilena, 1964-1973,* Santiago de Chile, LOM, 2008, pp. 149 y ss.

[63] *Ibid.,* p. 152.

[64] M. Power, *La mujer de derecha: el Poder Femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973,* Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2008, pp. 195 y ss.

[65] G. Selser, *Una multinacional. La ITT en los Estados Unidos y en Chile. Documentos secretos sobre Chile,* Buenos Aires, Granica, 1974, p. 98.

[66] J. Larraín, *Identidad Chilena,* Santiago de Chile, LOM, 2001, p. 147.

[67] G. Selser, *Una multinacional, op. cit.,* pp. 171 y ss.

[68] VVAAVV, *Documentos del siglo XX chileno,* Sudamericana, 2001, pp. 413-427.

[69] Uno de los textos ejemplares en esta línea ha sido escrito por C. Huneeus, *El régimen de Pinochet,* Santiago de Chile, Sudamericana, 2000. En sentido contrario, se puede leer el excelente texto de T. Moulian, *Chile Actual. Anatomía de un mito,* Santiago de Chile, LOM, 19.ª ed., 1998.

[70] H. García, *El ocaso de la oligarquía,* Buenos Aires, El Cid Editor, 1979, pp. 224 y ss.

[71] VVAA, *Perú: Documentos fundamentales del proceso revolucionario,* Buenos Aires, Ciencia Nueva, 1973, pp. 88 y ss.

[72] C. Delgado, *Revolución Peruana. Autonomía y deslindes,* Lima, Libros de Contratiempo, 1975, pp. 146-147.

[73] General J. Velasco Alvarado, entrevista *Revista Visao, op. cit.,* p. 22.

[74] C. Delgado Olivera, *Testimonios de Lucha,* Lima, PEISA, 1973, pp. 114 y ss.

[75] E. Mercado Jarrín, *Seguridad, política y estrategia,* Buenos Aires, Schapire, 1975, p. 173.

[76] *Ibid.,* pp. 184 y 185.

[77] J. de J. Martínez, *Mi general Torrijos,* Buenos Aires, Contrapunto, Buenos Aires, 1987, p. 36.

[78] M. Jr. Gandásegui, *La democracia en panamá,* Panamá, CELA, 2.ª ed., 1998, p. 41.

[79] V. Ávila, *Panamá: luchas sociales y afirmación nacional,* Panamá, CELA, 1998, p. 72.

[80] G. Selser, *Érase un país a un canal pegado,* México, Universidad Obrera de México, 1989, p. 111.

[81] L. Guananini, «Panamá: la Guardia Nacional», en *Revista Tareas* 1, junio-octubre de 1974, pp. 68.

[82] R. Soler, *Panamá: historia de una crisis,* México, Siglo XXI, 1989, p. 82.

[83] General O. Torrijos, «Las leyes son más efectivas mientras más cerca están de los hombres», en *La batalla de Panamá,* Buenos Aires, EUDEBA, 1973, p. 70.

[84] G. Castro y R. Soler, «Panamá: del estado torrijista a la restauración oligárquica», en P. González Casanova, *El estado en América Latina. Teoría y Práctica,* México, Siglo XXI, 1990, p. 491.

[85] General Velasco Alvarado, «Ni capitalismo ni comunismo», mensaje a la Nación con motivo del 149 aniversario de la independencia, 28 de julio de 1970, en *La revolución Peruana,* Buenos Aires, EUDEBA, 1973, pp. 93 y ss.

[86] Para un análisis de los orígenes teóricos de las guerras y conflictos de baja intensidad pueden consultarse: VVAA, *Centroamérica. La guerra de Baja Intensidad,* San Jósé, CRIES-DEI, 1987; y L. Bermúdez, *Guerra de Baja intensidad. Reagan contra Centroamérica,* México, Siglo XXI, 1987, Para su desarrollo e impulso en la dinámica del control del espacio interno, tras los atentados de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, véase Sh. Wolin, *Democracia. S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido,* Buenos Aires, Katz, 2008.

[87] G. López y Rivas, *Autonomías. Democracia o contrainsurgencia,* México, ERA, 2004, p. 9.

[88] L. Astorga, *Seguridad, Traficantes y Militares. El poder en la sombra,* México, Tusquets, 2007, p. 16.

[89] Cit. por Subcomandante Insurgente Marcos en «Apuntes sobre las Guerras», *Revista Rebeldía* 76 (9), p. 38.

[90] *Ibid.,* p. 33.

[91] *Ibid.,* p. 35.

[92] *Ibid.,* p. 41.

IV. EL NUEVO GOLPISMO

> Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: «Hagan lo que tengan que hacer», y luego nos dieron con todo ¡Cuántas veces me dijeron «se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil o diez mil más!».
>
> Jorge Rafael Videla. Dictador argentino.

LAS FUERZAS ARMADAS TRAS LA GUERRA FRÍA, DEUDAS PENDIENTES

No hubo respiro. Al finalizar la Guerra Fría, el neoliberalismo llevaba dos décadas funcionando. La caída del muro de Berlín aceleró las reformas. La agenda se vio fortalecida gracias a la ideología de la globalización. El peligro nuclear se desvanecía poco a poco. Estados Unidos se consideró potencia triunfante y no deseaba compartir su hegemonía. Gradualmente, se impuso el unilateralismo en las relaciones internacionales. Naciones Unidas era un estorbo tal como fue concebida tras la Segunda Guerra Mundial.

La primera Guerra del Golfo, 1990-1991, cambió por completo el escenario de las relaciones internacionales. No hubo lugar para el soñado multilateralismo. Las Naciones Unidas apoyaron los deseos de invasión a Irak con la excusa de la entrada de tropas iraquíes en Kuwait. Los países aliados se plegaron al llamado estadounidense sustentando la *Operación Tormenta del Desierto.*

La socialdemocracia, como aliada de los Estados Unidos en su política de acoso y derribo a los países del Este y gestora de reformas neoliberales, también se consideró un factor determinante en el despliegue del nuevo orden mundial. El socialismo-marxista y las izquierdas anticapitalistas habían sufrido una dura derrota.

En América Latina, el fin de las dictaduras se atisbaba en el horizonte. Desde mediados de los años ochenta los procesos de transición se habían generalizado. El peligro comunista había sido abortado y solo restaba darles una salida decorosa a las fuerzas armadas. El primer país en salir de la noche oscura fue Argentina. Sus causas fueron bien conocidas. La

humillación sufrida en la guerra de las Malvinas fue el caldo de cultivo para el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles. En 1983, las primeras elecciones libres dieron el triunfo al candidato radical Raúl Alfonsín. Con él se inició el juicio a los miembros de las tres Juntas militares que habían gobernado Argentina, periodo autodenominado por las fuerzas armadas de «reorganización nacional».

Los responsables recibieron penas dispares. Cinco fueron condenados y cuatro absueltos. Jorge Videla y Emilio Massera: cadena perpetua. Roberto Viola: 17 años; Armando Lambruschini: 8 años; Orlando Agosti: 4 años. Todos dados de baja con deshonor. En el caso de los generales Jorge Anaya y Leopoldo Galtieri la sentencia les absolvió, argumentando la imposibilidad de comprobar la responsabilidad del personal bajo sus órdenes en crímenes de lesa humanidad. Por su parte, los generales Orlando Agosti y Basilio Lami Dozo fueron exonerados de culpa por haber asumido el mando tras el cierre del centro de torturas y detención.

El proceso argentino destapó el horror de las torturas y puso en evidencia la existencia de un plan preconcebido para la eliminación física, aplicación de tormentos, cautiverio y desaparición física de opositores. Fue allí donde el fiscal Julio César Strassera pronunció su alegato final: «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: “nunca más”». En 1990, el presidente Carlos Menen, militante del Partido Justicialista, concedió un indulto espurio a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Años más tarde, 2003, el decreto será derogado por el presidente Néstor Kirchner, correligionario de Menen, siendo ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2010, obligando a los reos a cumplir la sentencia.

Protagonistas de excepción, las fuerzas armadas desempeñaron el papel garante del orden social bajo la bandera de *luchar contra el marxismo y la subversión comunista.* Las clases dominantes y el capital transnacional no pusieron reparos a los métodos utilizados. Los militares actuaron con total autonomía. Para no caer en un vacío legal sus actuaciones fueron denominadas, eufemísticamente, prerrogativas militares. Dichas prerrogativas cubrían todo el abanico de las instituciones civiles del Estado. No hubo límite a las actuaciones de las fuerzas armadas. La tortura, vuelos

de la muerte, violaciones a mujeres, hombres y menores de edad, secuestros, robos de bebés, mutilaciones, asesinatos y la desaparición de ciudadanos cuyos cuerpos siguen sin ser recuperados. La lista de horrores fue recogida en los testimonios de las víctimas en el *Informe Sábato.*

La «guerra sucia», avalada por las fuerzas políticas de la derecha latinoamericana, bajo la protección de los Estados Unidos, y sus excesos, dejó mal paradas no solo a las fuerzas armadas. Tocó de lleno a sus cooperadores necesarios, los instigadores civiles de los golpes de Estado. Fue difícil explicar y menos comprender la indiferencia, menosprecio o desconocimiento de sus socios civiles a las torturas y la violación de los derechos humanos. Su actitud demostró la complicidad y el aval para hacer desaparecer opositores políticos, empresarios díscolos y militantes.

Abiertos los procesos de transición, se debían saldar deudas y recortar las prerrogativas militares. Era necesario pasar página aminorando costes en la institución militar. El caso argentino alertó a dictadores e instituciones armadas. No podía repetirse el bochorno de ver sentados en el banquillo de los acusados a generales, comandantes y altos mandos. En otras palabras, el estado mayor de las fuerzas armadas. En los diálogos de la transición, las fuerzas armadas controlaron los tiempos y definieron las agendas. El problema de los derechos humanos fue tratado de forma lateral, haciendo abstracción de los crímenes de lesa humanidad. Argentina no era un buen ejemplo a seguir. El llamado estado de guerra interna, argumento utilizado para justificar los crímenes de lesa humanidad, resultó ser un escudo vulnerable. Igual que en Chile, el llamado Plan Z acabó siendo un montaje de las fuerzas armadas para articular la represión, encarcelamiento y la realización de juicios *in situ* a dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unidad Popular, con penas de muerte por traición a la patria.

En cualquier caso, el objetivo era presentar una realidad dual: ellos o nosotros. Había que salvar a la civilización occidental del comunismo al precio que fuese necesario pagar. No se les podía echar en cara cumplir su deber con celo y eficacia. Las fuerzas armadas negocian su salida. Las transiciones y los procesos de paz, fuesen en el Cono Sur o Centroamérica, pusieron en el orden del día leyes de amnistía para militares imputados en torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas. La ley de *obediencia debida* sirvió para dar carpetazo a las violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales, suboficiales y rangos

subalternos. Así, se garantizó que toda una generación de jóvenes militares, ingresados en tiempos de las dictaduras y la represión, se mantuviesen en sus filas, obligados a guardar silencio y proteger a sus mandos.

En Uruguay se hayo una fórmula que dejó contenta a la mayoría. La firma del Pacto del Club Naval en 1984. Su aplicación selló el retorno a la institucionalidad civil, exculpando a las fuerzas armadas de cualquier delito cometido en función del deber. El coronel Caraballo, uno de los artífices del pacto, sentenció en el discurso oficial: «No tememos al futuro porque tenemos la conciencia tranquila de las medidas que se tuvieron que tomar y ejecutar, algunas difíciles de aceptar, fueron tomadas con el fin superior de la defensa de nuestra patria y tampoco vacilaremos en reiterarlas si la seguridad del país lo exige». La respuesta a tal muestra de vivir en la impunidad perpetua correspondió al investido presidente, Julio María Sanguinetti: «[…] Si hubo amnistía para los dirigentes guerrilleros no estaría mal que también la hubiese para represores que también se habrían excedido en el cometido de sus funciones». En 1986, con una nomenclatura rimbombante, el Parlamento uruguayo aprobó por mayoría la «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», exonerando definitivamente a los militares que hubieran participado directa o indirectamente en la violación de derechos humanos durante los años de dictadura cívico-militar. En 1989, la presión popular obligó a realizar un referéndum para derogar la ley de impunidad. Los dos grandes partidos, blanco y colorado, unieron sus esfuerzos en la deshonrosa tarea de votar en contra. La petición fue derrotada por un escaso margen de votos. Los militares uruguayos podían estar tranquilos y lo estuvieron hasta el año 2012. El gobierno del Frente Amplio, encabezado por su presidente José Mujica, logró, en parte, deshacer los acuerdos que blindaban a los militares, abriendo la puerta a futuros juicios contra miembros de las fuerzas armadas implicados en crímenes de lesa humanidad.

Otra salida recurrente fue pactar la entrega de chivos expiatorios. Las fuerzas armadas debían sacrificar a sus torturadores más señalados, evitando caer en el bochorno de la impunidad y el descrédito. Lo han hecho a regañadientes, convencidas de haber traicionado a sus compañeros de armas. Sin embargo, con esta medida, han puesto fuera de peligro la honra castrense que, al fin y al cabo, era lo que se protegía. En esta entrega «voluntaria», la transición fue benévola, cuando no generosa; las nuevas

autoridades políticas de todos los signos y colores y en todos los países procedieron a llamar a retiro a generales, comandantes y militares implicados en delitos de sangre. Como premio, se les jubiló con el mayor rango posible que permitían las ordenanzas.

Las elites políticas, los empresarios, las burguesías que conspiraron y se enriquecieron durante las dictaduras, mientras los uniformados hacían el trabajo sucio, debían pagar el peaje. Sus socios estaban en peligro y acudieron en su defensa. Presionaron al poder judicial y, desde el legislativo, promovieron leyes para acelerar el olvido y pasar página. Una clase política indigna aprobó con distintos nombres, las conocidas leyes de «Punto Final».

La alianza cívico-militar entre las fuerzas armadas y los grupos dominantes se hizo efectiva a la hora de penalizar y perseguir a empresarios disconformes con las políticas económicas, opuestos a la violación de los derechos humanos y partidarios de un retorno a la democracia representativa. Se actuó expropiando sus bienes y llevándolos a la bancarrota. Igualmente, las empresas multinacionales afincadas en América Latina vieron en las dictaduras una posibilidad de sobreexplotación, grandes beneficios y, de paso, quitarse de encima a dirigentes sindicales. Su actitud fue de cooperación con las fuerzas armadas, confeccionando listas y despidiendo a trabajadores díscolos. Era una forma de romper la resistencia de las organizaciones obreras.

Nuevamente, la dictadura argentina es un buen ejemplo. Para deshacerse de incómodos empresarios, empleó un andamiaje jurídico al cual denominó «subversión económica». El organismo encargado por las fuerzas armadas y los grupos económicos afines fue la Comisión Nacional de Valores. De manera arbitraria y con la excusa de promover «subversión económica» se expropia y despoja de bienes a más de un centenar de empresarios. Así quedó reflejado en el informe presentado a la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, detallando las actuaciones de la Agencia durante la dictadura. En dicho informe aparece «un mapa con el listado completo de empresarios secuestrados en el periodo 1976-1983, incluyendo tanto los casos en los que intervino la CNV como aquellos en que no lo hizo. Los números provisorios muestran que las víctimas fueron ciento treinta y una, once de las cuales permanecen desaparecidas. El listado cruza nombres, empresas, fechas de secuestro, centro clandestino de

detención y fuerza represiva que intervino. Un primer dato que emerge de la lectura es una división temporal: en el periodo 1976-1978 hubo más secuestros de personas calificadas como “empresarias” y en 1978-1983 parecen más las clasificadas como “financistas”. Al primer periodo corresponden los casos más conocidos, leídos en general como parte de la persecución política a las organizaciones armadas por los supuestos vínculos económicos con ellas. Estas son Cerro Largo S. A., por los terrenos de Chacras de Coria; Papel Prensa, del Grupo Graiver, con dieciséis personas secuestradas, y Mackentor de Córdoba, con treinta y cuatro secuestrados. Al segundo periodo pertenecen […] los secuestros del grupo Grasi-Chavanne y casos como los de Eduardo Saiegh, propietario del Banco Latinoamericano, secuestrado con una parte del directorio y sus empleados, y los financistas Fernando Combal y Osvaldo Prisant, y el banquero David Koldobsky»[1].

¿Y las trasnacionales? Empresas como la Ford colaboraron con las fuerzas armadas para hacer desaparecer y despedir a líderes sindicales: «Pedro Troiani, trabajador y delegado de la fábrica, miembro de la comisión interna, fue secuestrado y torturado dentro de la planta de General Pacheco en abril de 1976 […]. En su testimonio, explicó con claridad que la comisión interna recogía reclamos no solo salariales, sino también sobre ritmos y condiciones de trabajo, y consiguió firmar, en 1975, un convenio altamente beneficioso para los trabajadores […]. En este contexto, se llevaron a cabo políticas represivas que se acentuaron después del golpe militar el 24 de marzo de 1976. Entre marzo y mayo de ese año, en la planta hubo veinticinco trabajadores secuestrados, la mayoría integrantes de la comisión interna y el resto militantes gremiales, que permanecieron “jurídicamente desaparecidos” entre treinta y sesenta días […]. Existen numerosos testimonios que indican que la empresa reclamó a las fuerzas armadas el secuestro y detención de trabajadores y delegados sindicales. Una de las esposas de las víctimas, Arcelia Luján de Portillo, indicó en su declaración judicial que durante la entrevista que mantuvo con un militar responsable de los secuestros, de apellido Molinari, este “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que quería que chupáramos” […]. En 2001, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, se abrió querella contra la

Ford». Algo similar ocurrió en la fábrica de la Mercedes Benz; sus directivos colaboraron activamente en el secuestro, desaparición y tortura de sus trabajadores. El entonces gerente de producción, Juan Tasselkraut, facilitó nombres a las fuerzas armadas. Interrogado años más tarde en medio de los juicios de la verdad se le preguntó si existía alguna relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes. Su respuesta fue: «Y… milagros no hay»[2].

En Chile, a diferencia de Argentina, el golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende suscita un fuerte proceso privatizador, generando la venta de empresas del sector público agrupadas en la Corporación de Fomento (CORFO). Los empresarios que apoyaron y alentaron la tiranía serán los máximos beneficiarios. Viejos y nuevos socios de los militares ven acrecentar sus fortunas y poder económico. Los Matte, Larraín Luksic, Angelini, Said, Edwards, ganan concursos amañados. Entre todos, destaca Ricardo Claro Valdés. Asesor de la dictadura desde sus inicios, estuvo presente en las etapas previas del golpe, financiando actividades terroristas y a las organizaciones de extrema derecha como Patria y Libertad. Su suerte cambiará radicalmente con la dictadura, pasando a ser una de las más grandes fortunas de Chile y América Latina. Se le vendieron empresas públicas a precio de saldo. «Me llamaron los primeros días de septiembre del 73 para ofrecerme ser asesor del ministro de Economía.» También, dice haber actuado en una extraña misión en China como embajador plenipotenciario de la dictadura, afirmando que «fui con el disfraz de una misión económica, pero realmente fui a conseguir el apoyo de China por si presentaban una moción para expulsar a Chile de la ONU. Regreso a China en 1978, con Hernán Cubillos, excanciller de Pinochet, Roberto Kelly y el exgeneral del ejército Sergio Covarrubias, viceministro de relaciones exteriores». Será el encargado de recibir a Henry Kissinger en la organización de la 6.ª asamblea de la OEA a petición de Pinochet. Su suerte cambia, CORFO le vende Cristalerías Chile y empresas del *holding* público. Tras la dictadura fue acusado de entregar a dirigentes sindicales de su empresa ELECMETAL a las fuerzas armadas. Seis trabajadores detenidos en la fábrica a días del golpe fueron hallados sin vida en las calles de Santiago: José Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, los hermanos Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores. «La

decisión de entregar a los obreros a los uniformados que evidentemente les dieron muerte fue responsabilidad del directorio de la empresa integrado por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado militar Patricio Altamirano, quien retuvo en su oficina a Juan Fernández y Augusto Alcayaga para dárselos a sus captores»[3]. Ricardo Claro puso a disposición de las fuerzas armadas dos barcos de otra de sus nuevas empresas adquiridas a la luz de la dictadura para ser usados como centros de tortura: «Uno de ellos, de nombre *Maipo,* trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus "pasajeros" perdieron la vida. El otro, el *Lebu,* cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes»[4]. Hoy, su grupo de empresas CLARO, es uno de los más importantes de América Latina y de Chile, todo gracias a la dictadura.

No hubo país de América Latina donde los golpes de Estado no estuviesen urdidos en alianza con los partidos democratacristianos, conservadores, liberales y contasen con el visto bueno de Estados Unidos. En Chile, tras el triunfo de Salvador Allende, se puso en marcha la operación diseñada por el entonces secretario del Departamento de Estado, Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms, y el presidente Richard Nixon. El nombre en clave del proyecto: *Fulbelt.* Los encargados de llevarlo a cabo, la sección 40 del Pentágono dedicada a las «acciones encubiertas». Helms entregará, años más tarde, a la Comisión «Church» del Senado de Estados Unidos, el memorándum de su reunión con Nixon. De acuerdo al mismo, Nixon le dijo: «Aunque tenga usted una oportunidad entre diez, salve a Chile, merece la pena el gasto. No importan los riesgos que correr. Diez millones de dólares disponibles, más si es necesario. Dedicación Completa. Los mejores Hombres. Reventar la economía». El 16 de septiembre de 1970 tuvo lugar la reunión. En los documentos desclasificados quedó constancia de su celebración. Firmado por William V. Borroe, jefe de la División del Hemisferio Occidental, se lee: «1. Con esta fecha, el director Helms llamó a una reunión en relación con la situación de Chile. Estaban presentes, además del director, el general Cushman; el coronel White, Thomas Karamessines; Cord Meyer, William V Broe, jefe de la División del Hemisferio Occidental; delegado jefe WF División; nombre tachado, Jefe Covert action Wf División (nombre tachado). Jefe Wf/4; 2. El director le manifestó al grupo que el presidente Nixon decidió que el régimen de

Allende en Chile no es aceptable para Estados Unidos. El presidente le pidió a la agencia que impida que Allende asuma el poder o que lo desaloje de él. El presidente destinó 10 millones de dólares con este propósito: 3. Durante la reunión se decidió que el señor Thomas Karamessines, Ddp, asumirá toda la responsabilidad de este proyecto. Será asistido por un equipo especial creado para este propósito en la División del Hemisferio Occidental; 4. El coronel White fue en encargado por el director de proveer todos los elementos necesarios para facilitar la realización del proyecto; 5. El director dijo que el doctor Henry Kissinger, consejero del presidente para asuntos de la Seguridad Nacional, le solicitó reunirse con él el próximo 18 de septiembre, a fin de escuchar los comentarios de la Agencia sobre la forma de llevar a cabo esta misión»[5].

La penetración y control por Estados Unidos de las fuerzas armadas latinoamericanas viene de lejos. La Escuela de las Américas, ubicada en Fort Gulick (1946-1984), en la zona del canal de Panamá, creó fuertes lazos entre Estados Unidos y los militares latinoamericanos. Entre 1970 y 1975 pasan por sus aulas un total de 9.317 estudiantes. Muchos de ellos serán posteriormente agregados militares en Estados Unidos y el mundo. Desde una posición de privilegio negocian convenios de compra de armamento y asesorías técnicas. Es la manera de obtener comisiones, facilitando la corrupción. Entre los alumnos de la Escuela de las Américas tenemos a dictadores como Hugo Banzer y Luis Arce en Bolivia; Efraín Ríos Montt en Guatemala; Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador; Videla, Galtieri, Viola, Massera en Argentina. Sin olvidarnos de los responsables de los servicios de contraespionaje o gestores de la guerra sucia: Manuel Contreras, jefe de la DINA en Chile; Roberto D’Aubisson en El Salvador, cuyo nombre queda asociado a la fundación del ultraderechista partido ARENA, y autor intelectual del asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero; en Perú, Vlaldimiro Montesinos, jefe de los servicios de inteligencia de Alberto Fujimori, que desarrolló la guerra asimétrica como estrategia, asesinando, torturando o encarcelando a todo opositor al régimen. En Venezuela, Henry López Sisco, principal articulador de la guerra sucia en los años ochenta y la represión en el gobierno de Carlos Andrés Pérez durante el «Caracazo»; hoy vive en Costa Rica.

El cierre de la Escuela de las Américas en la zona del Canal obligó al traslado de sus instalaciones. Hoy se ubica en el Estado de Georgia y se

reconoce como centro de formación en Fort Benning. Para borrar el pasado ha sido rebautizado con el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. En su nueva sede, sigue desempeñado una ímproba labor *educativa* de militares latinoamericanos. Entre 1999 y 2003 «la milicia estadounidense entrenó a 72.495 miembros de las fuerzas armadas Latinoamericanas y del Caribe. El número de entrenados saltó de 13.785 en 1999 a 22.831 en 2003»[6]. Entre sus maniobras conjuntas con las fuerzas armadas latinoamericanas, según consta en los documentos del Comando Sur, destacan: I) TRADEWINDS y FA PANAMAX, ejercicios sobre migración ilegal y tráfico de drogas e ilícitos. II) *Fuerza Comando.* Ejercicios de contraterrorismo que tienen como objetivo el entrenamiento de fuerzas especiales; en él participan diecisiete países del continente.

El regreso a los cuarteles de las fuerzas armadas se realizó sin grandes bajas. Los tribunales militares tienen prioridad para enjuiciar a sus correligionarios imputados por crímenes de lesa humanidad. La justicia civil se ve impotente para juzgar en casos donde son imputados generales o militares que desempeñaron cargos de responsabilidad política durante las dictaduras. Penas benévolas, arresto domiciliario, libertad condicional, son algunos de los fallos de las cortes militares.

La impunidad es la norma sobre la cual se asientan los procesos de transición: «En efecto, según nos demuestra la reiterada experiencia de las transiciones que siguen a las dictaduras militares, la impunidad total o parcial de los represores y de los más caracterizados golpistas suele constituir, desgraciadamente, parte del precio a pagar por la recuperación de la democracia. Así ha sido, sin ir más lejos, en todos los países del Cono Sur. Más aún: hay que subrayar el hecho de que la Argentina es el país donde la impunidad ha sido menor: el país que más lejos ha llegado en el castigo a los culpables. Ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil lograron jamás en su regreso a la democracia, tras sus respectivas dictaduras militares, nada similar, ni mínimamente parecido a lo logrado por la Argentina en este terreno. Frente a la impunidad general o prácticamente absoluta conseguida por los represores de los años setenta en todos esos países y en otros, la democracia argentina consiguió acumular un aplastante volumen de pruebas, acusar judicialmente, procesar, llevar a juicio, presentar centenares de testimonios y, finalmente, sentenciar y

condenar a algunos de los máximos responsables del más temible poder militar que el continente americano haya conocido en el presente siglo»[7].

En la mayoría de los países que sufrieron la noche oscura de las dictaduras se acumularon testimonios, pruebas y documentación sobre la violación de los derechos humanos. En Chile, se produjeron dos informes. El primero en 1990, realizado por la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, el *Informe Rettig.* En él se llegó al deshonroso acuerdo de consignar exclusivamente a los ciudadanos muertos y asesinados, consecuencia de la violencia del Estado ejercida por agentes de las fuerzas armadas desde el 11 de septiembre de 1973. Recoge un total de 2.279 casos imputables a la acción directa o indirecta de las fuerzas armadas. El segundo informe es resultado de la presión social por esclarecer e incluir los casos de violación de los derechos humanos cometidos durante la tiranía no contemplados en el *Informe Rettig.* Su campo de investigación incluye a las personas que sufrieron torturas, fueron detenidas ilegalmente, perdieron sus trabajos por motivos de persecución política, pero sobrevivieron. Su nombre alude a esta circunstancia: Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Saldrá a la luz en 2003 bajo el nombre de *Informe Valech.* En él se comprueban y relatan más de 40.000 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el *Informe Valech* nació hipotecado. Bajo la premisa de «razón de Estado», realizó una publicación incompleta de las comparecencias y testimonios de miembros de las fuerzas armadas que prestaron declaración. El argumento utilizado fue agradecer la colaboración de los miembros de las fuerza armadas en esclarecer los casos de torturas y detenciones ilegales. Como muchos de ellos seguían en activo, se hizo necesario ocultar los nombres de militares implicados que prestaban servicio en las fuerzas armadas. El presidente Ricardo Lagos señaló que los documentos tendrían el estatuto de secreto de Estado por un periodo de cincuenta años. Esta decisión muestra la distancia que separa el caso chileno del argentino, cuyo informe *Nunca Más* dio muestra cabal de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las juntas militares desde 1976, lo cual ha permitido detener, enjuiciar y condenar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Es la excepción que confirma la regla.

Las dictaduras militares actuaron de manera concertada en la represión de los militantes de la izquierda latinoamericana. Esta acción conjunta recibió el nombre de *Operación Cóndor.* Urdida en Santiago de Chile en 1975,

contó con visto el bueno de Henry Kissinger en 1976, aprovechando su viaje a la conferencia de la OEA celebrada en Santiago. Formaron parte de ella Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay. Sus huellas se pueden rastrear gracias a la acción del juez José Agustín Fernández y su colaborador Martín Alameda, quienes hallaron de manera fortuita en diciembre de 1992, en la comisaría Lambaré de Asunción, Paraguay, los conocidos *Archivos del Terror.* En ellos se detalla la estrategia para vigilar, detener, torturar, trasladar y hacer desaparecer a militantes de la izquierda política latinoamericana. Desde 1975, según consta en los *Archivos del Terror,* fueron asesinadas 50.000 personas, 30.000 desaparecieron y más de 400.000 sufrieron torturas o prisión.

> A partir de 1976 el comando central del terrorismo de Estado vio cómo surgía un poderoso competidor –a los servicios de contrainsurgencia norteamericano–: el Cóndor. A diferencia del poder paramilitar estadounidense, el Cóndor no reconocía ningún tipo de limitaciones: no estaba sujeto a controles de un gobierno representativo, tenía capacidad para involucrar a toda la superestructura, y ni siquiera tenía que justificar, hacia adentro, que el terrorismo de Estado se convirtiera en un fin en sí mismo. Ambas estructuras utilizaban los mismos criterios de funcionamiento, apelaban a la misma mano de obra, expandían los mismos métodos y obtenían financiamiento de los mismos fondos; pero el Cóndor podía llegar a conquistar espacios vedados, como se vio en el caso de los cubanos anticastristas y como se confirmó con agentes de la CIA, que al final no sabían para quién trabajaban y en qué estrategia operaban[8].

En la *Operación Cóndor,* también participaron de forma esporádica las fuerzas armadas de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Este terrorismo de Estado global tuvo como antecedente la colaboración entre las dictaduras de Chile y Argentina para asesinar al exgeneral en jefe de las fuerzas armadas chilenas, exiliado en Argentina, Carlos Prats, y a su compañera, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974. Una vez articulada la red de la *Operación Cóndor,* se perpetraron el atentado contra el exministro de interior del gobierno de Salvador Allende exiliado en Estados Unidos, Orlando Leterier, y su secretaria norteamericana Ronnie Moffit, el 21 de septiembre de 1976. El asesinato del general boliviano Juan José Torres en Buenos Aires, en 1976, y los conocidos «vuelos de la muerte», consistentes en tirar al vacío a los detenidos, abriéndoles antes el estómago en canal para evitar que los cuerpos emergieran posteriormente a la superficie. Los datos apuntan a un total de 30.000 casos comprobados de personas torturadas, repatriadas y desaparecidas por los servicios de inteligencia pertenecientes a

la *Operación Cóndor.* La cifra está ligada a nuevas formas de actuación que facilitaron el establecimiento de agentes para proceder sin restricciones y con personal específico, más allá del agregado militar de turno y el espionaje convencional. «La *Operación Cóndor* brindaba una capacidad operativa mucho mayor que antes y contaba con la bendición oficial […]. Cada país tenía derecho y la obligación de ceder "personal técnico" para operar del Centro de Coordinación, la Oficina Central y la base de datos ubicados en Chile. Este personal gozaba de inmunidad diplomática. El sistema consistía en una compleja infraestructura multilateral de inteligencia, con sede central en Chile y sucursales en cada país […]. El Cóndor se crearía para capturar e interrogar a sus enemigos de izquierda que aún pululaban por América Latina y para "eliminar" a los que vivían exiliados en otras partes del mundo. –Tras la constitución, fase uno– Estas eran las fases operativas […]. Fase Dos, operaciones conjuntas en América Latina y Fase Tres, misiones a Europa y Estados Unidos […]. La alianza del Cóndor nació del instinto agresivo de los líderes militares que se veían enfrentando un conflicto a escala internacional. Usaban la frase "Tercera Guerra Mundial" sin ironía ni connotación alguna. Más que para una guerra irregular con el fin de extinguir levantamientos guerrilleros a medida que se iban desatando, el eje del Cono Sur estaba equipado para proyectar su poderío hacia el extranjero, para generar "capacidad extraterritorial". Las fuerzas ahora unidas para preservar el vagamente definido concepto de "estilo de vida occidental" estaban preparadas para llegar incluso a las capitales europeas y norteamericanas con el fin de arrancar de raíz las células subversivas que sus gobiernos, reblandecidos por la democracia, no se atrevían a extirpar»[9].

Uno de los montajes más destacados en los medios de comunicación fue el conocido como «Caso de los 119». Se trató de confeccionar una lista de 119 militantes de izquierdas, secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de Inteligencia chilena,(DINA) a los cuales la dictadura situó en el exterior, considerándolos víctimas de luchas intestinas o caídos en combate mientras desarrollaban actividades subversivas. La lista buscó desautorizar a los familiares de presos y detenidos desaparecidos de muchos de los 119 que denunciaban haber estado presentes durante la detención, conocían los centros de tortura donde habían sido trasladados, además de contar con testigos que confirmaban sus testimonios. Fue una cortina de humo para

negar la entrada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tenía prevista su visita a Chile. El montaje se inició con la noticia aparecida en el periódico *El Mercurio* los días 14 y 16 de junio de 1976, anunciando la detención de 50 guerrilleros y el cruce de la frontera con Argentina de un número similar. Posteriormente, tres periódicos *Últimas Noticias, La Tercera* y *La Segunda,* coincidieron en señalar la existencia de un «siniestro plan rojo» de extremistas que preparaban sabotajes y atentados contra personas tanto civiles como militares del régimen. La peculiaridad de tales comandos, aducían, era su composición. Estarían encabezados por dirigentes del MIR y guerrilleros que las organizaciones de derechos humanos señalaban como asesinados por la DINA o las fuerzas armadas. En otras palabras, para las autoridades militares estas 119 personas nunca habían estado detenidas en Chile, menos aún torturadas o asesinadas por las fuerzas armadas. Por el contrario, se encontraban prófugas de la justicia y en el extranjero. Para dar credibilidad a su versión, fueron editadas *ad hoc* dos revistas, una en Argentina, *Lea,* y otra en Brasil, *O'Día.* La revista *Lea* en su número 1, aparecido el 18 de julio de 1976, publicaba en portada una noticia proveniente de México, señalando que «alrededor de 60 extremistas chilenos habrían sido asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por sus propios compañeros de lucha». A los pocos días, *O'Día,* recogía el testigo y afirmaba que 59 extremistas chilenos habían sido identificados en los enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia argentina de Salta. La información dio cuenta de una refriega entre terroristas, subversivos e izquierdistas. Pendientes de nuevas entregas, se esperaba continuidad informativa. Pero las dos revistas suspendieron sus ediciones. Habían desaparecido abruptamente tras publicar un solo número. Sin embargo, sus relatos eran suficientes para que el *El Mercurio,* amparándose en ellos, el 25 de junio de 1976, editorializara lo que pasó a denominar *El Caso de los 119:* «Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar». Curiosamente, el director de *Lea* era José López Rega, creador de la *Triple A* en Argentina. En el caso de *O'Día,* la asociación de prensa de Brasil declaró no conocer publicación alguna en todo el Estado de Paraná y en Curitiba, donde se alojó la cabecera, con

dicho nombre. Años más tarde, la información de estas dos publicaciones *ad hoc* fue desmontada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Chile, evidenciando ser un montaje de la *Operación Cóndor*. Los conocidos como *los 119* fueron asesinados por oficiales de la DINA en los centros de tortura de la dictadura chilena[10].

El proceso de reformas neoliberales, concluido el ciclo de las dictaduras militares, adquirió un ritmo frenético. Las fuerzas armadas habían desempeñado a la perfección su papel en la lucha anticomunista. Superado el riesgo de una revolución, los amantes del neoliberalismo iniciaron un trabajo no exento de estiércol proclamando las bondades del neoliberalismo. El escritor peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Octavio Paz mostraban su satisfacción por el retorno a la «civilidad» y la posibilidad de construir un neoliberalismo en libertad. Su origen cargado de sangre era un escollo difícil de superar, sobre todo si el país de referencia era Chile. Recuperar la democracia servía para instaurar el nuevo orden bajo el dogma del libre mercado y la libertad de elegir. América Latina saldría del túnel del «tercermundismo» abrazando sin temor la revolución neoliberal.

> Esta revolución significa reforma y perfeccionamiento de nuestro sistema democrático y el establecimiento, en vez del capitalismo mercantilista que tenemos, del capitalismo a secas, es decir, aquel que se asienta en la propiedad privada y el mercado competitivo y es eminentemente popular. Sobre esto hay que ser claros: el liberalismo es inseparable del sistema democrático –como régimen civil, de poderes independientes, libertades públicas, pluralismo político, derechos humanos garantizados y elecciones– y el mercado libre como sistema para la asignación de los recursos y la creación de riqueza[11].

Concluidos los procesos de transición, asentada la economía de mercado, las fuerzas armadas tendrían una labor más propia de su actividad profesional. Ahora, el rostro del enemigo se hará coincidir con terroristas, narcotraficantes, mafias del crimen organizado, narco-guerrilla y movimientos antisistema. Son los comienzos de la militarización de la sociedad. La globalización neoliberal inaugura enemigos. La seguridad hemisférica se recompone a la luz de nuevos objetivos. El *establishment* del departamento de Estado norteamericano, por medio de su portavoz, declara:

> Un hemisferio democrático con economías modernas y abiertas significa un hemisferio estable. Sin embargo, las amenazas a las instituciones y economías democráticas –tales como la agresión, coerción, insurgencias, terrorismo y tráfico ilícito de drogas– deben ser enfrentadas. La

> cooperación entre los países de la región es el mejor método para combatir esas amenazas. Dentro de esta estructura, los acuerdos para el control de armas, una reestructuración apropiada de las fuerzas nacionales, medidas que crean confianza y una plena adhesión a los acuerdos internacionales pueden hacer que este hemisferio sea un lugar más seguro y próspero. Igualmente, la coordinación multilateral entre países… en el área anti-narcóticos puede lograr que el programa nacional de cada país sea tanto más efectivo […]. Si logramos redefinir la seguridad nacional en las formas descritas […] permítanme dejar claro que los militares continuarán desempeñando un papel primordial en salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, además de proteger de la agresión directa, deben lidiar con las crecientes amenazas […], el terrorismo, el narcotráfico y se necesita configurar estrategias y políticas para combatir efectivamente estas amenazas[12].

Los noventa del siglo XX fueron años de refundación del orden político. Las acciones encubiertas, diseñadas por el Pentágono para desestabilizar gobiernos de izquierda o progresistas se acompañaron, desde la administración Reagan, de financiación legal. Un aporte votado y aclamado en El Capitolio. Los fondos servirán para promover la creación de ejércitos mercenarios, apoyar medios de comunicación locales y crear organizaciones políticas destinadas a revertir los procesos de cambio. La guerra contrainsurgente se hace a cara descubierta. Son los representantes electos de los partidos republicano y demócrata quienes asignan partidas de los presupuestos generales de la nación a patrocinar acciones desestabilizadoras. Entre otras, los cinco millones de dólares destinados a derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua. Luego han seguido Afganistán, Irak, Libia, Siria, Túnez o Egipto.

Desmantelado el enemigo comunista, la lucha antiterrorista, la emigración, el control de las mafias y el crimen organizado de la droga ocupan su espacio en la nueva estrategia global para la estabilidad, paz y seguridad mundial. Las fuerzas armadas, sin tanto aspaviento, reorientan sus actividades y pasan a desempeñar un papel subordinado en la política de seguridad hemisférica diseñada por la Casa Blanca y el Pentágono. La lucha antisubversiva se trastoca en guerra asimétrica contra el llamado crimen organizado. El objetivo: atacar los centros de producción, elaboración de cocaína, plantaciones de marihuana y amapola que no controlan. En algunos países, como Colombia y Perú, sirve de excusa para el desarrollo de guerras de exterminio y tierra arrasada. Campesinos, productores de coca, guerrillas y narcotraficantes, dirán, son un conglomerado que actúa al unísono. La cooperación internacional y regional con batallones especiales,

agentes de la DEA, fuerzas de contrainteligencia y el Pentágono, es la manera de combatirlos y destruirlos. De esta forma se aprovecha para atacar a las organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, en algunos casos, a los pueblos originarios, como sucede en Chile con el pueblo Mapuche o en México.

Estas operaciones comenzaron a desarrollarse prontamente, mucho antes del fin de la Guerra Fría. Su punto de partida se haya en México. Entre los años 1975 y 1978, y con el apelativo de *Operación Cóndor,* se llevó a cabo «el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidroga dirigida por militares. Luego seguiría Colombia, con la *Operación Fulminante* (1978-1980), centrada en la destrucción de cultivos de marihuana en la Guajira, durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala, quien declaró que la economía de la droga significaba "una amenaza para la seguridad nacional". En 1989, el presidente Bush anunció la Iniciativa Andina para destruir el suministro de cocaína de los países productores (Perú, Bolivia y Colombia). Se trató de un plan que empleó un poco más de dos millones de dólares en cinco años, una parte para la ayuda económica y casi la mitad para apoyo militar y policiaco. Posteriormente, a partir del año 2000, vendría el Plan Colombia»[13].

Desde el primer operativo sus argumentos en la lucha contra el crimen organizado y la narcoguerrilla sirvieron para articular nuevas intervenciones. En los estertores de la Guerra Fría, la invasión a Panamá tomó esta dirección. La *Operación Causa Justa* fue la excusa perfecta para imputar a Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotraficante, de financiar la insurgencia con dinero proveniente de la droga, ser un dictador corrupto y amañar elecciones, legitimando el desembarco de tropas y marines estadounidenses en suelo panameño.

En Centroamérica, países cuyas fuerzas armadas han sido pertrechadas por Estados Unidos, no hubo expulsiones, ni reforma en sus ordenanzas. Salieron impunes de los crímenes de lesa humanidad. Sus mandos, refractarios a los cambios, quedaron libres de polvo y paja. Los procesos de transición, adjetivados de paz y negociación, en Guatemala y El Salvador, sentaron a la mesa a tres actores con diferentes resultados, Estados Unidos y las fuerzas armadas triunfantes y unos movimientos populares e insurgentes precedidos por la derrota estratégica. En ese cuadro, no hubo posibilidad

alguna de pensar en comisiones de la verdad o en responsabilidades políticas de sus altos mandos.

Hoy, las fuerzas armadas de la región siguen siendo un poder fáctico, pero, cansados por los años de guerra interna y la actividad antisubversiva, han dejado la primera línea de fuego. Se conforman con recibir parabienes y dedicarse a la lucha contra el narcotráfico, que les deja pingües beneficios, al tiempo que responde al papel asignado por Estados Unidos dentro de los esquemas de la seguridad hemisférica. La cooperación regional y acudir al llamado del poder político cuando se requieran sus servicios copan sus expectativas.

> Las cumbres de presidentes serán el espacio donde busquen legitimarse las estrategias políticas y acuerdos colectivos que impulsan la construcción de la institucionalidad multilateral. A la primera cumbre le siguieron las específicas de ministros de Defensa, las conferencias de los ejércitos de América y la Conferencia Especial Sobre Seguridad Hemisférica. Estos serían los nuevos espacios institucionales que, desde los noventa, trabajaron en específico en los lineamientos y estrategias sobre seguridad y defensa hemisférica […]. La diferencia con los años ochenta es que, con la Estrategia Antidrogas del hemisferio se presenta un proyecto consensuado en un espacio institucional, con carácter continental, como parte del proyecto de seguridad hemisférica. Junto con la recuperación de los planteamientos de años atrás, se pone en práctica, mediante herramientas institucionales con carácter certificador, el Mecanismo de Evaluación Multilateral; un año después, se aprueba el Plan Colombia[14].

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009, contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya, militante del Partido Liberal, representa esta modalidad de actuación de las fuerzas armadas. Son los eufemísticamente llamados golpes de Estado constitucionales. Así se camufla la acción de los militares con un barniz legal. Esperan órdenes. El procedimiento es perfecto. El poder judicial redacta un edicto declarando ilegítimas las acciones del presidente. Roto el orden constitucional, los militares cumplen la orden emanada de La Corte Suprema hondureña. El presidente es arrestado. Se trata de restaurar el orden, no de tomar el poder político. Detenido en su casa, el presidente Manuel Zelaya fue expulsado del país. Por último, se formará un gobierno interino, recayendo la autoridad del ejecutivo en el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Para evitar el rechazo internacional, la represión política se ejerce de forma selectiva. El asesinato de dirigentes, líderes políticos y sindicales, periodistas e intelectuales pertenecientes a las organizaciones populares se hace de

manera que no comprometa abiertamente a los aparatos de seguridad del Estado. En definitiva, las fuerzas armadas hondureñas no actúan *motu proprio,* no usurpan el poder político; participan a petición del poder legislativo y judicial. Tras un paripé de elecciones será elegido presidente Porfirio Lobo, quien sigue el camino, permitiendo asesinatos y aumentando el nivel de represión sobre los opositores, el campesinado, trabajadores y clases populares. Otro caso similar al hondureño fue la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, aprobada por la Cámara de Diputados en junio de 2012. Igualmente, las fuerzas armadas se convierten en emisarios dependientes del poder político; reciben órdenes.

El nuevo golpe de Estado no requiere tanques en las calles, asaltar palacios de gobierno o ilegalizar partidos políticos. Es menos escandaloso y sin tanto «derramamiento de sangre». Durante la primera década del siglo XXI, las fuerzas armadas latinoamericanas parecen asumir un papel subordinado en el marco del orden neoliberal. Sin embargo, los ruidos de sables y los procesos desestabilizadores no han dejado de producirse en cuanto el neoliberalismo es cuestionado. Seguirá siendo un actor necesario para el éxito de los procesos desestabilizadores de gobiernos democráticamente electos.

Desde el ataque al Pentágono y Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, las fuerzas armadas latinoamericanas se pliegan a la nueva estrategia diseñada por el imperialismo estadounidense en su lucha contra el terrorismo internacional. El terrorismo se convierte en un cajón de sastre. Nadie está exento de ser declarado terrorista. Un día, una organización política considerada ejemplo de virtud democrática puede caer en desgracia y sus militantes ser detenidos, torturados y etiquetados como agentes del mal. Otro tanto sucede con los países considerados terroristas: igual que se entra se sale. Es decir, no hay patrones que apoyen un decálogo internacional. Se está al albur político de los Estados Unidos y sus aliados, que aleatoriamente aplican sus criterios acorde a sus necesidades.

La guerra contra el terrorismo es militar, total y preventiva, así lo aclara el documento redactado desde la Casa Blanca *National Security Strategy of the United States of América:* «Para derrotar esta amenaza debemos usar cada herramienta de nuestro arsenal: el poderío militar, la defensa mejorada de nuestro territorio nacional, la aplicación de la ley, la recopilación de inteligencia, y gestiones vigorosas para cortarle el financiamiento a los

terroristas. La guerra contra el terrorismo de alcance global es una empresa de duración incierta. Y Estados Unidos hará responsables a aquellos países comprometidos con el terrorismo […] porque los aliados del terrorismo son enemigos de la civilización […]. Y como una cuestión de sentido común y autodefensa, Estados Unidos actuará contra esas amenazas en surgimiento antes de que estas se terminen formando»[15]. Las fuerzas armadas en América Latina, salvo excepciones, han preferido recibir lisonjas y reconocimientos de las empresas transnacionales, las burguesías locales y los organismos internacionales, a cambio de entregar la soberanía del territorio que dicen defender. Hoy los países se encuentran intervenidos. Quienes mandan y ejercen el poder real son las grandes compañías transnacionales, las sociedades financieras y las nuevas plutocracias, que han decidido ceder su territorio para ser despojado de sus riquezas naturales, convirtiendo a los ciudadanos en cipayos y los países en neocolonias.

LA TÉCNICA DEL GOLPE DE ESTADO: EL ASALTO AL PODER

En América Latina encontramos los dos tipos contemporáneos de golpes de Estado: cívico-militares y militares. Al igual que los golpes tradicionales y los llamados golpes blandos. En ambos figuran las fuerzas armadas, la institución por antonomasia capaz de garantizar el éxito operativo del asalto al poder. Su papel, hemos visto, puede ser protagónico o situarse en un perfil bajo de actuación. Pero, sin un grupo que avale *les coups d'État* es muy probable que la acción fracase. Todo consiste en reubicar las piezas del puzle. No existe un modelo o un recetario. En ocasiones podrá ser el poder judicial, en otras el ejecutivo o el legislativo quien asuma la iniciativa. Puede ser una combinación de todos ellos. Actualmente, poderes institucionales como un tribunal constitucional pueden desempeñar un papel emergente para avalar la sedición.

En cualquier golpe, sea de uno u otro estilo, el poder legislativo es el territorio idóneo para promover la desestabilización institucional. Igualmente, el poder judicial puede iniciar la conjura, proporcionando

argumentos jurídicos. Una declaración es suficiente. También lo es el financiamiento y el apoyo del orden económico. Empresarios, banqueros, transnacionales, el conglomerado militar-industrial financiero, los medios de comunicación social juegan su función. Asimismo, es imprescindible la participación de un sector de la sociedad civil. Periodistas, académicos, clérigos, actores pueden inclinar la balanza de la opinión pública. Prensa, radio, televisión, medios digitales y redes sociales hacen lo suyo en esta dirección. Y, por último, el factor exterior, es decir, la necesidad de contar con el apoyo de potencias amigas y sus gobiernos. Sin un reconocimiento exterior es muy probable que la intentona fracase. En conclusión, un golpe de Estado, si quiere tener éxito, debe ser concebido minuciosamente, sin dejar a la improvisación ningún detalle. Cuando ello ocurre las posibilidades de fracaso aumentan. Desde luego, juegan imprevistos. Sin embargo, una mala planificación da al traste con el operativo. En ocasiones, el golpe militar solo compromete a una rama o parte de ella, aviación, marina o ejército de tierra. Sus ejecutores buscan sumar al resto de compañeros de armas. La más de las veces estos intentos han resultado un fiasco.

El asalto al poder ha sido una constante en la historia política. No hace falta poner ejemplos, desde el Imperio romano hasta nuestros días nos encontramos con dicha realidad. Sin embargo, la técnica del golpe de Estado ve la luz a partir de la articulación del Estado moderno. Es en ese instante cuando el Estado se convierte en una institución, cuyo rasgo distintivo, tener el monopolio legítimo del uso de la violencia, le hace ser objeto de deseo. Mientras el príncipe encarnó el Estado, el golpe fue un procedimiento legítimo para su conservación. Gabriel Naudé, en *Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado,* ensayo publicado en 1639, aclara: «Los golpes de Estado son acciones audaces y extraordinarias que los príncipes se ven obligados a ejecutar en el acometimiento de las empresas difíciles y rayanas en la desesperación, contra el derecho común y sin guardar ningún orden ni forma de justicia, arriesgando el interés de los particulares por el bien general»[16]. La única condición que alega no podía ser rota: que se mantuviesen en secreto hasta el momento de llevarlos a cabo. «Los golpes de Estado encierran, sin embargo, la misma justicia y equidad que atribuimos a las "máximas" y a la "razón de Estado", aunque en estas si esté permitida su publicación antes de ponerlas en práctica,

mientras que la regla principal de los “golpes” es mantenerlos en secreto hasta su término»[17]. Igualmente, Naudé habla al príncipe, no a los conspiradores; no es un ensayo destinado a derrocar al príncipe. El golpe de Estado lo interpreta como el arte del príncipe para mantener su poder, razón suficiente para aconsejar su uso de manera extraordinaria y prudente, agotando todas las vías previas existentes: «Es menester retardar o, cuando menos, no precipitar este tipo de ejecuciones, masticarlas y rumiarlas en el espíritu, traer a la imaginación todos los posibles medios para esquivarlas y, si no puede ser, suavizarlas y hacerlas llevaderas»[18].

Ahora bien, si la técnica del golpe de Estado incorpora la posibilidad de reemplazar a los inquilinos del poder y no solo reforzarlos, el abanico se abre de manera exponencial. Es la alternativa propuesta por Curzio Malaparte, que sitúa los golpes de Estado entre lo que denomina catilinarios de derecha e izquierda. Así, los golpes de Estado aparecen como alternativas revolucionarias o reaccionarias. Se trataría de una acción destinada a tomar el Estado. Escrito en 1931, aún miembro del partido fascista, su interpretación, criticando a Hitler y Mussolini, conllevó su expulsión y la cárcel.

Su teoría, ampliamente difundida, considera la Revolución rusa una de las variantes posibles de uso de la técnica del golpe de Estado: la insurreccional. Aparecen junto a ella los *pusch* de Bonaparte, Hitler, Mussolini, Pilsudski o Primo de Rivera. «En casi todos los países, al lado de los partidos que manifiestan su decisión de defender el Estado parlamentario y de practicar una política de equilibrio interior, es decir, liberal y democrática, hay partidos que plantean el problema del Estado en el terreno revolucionario: son los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda; los catilinarios de la derecha temen el desorden. Acusan al gobierno de debilidad, de incapacidad, de irresponsabilidad. Defienden la necesidad de una sólida organización del Estado, de un control severo de toda la vida política, social y económica. Son idólatras del Estado, los partidarios de un Estado absoluto. En un Estado centralizador, autoritario, antiliberal, antidemocrático es donde ven la única garantía de orden y libertad, el único dique contra el peligro comunista. “Todo en el Estado; nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, afirma Mussolini. Los catilinarios de la izquierda apuntan a la conquista del Estado para instaurar

la dictadura de los obreros y de campesinos: “Allí donde hay libertad, no hay Estado”, afirma Lenin»[19].

Podemos discrepar de esta versión de Malaparte, equiparar una revolución con un golpe de Estado, situando en el mismo plano de análisis argumentos que refuerzan el Estado capitalista, como el fascismo y el nazismo, complementarios a la racionalidad burguesa, explotación y acumulación de capital, con la vía insurreccional de ruptura del orden capitalista. No se puede homologar tipo de Estado con forma de gobierno o régimen político. El fascismo es una forma de gobierno dentro del Estado capitalista. La revolución socialista conlleva la superación del Estado capitalista. Es allí donde Malaparte se confunde. Sin embargo, y a pesar de no coincidir con Malaparte en esta perspectiva, podemos compartir su afirmación genérica: los golpes de Estado constituyen una opción para reforzar o sustituir a los productores del orden social.

Es en este sentido donde los nuevos golpes de Estado en América Latina cobran importancia. Se trata de acciones destinadas a sustituir a los productores del orden social, modificando la dirección de los procesos constituyentes nacidos de la crisis neoliberal. En países donde se ha producido un cambio en el poder político, modificando la correlación de fuerzas en favor de las fuerzas populares, se orquestan y patrocinan golpes de Estado. Se busca revertir las reformas de carácter democrático. Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras o Paraguay han sido víctimas de esta estrategia.

En Venezuela, un sector de las fuerzas armadas, en colaboración con empresarios y con los partidos tradicionales desplazados del poder desde 1998, se alzaron contra el jefe de Estado en abril de 2002. No tendrán éxito. Con el presidente Hugo Chávez secuestrado, el pueblo organiza su defensa y, al cabo de tres días, la movilización popular, unida a sectores mayoritarios y leales de las fuerzas armadas, logra la liberación de Hugo Chávez, consiguiendo su retorno al palacio presidencial de Miraflores. Los alzados civiles y militares son juzgados. Sin embargo, la derecha no ceja en el empeño. Siempre que tiene posibilidades y cuente con el respaldo internacional buscará desestabilizar, creando una situación de caos interno que haga viable su estrategia golpista. Se trata de un pulso que se ha mantenido hasta esta fecha, utilizando el manual de uno de los máximos diseñadores de los procesos desestabilizadores: Gene Sharp. Bajo la

denominación de *desafío político* conjuga métodos para la desobediencia social, económica, política, boicot institucional y guerra psicológica destinadas al establecimiento de un gobierno paralelo. Entre los métodos de la cooperación social destacan: «Boicot hacia grupos sociales para inducirlos a que se unan a la resistencia, inducir a grupos a que dejen de cooperar con el régimen, aplicar presión a los colaboradores del gobierno. Excomunión como boicot religioso, suspensión de servicios religiosos, boicot a eventos sociales, huelgas estudiantiles. Desobedecer reglas o costumbres sociales de instituciones no gubernamentales. En fábricas, desacatar reglamentos. Retirarse de instituciones sociales. Desaparición colectiva: se va la población completa por un periodo de tiempo. Migración de protesta: se va la población permanentemente […]. Para el boicot económico: rehusarse a comprar, vender, manejar o distribuir bienes y servicios específicos. Boicot de proveedores y distribuidores. Negar asistencia técnica, cierre de negocios, huelga general de comerciantes. No permitir la entrada de trabajadores. Negar ingresos al gobierno, negarse a pagar deudas y créditos. Huelga de gremios, de profesionales, huelgas campesinas, huelgas relámpagos. Cierre económico […]. En los métodos de no cooperación política destacan: expresar una protesta para lograr la desintegración, para que deje de funcionar el gobierno. Boicots de elecciones, de parlamentarios, retirarse de instituciones educativas. Retiro de rótulos, marcas y señalamientos. Boicots de puestos en trabajos de gobierno. Bloqueo de líneas de mando e información del gobierno. Ineficiencia selectiva y no cooperación selectiva. Motín de soldados y policías. […] En la intervención psicológica destacan: intervención negativa, interrumpir y destruir patrones de comportamiento político e institucional. Intervención positiva, establecer nuevos patrones de comportamiento. Presión psicológica moral, molestias constantes al enemigo. Mercado negro, comprar monopólicas, acaparar y desabastecer. Falsificación de documentos, dinero, etc. Desobediencia civil de leyes»[20].

En Bolivia, un proceso desestabilizador hace que el gobierno constitucional del presidente Evo Morales sea sometido a un continuo ruido de sables, llamando la plutocracia a un golpe de Estado restaurador de su poder. El gobierno del MAS, con su política de nacionalizaciones, cuestiona el poder de las transnacionales. En 2006 nacionalizó las minas de estaño de Huanuni; en 2007, la empresa de telecomunicaciones ENTEL; en 2008,

expropia REPSOL-YPF; ese mismo año adquiere el 100 por 100 de la Compañía Logística de Hidrocarburos; en 2010, el gobierno se hace con la propiedad de cuatro compañías eléctricas: Corani, Guaracachi, Villa Hermosa y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. El ejercicio de la soberanía no es plato de buen gusto. Al igual que sucediera en Chile en 1971 tras la nacionalización de Cobre, las empresas expropiadas comienzan sus maniobras para derrocar al gobierno, buscando cómplices nacionales. Y los hay. El presidente Evo Morales ha denunciado varias asonadas entre 2010 y 2018. En este plan, se encuentran lazos entre los partidos de la derecha, la socialdemocracia, empresarios y grupos de ultraderecha. Las fuerzas armadas han sido tocadas y se las considera un puntal para obtener éxito. De allí la necesidad, por parte del gobierno constitucional, de comprometerlas con los procesos de trasformaciones sociales. Es obligado cambiar su visión tradicional imperante en sus filas. En Bolivia, continuamente se han erguido como juez y parte de los procesos políticos. La reforma interna de sus mandos y las nuevas políticas han variado e impedido, por el momento, que los intereses golpistas hayan tenido éxito en el corto plazo. Pero las relaciones entre el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las fuerzas armadas son conflictivas, al estar educadas en la lucha antisubversiva desde los años sesenta del siglo XX.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa sufrió los embates del golpismo. En primera instancia, se buscó la renuncia o el magnicidio. El 30 de septiembre de 2010, Rafael Correa fue secuestrado durante tres horas, sufriendo una tentativa de asesinato. La asonada no logró el apoyo de los militares. Las fuerzas armadas desempeñan, como en el caso de Bolivia, un papel decisivo en la vida política del país. Educadas en el anticomunismo y sometidas a un continuo bombardeo ideológico contra el socialismo-marxista, ven con recelo cualquier alternativa de izquierdas y popular. La derecha lo sabe y siempre recurre a dicha opción: adjetivar al gobierno de antipatriótico, comunista, contrario a los valores de la familia y disolutivo de la identidad nacional, para agitar su malestar y alentar su intervención. Hoy, con el gobierno de Lenin Moreno las fuerzas armadas se sienten tranquilas. Las bases militares norteamericanas, cuestionadas durante el gobierno de Correa, vuelven a territorio ecuatoriano. Los vínculos con la DEA y el cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico les confieren protagonismo y amplias posibilidades de prosperar sin necesidad

de un golpe de Estado tradicional. Al igual que sucediese en Brasil, en las últimas elecciones, con la detención de Ignacio *Lula* da Silva, inhabilitado políticamente para concurrir a las elecciones y facilitar el triunfo de la derecha, en Ecuador, la campaña lanzada por el actual presidente Lenin Moreno, apoyada en jueces corruptos y el legislativo, contra Rafael Correa, es la estrategia para evitar el triunfo posterior de una alternativa de gobierno progresista. Otro tanto sucede en Argentina con Cristina Kirchner. Asistimos a una versión más elaborada del golpe de Estado. Es una acción preventiva: crear un cordón sanitario para eliminar candidaturas en las cuales líderes carismáticos con un amplio apoyo popular puedan triunfar electoralmente. Esta estrategia es una fórmula emergente a la luz de en un proceso de involución política y criminalización de las luchas democráticas.

El intento frustrado de golpe de Estado en Ecuador, de 2010, puso en evidencia el nuevo puzle de los golpes de Estado. La participación del excoronel de Estado mayor, el expresidente Lucio Gutiérrez, quien accedió al poder tras derrocar en 2000 a Jamil Mahuad, daba fuerza al llamado. Su presencia no fue casual; más allá de sus intereses personales, buscó arrastrar a un sector de los militares, dividiendo a las fuerzas armadas para hacer posible el golpe. La derecha y un sector de las organizaciones indígenas, Pachakutik, se sumaron a la intentona. Mientras se mantuvo secuestrado al presidente Correa, la representante en la Asamblea de Pachakutik, Lourdes Tibán, llamó a constituir un frente nacional y pidió públicamente la destitución del presidente Correa. El levantamiento, por quienes urdieron la trama, tuvo como punto de partida un motín policial reivindicando aumentos de sueldos y salarios. Sin embargo, la agenda oculta tenía como finalidad desarticular los logros de la «revolución ciudadana». Al igual que sucediera en Venezuela en abril de 2002, el pueblo ecuatoriano salió en defensa de su presidente.

En Paraguay, el golpe de Estado institucional tendrá éxito. La derecha, en connivencia con las fuerzas armadas y el poder legislativo y judicial, destituye al presidente Fernando Lugo. Para dar un aspecto de legitimidad a la acción golpista se articula un paripé de juicio sumarísimo, en una rocambolesca y complicada trama desestabilizadora. Los motivos, inculpar y responsabilizar al presidente Lugo de la matanza campesina de Curuguaty en el departamento de Canindeyú, el 15 de junio de 2012. El Congreso Nacional y el Poder Judicial, en manos de la derecha, justificarán su

destitución mediante un juicio *exprés*. Fue el apaño destinado a satisfacer las exigencias de la comunidad internacional para avalar el *push*. Las fuerzas armadas no tendrán una participación directa, se mantienen en los aledaños y esperan instrucciones; informadas y conscientes de la maniobra, la apoyan hasta lograr la destitución. En 2018, tras años de juicios, los campesinos acusados de inducir y provocar la matanza en la cual se involucró al presidente Lugo serán absueltos y liberados por falta de pruebas.

En un mensaje dirigido al pueblo paraguayo a un mes de su destitución, Lugo señalaba: «Los que dieron el golpe fueron políticos conservadores que querían 50 millones de dólares para sus operadores políticos a través de la Justicia Electoral. Los mismos que esperan esconderse del juicio popular en las listas sábanas de los partidos conservadores. Quienes impulsaron el golpe son los que quieren concretar el negocio con la multinacional Río Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética de nuestro país y los intereses de nuestra nación. Aquellos que estuvieron con el golpe son los que se han lucrado con un modelo de país para pocos, donde el destino de nuestra gente era la emigración, por eso inmediatamente anunciaron que no implantarían el impuesto a la soja […]. Detrás del golpe estuvieron aquellos sectores que anhelan la pseudo-integración promovida por los negocios ilícitos y la narcopolítica».

El gobierno de Lugo fue un gobierno cuyas reformas democráticas pusieron en peligro los intereses de las multinacionales, a la par que resquebrajaron las estructuras de poder oligárquicas, articuladas durante las décadas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Hoy, todo vuelve a la normalidad. El 21 de abril de 2012 se celebraron las elecciones presidenciales y el resultado no pudo ser más significativo: triunfó Horacio Cartes, empresario, banquero y terrateniente, educado en colegios privados y religiosos de Estados Unidos. Regresó a Paraguay en 1989, uniéndose al Partido Colorado del dictador Alfredo Stroessner. Gobernó en su nombre. En 2018, las elecciones han dado el triunfo, nuevamente, al Partido Colorado. En esta ocasión la silla presidencial recae en Mario Abdo Benítez, hijo de quien fuese secretario particular de Stroessner. También fue educado en Estados Unidos. Su actual fortuna se construyó al amparo del padre. Han sido siete décadas de mandato del Partido Colorado.

En todos los casos enunciados, el vínculo existente entre las fuerzas armadas, la elite política, económica, la oligarquía y la plutocracia se hace evidente. Empresas transnacionales, *lobbys,* el Departamento de Estado Norteamericano, los servicios de espionaje y contrainteligencia actúan al unísono. Dispositivos internos y externos confluyen necesariamente. La legitimidad exterior es una parte consustancial para garantizar la continuidad de los golpes de Estado. En tiempos de Guerra Fría y en la actualidad, el reconocimiento de Estados Unidos y países aliados, Guatemala (1954), Brasil (1964), República Dominicana (1965), Chile en 1973, Argentina (1976) les dio oxígeno y estabilidad. Los golpes legitimados internacionalmente en el siglo XXI, Honduras (2009), Paraguay (2012) o Brasil (2016), facilitan la permanencia de los dictadores. Cuando pierden su confianza, ven peligrar sus prerrogativas. Han sido muchos los golpes de Estado avalados por organismos internacionales y regionales.

En cuanto a la trama interna, el orden de los factores no altera el producto. Su objetivo es el mismo: romper el orden constitucional e instaurar un poder ilegítimo. Los nuevos golpes de Estado adjetivados «de guante blanco» o «institucionales» tienen el valor diferencial otorgado a la represión y violación de los derechos humanos. Optan por la acción selectiva, lo cual supone un aprendizaje y cambio de estrategia. El asesinato de líderes sindicales, periodistas, opositores, dirigentes obreros se deja en manos de fuerzas paramilitares, sicarios y, cuando es el caso, al crimen organizado, ocultando el sentido político, el ser parte del terrorismo de Estado y sus instituciones, a fin de no ser acusados de crímenes de lesa humanidad.

Hoy, la ruptura del orden constitucional también puede llevarse a cabo mediante organizaciones internacionales que responden a los intereses de las grandes empresas trasnacionales. Un gobierno global donde participan los poderes reales que gobiernan el planeta. Para doblegar voluntades basta amenazar con suspender créditos, bloquear empréstitos y cancelar acuerdos comerciales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, la TROIKA actúan presionando a los Estados que se niegan a realizar los programas de ajustes neoliberales. En América Latina las presiones son inmensas. Baste con señalar cómo en las elecciones de México (2018), el triunfo del candidato progresista Manuel López Obrador ha puesto en marcha la maquinaria de las empresas transnacionales, el

capital financiero y la plutocracia nativa para condicionar las reformas programáticas del nuevo presidente. Una presión que, sin ser un golpe de Estado, bien se aviene a la lógica intervencionista para garantizar sus inversiones y prerrogativas, maniatando al nuevo gobierno.

Por otro lado, el proceso de globalización neoliberal ha generado el advenimiento de nuevos poderes; las empresas transnacionales se han convertido en propietarias de los servicios públicos antes en manos de los Estados: electricidad, transportes, agua, telecomunicaciones. La puesta en marcha de megaproyectos, presas hidroeléctricas, plantaciones de soja, minería extractiva, está vinculada a estas prácticas espurias. Monsanto, la multinacional de los transgénicos y químicos agroindustriales, desempeñó un papel destacado en la destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo. Los antecedentes están en Chile, en 1973, donde la ITT planificó el derrocamiento de Salvador Allende, y también en Guatemala, donde la UFCO participó en el derrocamiento de Jacobo Árbenz (1954). Los ejemplos son muchos.

Los medios de comunicación coadyuvan a crear un clima de incertidumbre para favorecer los golpes de Estado. El control de la opinión pública supone movilizar a una parte de la población hacia las posiciones golpistas. Chile, entre 1970-1973, y Venezuela hoy son claros exponentes. En Chile, la prensa tuvo como objetivo «la búsqueda del deterioro de la autoridad a través de diversos métodos, privilegiando la injuria y ridiculización donde las expresiones soeces no fueron escatimadas. Estos procedimientos socavaron la estabilidad del régimen y su posibilidad de desarrollar el proyecto político propuesto al país. La producción de un estado de alarma pública se fundamentó en la amplificación de la amenaza, incluyendo progresivamente todos los aspectos de la vida social y potencialmente a la mayor parte de los chilenos. El propósito era consolidar la imagen de una crisis generalizada en todo el país, ya fuera por incapacidad de los funcionarios del régimen o como resultado expreso del gobierno de socavar la institucionalidad existente, con el fin de instaurar un nuevo sistema sociopolítico de acuerdo a los cánones del marxismo. Había que demostrar cómo todo se derrumbaba: la familia, la educación, la justicia, la Iglesia, las fuerzas armadas. Había que mostrar a un gobierno represivo y sometido a los dictámenes del marxismo internacional, generador de un ambiente de inseguridad y violencia generalizada. El

desabastecimiento sería magistralmente explotado con estos propósitos»[21].

Los medios de comunicación no constituyen un cuarto poder independiente del poder político. Forman parte de su entramado. Los poderes económicos diversifican sus inversiones incluyendo a los medios de comunicación social y las telecomunicaciones. Su interés no busca defender la libertad de prensa o información, sino proyectar su ideología y proyecto de dominación. Son parte de los dispositivos del complejo industrial-militar y financiero del capitalismo.

Otros actores emergentes en los golpes de Estado son los bancos de inversión. Goldman Sachs tiene poder suficiente para destituir, cambiar o comprar gobiernos. Las grandes empresas y el capital financiero pueden provocar un pánico bursátil y dejar sin efecto nacionalizaciones, programas sociales o torcer una decisión política. Las agencias de calificación de riesgo, entidades privadas como Moody's, Standard & Poor y Fitch son perfectos agentes desestabilizadores, actúan como oligopolio y obedecen a sus intereses. Igual aplican la *Triple A* como restan vocal, si el país no se somete a su designio. Los gobiernos tecnócratas surgidos en su día en Italia y Grecia, avalados por la Unión Europea en su espacio geoestratégico, son otra manera de quebrar el orden institucional. Presidentes electos por instituciones financieras, al margen de las urnas, dan viabilidad a los nuevos golpes de Estado.

La narcopolítica también está presente en los golpes de Estado del siglo XXI. Con este nombre se presenta la alianza entre el crimen organizado y los partidos tradicionales, que quitan y ponen presidentes. Saben a quiénes pagan. Gobernadores, senadores, diputados, jueces, alcaldes y militares han recibido sus dineros. Constituyen un gobierno estable en los extramuros de la política formal. El caso paradigmático de político ligado a la narcopolítica es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Los cárteles de la droga y el crimen organizado dominan una gran parte de la política entre bambalinas. En esta dinámica, hemos visto cómo la DEA, el Pentágono y las fuerzas armadas de los países latinoamericanos están inmersos en un doble juego.

La sociedad política está contra las cuerdas. El mantenimiento de gobiernos democráticos, cuyos programas pongan en duda el quehacer de este gran complejo trasnacional, está en peligro. Pueden sufrir un golpe de

Estado en cualquiera de sus variantes. El proceso de involución democrática ha dejado el poder en manos de especuladores, banqueros sin escrúpulos, empresarios avariciosos y políticos corruptos. Todos comparten el mismo objetivo: mantener el poder y aumentar ganancias. Cada uno desempeña su papel. El reciente triunfo en Brasil de Jair Bolsonaro es la demostración más clara de este itinerario de golpe de Estado seguido por las clases dominantes. Fuerzas armadas, poder legislativo, poder judicial, medios de comunicación, Iglesia, terratenientes, empresarios trasnacionales, oligarquía financiera se unen llamando a una cruzada anticorrupción, señalando al expresidente Lula como su principal instigador. Todos contra Lula y su partido, el PT. La corrupción sirve como bandera para su inhabilitación, aunque no se aporte ninguna prueba en dicha dirección. Pero el objetivo se cumple. Detenido, juzgado, encarcelado e inhabilitado, no hay posibilidades de triunfo electoral. El juez del proceso que inhabilita a Lula tiene premio: será nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro. La derecha retoma el poder. El golpe de Estado se consuma en las urnas. La visión tradicional de los golpes de Estado en América Latina ha pasado a mejor vida, pero sigue presente en la agenda de las clases dominantes latinoamericanas. Como recurso, puede ser utilizado en cualquier momento, no hay que descartarlo.

En América Latina, la plutocracia ha utilizado otra forma de romper el orden constitucional y mantener el poder en sus manos. Son los autogolpes, técnica nada despreciable. El más representativo lo llevó a cabo Alberto Fujimori en Perú en abril de 1992. Amparándose en los artículos 227 y 228 de la Constitución vigente de 1979, disolvió el Congreso, suspendió las garantías constitucionales y declaró nula la carta magna. A continuación convocó un proceso constituyente que le permitió concentrar más poder. Las fuerzas armadas peruanas avalaron con su «neutralidad» el autogolpe. La maniobra contó con el respaldo estadounidense. ¿Por qué apoyó dicha maniobra? 1992 fue un año clave en la articulación política de las guerras de baja intensidad y lucha contra el terrorismo. Estados Unidos y la OEA necesitaban aliados. Fujimori no era problema. Ni protestaba ni condenaba. Fujimori llamó a un referéndum en apoyo a sus políticas. Tuvo éxito. En 1993 fue nombrado, bajo una nueva constitución, presidente constitucional del Perú. A continuación vendrían las masacres y el asesinato indiscriminado del campesinado peruano bajo la acusación de pertenecer a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso. Alberto Fujimori fue

detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007. Fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, secuestro y corrupción. Declarado responsable intelectual de las matanzas de Barrios Altos y de la Universidad de Cantuta en 1992, realizada por las unidades de contrainsurgencia conocidas como el escuadrón de la muerte Grupo Colina, fue condenado a 25 años de cárcel. Además, tuvo que hacer frente a los cargos de secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Fue encarcelado en el penal de Barbadillo. Una cárcel de lujo con 800 metros cuadrados de extensión, equipada con una clínica, un taller de pintura y escultura, sala de visitas, huerto y gimnasio. Fujimori era su único inquilino. El 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski concede el indulto, por razones humanitarias. Sin embargo, su puesta en libertad acabó con la presidencia de Kuczynski. La Corte Suprema de Justicia anulará en octubre de 2018 el indulto.

El siglo XXI vive golpes de Estado casi imperceptibles a los ojos de las grandes mayorías sociales. Acostumbrados a ver carros de combate en la calle, aviones bombardeando palacios presidenciales y declaraciones rimbombantes de carácter mesiánico enquistadas en la ideología del anticomunismo o la fobia al socialismo-marxista, cualquier otra fórmula se camufla bajo el concepto de acusaciones constitucionales. Es poco plausible que las fuerzas armadas opten por el secuestro de las sedes del poder solicitando el advenimiento de gobiernos de salvación nacional. Por ser casi invisibles, los golpes de Estado ideados por el actual complejo industrial-militar y financiero toman el relevo con los mismos efectos desastrosos para la democracia. Hay que estar alerta: los golpes de mercado son una realidad.

LOS GOLPES BLANDOS O LA VIOLENCIA CONTROLADA

Los golpes blandos se presentan, acordes a su definición, renegando del uso de la violencia. Por el contrario, los golpes de Estado realizados por las fuerzas armadas no rehúyen métodos represivos de extremada crudeza para quebrar el orden constitucional. En los golpes blandos, es una parte de la sociedad civil quien cobra un papel protagónico. Sus acciones golpistas se encubren bajo el paraguas de la desobediencia civil y la no violencia. Sus

promotores son los responsables de llevar a cabo la llamada «reestructuración política». Por consiguiente, cobran notoriedad en el escenario público y se erigen como el recambio natural, asumiendo un futuro presidenciable. En este sentido, la diferencia política entre uno y otro se concentra en la esfera simbólica del control de la vida y la muerte. Las fuerzas armadas, con sus centros de detención, torturadores, informantes y mecanismos jerarquizados, llevan a cabo la labor de exterminio institucionalmente. En Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil o Paraguay, son conocidos los cuarteles, clínicas, academias de guerra y centros oficiales donde militantes o simpatizantes de los gobiernos democráticos derrocados fueron torturados, asesinados o desaparecidos. En el caso de los golpes blandos, la violencia se desplaza hacia organizaciones paramilitares, escuadrones de la muerte o comandos autónomos, donde pueden participar los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, el golpe blando privilegia procesos desestabilizadores, adjudicando a los gobiernos democráticos y constitucionales el uso de la violencia. Esta estrategia fue practicada en Chile durante la Unidad Popular. La prensa golpista desempeñó un papel a la hora de responsabilizar al gobierno del caos, la inseguridad y la crisis. Así lo reflejaron los titulares de sus periódicos, poniendo sobre la mesa que la Unidad Popular era una amenaza para la vida y la integridad física de las personas. «La Unidad Popular llama a liquidar a los Frailes» (*Tribuna,* 8 de mayo de 1971). Cuatro días más tarde, el mismo periódico titula: «Pública amenaza a los agricultores: los mataremos sin compasión». Cada vez las referencias apelan a elementos más concretos: «Sangre, tumbas, muertes, muertos, señalando “el próximo puede ser usted”. La retórica es aterrorizadora; tanto en los titulares como en los análisis estas líneas agitativas se conectan y traducen en movilización social». Con este caldo de cultivo fue posible realizar el paro de la patronal de octubre de 1972. La Democracia Cristiana subrayó los motivos de las manifestaciones de comerciantes, empresarios, sectores medios, colegios profesionales, trasportistas en su periódico *La Prensa:* «No al odio, la violencia y el hambre: hoy marcharemos por la libertad». Por su parte, *La Segunda,* ese mismo 12 de octubre, ocupando toda la primera página subrayó: «Contra la dictadura marxista, el odio, el sectarismo, el hambre y la inflación, la democracia protesta hoy»[22].

Las diferencias entre los golpes de Estado de Chile (1973) o Argentina (1976) con los acaecidos en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016) son visibles. En primer lugar, la virulencia de la represión no puso límite al asesinato político. Los parlamentos fueron clausurados y el poder judicial se vio sojuzgado por la acción de los tribunales militares a la hora de investigar las violaciones de los derechos humanos. En Chile, se gobernó mediante bandos militares hasta la promulgación de la Constitución de 1980, actualmente en vigor. En Argentina, la junta militar construyó un decálogo conocido como «Documentos básicos y bases políticas de las fuerzas armadas para el proceso de reorganización nacional», derogado por el presidente Raúl Alfonsín en 1983.

En Honduras (2009), la Corte Suprema de Justicia se encargó de poner en marcha el golpe de Estado, emitiendo la orden de allanamiento y captura del presidente Manuel Zelaya el 26 de junio de 2009. Acción complementada por el Congreso Nacional, en el cual los diputados golpistas nombraron una Comisión de Investigación para dirimir el carácter anticonstitucional de las decisiones tomadas por el presidente. Así, las fuerzas armadas se limitaron a cumplir la orden emanada de los tribunales y refrendada en el Parlamento. Retenido en su casa, el presidente fue trasladado por decisión unilateral de sus captores a Costa Rica, haciendo caso omiso de la instrucción judicial. Ese fue el momento insurreccional de las fuerzas armadas. No hubo derramamiento de sangre. El presidente de facto, Roberto Micheletti, aprobó tal acción. En 2011, bajo la administración de Porfirio Lobo, se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; entre sus conclusiones, consideró que dicha actitud de las fuerzas armadas podía interpretarse como un exceso de poder e incumplimiento del mandato judicial. Así lo relata el informe: «[…] De esta instrucción judicial, la Corte Suprema de Justicia no pidió explicaciones ni se registra actuación alguna. Al mismo tiempo consumada la expatriación del presidente, las fuerzas armadas convocaron a funcionarios de los Poderes del Estado y algunos políticos al Estado Mayor, ante lo cual algunos se negaron, pero a los que asistieron se les pidió redactar un comunicado a la población hondureña que explicara lo sucedido. Simultáneamente, otra reunión se estaba convocando en el Congreso Nacional. Dos esferas de acción se van definiendo, la de la seguridad y manejo del conflicto sociopolítico, dejada a las fuerzas armadas y policías;

y la definición política partidaria e institucional en el Congreso Nacional. Esta condición, y otras, hacen que el golpe de Estado en Honduras registre particularidades que rebasan el concepto clásico de golpe de Estado en América Latina»[23].

Existe un mecanismo legal para la destitución de los presidentes. La acción legítima de remover, mediante juicio político, al presidente de la república, es el *impeachment.* En América Latina, no todas las constituciones lo tienen en su articulado. El primer caso se ejerció contra el primer presidente brasileño elegido por votación directa tras la dictadura, Fernando Collor de Mello. Acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, el 29 de septiembre de 1992 la Cámara de Diputados aprobó el expediente de remoción del cargo. El 2 de octubre quedaría suspendido por 180 días. Collor de Mello intentó frenar el *impeachment,* renunciando el 29 de diciembre de 1992. Aun así, la acusación siguió su curso, siendo declarado culpable; perdió sus derechos políticos por ocho años. El vicepresidente, Itamar Franco, lo sustituyó hasta las elecciones de 1994, donde se impondría el candidato del PSDB, Fernando Henrique Cardoso, a la sazón el exministro de Relaciones Exteriores y Hacienda. Collor de Mello sería rehabilitado años más tarde por la justicia ordinaria. La diferencia con el *impeachment* puesto en marcha contra la presidenta Dilma Rousseff, y que llevó a su destitución, fue la utilización espuria del procedimiento, con la finalidad de cambiar la dirección política de la acción gubernamental. Esta maniobra es conocida por su nombre en inglés, *lawfare,* y significa guerra jurídica contra la democracia. El vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB, participó en la «conspiración», renunciando meses antes a la coalición de gobierno antes de la imputación de Dilma Rousseff, el 29 de marzo de 2016. Sin embargo, se negó a dejar el cargo de vicepresidente. Una vez destituida Rousseff, y nombrado presidente en funciones, dio un giro a la acción de gobierno, dejando sin efecto políticas sociales implementadas por el PT. Por consiguiente, la denominación de golpe de Estado, en este caso, se ajusta a la definición: cambiar o modificar la acción de gobierno, alterando el proceso de la voluntad general, utilizando todos los mecanismos que lo hagan posible, combinando formas de lucha legales, ilegítimas, violentas y de fuerza.

En Paraguay, sucedió algo similar. En 2012, el Congreso Nacional redacta el libelo acusatorio contra el presidente Fernando Lugo Méndez, de acuerdo al artículo 225 de la Constitución de 1992, que recoge el juicio político «por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes […]. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, y corresponde a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de sus dos tercios, juzgar en juicio político a los acusados». El control político de la Cámara, en manos de la oposición y un vicepresidente del partido liberal, Federico Franco, facilita el *impeachment,* bajo la fórmula de *lawfare.* Solo 3 diputados de 80 y 3 senadores de 45 pertenecían al Frente Guazú. El juicio político es cuestión de tiempo. Basta unir argumentos y excusas para activar el procedimiento. La matanza de Curuguaty, producto de la acción desmesurada de las fuerzas policiales desalojando a los campesinos, el 15 de junio de 2012, en los terrenos propiedad de Blas Riquelme, expresidente del partido Colorado, es el detonante. 17 muertos y decenas de heridos. El golpe de Estado blando se ejecutó a la perfección. El libelo legitimador se redacta con prisas. En nueve páginas, se expondrán los hechos para justificar la destitución. Cinco acusaciones, ninguna probada, configuran el texto:

> 1. Acto político en el Comando de Ingeniería de las fuerzas armadas, donde se celebró el II Encuentro de Latinoamericanos Jóvenes por el Cambio. Allí, señala la acusación, se manchó el honor patrio de las fuerzas armadas al izar los jóvenes banderas con alusiones políticas en sustitución del pabellón patrio; 2. Caso Ñacunday; acusando al presidente Lugo de ser el único responsable como instigador y facilitador de las invasiones de tierra, violando el derecho de propiedad e ingresando a los inmuebles de colonos, al dar su apoyo a los líderes de esas invasiones, proyectando un mensaje a la ciudadanía de avalar los actos de violencia y de los delitos propiciados por esas organizaciones; 3. Creciente inseguridad, señalando que el presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana; 4. Firma del protocolo de USHUAIA II, declarándolo un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay con el avieso propósito de obtener un respaldo en su descarada marcha contra la constitucionalidad y el proceso democrático de la república. La principal característica del protocolo –subraya el libelo– es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en nombre de la «defensa de la democracia», defenderse unos a otros; 5. Caso de la matanza de Curuguaty. Esta es la redacción: «Fernando Lugo hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual presidente de la república, quien asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la

> violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la carta magna, las instituciones republicanas y el Estado de derecho».

El escollo que retrasó el golpe fue el apoyo incondicional del entonces ministro de Defensa de Lugo, el general Bareiro Spaini. Las presiones se intensificaron contra su persona. La embajada de Estados Unidos hizo lo indecible para que dimitiese, la Cámara de Diputados y el Senado lo acosaron hasta lograr su objetivo. Sin su principal apoyo en las fuerzas armadas, el camino estaba allanado. El golpe de Estado se encubría bajo el *impeachment.* Paraguay retomó la deriva neoliberal y Estados Unidos dio por concluido el golpe de Estado. El programa de la USAID, UMBRAL, podría desarrollarse de manera fluida.

Ya sea en su vertiente castrense o el golpe blando, el golpe de Estado tiene como fin revertir la dirección de los procesos políticos y sociales democráticos. Por este motivo hablamos de estrategias complementarias y no excluyentes. Nuevamente, Chile es un ejemplo de ello. Entre 1970 y 1973, bajo el gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende, es víctima de ambas propuestas. Por un lado, la sociedad civil se moviliza bajo una nueva derecha, el gremialismo, y por otro, los partidos políticos opositores llaman a las fuerzas armadas a romper la institucionalidad. Por primera vez, se unen el sabotaje, el juicio político a ministros y cargos públicos, las huelgas patronales, de comerciantes, el desabastecimiento, las movilizaciones estudiantiles, de mujeres y el miedo, para crear las condiciones de un golpe de Estado. Igualmente, hay que señalar la función de los medios de comunicación social, cuya actividad frenética para generar una opinión pública favorable al golpe se hizo sentir en el estado de ánimo y en la guerra de propaganda psicológica. Su papel legitimador del orden pinochetista dio frutos, terminó con la prensa libre en Chile hasta hoy. Solo existen dos empresas, conocidas como *el duopolio*. El Mercurio y Copesa, instigadores del quiebre constitucional, controlan en la actualidad el 90 por 100 de los medios de comunicación social.

Los otrora protagonistas secundarios toman la iniciativa, pasando a desarrollar la trama. Este cambio de funciones ha dado lugar a considerar el golpe blando como una novedad, perdiendo de vista que dicha técnica fue utilizada como parteaguas para la intervención militar durante la Guerra Fría. Aunque despreciada en los análisis, su actual visibilidad está

determinada por un cambio histórico: la caída del muro de Berlín, la disolución del pacto de Varsovia, la incorporación de muchos de sus países a la OTAN y la hegemonía global sin contrapeso de Estados Unidos. En esta nueva dimensión, el escenario de los golpes de Estado en sus zonas de influencia se redefine en la forma, no en el fondo ni en sus objetivos.

Como hemos apuntado en anteriores capítulos, otras instituciones toman el relevo. El poder legislativo, el judicial o ambos se convierten en los impulsores para destituir gobiernos. Asimismo, los Estados Unidos avalan, apoyan, financian y legitiman las acciones desestabilizadoras, inclinando la balanza hacia el éxito. El caso más reciente de esta imbricación lo constituye el documento para realizar acciones desestabilizadoras en Venezuela. Se trata del escrito conocido como *Freedom-2,* elaborado por el Comando Sur y firmado por el almirante Kurt W. Tidd. En él se destaca: «Nuestro componente de operaciones especiales común (Componentes Operacionales del U. S. Southern Command: Comando de Operaciones Especiales Sur, Joint Task Force Bravo, Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur-Jiastfs) involucrado en esta operación, debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los objetivos estratégicos: fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica (Joint Vision 2020, como un proceso de actualización permanente de la doctrina militar) que continuarán rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorporen todos los instrumentos de autoridad nacional, entre ellos, recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos. Con esa dirección estratégica, los aspectos que debemos evaluar, a partir de los soportes informativos previos y sus proyecciones, son el resultado de la labor conjunta entre la Agencia de Inteligencia para la defensa (DIA, que es nuestro organismo de adscripción) en estrecha colaboración con otros entes de la comunidad de Inteligencia […]. Bajo el enfoque de “cerco y asfixia” hemos acordado con los socios más cercanos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar

después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONG, Universidades […]»[24].

Nada nuevo. Baste recordar los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano en el caso de Chile, tanto como las revelaciones, en su momento, del periodista Jack Anderson, señalando la complicidad entre la ITT, la CIA y el expresidente Eduardo Frei Montalva para desestabilizar y desarrollar un golpe blando. El objetivo era impedir en primera instancia el acceso de Salvador Allende a la presidencia.

Los documentos y las comunicaciones desveladas por el periodista Julian Assange, WikiLeaks, y las informaciones del exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, apuntan a que dichas actuaciones han precedido todas las maniobras tendentes a provocar la crisis de los gobiernos democráticos y populares en América Latina. Los golpes blandos, mal llamados suaves, se han popularizado a partir del «éxito» cosechado en Honduras, Paraguay y el *impeachment* a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La conceptualización teórica, considerada el vademécum de los golpes blandos, se encuentra en las obras del politólogo norteamericano René Sharp, a la sazón premio Nobel alternativo de 2012[25].

Durante el siglo XX, la historia de América Latina estuvo plagada de procesos desestabilizadores que buscaron revertir el triunfo electoral de los proyectos democráticos y populares. La clase dominante: empresarios, burgueses, oligarcas, terratenientes, banqueros, *el establishment,* aparcan las contradicciones, sincronizando su estrategia golpista. La técnica del golpe blando es un grado en el plan para mermar los apoyos a los gobiernos populares y democráticos. Su corolario, fomentar acciones que paralicen la vida política y social del país, generando ingobernabilidad, restando autoridad política y vaciando de contenido el uso de la violencia legítima por parte del Estado. En otras palabras: lograr la desintegración del gobierno. Se trata de romper las vías de negociación y articular un espacio discursivo compuesto por una sola demanda: *el gobierno debe capitular.*

La estrategia del golpe blando consiste en acorralar al gobierno, deslegitimar sus fuentes de poder, minar la autoridad, provocar el colapso y promover, como en el caso de Venezuela, una opción denominada como *La salida,* en clara referencia a la ruptura del orden constitucional. En este

sentido, se busca debilitar la «creencia entre la gente de que el régimen es legítimo y que tiene el deber moral de obedecerlo». Gene Sharp etiqueta esta dinámica como lucha noviolenta del desafío político, considerándola «una técnica mucho más variada y compleja que la violencia. A diferencia de esta, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales, psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. A estas armas se las ha conocido bajo diversos nombres, como protestas, huelgas, desobediencia o no cooperación, boicot, descontento y poder popular. Como advertimos antes, todos los gobiernos pueden gobernar mientras, por medio de la cooperación, sumisión y obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad, reciban el constante refuerzo de las fuentes de poder que necesitan. El desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esas fuentes de poder»[26].

En los regímenes presidencialistas latinoamericanos presupone un ataque al poder ejecutivo. Se presenta como una intromisión del presidente en las decisiones de los poderes judicial y legislativo. Se apela al intrusismo y al totalitarismo. Con estos argumentos, el presidente es trasformado en dictador, un caudillo que concentra poder, despojando a la sociedad civil de sus derechos. La dualidad dictadura-democracia entra en juego. A partir de ese momento, los actores están delimitados en bandos irreconciliables. La oposición democrática versus el gobierno, sus huestes dictatoriales y violentas. El maniqueísmo se apodera del escenario político.

La aplicación de reformas estructurales en áreas como la salud, la educación, de políticas públicas redistributivas, de impuestos crecientes, protección del medio ambiente, nacionalizaciones de las riquezas básicas y la reforma agraria, son consideradas un ataque a la propiedad privada, la libertad individual, destinadas a imponer un orden totalitario. La realidad se invierte. Los golpistas se trasforman en fuerzas democráticas y el gobierno democrático y constitucional en un régimen totalitario.

Los golpistas, ahora fuerzas democráticas, deben pasar a la ofensiva, actuar, ser valientes. El miedo debe ser desterrado de la protesta. Hay que estrangular al gobierno mediante la doctrina de la no cooperación institucional. Nuevamente, estamos ante Sharp: «En todas las etapas del conflicto es necesario mantener un comportamiento intachable en la acción noviolenta. Factores como el no tener miedo y el mantener la disciplina

noviolenta deben estar siempre presentes. Es importante tener en cuenta que va a necesitarse un gran número de gente para efectuar grandes cambios. Esa cantidad de participantes confiables solo se puede obtener manteniendo el más alto nivel de comportamiento»[27].

Entran en liza la guerra psicológica y el imaginario social del enemigo interno. La política del miedo se generaliza bajo tópicos, arraigados y difíciles de combatir, como las expropiaciones de bienes muebles, la pérdida de libertades personales, el control de la vida privada, una educación carente de valores cristianos, la separación de los hijos de los padres, una educación proselitista y castradora y la disolución de la familia.

El escenario cambia radicalmente. La población se trasforma en el objetivo de la estrategia desestabilizadora. Es la primera fase para revertir los procesos democrático-populares. La actuación sigue un trazado que supone crear malestar social, deslegitimación interna e internacional, movilizando a los sectores opositores en todos los frentes e implementando acciones como el sabotaje, el manejo del descontento y el quiebre de la institucionalidad de las fuerzas armadas.

Los mecanismos han sido recurrentes a lo largo de la historia. Los ejemplos no faltan. Fuera del continente americano, el golpe de Estado «blando» se utilizó contra el primer ministro iraní Mohammed Mosaddegh el 19 de agosto de 1953. La actuación conjunta de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos consiguió imponer un gobierno a su medida bajo la figura del sha Mohammad Reza Pahlevi y un primer ministro *ad hoc,* Fazollah Zahedi, hombre de confianza de la CIA. El presidente Mosaddegh, atrincherado en el Parlamento, fue obligado a renunciar. Soldados del sha rodearon el edificio hasta la detención y encarcelamiento del primer ministro y sus colaboradores. El golpe de Estado había triunfado y su objetivo, dejar sin efecto las nacionalizaciones de la Anglo-Iranian Company, más tarde reconvertida en la British-Petroleum, había concluido con éxito. Sin gran derramamiento de sangre, se puso fin al gobierno democrático de Mosaddegh. La violencia, sin embargo, fue utilizada *a posteriori* para aplacar las demandas populares y las manifestaciones que pedían el regreso del primer ministro. Así lo relata Kapuscinski:

> Mosaddegh nacionalizó la empresa británica […] y ocupó la gran refinería de Abadán, en el golfo Pérsico. Además, toleró el Tudeh, el partido comunista iraní, por lo que Londres y Washington temieron que los rusos se hicieran con las enormes reservas de petróleo del país. Finalmente, este político rompió con Zahedi porque el ministro se oponía al trato indulgente hacia los comunistas. Así se presentaban las cosas cuando la CIA y Kermit Roosevelt empezaron a actuar con el objetivo de eliminar a Mosaddegh y colocar en su lugar a Zahedi. La decisión de derrocar a Mosaddegh fue tomada conjuntamente por los gobiernos británico y norteamericano.

La persecución de los partidarios de Mosaddegh no tardó en producirse. En la fecha del golpe, Zahedi corta toda posibilidad de manifestar su apoyo al derrocado primer ministro:

> Los cañones y las ametralladoras disparan sobre la multitud. Sobre el terreno quedarán doscientos muertos y más de quinientos heridos […]. El 26 de octubre de 1953 Teymur Bakhtiar es nombrado gobernador militar de Teherán […]. Su ocupación principal consiste en perseguir a los partidarios de Mosaddegh que han conseguido ocultarse. Vacía la cárcel de Qasr de todos los criminales. Tanques y carros blindados la vigilan mientras camiones militares traen sin interrupción a los detenidos. Partidarios de Mosaddegh, ministros, oficiales sospechosos y militantes del Tudeh son interrogados y torturados. El patio de la prisión es escenario de centenares de ejecuciones. La memoria de los iraníes conserva la fecha del golpe –19 de agosto de 1953– como el día de la verdadera subida al trono del sha Reza Pahlevi, una subida acompañada de sangre y tremendas represalias[28].

En América Latina, el mismo año de 1953, en la Guyana Inglesa, territorio colonial hasta 1966, Gran Bretaña, en colaboración con Estados Unidos, para impedir el derecho de autodeterminación e independencia, circunstancia que ponía en entredicho a las compañías británicas, invade su colonia. La Reina, envía tropas para acabar con el gobierno colonial autóctono, encarcelando y destituyendo al líder del Partido Progresista Popular, Cheddi Jagan, bajo la acusación de procomunista. Irán y Guyana Inglesa, son dos casos seminales donde la CIA y los servicios de inteligencia británicos se unen para evitar el desarrollo de los procesos democráticos y defender sus compañías trasnacionales.

Movilizar una parte de la sociedad civil y provocar la parálisis institucional son objetivos del golpe blando. Eufemísticamente, considerado el golpe blando como lucha política no violenta, la violencia real que utiliza se camufla bajo el rechazo a negociar con el poder constituido. Nuevamente, Gene Sharp explica su alcance: «Cuando la gente rehúsa cooperar, se niega a prestar ayuda y persiste en esta desobediencia o postura retadora, le está negando a su adversario el apoyo y cooperación humanas

básicas que cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Si lo hace suficiente gente y por un tiempo suficientemente largo, ese gobierno o sistema jerárquico perderá el poder. Esta es la premisa básica de la acción no violenta»[29].

Se trata de disputar poder, contraponer la desobediencia civil de los golpistas con la necesidad de reproducir y mantener los cauces de la legitimidad institucional. En definitiva, tensar el conflicto hasta que las fuerzas gubernamentales sean desprovistas de la capacidad institucional y del control de la legalidad, para bloquear una negociación y de paso deslegitimar a los actores sociales no golpistas.

Cerrar las puertas a una resolución democrática, provocar un ruido ensordecedor donde sea imposible escuchar nada, es el objetivo. De esta manera se impone su agenda. La oposición se declarará perseguida, acosada, reprimida y violada en sus derechos y libertades, proclamando que el gobierno se ha vuelto ilegítimo en el uso del poder.

La paz, la libertad, el orden social y la tranquilad pasan a ser patrimonio de la oposición. No hay vuelta atrás. Los principios de amigo-enemigo entran en juego. «Los puntos álgidos de la gran política, según Schmitt, no son los momentos de comprensión o reconciliación con el enemigo, sino "los momentos en los que el enemigo es contemplado como tal en la mayor y más completa claridad". Lo político no se basa en el diálogo o el compromiso, sino en la guerra y la discordia: "Lo que decide es solo y siempre el caso de conflicto". La solución a los conflictos no es política, sino que es la enemistad, que está en el origen del conflicto, lo que funda lo político. La situación de guerra no es el límite en el que se agota lo político en sentido propio. Más bien el espacio de lo político está definido por la frontera del frente. El estado de excepción es un estado en el que todas las condiciones de una comunidad quedan sin efecto»[30].

Mermar la autoridad política, romper la confianza, restar poder y cuestionar la legitimidad del orden social vigente son algunas de las fases del golpe de Estado. Se trata de retirar el consentimiento de los gobernados hacia el gobernante. En este sentido, Sharp da las claves: «La falta de aceptación de la autoridad del gobernante disminuye la disposición de obedecer; si no se le reconoce la autoridad al gobernante, la obediencia será un acto consciente, en lugar de habitual, por lo tanto, la obediencia se puede negar. Si se le niega la obediencia al gobernante, el derecho de gobernar,

entonces no hay consenso de grupo, que es lo que se requiere para hacer posible su gobierno. *La pérdida de autoridad pone en marcha la desintegración del poder del gobernante. Su poder disminuye en la medida en que se niega su autoridad*»[31].

Pero insistamos, esta estrategia no es nueva. El gremialismo en Chile, surgido a finales de los años sesenta, lo entendió a la perfección. Su fundador, Jaime Guzmán, llamó a movilizar y organizar una nueva derecha, disputando la calle a la izquierda. «El gremialismo descubrió la importancia de la acción política en los años sesenta, al tiempo que durante la Unidad Popular comprendió que en la lucha por el imaginario social y la demostración de fuerza era vital la movilización. Ante el fuerte activismo de la izquierda y de los sectores asociados a ella, el gremialismo contribuyó al cercamiento de la derecha a un nuevo estilo de hacer política y el abandono del estilo tradicional derechista de salones y solo actividades cupulares, saliendo a reclutar adolescentes y centros estudiantiles»[32].

La movilización golpista lleva el conflicto al punto de no retorno. Es la agenda de un plan diseñado para conseguir los objetivos a largo plazo. Los tiempos del golpe blando son elásticos y responden a una dinámica de socavar el poder legítimo, buscando la destrucción total del adversario. Sharp la define como «la gran estrategia de la lucha noviolenta».

Así, podemos concluir que se trata de la misma técnica de golpe de Estado aplicada a realidades diferentes, con un mismo objetivo. El golpe de Estado es violento en todas sus vertientes, blando, suave, constitucional o militar. En ocasiones, las clases dominantes harán uso de una estrategia menos punitiva, en otras se abocarán a frenar los avances democrático-populares mediante el golpe tradicional, con la muerte como referente. En conclusión, las fuerzas golpistas forman parte del complejo militar-industrial y financiero construido sobre la militarización del poder, el miedo y el control absoluto de la población. La guerra es global y asimétrica, sus hacedores no renunciarán a la técnica del golpe de Estado para conseguir sus objetivos geopolíticos y estratégicos. En juego está el control de las materias primas y el aumento de sus beneficios económicos. En América Latina, la historia muestra la recurrencia del golpe de Estado, convirtiéndose en la opción por excelencia de las clases dominantes para frenar el avance democrático y la justicia social. Para las burguesías locales y la plutocracia latinoamericana,

la democracia ha sido un inconveniente para el ejercicio del poder, abonándose a las tiranías y las dictaduras.

VENEZUELA: DE CHÁVEZ A MADURO, 20 AÑOS DE SEDICIÓN GOLPISTA

Asistimos a un punto de inflexión. La estrategia desestabilizadora del poder constitucional en la República Bolivariana de Venezuela supone alterar la producción de acontecimientos. En 2019 se abre un nuevo ciclo caracterizado por un golpe de Estado urdido desde el exterior sin control del territorio, de la población, de las instituciones ni capacidad de administrar el país. Un golpe de estado hibrido y asimétrico, fundado en una supuesta crisis humanitaria. Con este argumento se pretende facilitar la intervención de tropas extranjeras. El autoproclamado presidente «encargado» Juan Guaidó se trasforma en el último eslabón para recuperar el poder perdido, tras 20 años de golpes fallidos, estrategias desestabilizadoras, atentados y llamamientos a la sublevación militar. Dos décadas de sedición que pueden desembocar en un conflicto hemisférico y regional; que pueden conducir a un baño de sangre.

En el origen de esta estrategia golpista, está el triunfo electoral de la candidatura presidencial de Hugo Chávez Frías en 1998. Instigador militar de un fallido golpe de Estado en 1992, fue juzgado, encarcelado y amnistiado por el gobierno de Rafael Caldera (1994). Bajo el paraguas de un movimiento político de amplio espectro logró un triunfo inesperado, encabezando el movimiento Polo Patriótico. Su programa hizo saltar la constitución de 1961 y con ello la IV República, dejando atrás la estructura partidaria nacida del pacto de punto fijo (1958).

El país del petróleo, cuya historia de las dos décadas que cerraron el siglo XX se caracteriza por la represión, desesperanza, aumento de la desigualdad, pobreza y aplicación de las políticas de ajuste articuladas bajo el «Consenso de Washington», contenía los síntomas de un estallido social. Lo hizo electoralmente en las postrimerías del siglo XX. «Todos concluían en que habría que disminuir la injusticia en la distribución de la riqueza y de los ingresos, instrumentar políticas sociales para aliviar las

consecuencias de la crisis económica y de las políticas de ajuste y acabar con la corrupción, […] El poder judicial no funcionada […] adecuadamente y dependía de la vinculación con el poder ejecutivo y el de los partidos. El sistema penitenciario mostraba […] condiciones infrahumanas, con miles de presos en espera de juicios. La policía aparecía [diríase que] mediatizada por intereses parciales. Existía la sensación de impunidad jurídica de los poderosos, de inseguridad personal de los sectores pobres y medios y de total ineficacia del sistema judicial para resolver los conflictos cotidianos y ordinarios de la sociedad. Todo ello en un clima en el cual las permanentes denuncias de corrupción daban la impresión de que estas últimas se habían convertido en la esencia de la cultura política reinante. La corrupción constituía […] sin duda un grave problema, y el tratamiento judicial dado los casos más notorios del gobierno […] no da cuenta de una verdadera voluntad de combatirla»[33].

El primer llamado de atención, vimos anteriormente, fue el *caracazo,* movilización social como respuesta a la aplicación del plan de ajuste macroeconómico realizado durante la segunda administración de Carlos Andrés Pérez. El 27 de febrero de 1989 la protesta popular se extendió por todo el país. El gobierno sacó a las fuerzas armadas, declaró el toque de queda, causando miles de víctimas. «Si la palabra crisis todavía tiene sentido –dirá Sonntag a finales de 1992– pese a su devaluación por un uso demasiado frecuente e indiferenciado, es menester aplicarla a la situación política del país: todos los actores colectivos y todos los ciudadanos percibían que "algo" decisivo podría ocurrir, que estábamos viviendo tiempos de decisión»[34]. En este contexto se produce el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 en el cual destaca la figura del comandante Hugo Chávez Frías. A partir de ese momento el sistema político venezolano entraba en descomposición. Las protestas se multiplicaron[35].

El triunfo de Hugo Chávez en 1998, rompía el círculo de gobiernos conservadores y neoliberales prevaleciente en América Latina. Los ojos se ponían en Venezuela. Bajo todo pronóstico, un militar, exgolpista, se convertía en presidente constitucional. No era el prototipo de hombre de armas educado al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional y tutela de Estados Unidos, lastrados por la ideología anticomunista de la Guerra Fría. Su formación se asentaba en la lectura de los libertadores, enraizada en la lucha anticolonial, emancipadora y antiimperialista. Conocedor de su

país, sus gentes y sobre todo su historia, aglutinó y coadyuvó a la formación del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200). En principio sus miembros eran militares reivindicando un proceso constituyente y un cambio social radicalmente democrático. Lentamente, el movimiento incorporó representantes de la sociedad civil, intelectuales, dirigentes sindicales independientes y militantes procedentes de las guerrillas de la década de los sesenta.

«Cuando Caldera fue electo presidente, nosotros salimos de prisión y nos dedicamos a recorrer el país de punta a cabo durante dos años (1994-1995). Yo creo que no dejamos de ir a ninguna ciudad, pueblito, campamento, pueblo indígena, barrio. Íbamos de pueblo en pueblo con la bandera de la constituyente, ayudando a la organización, ampliándola, fortaleciéndola; organizando, por ejemplo, las coordinadoras locales y coordinadoras regionales del MBR-200. Dejó de ser militar clandestino para transformarse en un movimiento popular, aunque con corrientes militares siempre presentes allí […] Entonces en este megaproyecto que llamamos organización del movimiento popular, empezamos a llenar de contenido cada proyecto: cada uno de ellos debería tener una especie de motorcito que permitiese impulsarlo […] De ahí viene la idea de los comités bolivarianos, de los comités constituyentes. La idea es que fuesen instrumentos de la organización popular»[36].

Con el triunfo electoral y una constituyente en ciernes, se puso en marcha la campaña destinada a revertir el proceso y a eliminar del escenario a un invitado no deseado. Los partidos políticos tradicionales junto a los medios de comunicación social se aprestan a descalificar al presidente electo. Hugo Chávez es caracterizado como un militar tosco, sin formación, demagogo y antisistema, un peligro para la gobernabilidad democrática. Una excrecencia de la historia. El enemigo tiene una nueva cara, Cuba y Fidel Castro ceden su lugar a Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI: «Fidel Castro en tiempos de la Guerra Fría trató de construir un bloque ideológico contra las democracias occidentales, frustrado tras la caída del Muro de Berlín, hoy, Hugo Chávez toma el relevo, forja la alianza antisistema, cuyo objetivo es la implantación del socialismo del siglo XXI. […] Una alianza contra occidente y una amenaza para los valores católicos, la familia, la patria y la cultura occidental. […] Son movimientos, pues no cabe identificarlos como partidos políticos, continuadores de grupos

revolucionarios que proclaman su adhesión a las doctrinas de la izquierda radical del siglo XXI. Esta izquierda tiene un proyecto y se funda en el indigenismo, el neoestatismo, el nacionalismo, el militarismo y el populismo […] Esta alianza antisistema es enemiga de la globalización […] son unos frustrados donde se concentran sus iras y perversiones, son antioccidentalistas y anticapitalistas […] aglutinan a la izquierda que fracasó en mayo de 1968, a los que jadearon el comunismo y hoy viven con complacencia la pulsión antioccidental del islamismo yihadista, a los antiglobalizadores altermundistas […] y las distintas manifestaciones del indigenismo y fanatismo religioso. Su enemigo es Occidente […] Esta alianza no es solo teoría. Hay coincidencia de actuación entre Venezuela, Irán y Siria»[37].

La maquinaria desestabilizadora no desaparecerá hasta hoy. Actores internos e internacionales actuarán al unísono. Tras el proceso constituyente, la nueva Carta Magna aprobada en referéndum, entró en vigor el 15 diciembre 1999. La oposición buscó desconocer su legitimidad. El objetivo era anular cualquier opción de cambio social no controlada y, de paso, recuperar el poder de manera inmediata. La constitución no debía asentarse. De hacerlo, el gobierno presidido por Hugo Chávez alteraba el equilibrio de poder regional e introducía variables geopolíticas inaceptables para la seguridad hemisférica de Estados Unidos. Sobre la mesa, el control del petróleo, el gas natural y sus cuantiosas reservas. A día de hoy, entre las medidas que ha prometido Juan Guaidó al gobierno de Donald Trump está la privatización de PDVSA y la entrega a trasnacionales estadounidenses el control de los pozos petroleros y sus reservas.

Las fuerzas opositoras actuaron con celeridad. Pusieron en marcha la campaña internacional. Políticos de todo el mundo se prestaron a construir una imagen manipulada de Hugo Chávez. Se le comparó con Hitler y se le equiparó a Mussolini. El subsecretario del Foreing Office inglés, Denis McShane, tras una reunión con el presidente Chávez declaró que «[…] este había aparecido vestido con boina roja de paracaidista y camiseta de rugby y levantando el brazo como Mussolini en un gesto repugnante». Creado el perfil, la oposición sumaba un plus a sus fines golpistas. Los viejos dirigentes desplazados del poder, llamaron a las «democracias occidentales», gobiernos amigos y políticos a sumarse a la campaña de desprestigio del presidente Chávez. Y lo hicieron. Felipe González, desde

España, el primero. También lo harían Jacques Chirac en Francia, Tony Blair en Gran Bretaña, Gerhard Schöerder en Alemania y José María Aznar en España. La denominada izquierda progresista latinoamericana, identificada con el expresidente de Chile Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, se adhiere a la campaña. Es la creación de un muro de contención a un *dictador en potencia.*

Tras esta dinámica, se escondía un golpe de Estado. La derecha y sus ideólogos presentan al presidente como un iluminado, ególatra, mesiánico y de comportamiento autoritario. Hugo Chávez es un loco, un payaso, un bufón. Estaría incapacitado para el ejercicio del poder político. Un déspota con talante de tirano. Hoy, los argumentos se repiten para al presidente constitucional Nicolás Maduro. Así, quienes apoyaron a Chávez, serán descalificados, vilipendiados, como hoy lo son más de seis millones de venezolanos que votaron a Nicolás Maduro en la últimas elecciones presidenciales celebradas en 2018.

Los golpistas construyen su relato. Su historia presenta un país quebrado, roto por el fraude electoral, la corrupción y una crisis humanitaria. Los argumentos no son nuevos. Retrocedamos en el tiempo. En los dos primeros años del gobierno (2000-2002) una oposición desconcertada por la derrota buscó reponerse por la vía rápida. Trató de paralizar el país. Los partidos tradicionales, COPEI y AD, una nueva derecha y partidos noveles como Primero Justicia, fundado por Henrique Capriles, en 2000, se posicionan. La trama toma cuerpo. La imagen de Hugo Chávez como un caudillo extemporáneo en tiempos de la globalización se generaliza. Solo cabe una opción, expulsar al dictador. Es el momento de convocar las huelgas empresariales, de comerciantes y activar el discurso del miedo. La guerra psicológica se reaviva. La oposición se autodefine restauradora del orden democrático frente a la lucha de clases y el comunismo. El discurso de la Guerra Fría se recupera sin ambages. Hugo Chávez debe ser derrocado en beneficio de la paz mundial y la convivencia social.

La plutocracia y los sectores «nobles» de la sociedad venezolana, desplazados del poder político, conspiran. Así se urde la trama para el golpe de Estado. La fecha señalada será la noche del 11 de abril de 2002. La operación vendría precedida de convocar paros, huelgas patronales y la movilización de profesionales y sectores medios. La protesta debería ir creciendo hasta concluir en un paro de 48 horas. El pretexto, el rechazo a la

reforma del sector petrolero y PDVSA. Eran los pasos de un plan concebido con el apoyo de Estados Unidos. Depuesto Hugo Chávez, entraría en liza la comunidad internacional, dando reconocimiento al usurpador. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras era el elegido para ocupar la presidencia. Tras las primeras escaramuzas, que lo ubicaron en el Palacio de Miraflores, sede presidencial, se daba por concluida la primera fase del golpe de Estado. Estados Unidos y España serían la avanzada en el reconocimiento internacional, emitiendo una declaración de apoyo. La misma fue divulgada a los medios de comunicación casi al tiempo que se producía el nombramiento de Pedro Carmona. «El secretario de Estado para Iberoamérica del gobierno de Aznar, Miguel Ángel Cortés, explicó más tarde que el texto de la declaración se había preparado después de cinco o seis conversaciones telefónicas con Otto Reich, del departamento de Estado Norteamericano. Reich, antiguo embajador estadounidense en Caracas, estaba en estrecho contacto con los golpistas»[38].

En los prolegómenos del golpe: «Pedro Carmona Estanga, presidente de la federación patronal Fedecámaras y Carlos Ortega, el líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), habían establecido un pacto. Su llamamiento conjunto para una huelga el 11 y 12 de abril contaba con la suposición explícita de que no se desconvocaría hasta la renuncia del presidente»[39].

Promovieron el levantamiento militar con el objetivo de romper la unidad de las fuerzas armadas y restaurar la IV república. «Durante los primeros meses de 2002 en Caracas se respiraba un ambiente conflictivo y explosivo. En la ciudad reinaba una sensación de desastre inmanente […] Grupos de oficiales en la reserva, políticos de los viejos partidos, líderes sindicales y portavoces de la iglesia católica se unían para denunciar al gobierno y asegurar que gozaban de apoyo de las fuerzas armadas para un posible golpe; los periódicos y los canales de televisión privados repetían una letanía sin fin de historias hostiles a Chávez y los funcionarios de Washington comenzaron a realizar comentarios críticos sobre lo que muchos veían como una situación muy deteriorada […] Un informe de la CIA de fecha 6 de abril titulaba: "maduran las condiciones para un intento de golpe: facciones militares disidentes, incluidos algunos oficiales de alta graduación y un grupo de jóvenes oficiales radicales, aumentan sus esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez,

posiblemente este mismo mes [... borrado]”. El nivel de detalle de los planes conocidos (borrado) apunta al arresto de Chávez y otros diez mandos»[40]. Generales y altos mandos pertenecientes a la vieja guardia de la IV República toman protagonismo, aparecen en medios de comunicación privados, son entrevistados y llaman al golpe. «Ya en la tarde noche del 11 de abril, el vicealmirante retirado Iván Carratú Molina, exjefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez aparece en las pantallas de *Televen,* entrevistado por la periodista Marta Colomina, quien lo presenta como experto en asuntos militares. Carratú dijo allí: Para mí lo que está ocurriendo en Venezuela con la Fuerza armada es un golpe militar *light,* donde el gobierno debe interpretar lo que está ocurriendo con los generales y almirantes de la fuerza armada. De lo contrario vendrán situaciones de presión. La sociedad civil ha presionado y se ha organizado para sacar al Presidente: la CTV, Fedecámaras, PDVSA. Y los militares están tratando de que el presidente y su gobierno entiendan que tienen que salir porque esto es inaguantable. Si no se hace de esta manera, en vía pacífica y racional, vendrá la parte de fuerza, que es lo que hay que evitar […] Yo creo que en las próximas horas vendrán reacciones de tipo militar pacíficas, presionando cada vez más al Alto Mando Militar para que desconozcan al presidente. Si no lo desconocen, va a ser otro grupo de generales que lo van a desplazar. Y el presidente va a tener que irse […] Hay que pasar a prepararse de una vez para un gobierno de transición»[41].

En este escenario, el 12 de abril los alzados logran un triunfo pírrico. El usurpador, Pedro Carmona, se dirige al país desde el Palacio de Miraflores, mientras el presidente Chávez es retenido por los golpistas. Sus primeras medidas fueron la derogación de la constitución, disolución de la Asamblea Nacional, destitución de generales y miembros de las fuerzas armadas que apoyaban al gobierno, y eliminación del adjetivo bolivariana en la denominación de Venezuela. El 14 de abril los sediciosos estaban detenidos, Carmona era acusado de violar la constitución y los militares implicados destituidos. El Tribunal Supremo, controlado por la oposición pide la libertad de los detenidos, invocando un «vacío de poder», consecuencia dirán, de una supuesta renuncia del presidente.

Ya no habrá vuelta atrás. La conspiración se convierte en el arma política de la derecha por excelencia. Los acontecimientos producidos desde abril de 2002 hasta la fecha, febrero de 2019 con el autoproclamado presidente

Juan Guaidó, muestran la deriva sediciosa. Es una oposición que pierde elecciones, radicalizada e impotente para revertir el proyecto político bolivariano. Ello le hace acudir como alternativa a las acciones desestabilizadoras cada vez más violentas, hasta promover una invasión. Son veinte años con un solo objetivo, recuperar el poder.

Tras el frustrado golpe de Estado de abril, la oposición busca aunar fuerzas. El 5 de julio de 2002 se creará la Coordinadora democrática. AD, COPEI, Primero Justicia, MAS, Alianza Bravo Pueblo, Fedecámaras, CTV y otras 17 organizaciones hasta completar una membresía de 24 le dan vida. El objetivo: todos contra Hugo Chávez. El boicot electoral y los llamamientos a romper el orden constitucional se convierten en una estrategia recurrente para la oposición, intercalando participación y rechazo al orden constitucional en función de sus alianzas de coyuntura. Dos nombres cobraran fuerza en este periodo, Leopoldo López, en esos años alcalde de Chacao y Henrique Capriles, alcalde Baruta y líder de Primero Justicia. Ambos, aglutinaran durante estos años el golpismo a la derecha venezolana y serán interlocutores válidos para las administración estadounidense. En 2007, Leopoldo López creará su propio partido: Voluntad Popular desde el cual se erige como el líder de la oposición.

No pasó un año desde el golpe fracasado (2002) cuando la oposición convoca una huelga general empresarial. Se trató de bloquear la industria, sabotear la producción petrolera, asfixiar el país. En esencia, crear la infraestructura para el desabastecimiento, el mercado negro, la inflación y el descontento social. Fue un cierre patronal. El eslogan: «Navidad sin Chávez». Las organizaciones populares, los círculos bolivarianos, la movilización popular cerró filas con su presidente. El gobierno contraatacó, impulsando una profunda reforma en el sector petrolero. PDVSA se refunda. Las nuevas autoridades se alinean con los objetivos del gobierno en la lucha por un aumento de la producción y la renovación tecnológica del sector. El golpe petrolero, tal como fue conocido, fracasó.

A cada acción desestabilizadora, a cada llamamiento a romper el orden constitucional, el gobierno responde con más democracia. Viviendas sociales, empleo, nuevas universidades públicas, becas, subidas salariales, derechos políticos, culturales, étnicos y de género, y servicios médicos. Se promueven las *misiones* para articular el movimiento social en torno al proyecto bolivariano. Son expresión de una democracia radical con talante

participativo. La revolución toma fuerza. Por primera vez las poblaciones, los pueblos y barrios populares, hasta ese momento carentes de servicios de salud primaria, contarán con médicos de familia, tratamientos odontológicos, oftalmológicos y atención de urgencia. Fue la *Misión Barrio Adentro.* Otras misiones surgirán dentro de este proceso, cubriendo todo el espectro de la estructura social venezolana. Son formas de organización popular y participación de jóvenes, campesinos, mujeres, desempleados, pueblos originarios, actividades cooperativas, culturales, educativas, deportivas. Hoy, la *Misión Verdad,* es un pilar para combatir la propaganda de guerra y la desinformación de los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la realidad venezolana.

La derecha no se frena. En 2004, patrocina otro intento por retornar al pasado. En esta ocasión, al albur de la constitución, la oposición busca precipitar la destitución del presidente, mediante un referéndum revocatorio. A dos años del mandato y con el 20 por 100 del electorado, la oposición podría poner en pie el proceso. No hubo pueblo, mercado, plaza y acontecimiento donde no se instalase una mesa de recogida de firmas. Sus promotores dijeron haber reunido 3.477.000 firmas. El CNE dio validez a 1.991.000 de firmas. Del resto, 375.000 fueron consideradas inválidas y 1.200.000 de dudosa legitimidad. A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral, dio validez a unas 525.000 firmas «dudosas», para hacer viable el revocatorio. La derecha se queda sin argumentos, en su agenda no contemplaba la aceptación por parte del presidente. El 15 de agosto de 2004 se realizó el referéndum. El resultado fue un jarro de agua fría para la oposición. 5.880.600 personas, un 59,95 por 100 del electorado votó a favor de la continuidad del gobierno; en contra, lo hicieron 3.989.000, equivalente al 40,39 por 100. Avalado por los acompañantes internacionales de todos los colores políticos y el centro Carter, el resultado fue legitimado. Las acusaciones de fraude de la oposición cayeron en saco roto.

El argumento de fraude electoral ha sido una máxima argumental en estos 20 años. Se repite con mayor o menor éxito. El punto de inflexión han sido las últimas presidenciales, celebradas el 20 de mayo de 2018. Su convocatoria, respondiendo a una solicitud continuada por parte de la oposición será boicoteada. La MUD despliega un argumento falaz, la parcialidad del Consejo Nacional Electoral, el mismo que en 2015 ratificó su triunfo en la Asamblea Nacional. Además, agrega la falta de

transparencia y garantías para su realización. En esta ocasión se trataba de enfrentar directamente el poder ejecutivo con el legislativo, desconociendo la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.

Una nueva campaña se puso en marcha con el apoyo de la OEA, algunos países miembros de la Unión Europea, descalificando el proceso electoral y restando validez a los resultados. Así se expresan los medios de comunicación sobre la convocatoria. El periodista de France 24 horas Leonardo Niño escribe: «Venezuela es el país de la región de América Latina que más preocupación genera en la comunidad internacional. No solo la crisis social y económica que atraviesa actualmente, y que se ha agudizado con los años, sino porque el gobierno de turno liderado por el presidente Nicolás Maduro nunca había estado más aislado en el mapa geopolítico. Y parece no querer dar su brazo a torcer a pesar de la situación humanitaria que ha provocado la migración de miles de venezolanos a países vecinos, y pese a que varios organismos han expresado su rechazo a la forma en que ejerce el poder y maneja las relaciones internacionales. Esto sin contar la falta de garantías que tiene la oposición en el ejercicio democrático. El ejemplo más fehaciente de esta posición ha sido la desaprobación de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, sobre las cuales la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la OEA, La Unión Europea y el Grupo de Lima, han dicho que rechazan enfáticamente los comicios por su falta de transparencia, legitimidad y garantías»[42].

El golpe está servido. Es la puerta de entrada para habilitar el nombramiento de un presidente espurio, desconocer el triunfo de Nicolás Maduro y traspasar la legitimidad al presidente de la Asamblea Nacional, invisibilizando a la existencia de una Asamblea Constituyente. Este montaje ha servido para que Donald Trump, el grupo de Lima y la Unión Europa reconozcan al autodenominado presidente encargado, Juan Guaidó. Por primera vez, el golpe de Estado no solo es promovido desde el exterior, sino que sus actores principales se ubican fuera del territorio donde se produce. Convirtiéndolos, en un acto de violación del derecho internacional, en los autores materiales del golpe de Estado. Su éxito aún está en solfa. A pesar de todas las maniobras, no ha podido cuajar. Los tiempos corren en su contra.

Hasta este momento, la oposición ha hecho lo indecible por retomar el poder, llegando a pensar en el magnicidio contra el Presidente Hugo Chávez y ahora contra Nicolás Maduro. En 2004 se desvela un plan orquestado por la oposición con paramilitares, exsoldados colombianos y mercenarios civiles para bombardear el Palacio de Miraflores. Desde una finca situada en el Estado de Miranda, en el municipio de Baruta cuyo alcalde era Henrique Capriles, el mismo que patrocinó el golpe de 2002 y presidente de Primero Justica. Fueron detenidos 150 hombres reservistas del ejército colombiano, más un centenar de paramilitares y civiles. La operación tomó el nombre de la finca: *Daktari.* El informe de la fiscalía general militar se expresa en estos términos: «Durante los meses de marzo y abril de 2004, miembros de la organización ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, originarios de Colombia, a solicitud de ciudadanos venezolanos, entre otros, Gustavo Zing Machado, coronel (GN) Jael Contreras Rangel, Robert Alonso Bustillo, teniente coronel (GN) Miguel Prieto Morales, planificaron y ejecutaron reclutamientos de ciudadanos colombianos, en su mayoría antiguos miembros del ejército de ese país con el objetivo de estructurar un contingente de individuos con conocimientos en materia de operaciones, destreza militar y uso de armas. […] Toda esta organización constituían un equipo coordinado con un objetivo específico, que era promover, ayudar y sostener un movimiento armado que alterase la paz de la República Bolivariana de Venezuela, y de esta manera organizar, asesorar, planificar, coordinar, controlar y ejecutar el proyecto delictual con la realización de acciones capaces de impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno Nacional, legítimamente constituido, presidido por el ciudadano teniente coronel (EJ) en situación de retiro Hugo Chávez Frías, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional […] Se pudo conocer que durante la ejecución del proyecto delictual, se planificó llevar a cabo como en efecto se hizo una reunión el día 23 de abril de 2004 […] con la asistencia de militares activos, retirados y civiles, entre otros coronel (GN) Jesús Castro Yelles, coronel (GN) Jesús Farías Rodríguez, teniente coronel (GN) Miguel Ángel Prieto Morales, mayor (GN) Fuentes Marval, capitán (GN) Javier Nieto Quintero, teniente (GN) Julio César Martínez Higueras, en cuya oportunidad el teniente coronel Miguel Prieto Morales, expuso la necesidad de utilizar neogranadinos en una acción contra el gobierno nacional de Venezuela a los

efectos de atentar contra el mismo y alterar la paz nacional, razón por la cual se haría uso del contingente de no militares acantonados en la identificada finca Daktari, y explicó la misión que estos iban a ejecutar en fecha 25 de abril del presente año»[43].

El presidente Hugo Chávez, convocó a manifestarse contra el paramilitarismo y el magnicidio. El 16 de mayo de 2004, ante miles de personas se declara el carácter antiimperialista de la revolución. Habían trascurrido cuatro años de gobierno. La oposición contaba en su haber tres intentos de golpe de Estado y un magnicidio. Todos ellos fracasados. Pero seguiría intentándolo. El 31 de octubre de 2004, en medio de una campaña internacional empeñada en señalar el carácter dictatorial del gobierno de Hugo Chávez se celebran los comicios para gobernadores y alcaldes. El resultado no pudo ser más desesperanzador para los golpistas. Los partidos de gobierno obtienen un triunfo aplastante, con el 58,31 por 100 de los votos, 20 de las 22 gobernaciones le serán dadas, obteniendo, además 270 alcaldías de 332 en liza. Mientras tanto la oposición conquistó dos gubernaturas y 62 alcaldías, sumando un 39,32 por 100 de los votos.

La oposición se sintió frustrada. Sin proyecto y sufriendo derrotas electorales, se enroca negando legitimidad a los procesos electorales. En el horizonte, las elecciones parlamentarias programadas para el 4 de diciembre de 2005. Su decisión fue sabotearlas. En un acto de repudio a la V república y a la constitución, niegan validez al proceso electoral, retirándose de la contienda. Por consiguiente, los 167 diputados electos lo fueron de la coalición gubernamental, encabezados por el Movimiento V República, partido del presidente, que obtuvo 114 escaños. Durante cinco años la oposición, por decisión propia de representación parlamentaria. Durante ese periodo profundizó la estrategia golpista.

Para 2006 y con mayoría absoluta de las fuerzas gubernamentales en el parlamento, se concretan la mayoría de los proyectos, reformas y trasformaciones estructurales de la sociedad venezolana. Es un periodo caracterizado por un nuevo triunfo electoral. Hugo Chávez será reelecto como presidente para el ejercicio 2007-2013. El resultado fue otro revés para la oposición: su candidato Manuel Rosales obtuvo un 36 por 100 de los votos (4.292.466); Hugo Chávez alcanzó un 62,84 por 100 de los votos (7.309.080).

La oposición se reacomoda, se reinventa para frenar su descrédito, tanto como el fracaso en la estrategia golpista desarrollada durante los ocho años de gobierno del presidente Hugo Chávez. El 23 de enero de 2008 se funda la opositora MUD. La componen los principales partidos de la oposición. Leopoldo López uno de sus pilares crea para la ocasión un nuevo partido, Voluntad Popular junto a Freddy Guevara. El mapa político se redefine. Los nombres de Lilian Tintori, Henrique Capriles, Leopoldo López, Julio Borges, Freddy Guevara, María Corino Machado de la Plataforma Soy Venezuela, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, fundador de la Alianza Bravo Pueblo, huido de la justicia y residente en España, están entre sus fundadores. Serán los instigadores de nuevos golpes fallidos al tiempo que interlocutores válidos para Estados Unidos y sus aliados internacionales[44].

En 2007 la constitución se encuentra sólidamente afincada. Sin posibilidades de revertir el proceso, la oposición termina por acatar la Carta Magna. Este cambio radical en el comportamiento no le impidió seguir promoviendo los actos de sabotaje y desestabilización política. Ese año, Hugo Chávez convoca un referéndum para avalar sus reformas a la constitución. La oposición se muestra contraria y defiende, curiosamente, la redacción existente, declarando su aceptación a los principios de la misma. Entre la propuesta se encontraba declarar el carácter socialista de la revolución bolivariana. La campaña estuvo llena de críticas al proyecto provenientes tanto de los partidos gubernamentales como de la oposición. La propuesta fue desestimada. El 2 de diciembre de 2007 ganó el «NO» en los dos bloques de preguntas[45]. La oposición, con sus votos y los provenientes del desencanto, había triunfado. El entonces ministro del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, Jorge Giordani señala como posibles causas de la derrota el cansancio, la división dentro del propio bloque de gobierno, sin acuerdo sobre las reformas, además de una movilización sin precedentes de la oposición: «La primera, en términos estrictamente numéricos electorales debe tener en cuenta que desde el 6 de diciembre de 1998, con el primer triunfo electoral que llevó a la Presidencia de la república a Hugo Chávez Frías, se habían realizado al menos diez procesos electorales que finalizan el 3 de diciembre de 2006, con la reelección para un nuevo periodo del presidente Chávez. Esta secuencia de triunfos, que terminan con el apoyo de unos 7.300.000 votos a favor, sufre

por primera vez una disminución importante en el evento refrendatorio del 2 de diciembre de 2007, con una merma de apoyo aproximada de tres millones de electores […] Lo que estaba en juego para la oposición al gobierno no era el referéndum en sí, sino la caída del gobierno como demostraban los hechos luego de diciembre de 1998, lo ocurrido en abril de 2002 y el posterior sabotaje petrolero»[46].

Este cambio, el acatamiento del orden constitucional, aunque fuese instrumental, les ha permitido, una década más tarde, en 2019, llamar al golpe de Estado, pedir la intervención militar amparándose en una lectura torticera de la constitución, a la cual negaron validez durante años. Así, una Asamblea Nacional, declarada en rebeldía desde 2016, con su presidente al mando, Juan Guaidó, se atribuye derechos no contemplados en su ordenamiento y bajo la presidencia de Juan Guaidó, se autoproclama «presidente encargado».

Hasta este momento, las intentonas golpistas han sido desarboladas. La estrategia de la violencia controlada y de un golpe blando no consiguen su objetivo. La MUD ha decidido complementarlas con nuevas acciones desestabilizadoras. El llamado a las fuerzas armadas para que se conviertan en los protagonistas del golpe, retomando los peores augurios de la represión, la violación de los derechos humanos, la tortura y el asesinato político, pone de relieve la razón de la sinrazón. Pensar que el objetivo de tal propuesta sea la restauración de la democracia es una ingenuidad o una irresponsabilidad política. Pedir una invasión extranjera, de forma complementaria conlleva destruir el país. Solo intereses mezquinos y el odio de la plutocracia desplazada del poder político, pueden estar justificando tales acciones. Pero al igual que en Irak no hubo armas de destrucción masiva, en Venezuela no existe una crisis humanitaria ni la necesidad de ocupación del territorio, por fuerzas invasoras. Sin embargo, el golpe de Estado está determinado por los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. De allí que se ha trazado en los despachos del Pentágono, la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Sin su concurrencia no sería viable, como no lo ha sido ninguno de los llevados a cabo durante los tres siglos de independencia de América Latina.

El último mandato del presidente Chávez (2007-2013) quedó ensombrecido por su muerte por enfermedad. El periodo no estuvo exento de intentonas golpistas. La campaña internacional no claudicó en su

empeño de presentar al presidente Hugo Chávez como un tirano con delirios de grandeza y un caudillo. Mario Vargas Llosa, Jorge Castañeda o Joaquín Villalobos se apresuraron en utilizar un concepto peyorativo para sintetizar la política de Hugo Chávez. Además de caudillo ahora se convertía en un dictador populista. El concepto ganó adeptos. Un incidente en la Cumbre de Presidentes del año 2007, celebrada en Chile el mes de diciembre, facilitó introducir el concepto. El presidente Hugo Chávez, recordó a José María Aznar su participación en el frustrado golpe de 2002. Mientras tenía el uso de la palabra, el entonces rey de España Juan Carlos I espetó la frase: «¿Por qué no te callas?». La derecha latinoamericana se posicionó al lado del monarca español, defendió a José María Aznar, y la mayoría de los asistentes guardaron un silencio cómplice. La oposición venezolana aprovechó el incidente para recalcar la urgencia de acabar con el presidente Hugo Chávez.

El proceso político acelera los cambios, introduce reformas y habilita nuevas leyes. Nacionalizaciones, expropiaciones bancarias se producen consecuencia de las maniobras desestabilizadoras tendientes a paralizar el país. Es una confrontación donde se ponen en juego todas las técnicas golpistas. En este proceso, se consolida el PSUV y se fortalecen las organizaciones populares. En 2007 por ley habilitante se crean las milicias bolivarianas. Cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa integrados por reservistas y civiles. Unidades de ciudadanos que trabajan en instituciones públicas o privadas que de manera voluntaria son registrados, organizados por el comando general de la Milicia Bolivariana. El presidente Hugo Chávez declaró: «tenemos que ser un país capaz de defender hasta el último milímetro de nuestro territorio para que nadie venga a meterse con nosotros».

A nivel internacional se construye un complejo y alambicado montaje publicitario destacando el carácter dictatorial del régimen y los delirios de poder de Hugo Chávez. Para darle credibilidad hay que dotarlo de una investigación con apariencia de rigor. El elegido para su redacción debe pertenecer a la comunidad científica, con obra contrastada. Su imagen habrá de coincidir con un sincretismo ideológico donde se sumen las tradiciones liberales, conservadoras, progresistas, socialdemócratas y ciertamente socialistas. De perfil objetivo e imparcial, anclado en la tradición neutral valorativa de las ciencias sociales. Todo un compendio de virtudes sin

defectos. En esta selección de currículum, el encargo de hacer de Hugo Chávez un dictador populista, un afiebrado amante del poder, recae en Enrique Krause. A la sazón director de la *Revista Vuelta* y *Letras Libres.* Al cabo de poco tiempo presenta a sus peticionarios el estudio concluido. Más tarde, será editado bajo el título *El Poder y el delirio.* En la portada un desfigurado rostro del presidente Hugo Chávez. Su lectura nos lleva por un mar de adjetivos, descalificaciones, entrevistas *ad hoc* en las cuales solo se reconocen opiniones que van construyendo la imagen perfecta de un tirano. Así justifica Krauze el estudio: «¿Por qué, como latinoamericano, escribo este libro sobre Venezuela? Porque el ácido del autoritarismo ideológico avanza, a punta de petróleo, dólares, propaganda, sobre la tenue superficie democrática de la región. Chávez se presenta a sí mismo como el heraldo del futuro, del "socialismo del siglo XXI", la nueva encarnación de la esperanza continental. Pero a partir de la experiencia totalitaria del siglo XX (reflejada ya, embrionariamente en usos y costumbres del régimen venezolano el futuro que anuncia no es sino una máscara del pasado, del pasado más oscuro y cerrado»[47]. El texto es un manual para ideólogos, periodistas y políticos necesitados de citas de autoridad con el fin de dar peso a las descalificaciones sobre el proceso bolivariano y el presidente Hugo Chávez. El argumento con el cual cubren sus desnudeces es banal: «¡Lo dice Krauze!». Convertido en el vademécum de la oposición, avala y defiende un golpe de Estado como alternativa democrática bajo el enunciado de guerra justa contra el dictador.

En 2008, con la crisis mundial declarada y la elección de Barack Obama en Estados Unidos, se cree que una administración Demócrata variaría la posición beligerante y de agresión hacia Venezuela bajando el perfil de la confrontación. Lamentablemente la realidad mostró un mayor encono y aceleración en las dinámicas desestabilizadoras.

«La continuidad en el tiempo del proceso en Venezuela depende de la capacidad de resistir no solo a la oposición interna, sino igualmente a los esfuerzos sistemáticos del gobierno de Estados Unidos para aislar y debilitar al gobierno, e incluso justificar algún tipo de intervención externa. Por ello es fundamental fortalecer las relaciones en diferentes planos con los gobiernos progresistas sudamericanos, especialmente los llamados "progresistas" que, como ha demostrado la experiencia de estos años, pueden desempeñar en esto un papel vital. Es igualmente necesario

neutralizar a los gobiernos y la opinión pública europeos, continente en el que algunos gobiernos y medios tienden a tomar posiciones cada vez más críticas con relación a Venezuela»[48].

Mientras tanto, el gobierno bolivariano tejía una red de organismos regionales para disminuir el peso de la Organización de Estados Americanos y modificar su estatus en el escenario internacional. A la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), se suma el patrocinio a UNASUR, organismo que mostró su eficacia, jugando un rol destacado en el freno a las intentonas de golpe de Estado contra los presidentes Evo Morales y Rafael Correa.

«Así se ha establecido una relación fluida y de confianza con las principales redes de movimientos sociales del continente. Se contribuyó a la derrota del ALCA, se establecieron Petrocaribe y Telesur y se ha logrado el acuerdo de varios países para crear el Banco del Sur, como paso hacia una mayor autonomía financiera para América Latina. Bajo la idea del ALBA se han generado experiencias de intercambios solidarios, no mercantiles, entre varios países, llegándose a múltiples acuerdos de cooperación y complementación productiva. Todo esto ha contribuido a reforzar la posición del país en el continente y, adicionalmente, ha servido como escudo protector en contra de los esfuerzos sistemáticos del gobierno de Estados Unidos para aislar a Venezuela, como ocurrió con su fracasado intento por aplicarle la Carta Democrática de la OEA»[49].

En 2019 la coyuntura internacional se muestra esquiva. UNASUR está siendo desarticulada. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú han suspendido su participación. Los gobiernos progresistas de la región han sido defenestrados. Gobiernan Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, Lenin Moreno en Ecuador. En Honduras y Paraguay, tras los golpes de Estado de 2009 y 2012 respectivamente, los procesos electorales han sido un fraude. El resultado de la manipulación de los votos permite que dos empresarios de la plutocracia gobiernen sus países. Guatemala, Panamá, Costa Rica y Perú se decantan a favor de la intervención militar diseñada por Estados Unidos para la región, bajo la mentira de una crisis humanitaria, renunciado a la soberanía y el derecho considerado inalienable por el pensamiento emancipador de los libertadores.

La creación del grupo de Lima es su correlato. Profundizar en el proceso desestabilizador internacional contra la República Bolivariana de Venezuela. Su existencia se justifica en la urgencia de los Estados Unidos por derrocar el gobierno constitucional. Constituye un eslabón más en la cadena golpista. El 19 de febrero de 2019, violando todos los preceptos del derecho internacional, sus miembros dan el plácet al autonombrado Juan Guaidó. Esta maniobra desnuda su objetivo: la intervención militar.

Cara a la opinión pública, el grupo se presenta como una instancia de diálogo. Pero toma partido, es beligerante. Se escora, pierde su papel negociador y adhiere a la propuesta de Estados Unidos, solicitando la aplicación de la carta democrática de la OEA. Es el caballo de Troya para la entrada de ayuda humanitaria, antesala de la invasión militar. En sus principios fundacionales el punto 9 hace ver «su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano»; y el 16 manifiesta: «su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que este orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país»[50].

Dichas peticiones coinciden con la estrategia diseñada por el Comando Sur de Estados Unidos, al mando del almirante Kurt W. Tidd. En su documento, desvelado en 2016 y no desmentido por el Pentágono, sus autores, aluden a las consultas previas realizadas con el secretario general de la OEA, expresidentes de la región y destacados políticos para su elaboración. Los mismos que en 2018 patrocinan la creación del grupo de Lima. Conocido como «Venezuela Freedom 2» plantea la dirección y el diseño de acciones acorde a la actual coyuntura.

«De especial interés […] en las actuales circunstancias, es posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar” demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas. Al mismo tiempo, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes,

secretario General de la OEA y los expresidentes, encabezados por el exsecretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria Democrática de América a quienes hemos sumado a la campaña en desarrollo. Conjugar estas iniciativas con la citada figura de las "emergencias humanitarias" que permita construir alianzas con otros países del área de influencia del Comando Sur»[51].

En 2009, el país dio el visto bueno a la reforma habilitante para hacer posible la reelección a cargos públicos sin límites de periodos. Cualquier ciudadano podría presentarse cuantas veces lo estimara oportuno a un mismo cargo. Esta ley fue otro punto de conflicto entre la oposición y el gobierno. La MUD y sus aliados internacionales lo convirtieron en un caballo de batalla para señalar los deseos de Hugo Chávez de perpetuarse en el poder. Las protestas siguieron el ritmo de una acción de violencia controlada, diseñada en el manual del golpe blando de Gene Sharp.

Los dos últimos años del gobierno del presidente Hugo Chávez (2010-2012) no mejoraron las relaciones con Estados Unidos a pesar de la presidencia de Barack Obama. Expulsiones de personal diplomático, cierre de embajadas, sanciones económicas, entre otros puntos negros, delimitaron el periodo. El gesto de apretón de manos en la V Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago en 2009, y el obsequio de Hugo Chávez al presidente Obama del libro de Eduardo Galeano *Las venas abiertas de América Latina* y el texto del historiador norteamericano Howard Zinn *La otra historia de los Estados Unidos* quedó en un brindis al sol. La administración Obama profundizó los ataques al gobierno de Venezuela y siguió apoyando la estrategia de golpe de Estado, financiando la MUD bajo el pretexto de llevar a cabo un golpe blando. En 2010 se produce el retiro de embajadores. La tenaza sobre el gobierno de Venezuela se cierra lentamente. En 2015 y con las elecciones parlamentarias en ciernes, y Nicolás Maduro en la presidencia, Obama promulga sanciones contra Venezuela y declara que «Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

La última etapa del gobierno de Hugo Chávez estuvo marcada por la noticia hecha pública en 2011 de la enfermedad que aquejaba al presidente. La oposición solo tendría que esperar su momento, sin la figura carismática

del presidente, piensan sus dirigentes, las posibilidades de recuperar el poder se acrecientan, así pensaban sus dirigentes.

Un año antes, en 2010 se habían celebrado elecciones a la Asamblea Nacional. La MUD puso todo su armamento en juego. El objetivo era lograr el control de la Cámara y bloquear la acción del ejecutivo. Así se quebraría la hegemonía parlamentaria de la coalición gubernamental, facilitando la opción de un golpe blando. Para tener éxito, era obligado obtener la mayoría absoluta de la Asamblea. Su continua labor desestabilizadora durante una década podría dar réditos políticos. Habían horadado las fuentes de legitimidad del orden constitucional desestabilizando, provocando mercado negro, acaparando, saboteando empresas públicas, descapitalizando, y llamando a la desobediencia civil. En otras palabras, estrangulando la economía y creando un proceso inflacionario de elevadas consecuencias en la vida cotidiana. Una guerra psicopolítica de desgaste mental y quiebre personal bajo la sensación de vivir en anarquía. La estrategia estaba destinada a mermar la confianza de las clases trabajadoras y los sectores medios en las políticas sociales del gobierno, afectados directamente por el mercado negro, el desabastecimiento y el sabotaje.

En medio de esta realidad, avances y retrocesos. Desde el gobierno y sus organizaciones, se plantea profundizar el proyecto otorgando más poder a la ciudadanía, a las organizaciones populares. Crear mecanismos de poder popular que dinamicen la economía, proyecten asociación colectiva, vinculada a las experiencias históricas, las tradiciones de apoyo mutuo presentes en la sociedad venezolana. La respuesta fue el proyecto *Las comunas*. Más democracia, mejor organización y más autonomía en el proceso de toma de decisiones. En 2006 se forman los Consejos Comunales y en 2010 se dicta la Ley Orgánica de las Comunas. Organizaciones populares que dan cohesión al proyecto bolivariano y amplían las formas comunitarias de toma de decisiones, generando un mayor grado de aceptación al ser organismos autónomos y configurados tanto para la solución de los problemas cotidianos como para elaborar las propuestas de actuación en el corto y medio plazo.

Los resultados electorales dieron en 2010 el triunfo a la coalición gubernamental. Sin embargo pierde la mayoría cualificada de 2/3, obteniendo 98 de los 165 escaños en liza. La MUD, sumó 65 asambleístas, y Patria Para Todos (PTT) se queda con los 2 restantes. La composición de

la Asamblea abrió un ciclo novedoso en el debate político de coyuntura. Si en el periodo legislativo anterior (2005-2010) la oposición se había marginado, ahora toma protagonismo y disputa poder. Pasa a la ofensiva dentro de las instituciones. Como dato añadido, la MUD y el PPT no presentaron alegaciones de fraude electoral. Los números les eran favorables, no había razón para impugnar los resultados. Sin embargo, en 20 años no han renunciado a dicho argumento para señalar la parcialidad del Consejo Nacional Electoral antes, durante y después de los comicios. Sembrar la duda es parte de la estrategia desestabilizadora. En las presidenciales celebradas el 20 de mayo 2018 darán un salto cualitativo en la estrategia golpista. Tras múltiples encuentros entre oposición y gobierno y un principio de acuerdo para celebrar elecciones y desbloquear la situación de *impasse,* en el último momento se retiran. Bajo mediación internacional, con la redacción consensuada y a la espera solo de ratificarlos en acto solemne con la firma, la MUD los desconoce, dejando plantados a mediadores internacionales y boicoteando su puesta en práctica. Los buenos auspicios en las negociaciones de Santo Domingo se frustran. La MUD rompe todo diálogo, y bloquea una salida negociada a la crisis. La administración Trump y su vicepresidente Mike Pince dan la orden de no firmar. Estados Unidos toma el mando de los acontecimientos. Exige a la oposición retirarse de la mesa de diálogo y rechazar el adelanto de las elecciones presidenciales. Condición *sine qua non* para el desconocer el posterior gobierno electo, declararlo ilegítimo, y proponer un gobierno anclado en la Asamblea Nacional. Dicho plan supuso la autoproclamación del usurpador Juan Guaidó.

Para 2012, en medio del proceso electoral, las acciones desestabilizadoras y el sabotaje se recrudecen. Los efectos sobre la vida cotidiana de la población se hacen evidentes. Cortes de luz, incendios provocados, carreteras bloqueadas, asaltos, lanzamiento de cócteles molotov contra edificios públicos, manifestaciones violentas, boicot institucional y acciones bajo la denominada coerción no violenta conocida como el *desafío político.* «La no cooperación masiva y el desafío pueden cambiar la situación política y social, especialmente las relaciones de poder, de tal manera que los dictadores pierden capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Las fuerzas militares del adversario pueden volverse tan poco confiables que ya simplemente no

obedezcan las órdenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en sus posiciones y sigan firmes en cuanto a sus objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar con efectividad. A esto se le llama coerción no violenta»[52].

Aun así, el proceso avanza. Reforma agraria, ley de semillas, viviendas sociales, becas, misiones, innovación tecnológica, investigación básica, trasformación productiva, disminución de la pobreza, mejoras en el campo de la salud, la educación y el proyecto de poder comunal. Los logros son muchos, pero se eclipsan bajo una nube de acusaciones de corrupción y deserciones. La prensa opositora aumenta y da publicidad a los desencuentros. Crea una Venezuela virtual al borde de la extinción. Produce falsas noticias para socavar la credibilidad del gobierno, destinadas sobre todo al exterior. Las hostilidades se disparan.

La derecha comienza su proceso de primarias solicitando al CNE que organice, asesore y fiscalice las votaciones de sus militantes y simpatizantes para garantizar la transparencia y dar fiabilidad a los resultados. (Recordemos que el CNE es el mismo organismo vilipendiado, acusado de parcial, corrupto y manipulador.) En esa ocasión, sin precedentes, el CNE es reivindicado por la MUD como única instancia reconocida por su profesionalidad siendo una institución de prestigio y con experiencia en la lucha contra el fraude en las mesas, en la manipulación del censo y el recuento de votos. Sus candidatos alabaron el sistema electoral, la transparencia y profesionalidad del CNE, entre ellos Leopoldo López, Henrique Capriles y Corina Machado. Terminado el proceso saldrá ganador Henrique Capriles miembro de Primero Justicia con un 64 por 100 de los votos, seguido de Pablo Pérez del bloque progresista con el 30,3 por 100 y María Corina Machado, independiente con un 3,7 por 100 de los votos. Acudieron a las urnas 3.079.284 personas. En el intertanto, Leopoldo López de Voluntad Popular, el 12 de enero, a un mes de celebrarse las elecciones, renunció en favor de Henrique Capriles.

A pesar de la enfermedad, Hugo Chávez será el candidato del Gran Polo Patriótico para el periodo 2013-2019. La oposición vuelca todos sus esfuerzos, sin renunciar al golpismo. Los resultados son un golpe para el candidato de la MUD Henrique Capriles. Hugo Chávez logra el triunfo con un 55,07 por 100, equivalentes a 8.191.132 votos. La MUD obtiene un 44,31 por 100, en votos 6.591.304.

El 6 de octubre de 1012, no fue solo un triunfo, abrió una nueva etapa en la acción de gobierno. En el primer consejo de ministros celebrado el 20 de octubre, Hugo Chávez pone al descubierto errores, contradicciones, realizando críticas al proceso de burocratización en el cual había caído la revolución bolivariana. Es el inicio de un debate sin tapujos ni medias tintas. Hizo un llamado a las fuerzas políticas del Polo Patriótico y al PSUV a dar un giro en su manera de actuar. La intervención del presidente Chávez en el consejo de ministros se divulgó como: «Golpe de Timón». En él se encaran y enumeran ocho aspectos para el cambio. I) *El nuevo ciclo de la transición:* caracterizado por la necesidad de modificar la base productiva del país, el cambio en el rol del estado, la incorporación de mecanismos de autogestión, la utilización de una planificación democrática como mecanismo regulador y la ubicación autónoma de las relaciones productivas; II) *La democracia socialista del siglo XXI:* «Recordemos que en la Unión Soviética nunca hubo democracia, no hubo socialismo, […] y una de las cosas esencialmente nuevas de nuestro proceso es su carácter democrático, una nueva hegemonía democrática, y eso nos obliga a nosotros a no imponer, sino a convencer, y de allí el tema comunicacional, el tema de los argumentos […] el cambio cultural»; III) *Autocrítica para rectificar:* «la autocrítica es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío, o lanzándola como al vacío. Es para actuar. Señores ministros, señoras ministras, las comunas, manden a buscar la Ley de las Comunas, léanla, estúdienla. Mucha gente –estoy seguro– no digo que ustedes por allá, más allá, no la han leído, porque creemos que no es con nosotros […] Cuidado, si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados y no solo estamos liquidados, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto…»; IV) *El socialismo no se decreta:* «[…] a veces podemos caer en la ilusión de que por llamar, yo soy enemigo de que le pongamos a todo "socialista", estadio socialista, avenida socialista ¡que avenida socialista chico! Ya eso es sospechoso […] Eso es sospechoso, porque uno puede pensar que con eso, el que lo hace cree que ya, listo; le cambié el nombre, ya está listo […] así estamos nosotros con el socialismo. Tú te llamas socialismo, chico, pero sigues siendo en el fondo cochino…»; V) *La propiedad social, el espíritu del socialismo:* «tenemos que insertarnos con los pequeños productores, pero tenemos que injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo de la tierra, donde se produce

mango, guayaba, fresa hasta el sistema de distribución y consumo de los productores que ahí salen. Todo eso hemos hecho en aras de la transición, pero no debemos perder de vista, compañeros y compañeras, la parte medular del proyecto: no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla, rodeadas del mar del capitalismo, porque se lo traga el mar»; VI) *El objetivo es el pueblo:* «creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que antes no existían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recurso y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la constitución; tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo; pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los primeros responsables de su cumplimiento. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo»; VII) *Mayor eficacia para mejores resultados:* «triste es que nos quedemos callados, para que no me llamen piedrero. Aquí no estamos de niños de segundo grado ni de escuelita primaria, este es el gobierno revolucionario de Venezuela, ratificado por un pueblo hace dos semanas, pero también muy criticado por un pueblo y con razones: falta de eficiencia […] necesitamos un nivel de interacción, de comunicación, de coordinación de cruce de planes, de diagnósticos, de problemas, de acción conjunta […] no somos nada, sin integración en la visión, en el trabajo, en todo eso, difícilmente lo lograremos»; VIII) *Reforzamiento del sistema nacional de medios públicos:* «Otra crítica y espero que nadie se sienta mal […] en estos días he estado viendo, como siempre, la televisión. Veo algunos programas de nuestro canal, el canal de todos los venezolanos y seguimos aferrados a aquello que ya pasó, incluso dándole vocería a quienes no tienen nada que decirle al país, poniendo vídeos, que esta persona dijo tal cosa ¿será eso lo más importante en este momento? ¿Y la gestión del gobierno? ¿Por qué no hacer programas con los trabajadores? Donde salga la autocrítica, no le tengamos miedo a la crítica, ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta»[53].

Fue el punto de inflexión. Las formas y maneras de hacer política, de articular proyectos comunales, de producción cooperativa se reactiva. El proceso ganó y con ello se revirtieron algunas de las políticas desestabilizadoras. La distribución de alimentos, medicamentos, producción

de artículos de primera necesidad, aumento en la eficiencia y mejora de los servicios públicos y más democracia. Mientras tanto, la oposición siguió anclada en el lenguaje de la desestabilización.

La muerte el 5 de marzo de 2013 del presidente Hugo Chávez, precipitó nuevas elecciones. Previamente, las dinámicas golpistas se potenciaron a fin de llamar a los votantes a revertir tres lustros de cambios y reformas democráticas. Los medios de comunicación lanzaron noticias falsas al tiempo que distribuían fotos de un supuesto Hugo Chávez postrado en una cama rodeado de aparatos y agonizante. El periódico matutino *El País,* en España, hubo de retirar su edición nacional e internacional, al comprobarse que en portada la imagen de Hugo Chávez era falsa. No fue el único.

La campaña se emponzoña. La oposición tiene un solo objetivo: acabar para siempre con el denominado «chavismo» y la revolución bolivariana. El nombramiento de Nicolás Maduro como candidato se convirtió en un cúmulo de rumores sobre el elevado descontento en las fuerzas armadas y las filas del chavismo. Para la MUD y el conjunto de opositores, la desaparición de Hugo Chávez del escenario político era un nuevo comienzo. El enemigo cambiaba de rostro, era más vulnerable, el ataque podía ser más directo. El carisma y la figura del líder desaparecía, solo quedaba su recuerdo. Inclusive podía ser reivindicado como un hacedor del orden constitucional.

La estrategia del golpe blando al fin podía prosperar. Cubiertos los plazos se convocan nuevas elecciones el 14 de abril de 2013. Nicolás Maduro será el candidato del Polo Patriótico y Henrique Capriles repite por la Unidad Democrática. Los resultados dan el triunfo a Nicolás Maduro. La distancia entre gobierno y oposición, se estrecha. Nicolás Maduro obtiene 7.587.579 votos (50,61 por 100) y Henrique Capriles 7.363.980 votos (49,12 por 100). Ante lo ajustado del triunfo, la MUD siembra las dudas sobre un posible fraude electoral y Henrique Capriles, el 17 de abril presenta alegaciones y la petición de verificación de la totalidad de las actas. La auditoría realizada por el CNE, tras las elecciones y auditada por todos partidos, organismos internacionales sobre el 46 por 100 de las mesas de votación es aleatoria y no muestra indicios de fraude. La MUD desconoce el procedimiento y solicita el recuento en el 100 por 100 de las mesas. Tras un forcejeo y despejar las dudas de fraude se accede a la petición, a pesar de no contemplarse en el ordenamiento jurídico electoral. El 11 de junio de 2013

se dan a conocer los resultados de la auditoria al 100 por 100 de los votos emitidos, reconfirmando los datos y mostrando una desviación de error del 0,02 por 100. Ya no hubo tregua. A pesar de estar presentes en el recuento sus partidos, organismos de verificación internacional, y observadores internacionales propuestos por la MUD, se aprestan a señalar que las elecciones deben repetirse por fraudulentas. La MUD acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la impugnación y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El resultado fue el mismo. No había razón para anular el proceso ni menos aún indicios de fraude, dado el voto electrónico.

El periodo presidencial de Nicolás Maduro entre 2013 y 2018 se caracterizó por una acción beligerante de los partidos de oposición en la MUD, pasando directamente a propiciar el golpe de Estado, la sedición golpista y tensionando el proceso para llevar al país al límite de la guerra civil. Primero, mantuvo la mentira de ser el gobierno de Nicolás Maduro ilegítimo. Ello permitió una violencia inusual, desconociendo las instituciones, las leyes.

El sabotaje, los asaltos a sedes del PSUV, la quema de siembras, el cierre de comercios, y la aparición de las Guarimbas ocupan el escenario. Para 2014, a oposición planifica un escenario de confrontación total. La propuesta se denomina *La Salida.* Nombres que hoy están en la órbita del autoproclamado presidente fueron las personas encargadas de poner en marcha el dispositivo de la violencia sin límites. El 12 de febrero de 2014 la oposición convoca grandes manifestaciones bajo la bandera del intervencionismo cubano, la falta de alimentos, la carestía de la vida y el aumento de la delincuencia. Sus líderes, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López. Grupos paramilitares cortan las vías más transitadas de la capital y sus avenidas. La protesta violenta se extiende por el país. La agresión a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se torna en una constante. Incendian camiones, coches, mobiliario urbano, edificios públicos, cercan centros hospitalarios, colegios públicos, etc. El resultado el asesinato de 43 personas, cientos de heridos y miles de detenidos por disturbios callejeros. La oposición se quita la careta democrática. Es un asalto al gobierno. La oposición entra en estado guerra total contra el orden constitucional. Solo les vale la dimisión del presidente y la entrega del poder.

En este contexto Estados Unidos y países aliados toman partido por la operación *La Salida*. El cuestionamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro se desarrolla como parte de una campaña internacional. Se le acusa de reprimir, encarcelar y ahogar a la oposición. Mientras la oposición llama al magnicidio, realiza continuas provocaciones. Bajo la acusación de violación de los derechos humanos, torturas, persecución política, asesinatos, el complot está en marcha. Las provocaciones ponen al Estado entre la espada y la pared, hacer cumplir las leyes y la constitución o dejar hacer, dejar pasar. La primera alternativa supone dar argumentos a la MUD, acusar al gobierno de Nicolás Maduro de reprimir, coartar la libertad de reunión, expresión, el encarcelamiento de asambleístas, alcaldes, dirigentes estudiantes, etc. La antesala para hablar de presos políticos y un régimen totalitario. La segunda opción, sería una dejación de funciones lo cual supondría crear un estado de indefensión en la ciudadanía. El recurso del diálogo para rebajar la tensión es negado por la MUD. La guerra híbrida y asimétrica entra en escena. Incluso, algunos analistas creen que no se llega a la celebración de las elecciones para la Asamblea Nacional previstas para el 6 de diciembre de 2015.

El 7 de marzo de 2015, Estados Unidos y su presidente Barack Obama anuncia sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, declara a Venezuela un peligro para la seguridad interior, autorizando al Departamento del Tesoro a congelar propiedades e interés de quienes en Venezuela «socaven las instituciones o la democracia, estén involucrados en la violación de los derechos humanos y que limiten la libertad de expresión o participen en actos de corrupción». El montaje se pone en marcha. Es la fase 1 de un proyecto más amplia. El entonces general John Kelly declarará ante el Comité Senatorial de servicios Armados del Congreso de Estados Unidos, el 12 de marzo de 2015: «Venezuela se enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad. Violaciones de los derechos humanos por la fuerzas de seguridad y continuada mala gestión del país están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre, y grandes segmentos de la población dice que el país va por un camino equivocado […] fomentando el presidente Maduro y su partido una ola represiva adicional, como medidas contra los manifestantes y la oposición»[54].

Las elecciones para la Asamblea Nacional se realizan en este clima de toxicidad y violencia orquestada por la oposición. La *Operación La Salida* sigue en pie. El Almirante Kurt Tidd, comandante del Comando Sur, considera que el resultado obtenido por la oposición, controlando la Asamblea Nacional, forma parte de la estrategia desarrollada por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. «La derrota en las elecciones y la descomposición del régimen populista y antinorteamericano recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con las fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación»[55].

El triunfo de la MUD el 6 de diciembre de 2015 es el punto de inflexión para derrocar al gobierno y acabar con la V República. Por primera vez, la oposición dispone de una institución que cubre todo el país, la Asamblea Nacional. Desde el poder legislativo, puede obstaculizar, boicotear y enfrentarse al ejecutivo. Esa será su función hasta hoy. Con 7.728.025 votos, el 45,3 por 100 obtuvo 112 asambleístas, mientras el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, coalición del gobierno con 5.625.248 votos 40,92 por 100 se queda con 55 diputados, de los 98 que poseía en el periodo 2010-2015.

Es el inicio de la segunda fase diseñada por Estados Unidos y el Pentágono, precedida por un nuevo episodio de violencia en 2017. Las Guarimbas toman nuevamente el protagonismo. La violencia se extrema. En esta ocasión desatan una ola de atentados, amenazas a los militantes del gobierno y sus organizaciones sociales, tanto como llaman a las fuerzas armadas a un levantamiento militar. Desde su convocatoria el 31 de marzo hasta el 12 de agosto, día en el cual la MUD anuncia su final, habían transcurrido 134 días. En este periodo la derecha buscó romper el orden constitucional llamando continuamente a un paro nacional. La falta de seguimiento, el cansancio y la frustración interna ante el fracaso de sus reivindicaciones acabó por diluir el efecto de las Guarimbas. Pero ciertamente habían profundizado en las acciones de sabotaje, afectando las redes de distribución de alimentos. Liderados por los opositores que controlan la Asamblea Nacional, buscaron apoyos internacionales para declarar Venezuela en situación de crisis humanitaria. Fue la puesta en escena para valorar los posibles apoyos al plan de intervención de Estados Unidos bajo la pancarta de ayuda humanitaria. Si en el interior no lograron los objetivos previstos, internacionalmente consolidaron su estrategia

golpista. Desbaratado internamente, el gobierno convoca elecciones para una Asamblea Constituyente. Las Guarimbas acallan sus acciones y se entra en un periodo de calma. El balance: 127 muertos, la mayoría de las fuerzas del gobierno y más de 3.000 heridos.

Se tienden puentes para un diálogo con la finalidad de encontrar puntos de acuerdo que bajen la escalada de tensión. Serán dinamitados por los principales gestores del golpe de Estado: Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina Machado, Henry Ramos, Julio Borges, Fredy Guevara, Antonio Ledezma, Lilian Tintori, José Guerra, Henri Falcón, Daniel Ceballos, David Smolansky, entre otros. Sin embargo, Estados Unidos tiene a su hombre de paja para el momento. El elegido está formándose y recibiendo instrucciones, el autonombrado presidente encargado Juan Guaidó. Un personaje creado hacia el exterior para evitar roces entre los posibles futuros «presidentes» en caso de éxito de la maniobra. Tiene fecha de caducidad, sin embargo concita el apoyo internacional. Así se relata el acontecimiento:

«El colapso de Voluntad Popular bajo el peso de la violenta campaña de desestabilización enajenó a grandes sectores de la ciudadanía y terminó con gran parte de su liderazgo en el exilio. Guaidó seguía siendo una figura relativamente menor, después de haber pasado la mayor parte de sus nueve años de carrera en la Asamblea Nacional como diputado suplente. Proveniente de uno de los estados más despoblados de Venezuela, Guaidó ocupó el segundo lugar durante las elecciones parlamentarias de 2015, con solo un 26 por 100 de los votos emitidos para asegurar su lugar en la Asamblea Nacional. Guaidó es conocido como el presidente de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, pero nunca fue elegido para el cargo. Los cuatro partidos de oposición que conformaban la Mesa de la Unidad Democrática de la Asamblea, habían decidido establecer una presidencia rotativa. El turno del Popular Guevara estaba en camino, pero su fundador, Leopoldo López, estaba bajo arresto domiciliario. Mientras tanto su segundo al mando, Guevara, se había refugiado en la embajada chilena. Un personaje llamado Juan Andrés Mejía habría sido el siguiente en la línea, pero las razones por las cuales fue seleccionado Juan Guaidó, ahora están claras. Hay un razonamiento de clase que explica el ascenso de Guaidó, observó Sequera, analista venezolano: "Mejía es de clase alta, estudió en una de las universidades privadas más caras de Venezuela y su imagen era

difícil trasladarla a la ciudadanía de la manera en que Juan Guaidó pudo hacerlo. Por un lado Guaidó tiene características mestizas comunes como la mayoría de los venezolanos y parece más un hombre del pueblo. Además no había estado sobreexpuesto en los medios de comunicación, por lo que podía convertirse en casi cualquier cosa". En diciembre de 2018, Guaidó cruzó la frontera y viajó a Washington, Colombia y Brasil para coordinar el plan para realizar manifestaciones masivas durante la toma de posesión del presidente Maduro. La noche antes de la ceremonia de juramentación de Maduro, tanto el vicepresidente Mike Pece como la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llamaron a Guaidó para brindar su apoyo. Una semana más tarde el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart, todos legisladores de la base en Florida del lobby de exiliados cubanos de derecha se unieron al presidente Trump y al vicepresidente Pence en la Casa Blanca. A petición de ellos, Trump acordó que si Guaidó se declaraba a sí mismo presidente, lo respaldaría. El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió personalmente con Guaidó el 10 de enero, según el *Wall Street Journal* […] Guaidó pudo haber sido una figura oscura, pero su combinación de radicalismo y oportunismo satisfacía las necesidades de Washington "era la pieza que necesitábamos para que nuestra estrategia fuera coherente y completa". El 21 de enero un día antes de que comenzara el golpe, la esposa de Guaidó […] pedía a los militares que se levantaran contra Maduro. […] Cuatro días después, en conferencia de prensa, Guaidó anunció la solución a la crisis ¡¡Autorizar una intervención humanitaria!! Mientras espera la asistencia directa, Guaidó sigue siendo lo que siempre ha sido: un proyecto favorito de fuerzas externas cínicas. "No importa si él se estrella y se quema después de todas estas desventuras […] para los estadounidenses es prescindible y esta amortizado"»[56].

Con la estrategia diseñada y los actores puestos en orden, la posibilidad de continuar el programa de golpe de Estado se explicitada en el documento «Operación Venezuela Freedom-2». «a) Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro; b) Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y la leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencias, la

Ley de Emergencia Nacional, la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278) (la Ley de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela), la ley sección 212 (f) de la ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8USC 1182[f] [INA]), y la sección 3012 del título 3 del Código de Estados Unidos, emitiendo nuestro gobierno la "orden" donde se declara una emergencia nacional para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela; c) Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes; d) Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA; e) Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de los organismos multilaterales, incluyendo la ONU»[57]. Así, llegamos hasta hoy, cuando la fase de intervención está decidida, y los mecanismos para su realización puestos en funcionamiento.

La técnica de los golpes de Estado para tener éxito, requiere como condición *sine qua non,* guardar *el secreto* y contar con el efecto *sorpresa.* Dos factores que en el caso de Venezuela no existen. Se llama a viva voz al golpe. El presidente autoproclamado viaja por todo el país, las fuerzas opositoras reclaman la intervención humanitaria y los medios de comunicación se suman a la proclama. Un presidente sin territorio, ni estado, es reconocido internacionalmente. Se han roto todos los principios de un golpe de Estado en el cual los dispositivos militares, tecnológicos y jurídicos deben actuar en sincronía, para lograr el quiebre institucional. Hoy solo emerge el fantasma de una guerra sin cuartel, donde la destrucción total y aniquilación del enemigo, en este caso el pueblo venezolano que apoya al gobierno y también sus dirigentes, es el objetivo.

En Venezuela, el usurpador Juan Guaidó no posee ninguno de los dispositivos necesarios para viabilizar el golpe de Estado, solo la fuerza exterior y el aval militar de Estados Unidos, circunstancia nada desdeñable. Pero en lo interno carece de legitimidad. En el orden militar no cuenta con los medios para realizar el plan, no está en situación de movilizar a las fuerzas armadas, no posee mando, no controla el territorio ni moviliza tropas. Donde sí tiene un plus la alianza cívico-militar que patrocina el golpe de Estado, es en los dispositivos simbólicos y tecnológicos, haciendo uso de las redes sociales, como un espacio de disputa donde el control del

miedo y el discurso apocalíptico (crisis humanitaria) llena la mente de los venezolanos. Igualmente logra ventaja, para dar verisimilitud al golpe de Estado, por crisis humanitaria en los aliados internacionales. Pero tampoco posee el control del poder judicial para proclamarse presidente encargado y crear una juridicidad al margen del poder legítimo. En conclusión paralizar y quebrar el país.

Ningún Estado ni organismo multinacional ha otorgado plácet y reconocido como embajadores a sus enviados. La pantomima tiene un límite, el derecho internacional. Hablamos de golpes híbridos, donde el uso de las instituciones internacionales, solventan el problema de legitimidad interior. Ganar tiempo, tomar la iniciativa, ese es el momento actual: «Es importante mantener la iniciativa […] escoger el tiempo, la causa, las acciones a seguir, y tratar de mantener la iniciativa […] El grupo líder debe controlar la situación y debe demostrar ese control. Una vez determinados el tiempo, lugar y causa de la campaña o táctica específica, no deben ser alterados por ningún acontecimiento temporal o pasajero. Los combatientes, […] no le deben permitir al adversario que dicte las acciones a seguir»[58].

En el golpe de Estado híbrido y asimétrico, la utilización estratégica de los dispositivos conlleva «una cierta manipulación de relaciones de fuerza, de una intervención racional y convenida en las relaciones de fuerza, sea para desarrollarlas en una determinada dirección, sea para bloquearlas o para estabilizarlas y utilizarlas. El dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder y también siempre ligado a los límites del saber que derivan de él, y en la misma medida, lo condicionan. El dispositivo es esto: un conjunto de estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y son condicionados por él. El dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, lingüístico y no lingüístico al mismo nivel, discursos, instituciones, edificios, leyes medidas policiales, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo es en sí mismo la red que se establece entre estos elementos»[59].

Los factores exteriores, siempre han actuado como un factor coadyuvante pero insuficiente para quebrar la institucionalidad de un Estado. Hoy en Venezuela asistimos a una anomalía. La posibilidad de éxito del golpe de Estado para revertir procesos políticos democráticos y populares permite darnos cuenta de un hecho significativo. La guerra contra Venezuela ha subido un peldaño en la política exterior de Estados Unidos. Acciones

encubiertas, ejércitos mercenarios, invasiones, asesinato político o magnicidio se combinan con el uso directo de gobiernos y organismos internacionales que pasan a jugar en su dominio. En Venezuela, hoy, están en juego las garantías de éxito para Estados Unidos de una guerra global. Necesita de Venezuela para lograrlo. Sin el control de materias primas sus posibilidades de lograr el triunfo disminuyen. América Latina es su arsenal. Níquel, litio, cobre, petróleo, gas, coltán.

Si el triunfo inesperado de las izquierdas pone en entredicho su control, el dispositivo entra en liza. Estrangular la economía, provocar desabastecimiento, mercado negro, inflación es tarea simple. Basta con pedir el pago por adelantado de las importaciones y provocar una crisis inflacionaria. Como hoy se hace con Venezuela. Asimismo se patrocina el abandono de multinacionales del territorio y sus filiales provocando falta de repuestos, escasez de productos de primera necesidad, pasta de dientes, jabón, papel higiénico, medicamentos antes en abundancia. A esta estrategia, el gobierno del presidente Nicolás Maduro respondió en 2016 con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como mecanismo de distribución de alimentos en los barrios y poblaciones populares, garantizando el abastecimiento mínimo y evitando así la política de hambre diseñada por la MUD y Estados Unidos. Sirva como dato, de esta política de estrangulamiento, la retención al gobierno de Venezuela, el 12 de febrero de 2019, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, de un cargamento propiedad del gobierno venezolano con 200.000 unidades de medicamentos para enfermedades crónicas, adquiridos a una empresa farmacéutica en Qatar. El bloqueo internacional impide su entrega[60].

Proceso desestabilizador, estrangulamiento de la economía, ruptura de las fuerzas gubernamentales y llamamiento a las fuerzas armadas para un golpe restaurador completan el cuadro. Hoy, en Venezuela, el objetivo no es restaurar la democracia, es desintegrar el país para que Estados Unidos pueda seguir su afiebrada marcha por el control del mundo, cuyas miras están en el gigante asiático que le amenaza: China.

Estados Unidos, Brasil, Canadá, países de la Unión Europea, la OEA y el grupo de Lima actúan de lanzadera para un golpe de Estado desde el exterior. La mentira, la manipulación informativa, los factores emocionales, psicológicos cobran un rol fundamental. Donald Trump y Jair Bolsonaro,

presidentes considerados un peligro para la democracia representativa, la paz mundial y regional son los estandartes de la comunidad internacional para avalar el golpe de Estado. Los medios de comunicación, partidos políticos, gobierno y oposición se hacen eco de las declaraciones del presidente autoproclamado para justificar el apoyo a los alzados. «No es un golpe de Estado» es el retorno a la libertad y la democracia. No se engañen, como en Paraguay y Honduras en el siglo XXI, Chile (1973), Guatemala (1954), Argentina (1976), Brasil (1964), Paraguay (1954), Uruguay (1973), el resultado de los golpes de Estados, es el asesinato político, la pérdida de espacios democráticos y el exilio.

El discurso de odio, venganza y represión política son las cartas del autoproclamado presidente. Ya lo han demostrado con las Guarimbas. Decenas de asesinatos políticos, entre cuyos responsables se encuentra Leopoldo López. Venezuela sufre la cólera de un conglomerado golpista mundial donde están la socialdemocracia, liberales, conservadores y el complejo industrial-financiero-militar. El diálogo no entra en sus planes, ni la paz, ni las elecciones, solo el derramamiento de sangre. En Venezuela, el punto de inflexión fue el rechazo a firmar los acuerdos de República Dominicana. Allí renunciaron a la soberanía. Llenos de odio, desprecio a las clases trabajadoras, acaban siendo peones de una estrategia de muerte bajo el mando de Estados Unidos y banderas extranjeras. Ellos se lavarán las manos. La sangre, como siempre, la derramará el pueblo venezolano.

En esta guerra contra el gobierno legítimo de Venezuela, su presidente, Nicolás Maduro, busca el diálogo, pero la oposición está hipotecada. Siendo financiada desde el exterior, sus pasos están marcados por el itinerario diseñado por el departamento de Estado estadounidense, el pentágono y la Casa Blanca. En este despropósito el principal aliado de Estados Unidos lo constituyen los gobiernos latinoamericanos que han sucumbido a la presión, sea por cobardía o por convicción, convirtiéndose en los verdugos de la democracia en Venezuela y América Latina.

Colombia y su presidente Iván Duque, cómplice necesario y el principal aliado para esta operación, muestra los límites de la claudicación política y la indignidad. En su territorio se han instalado nueve bases estadounidenses y desde 1970 hasta 2018 han sido víctimas de desaparición forzosa 80.000 personas, entre dirigentes sindicales, militantes de partidos de izquierda, periodistas, activistas medioambientales, estudiantes, profesores, mujeres,

dirigentes vecinales. Sin olvidar los 7,7 millones de desplazados. Otros presidentes como el chileno Sebastián Piñera y el paraguayo Mario Abdó, ambos relacionados por lazos familiares, económicos y políticos con los respectivos criminales y dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner se presentan en Cúcuta junto al autonombrado presidente Juan Guaidó para pedir democracia en Venezuela, mientras en sus países se asesina a representantes de los pueblos originarios y se entregan las riquezas a las trasnacionales estadounidenses. En esta farsa solo hay un ganador: Estados Unidos. Más claro las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo: «intervenimos en Venezuela porque es nuestra región».

Las intenciones golpistas han elevado su apuesta. La dirección de una posible salida negociada no depende de la MUD. Tras el fracaso en su propuesta de hacer llegar ayuda humanitaria el 23 de febrero por las fronteras con Brasil y Colombia, Juan Guaidó declara su frustración y espera instrucciones de Estados Unidos. El grupo de Lima volverá a reunirse junto a Guaidó para escuchar las órdenes del gobierno de Donald Trump. Sus dirigentes han quedado presos de las estrategias dependientes del grupo más belicista e intransigente de los senadores y representantes republicanos. El nombramiento de Elliot Abrams es un paso más en las maniobras desestabilizadoras. En esta escalada, la celebración del concierto «Venezuela Aid Live» y la operación de «ayuda humanitaria» escondían como objetivo la ruptura de las fuerzas armadas bolivarianas, bajo un llamado explícito a la deserción de mandos intermedios y cuadros del Estado mayor. Bajo un control de los medios de comunicación social a escala internacional, pertenecientes a las trasnacionales de la información se creó un imaginario triunfalista y un escenario donde el gobierno de Venezuela estaría ya desahuciado[61].

El fracaso de la operación en su conjunto, hizo descarrilar la segunda fase del plan consistente en establecer en territorio venezolano, una cabeza de playa. Viabilizar un gobierno provisional al mando de Juan Guaidó, avalado por Estados Unidos y cómplices internacionales. Esta maniobra mucho más compleja, tampoco pudo llevarse a cabo. Las consecuencias no se han hecho esperar. Venezuela ha roto relaciones con Colombia, país instigador en América Latina de la maniobra. Asimismo los presidentes de Chile y Paraguay al igual que el secretario de OEA que acompañaron al usurpador en su *show* mediático, también son los corre ve y dile de Estados Unidos

que subirá un peldaño para hacer de Venezuela un Estado fallido, controlando su petróleo, gas, coltán y oro.

[1] A. Dandan, «La Comisión Nacional de Valores y la avanzada sobre la "subversión" económica», en H. Verbitsky y J. P. Bohoslavsky, *Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura,* Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, p. 338.

[2] V. Basualdo, T. Ojea y C. Varsky, «Los casos de Ford y Mercedes Benz», en H. Verbitsky y J. P. Bohoslavsky, *Cuentas pendientes, op. cit.,* p. 186.

[3] E. Carmona, *Los dueños de Chile,* Santiago de Chile, HUELLA, 2002, pp. 161-173.

[4] M. Casasus, «Pinochetista dirige la fundación Neruda», 29 de septiembre de 2006, disponible en [http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article569].

[5] M. González, *Chile. La conjura. Los mil y un días del golpe,* Santiago de Chile, Ediciones B, 2000, p. 88. El resultado de la misión acabó con el asesinato del general en jefe René Schneider, el 22 de octubre de 1970. «Entre el 5 y el 20 de octubre, la CIA organizó veintiún encuentros clandestinos con oficiales e integrantes de los grupos sediciosos. El 17 de septiembre, los conspiradores le pidieron al hombre de la CIA, Paul Wimert, tres ametralladoras, municiones, granadas y gas lacrimógeno. Las armas ingresaron a Chile a través de la valija diplomática.» *Ibid.,* p. 89.

[6] M.ª J. Rodríguez Rejas, *La norteamericanización de la seguridad en América Latina, op. cit.,* p. 293.

[7] P. García, *El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares,* Madrid, Alianza, 1995, p. 429.

[8] S. Blixeo, *El vientre del Cóndor. Del archivo del terror al caso Berríos,* Montevideo, Ediciones de Brecha, 1995, p. 190.

[9] J. Dinges, *Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur,* Santiago de Chile, Ediciones B, 2004, pp. 177-178.

[10] Consultar los libros de P. Verdugo y C. Orrego, *Detenidos desaparecidos, una herida abierta,* Santiago de Chile, Aconcagua, 1980 y, para los 119, véase *Detenidos Desaparecidos,* La Habana, Chile Democrático, 1977.

[11] M. Vargas Llosa, «América Latina y la opción liberal», en B. Levine (comp.), *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina,* Bogotá, Norma, 1992, p. 29.

[12] A. Wolff, «La política de los Estados Unidos en el campo de la seguridad hemisférica», en VVAA, *El Espacio: nueva frontera para la cooperación hemisférica,* Santiago de Chile, FLACSO, s/f, pp. 36-37.

[13] L. Astorga, *Seguridad, Traficantes y militares, op. cit.,* p. 12.

[14] M.ª J. Rodríguez Rojas, *La norteamericanización de la seguridad en América Latina, op. cit.,* pp. 247 y ss.

[15] Cit. por *ibid.,* p. 144.

[16] G. Naudé, *Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado,* Madrid, Tecnos, 2.ª ed., 2011, p. 82.

[17] *Ibid.,* p. 83.

[18] *Ibid.,* p. 101.

[19] C. Malaparte, *Técnica del golpe de Estado,* Barcelona, José Janes, 1958, p. 6.

[20] G. Sharp, *La Lucha política Noviolenta,* Santiago de Chile, CESOC, 1988, pp. 41-60.

[21] E. Lira y M.ª I. Castillo, *Psicología de la amenaza política y del miedo,* Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, 1991, p. 93.

[22] *Ibid.,* pp. 95-96.

[23] *Hallazgos y Recomendaciones. Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación,* Gobierno de Honduras, 2011, p. 28. El mismo informe reconoce en páginas anteriores que: «Entre las funciones del Congreso Nacional no tiene atribuciones para destituir al presidente ni para nombrar al sustituto, por lo que colegiamos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y que el gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010, es un gobierno de facto», *ibid.,* p. 26. Por otro lado, la represión ejercida contra el movimiento popular no ha cesado desde entonces. De manera constante desde el golpe de Estado se ha procedido al asesinato selectivo de dirigentes sindicales, de derechos humanos, líderes campesinos, militantes, defensores del medio ambiente y activistas de las colectividades gais. Entre 2011-2014 se han producido 101 asesinatos políticos. En 2016, los casos de Berta Cáceres, Nelson García y el más reciente, Lesbia Yaneth Urquía, marcan la actuación de los escuadrones de la muerte. Golpe blando, pero represión cruenta.

[24] Fuente: «Operación Venezuela Fredom-2», *Red Voltaire,* 25 de febrero de 2016, disponible en [www.voltairenet.org/article191879.html].

[25] Gene Sharp ha sido considerado el padre de la estrategia de los golpes suaves. Presidente de la Fundación Albert Einstein, sus dos textos, *La lucha política noviolenta. Criterios y métodos* (1988) y *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación* (2003), se consideran verdaderos manuales para la desestabilización política. Según el periodista Thierry Meyssan, presidente de la Red Voltaire, Sharp ha formado «por cuenta de la OTAN y la CIA, a los líderes de los golpes de Estado suaves de los últimos quince años […]; prodiga sus consejos a movimientos anticomunistas». Su fundación está presente asesorando en Birmania, China, Lituana, Yugoslavia, participando en la Revolución naranja de Ucrania, o aconsejando a la oposición venezolana.

[26] G. Sharp, *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación,* Boston (EEUU), Institución Albert Einstein, 2.ª reim., 2011, p. 30 (véase, sobretodo, el cap. VIII, «Aplicando el desafío político», pp. 61-68).

[27] *Ibid.,* p. 34.

[28] R. Kapuscinski, *El sha o la desmesura del poder,* Barcelona, Anagrama, 8.ª ed., 2009, pp. 43 y ss.

[29] G. Sharp, *La lucha política noviolenta, op. cit.,* 1988, p. 36.

[30] B. Chul-Han, *Topología de la violencia,* Barcelona, Herder, 2016, pp. 66-67.

[31] G. Sharp, *La lucha política noviolenta, op. cit.,* p. 25.

[32] V. Valdivia, «Lecciones de una revolución: Jaime Guzmán y los gremialistas, 1973-1980», en V. Valdivia, R. Álvarez y J. Pinto, *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981),* Santiago de Chile, LOM, 2006.

[33] H. Sonntag y Th. Maingón, *Venezuela: 4-F 1992. Un análisis sociopolítico,* Caracas, Nueva Sociedad, 1992, p. 17.

[34] *Ibid.,* p. 18.

[35] «La naturaleza y formas específicas de la protesta popular que se generalizan en la década guardan estrecha relación con el proceso de deslegitimación de las organizaciones sindicales y gremiales ocurrido desde finales de los ochenta, con el consiguiente proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos». M. López Maya, *Protesta y cultura en Venezuela. Los marcos de la acción colectiva en 1999,* Buenos Aires, CLACSO, 2002, p. 20.

[36] M. Harnecker, *Hugo Chávez Frías. Un hombre, un pueblo,* Donostia, Gakoa, 2002, p. 46.

[37] M. Á. Cortés (dir.), *América latina. Una agenda de libertad,* presentación por J. M.ª Aznar, Madrid, FAES, 2007, pp. 25 y ss.

[38] R. Gott, *Hugo Chávez y la revolución bolivariana,* Madrid, FOCA, 2006, p. 271.

[39] *Ibid.,* p. 262.

[40] *Ibid.,* pp. 262 y ss.

[41] E. Villegas Poljak, *Abril. Golpe adentro,* Caracas, Correo del Orinoco, 2.ª ed., 2012, p. 70. Para una visión global puede consultarse el excelente libro de G. Sánchez Otero, *Abril sin Censura. Golpe de Estado en Venezuela,* prólogo de J. Vicente Rangel, Caracas, Correo del Orinoco, 2012.

[42] Véase [https://www.france24.com/es/20180519-elecciones-venezuela-maduro-comunidad-internacional].

[43] Véase L. Brito García y M. Á. Pérez Pirela, *La invasión paramilitar. Operación Daktari,* Caracas, Correo del Orinoco, 2012, pp. 139-178.

[44] A finales de 2007, el presidente Chávez propone la creación de un partido capaz de hacer frente a las nuevas condiciones políticas y enfrentar con éxito las tareas. Son los comienzos de la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Durante los tres primeros meses de 2008 se convocan asambleas, círculos, debates y promueve las gestoras. Fue otro cambio en el mapa político. El 28 de marzo de 2008 se funda el PSUV.

[45] Las diferencias fueron mínimas. El CNE no tuvo problemas en reconocer la derrota y dar los resultados. El «NO» a las reformas había conseguido un total de 4.521.494 votos (50,65 por 100) para el bloque A, y 4.539.707 votos (50,01) para el bloque B. Mientras el «SÍ» acumuló para el bloque A: 4.4004.707 votos (49,39 por 100) y 4.360.014 votos (48,99 por 100) para el bloque B. La sombra de un fraude electoral volvía a disiparse. La derecha no supo encajar su propio triunfo. Siguió promoviendo un golpe de Estado.

[46] J. Giordani, *La transición venezolana al socialismo,* Caracas, Vadell hermanos Editores, 2012, pp. 114 y ss.

[47] E. Krauze, *El poder y el delirio,* Caracas, Alfa, 2008, p. 22. El libro lleno de diatribas insiste en el carácter dictatorial del régimen, la necesidad de un golpe de Estado blando, en ese momento, además de ensalzar el proceso desestabilizador como opción democrática. Lo más desconcertante son las entrevistas realizadas a dirigentes del PSUV y miembros del gobierno, sus desplazamientos por todo el país, el acceso a cuanto informe quiso, pero su conclusión es que no hay libertades, se vive una autocracia y el opositor es casi un héroe que lucha contra el más duro y férreo régimen totalitario. ¡Pero su texto fue editado, distribuido, vendido y reeditado en Venezuela sin ninguna cortapisa! ¿Miente? ¿Manipula? El lector decida.

[48] E. Lander, «Logros y tensiones en estos primeros ocho años del proceso de cambio», en B. Stolowicz (coord.), *Gobiernos de Izquierda en América latina. Un Balance político,* Bogotá, Aurora, 2007, p. 68.

[49] E. Lander, «Venezuela: logros y tensiones en los primeros ocho años del proceso de cambio»; en B. Stolowicz (coord.), *Gobiernos de izquierda en América latina, op. cit.*

[50] Lo que no aclara la declaración ¿Cuál es el significado de serio, creíble? Además de poner en duda la existencia de un orden democrático, aun así solicita el consenso entre las partes. Una redacción digna de incompetentes o directamente de golpistas.

[51] «Operación Venezuela Freedom-2», documento anexo en M. Roitman Rosenmann, *Breve manual actualizado de los golpes de Estado,* Madrid, Sequitur, 2017, pp. 65-78.

[52] G. Sharp, *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación,* East Boston, Ediciones Institución Albert Einstein, 2011, pp. 36 y ss.

[53] Existen distintas ediciones. Para el efecto puede consultarse: Chávez, Frías, Hugo, *Golpe de Timón,* Caracas, MINCI, 2015.

[54] «Operación Venezuela Freedom-2», *op. cit.,* p. 65.

[55] *Ibid.,* p. 66.

[56] Cohen, Dan y Blumenthal Max, escrito para [http://rubenluengas.com/2019/02/la-creacion-de-juan-guaido-como-estados-unidos-fabrico-al-lider-del-golpe-en-venezuela/?fbclid=IwAR03CY4uymUHAvN1ZbSRXdl83RroF9dqyEkgYf1IgAOizz7EeLrC0nJpJ18].

[57] «Operación Venezuela Fredom-2», *op. cit.,* p. 67.

[58] G. Sharp, *La lucha política noviolenta. Criterios y métodos,* Santiago de Chile, CESOC, 1988, p. 76.

[59] G. Agamben, *¿Qué es un dispositivo?,* Barcelona, Anagrama, 2015, pp. 10-11.

[60] Véase [www.laradiodelsur.com.ve], 14 de febrero de 2019.

[61] Véanse los dos excelentes reportajes y artículos de Luis Hernández Navarro en el periódico mexicano *La Jornada,* «Duelo musical en frontera Venezuela-Colombia: chavistas y antichavistas», disponible en [www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/23], y «Caído el telón del concierto, inició puesta en escena de la oposición», disponible en [https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/24/caido-el-telon-del-concierto-inicio-puesta-en-escena-de-la-oposicion-8865.html].

V. GOLPES DE ESTADO, LUCHAS DEMOCRÁTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar.

Canto entonado por suboficiales del ejército argentino en la ceremonia de entrega de medallas al valor. Estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, septiembre de 1982.

Para bien o para mal, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile clausuró un ciclo político. Chile pasaba a formar parte de los países latinoamericanos donde las fuerzas armadas eran convocadas a salvar a la patria del marxismo y el comunismo internacional. Los militares se hacían eco de los partidos políticos cuyo discurso anticomunista les invitaba al golpe de Estado. Unas fuerzas armadas educadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional aceptaban el envite, corroborando una tendencia histórica en América Latina: la derecha combate los proyectos democráticos con tanques, no en las urnas.

> En verdad, la derecha chilena nunca ha llegado a aceptar con convicción la idea democrática y de respeto universal de los derechos humanos. Siempre luchó contra la democracia y la igualdad a través del cohecho, la sobrerrepresentación electoral en las zonas rurales, el fomento de legislaciones represivas (como la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley de Defensa de la Democracia) o declaraciones de estados de excepción constitucionales frente a movimientos reivindicativos y huelgas poderosas. A este respecto siempre tuvo la habilidad para cooptar a sectores medios y a sus expresiones políticas con la finalidad de bloquear alianzas y políticas de centroizquierda que pudieran efectuar cambios sociales de importancia[1].

Las clases dominantes latinoamericanas se han mostrado refractarias a la democracia. Los mecanismos de dominación tradicional, caciquismo, localismo, compadrazgo y paternalismo, representan sus fuentes de legitimidad. Los procesos de modernización del capitalismo son producto de la alianza entre las oligarquías terratenientes y las burguesías urbanas. La industrialización de los años cincuenta del siglo XX no supuso una revolución industrial, como tampoco la modernización política conllevó la revolución democrática-burguesa. El mundo rural o, mejor dicho, su cosmovisión, sigue funcionando. El colonialismo interno, la discriminación étnico-racial, de género, los mecanismos de control extraeconómicos y una

Iglesia católica ultraconservadora definen a la sociedad latinoamericana. El aburguesamiento de la oligarquía y una oligarquización de la burguesía son las fórmulas para ejercer el poder. Las fuerzas armadas son el pilar en el cual se sostienen.

Para dar una imagen de modernidad, las elites de las clases dominantes adoptan un discurso político y un tipo de movilización social. Cooptan a los sectores medios y las clases populares, hacen suyas las demandas de apertura política y articulan un régimen político incluyente. Los partidos políticos van abandonando las vetustas estructuras decimonónicas para transformarse en partidos de masas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el combate contra la oligarquía y las dictaduras caudillistas será su sello de identidad. Se llega a teorizar la propuesta bajo las ideas de CEPAL, siendo complementarias a las concepciones keynesianas de crecimiento hacia dentro, conocido como proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Se trata de planificar el cambio social, dotarlo de una direccionalidad, un estilo político. Inducir el desarrollo económico para implantar cambios en el orden político.

> En las primeras décadas del siglo XX el declive descendente del viejo sistema se encuentra con otras fuerzas ahora ascensionales que pugnan por su total trasformación. Años más tarde, en medio de una complicada constelación internacional, se produce por la faz entera de América Latina una nueva y radical toma de conciencia, que tiene como principal impulso la enérgica aspiración a su desarrollo económico y que coincide, por así decir, con el comienzo de la edad plenamente adulta […]; el surgir de un nuevo nivel de aspiración […] pone de pronto en singular relieve la naturaleza política de la poderosa palanca que ha de completar en nuestros días la trasformación de América Latina. Pues acontece que el régimen político de partidos, heredado de la vieja estructura agraria de la región, está hoy en día tan caduco como el sistema de hacienda del que brota. […] Estamos en los albores de la formación de nuevas clases dirigentes, de otra clase política que sea a la par tan enérgica como moderna […]. El desarrollo postula en todo caso la exigencia de una programación, de una clara ordenación, en una palabra, de fines y medios, de metas e instrumentos. Esa proporción puede ser muy distinta, pero es evidente que los nuevos partidos que exige el naciente y futuro sistema de América Latina solo pueden tener razón de ser, su justificación práctica, a tenor de los contenidos precisos que propongan relativos a esa programación. Y solo se sostendrá en lo futuro como una auténtica clase dirigente aquella que posea un conjunto de ideas claras sobre semejante problema[2].

Se busca cerrar el compromiso entre la burguesía nacional, los empresarios y las clases trabajadoras urbanas. La resistencia al cambio social, los obstáculos a la modernización se concentraron en un ataque a las

oligarquías. El discurso fue articulado demagógicamente, apelando al pueblo para identificar el sujeto del cambio. Los derechos ciudadanos, políticos y sociales se presentaron como parte de la identidad nacional. La nación condensó lo nacional-estatal, y ello derivó en el discurso amalgamado del populismo. Todos contra la oligarquía. ¿Pero quién marcó el ritmo de la coalición? La burguesía. El pacto garantizó el gran latifundio y limitó la reforma agraria a las tierras de propiedad estatal. Sin una reforma agraria rupturista con la relación latifundio-minifundio, las oligarquías podían vivir sin sobresaltos. Al discurso antiimperialista y el reconocimiento parcial de los derechos políticos de las clases trabajadoras, se unió el nacionalismo chovinista y una visión asistencialista del Estado. En los países en los cuales el populismo logró consolidarse, la justificación golpista apeló a otros valores, dado que el anticomunismo era propiedad de los caudillos populistas.

El golpe de Estado contra el general Perón en 1955 expresó sus contradicciones; la alianza populista se resquebrajó por el eslabón más débil, las clases trabajadoras: «El gobierno debió variar su política frente a la CGT y empezaron a aparecer en la literatura oficial los llamados a la productividad y a la limitación de los beneficios personales. Simultáneamente disminuyó su capacidad de maniobra frente al capitalismo americano; las actitudes iniciales de corte nacionalista-burgués se trasformaron en concesiones cada vez más amplias, que culminaron con los contratos petroleros con la Standard Oil de California. El gobierno se vio obligado, también, a ajustar el aparato represivo ante los conatos de la oposición, tales como la huelga ferroviaria o la revolución de 1951. La progresiva tensión militar y política se agravó en septiembre de 1954 con la ruptura de Perón con la Iglesia, que hasta ese momento lo había sostenido firmemente; en ese momento se inició una campaña de laicización del Estado, con la Ley del Divorcio y la supresión de la enseñanza religiosa. Amplios sectores del ejército se sintieron tocados por ese conflicto […]. El distanciamiento entre sus más firmes defensores –el ejército y la Iglesia– dio nuevos bríos a los grupos de la oligarquía, castigados por el peronismo. Los partidos políticos que los representaban volvieron a tender las líneas para formar un frente opositor que reeditara con más fortuna la Unión Democrática de 1946»[3]. El bombardeo sobre los alrededores de la Casa Rosada se cobró la muerte de cientos de personas. Perón, a pesar de ello,

logró mantenerse en el poder. Le siguieron meses de intriga. Como opción, buscó depurar las fuerzas armadas y reconducir sus alianzas, pero fue inútil; el 16 de septiembre de 1955 era derrocado. El golpe militar, encabezado por el general Eduardo Lonardi, al frente de la «Revolución Libertadora», dio a conocer su ideario: «Al pueblo argentino y a los soldados de la patria: en mi carácter de jefe de la Revolución Libertadora, me dirijo al pueblo, y en especial a mis camaradas de todas las armas, para pedir su colaboración en nuestro movimiento. La armada, la aeronáutica y el ejército de la patria abandonan otra vez sus bases y cuarteles para intervenir en la vida cívica de la nación. Lo hacemos impulsados por el imperativo del amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado que quiere vivir de acuerdo con sus tradiciones y que no se resigna a seguir indefinidamente los caprichos de un dictador que abusa de la fuerza del gobierno para humillar a sus conciudadanos […]. Con el pretexto de afianzar los postulados de una justicia social que nadie discute, porque en la hora presente es el anhelo común de todos los argentinos, ha aniquilado los derechos y garantías de la Constitución y suprimido el orden jurídico por su voluntad avasalladora y despótica. […] Ningún escrúpulo debe abrigar a los miembros de las fuerzas armadas por la supuesta legitimidad del mandato que ostenta el dictador. Ninguna democracia es legítima si no existen los presupuestos esenciales: libertades y garantía de los derechos personales […]. Sepan, hermanos trabajadores, que comprometemos nuestro honor de soldados en la solemne promesa de que jamás consentiremos que sus derechos sean cercenados. Las legítimas conquistas que los amparan no solo serán mantenidas, sino superadas por el espíritu de solidaridad cristiana y libertad que impregnará la legislación y porque el orden y la honradez administrativa a todos beneficiarán. La revolución no se hace en provecho de partidos, clases o tendencias, sino para restablecer el imperio del derecho. Postrados a los pies de la Virgen capitana, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, hacemos este llamamiento a todos los que integran las fuerzas armadas de la nación, oficiales, suboficiales y soldados, para que se pongan con nosotros en la línea que señala la trayectoria del Gran Capitán. Lo decimos sencillamente, con plena y reflexiva deliberación: la espada que hemos desenvainado para defender la enseña patria no se guardará sin honor. No nos interesa la vida sin honra y

empeñamos en la demanda el porvenir de nuestros hijos y la dignidad de nuestras familias»[4].

Ni una mención al comunismo, el marxismo, la subversión o el socialismo. Encontramos alusiones contra la tiranía, la autocracia del dictador, la ruptura del orden constitucional, la necesidad de restablecer la justicia y el orden democrático. La retórica del comunicado, firmado por Lonardi, no hace pensar que el golpe de Estado guarde relación con derrocar un gobierno marxista, de izquierda, o un avance en la lucha antisubversiva. La dirigencia de la CGT y parte del movimiento obrero avala el golpe de Estado. Las fuerzas armadas no ilegalizan a la CGT, ni sus dirigentes son perseguidos. Sus líderes siguen la Revolución Libertadora. El entonces presidente de la CGT, Framini, declara: «La Confederación General del Trabajo, con el propósito de aclarar la situación del movimiento obrero ante los actuales acontecimientos, se ha entrevistado en la mañana de hoy con el señor presidente provisional de la nación, general Eduardo Lonardi, quien ha reiterado que el general Perón goza de las más amplias garantías en lo que se refiere a su seguridad personal, de acuerdo con las normas del derecho de asilo […]. En consecuencia, confiados los trabajadores en la palabra del señor presidente provisional, deben proseguir trabajando en sus respectivos empleos en paz y tranquilidad, contribuyendo al mantenimiento de la producción: deben continuar ejerciendo sus derechos sindicales, en forma solidaria y disciplinada, acatando únicamente las directivas de la Confederación General del Trabajo, sin prestarse a maniobras que tratan de inducir a los trabajadores a perturbar la normalización del país, cooperando así para afianzar el orden y la tranquilidad social, para coadyuvar a la realización de los propósitos del gobierno de restablecer en el menor tiempo posible la normalidad constitucional de la república dentro de las normas de una auténtica democracia, del derecho y la justicia». En otro discurso, pronunciado en cadena de radio oficial, señala: «Compañeros: con la intervención del Excmo. Señor presidente de la nación, general Eduardo Lonardi, los secretarios generales de todos los sindicatos confederados resolvieron definitivamente la situación que es de dominio público, en virtud de lo cual se ha dispuesto la regularización de las tareas en todo el país. Asimismo, se mantendrá en sus funciones a los compañeros Natalini y a quien les habla, habiéndose designado administrador de los bienes de la CGT al teniente

coronel Manuel Raimúndez, para una mayor seguridad de su patrimonio económico […]. En virtud de todo lo dicho se exhorta a toda la masa trabajadora a no faltar a sus tareas, correspondiendo con ello la extraordinaria buena voluntad puesta de manifiesto por el gobierno…»[5].

En Guatemala, el golpe de Estado de 1954 contra el gobierno de Jacobo Árbenz muestra otro cariz. Todo se impregna de alusiones al comunismo, la Unión Soviética, el marxismo. En las memorias Raúl Osegueda, embajador y secretario de la presidencia con Jacobo Árbenz, comenta el discurso del entonces asesor jurídico de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano: «Ya los rojos han establecido una poderosa cabecera de puente en Guatemala. Con frecuencia no se necesita más que una cabecera de puente-llave para arrollar una región. Desde esta cabecera de puente, bien atrincherada, el comunismo soviético amenaza a Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y otras naciones del Sur […]. Si el número de comunistas es relativamente pequeño, tengan ustedes en cuenta que en la Guatemala actual, al menos el 1 por 100 de la población –3.000 comunistas con un país de 3.000.000– están realizando la terrible hazaña de segar a toda la nación con la hoz soviética […] mediante 1) Literatura comunista: México la imprime y Guatemala la distribuye; 2) contrabando de armas; 3) formación de cuadros comunistas; 4) la Iglesia va a ser atacada; 5) El nacionalismo; 6) los ataques contra las intervenciones norteamericanas; 7) reavivamiento del racismo; 8) el anticolonialismo; 9) el sindicalismo; 10) el agrarismo». Una vez enumerados concluye: «Esta no es la hora de complacencias por nuestra parte. El comunismo está en marcha no solo afuera, sino dentro de los muros del continente. El tiempo es la esencia misma de la lucha contra la enfermedad. No nos hagamos culpables de un demasiado poco y demasiado tarde. Actuemos para proteger al hemisferio y para protegernos a nosotros mismos»[6].

Guillermo Toriello, embajador de Guatemala en la OEA y Washington, ministro de Relaciones Exteriores de Árbenz y jefe de la delegación ante la ONU en 1954, antes del golpe de Estado, comenta el contenido del pliego de peticiones del golpista Carlos Alberto Castillo Armas: «Desconocer y declarar fuera de la ley al Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista); autorizar la persecución y encarcelamiento de todos sus dirigentes; autorizar la persecución y encarcelamiento de los líderes sindicales, obreros y campesinos. Árbenz se opuso rotundamente a esta y otras medidas por ser

anticonstitucionales y contrarias al ejercicio de la democracia representativa»[7]. La diferencia es notable. Argentina y Guatemala caminan por distintas sendas.

Avancemos en el tiempo. A pocas horas del golpe de Estado en Chile, en medio del bombardeo al palacio de La Moneda, la Junta Militar de Gobierno emite el *Bando* n.º 6: «1) Las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros reiteran al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar el gobierno marxista. 2) Se reitera una vez más que la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino en defensa de ese pueblo que ama la libertad. En defensa de la mayoría absoluta que repudia el marxismo. 3) Esta mayoría multitudinaria de obreros, empleados, profesionales, estudiantes y amas de casa a todo nivel están respaldando en forma total este movimiento militar de liberación nacional contra el hambre, la pobreza, la miseria, el sectarismo y los mercenarios del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo. 4) La Junta Militar llama a la población a mantener la calma y exhorta a los ciudadanos a permanecer en sus casas y lugares de trabajo, sin salir a las calles para evitar desgracias lamentables». Dos días después, el *Bando* n.º 31: «[…] Trabajador chileno, las fuerzas armadas respetan tus derechos. La participación del sector laboral en la gestión de las grandes empresas dejará de ser una consigna y un pretexto para que una casta dirigente alcance un absurdo "poder total". Nada tienen que temer quienes equivocadamente confiaron en traidores que ofrecieron una Patria Nueva y solo nos dieron hambre, odios, atropellos e injusticia. Solo la unidad nacional salvará a Chile de la autodestrucción y rescatará a su pueblo de la degradación a que conducía el comunismo. Los empleados y obreros volverán a sus actividades laborales y gremiales sin temores, complejos ni rencores para luchar unidos por un destino común de grandeza y libertad. Trabajador chileno: la reconstrucción nacional ha comenzado y tú tienes un papel en ella. CHILE ES UNO, CHILE ES LIBRE»[8]. Y para que no hubiese dudas de cuál sería la actitud si se ofrecía resistencia, el *Bando* n.º 24 era tajante: «Todas las personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable […] serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos de las fuerzas armadas y carabineros. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto».

Un gobierno popular no es un gobierno populista donde el golpe de Estado tiene como finalidad restaurar el poder de la alianza oligárquico-burguesa. La distancia es significativa. La dirección viene dada por el enemigo a combatir. Otros dos casos son los de Ecuador y Uruguay. En Ecuador, los golpes de Estado de 1963 y 1972 sirven para comprobar las diferencias. En 1963, las fuerzas armadas, como hemos reseñado en el capítulo 3, deciden intervenir frente a la crisis política y económica agudizada por la personalidad de su presidente, José María Velasco Ibarra, autoproclamado dictador supremo. Corre su cuarto mandato. Los militares entregan el poder al vicepresidente de talante progresista, Carlos Julio Arosemena. Dos años más tarde, con la Iglesia manifestándose en pro de la familia, denunciando la infiltración del comunismo y pidiendo la ruptura de relaciones con Cuba, las fuerzas armadas toman el poder. En las proclamas del general Marcos Gandara Enríquez, miembro de la Junta Militar de Gobierno, se aclara el espíritu del golpe: «Les digo que estamos en el poder en virtud de un imperativo superior de Seguridad Nacional que obligó a las fuerzas armadas a salirse de sus específicas funciones para salvar al país del deshonor, del comunismo y del caos […]. La Junta Militar, inspirada en el sentido democrático que constituye el fundamento de nuestra nacionalidad, se propone erradicar completamente el comunismo, salvando así el país de la confusión y el desorden».

En la segunda intervención, 1972, tenemos a José María Velasco Ibarra en su quinto mandato. Las fuerzas armadas, encabezadas por el general Guillermo Rodríguez Lara, asumen el control político el 15 de febrero. Esta vez, el peligro se identifica con el posible triunfo del futuro candidato presidencial, el populista Assad Bucaram y su partido Concentración de Fuerzas Populares. El comunismo estuvo ausente en la proclama del golpe: «Ante la encrucijada en que se encuentra la nación por el desgobierno y la ambición política, las fuerzas armadas, interpelando el sentir mayoritario del auténtico pueblo ecuatoriano, han decidido asumir el control de la república para instaurar en el país un Gobierno Revolucionario de clara concepción nacionalista».

En Uruguay, el carácter anticomunista del golpe cívico-militar de 1973 se hizo presente desde el primer momento. El peligro para la dupla bipartidista Blanco-Colorada, tras la emergencia del Frente Amplio, coalición de izquierdas, se traduce en miedo irracional. El presidente Juan María

Bordaberry, el 27 de junio de 1973, anuncia: «Hoy, una vez más y en circunstancias trascendentes para la vida del país, [declaramos] nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos. Y con ello entonces, rechazo a toda ideología de origen MARXISTA que intenta medrar con nuestras dificultades, que intenta aprovechar la generosidad de la democracia, para presentarse como doctrina salvadora y terminar como instrumento de opresión totalitaria». En la prensa aparecen desplegados gubernamentales avalando la dictadura cívico-militar: «Una pesadilla que el pueblo oriental no volverá a vivir. Estados Unidos. Miedo. Lucha de Clases. Marxismo. Sedición. Tupamaros. Chantaje Laboral. CNT. Subversión. Prepotencia estudiantil. Odio en la Familia. Delincuencia. Robos. Asesinatos. Bombas. Un país SIN MARXISMO, construye con FE»[9].

La oligarcoburguesía latinoamericana orienta y protagoniza golpes de Estado. Se trata de crear un cinturón de seguridad contra los movimientos populares y partidos de izquierda que enarbolan la reforma agraria y las nacionalizaciones. Latifundios y empresas multinacionales constituyen la columna vertebral del orden político de las clases dominantes en la región.

Las nacionalizaciones, sean de la United Fruit Company, Shell, Anaconda, Chevron, Standard Oil, ITT, Gulf o Texaco, son un escollo para los gobiernos populares y democráticos. Sus gerentes locales y las casas matrices financian y apoyan procesos desestabilizadores. En Guatemala, el golpe militar de Castillo Armas recibió la ayuda de la UFCO. Una vez en el poder, Castillo Armas anuló la reforma agraria, reintegrando el 99, 6 por 100 de la tierra expropiada a la UFCO. Los 100.000 beneficiarios de la reforma agraria perdieron sus tierras y las cooperativas fueron disueltas. No quedó nada de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Jacobo Árbenz. En Chile, la contrarreforma agraria «devolvió a los antiguos propietarios 2,8 millones de hectáreas de los 10 millones expropiados. A los campesinos les entregó menos de 3 millones y salieron a remate 4 millones de hectáreas de tierra. De los 5.809 predios expropiados se restituyó tierras a 3.677»[10].

La represión sobre el movimiento campesino, el asesinato de sus dirigentes, la expulsión de los predios de los trabajadores agrícolas se generalizan en los golpes de Estado. En los países donde los pueblos

originarios se asientan en terrenos con gran biodiversidad, cuyas tierras son objeto de deseo de las trasnacionales agroalimentarias, la expropiación, el esquilme y el etnocidio preceden su actuación.

El neoliberalismo entra en el mundo rural latinoamericano por la vía de las trasnacionales de la soja, el maíz transgénico, los productos químicos, pesticidas y patentes. Nestlé, Bayer (hoy dueña de Monsanto), Unilever, Dupont, Basf, Syngenta son sus exponentes. Controlan casi el 85 por 100 del comercio de semillas y el 90 por 100 de pesticidas y agroquímicos. Sus empresas se extienden por toda América Latina. La contrarreforma agraria dicta leyes *ad hoc,* otorgando concesiones y permisos para sus instalaciones. La destrucción de la propiedad comunal de los pueblos originarios, los ejidos, inalienable e intransferible, está en el centro de la disputa. Las luchas del pueblo Mapuche en Chile y Argentina, Maya, en México y Guatemala, el MST en Brasil, en Paraguay, Ecuador, a pesar de las diferencias existentes entre el movimiento campesino y los pueblos originarios, confluyen en las luchas contra el neoliberalismo, entrelazadas por Vía Campesina.

Los golpes de Estado tienen consecuencias directas sobre las formas de pensar y actuar. Lo cotidiano se inunda de una atmosfera de guerra interna. Se aplica una técnica y se construye un régimen político; es el comienzo de la administración del poder. Las dictaduras nacidas al interior de la Guerra Fría, de larga data, Paraguay, Brasil, Uruguay o Chile, crearon un tipo de régimen, burocrático-autoritario, bajo la hegemonía de las fuerzas armadas.

Chile marcó las diferencias. Fue una dictadura nacida para refundar el orden y revolucionar el capitalismo. Un proyecto asentado en el desarrollo de una cultura autoritaria. Sus principios coinciden con el concepto de sociedad disciplinada de Hayek y John Rawls, cuyos rasgos han sido la despolitización, la desideologización y la política de terror.

Estos tres elementos se entrelazan para crear el *«Nuevo Chile».* «El Chile actual proviene de una revolución capitalista y una duradera dictadura revolucionaria de ese tipo. Pero en el inicio tuvo que arreglar cuentas con el proyecto de restauración. No fue difícil obtener el triunfo. Pese a que la restauración de la democracia fue el discurso-bandera de la lucha contra la Unidad Popular, el proyecto moderado vio minadas sus posibilidades por la carga brutal de violencia colocada en el golpe mismo y en los días siguientes. Esa brutalidad represiva, ausente en la mayor parte de los golpes

militares latinoamericanos, necesitaba ser justificada por la promesa de la realización de una gran obra. A esto hay que agregar, además, el peso de una ideología, la de la necesidad de una revolución […]. Estos dos factores fueron determinantes en la derrota de la opción moderada y en la imposición de la idea de una revolución capitalista necesaria, en este sentido significada y vivida como inevitable»[11].

Los partidos, movimientos sociales, organizaciones civiles, instituciones políticas fueron destruidos y aniquilados. Para el nuevo orden era necesario reinventar cada una de las formas sobre las cuales se edificaría el Chile neoliberal. El cambio fue global. Afectó a todos los órdenes sociales: la política, la familia, la moral, la economía, la estética, las costumbres, el arte, la moda, los afectos, la vida cotidiana. El nuevo orden se construyó derribando el edificio anterior. No quedó piedra sobre piedra. El cierre de espacios de mediación política dejó al desnudo el uso de la violencia física y la fuerza como único resorte del poder.

> Las dictaduras revolucionarias, que son un tipo específico, diríamos superior de dictaduras, nacen de la poderosa conjunción entre Poder normativo y jurídico (derecho), Poder sobre los cuerpos (terror) y Poder sobre las mentes (saber). Pero si se analiza a fondo esta estructura, lo que tiene peso decisivo es el terror, ya que es el fundamento de la soberanía absoluta del despotismo y es capaz de acallar la soberbia del saber […]. Terror es la capacidad que tiene un Estado de actuar sobre los cuerpos de los ciudadanos sin tener que reconocer límites en la intensidad de las intervenciones o de los daños y sin tener que enfrentar efectivas regulaciones en la determinación de los castigos o prohibiciones. Terror es la capacidad absoluta y arbitraria del Estado de inventar, crear y aplicar penas o castigos sin más límites que las finalidades que se ha definido. Terror es la capacidad de un Estado para conseguir el acuerdo de muchos ciudadanos, que se autoconciben como pacíficos y tolerantes, para usar violencias y daños contra los enemigos políticos, en nombre de un bien mayor. Terror es la situación que empujó a los alemanes a ignorar la existencia de Auschwitz, a muchos chilenos a no aceptar saber de los detenidos-desaparecidos, de las torturas masivas. Se trata de una complicidad silenciosa, que permite la adopción generalizada de la crueldad como un medio legítimo para obedecer grandes fines: la trasformación de Chile en una «gran nación», en el Chile Actual[12].

La resistencia a las dictaduras revolucionarias, forjadoras del neoliberalismo, cobra una dimensión estratégica. Los movimientos sociales que la anteceden, culturales, de género, étnicos, de clase deben reinventarse. El plan estratégico es romper la línea del terror. Recuperar espacios y reconducir la lucha por las libertades.

La represión reduce la política al ejercicio de la violencia. La legitimidad del régimen es inestable. Las luchas democráticas contra las dictaduras responden a un referente estructural, actúan en una sociedad militarizada sin mecanismos de negociación ni reconocimiento. En esta dimensión los movimientos sociales son una manifestación colectiva cuyo fin consiste en romper el cerco de la desinformación, visibilizar la nueva realidad y actuar denunciando la violación de los derechos humanos. La consigna: *resistir y romper el cerco represivo.* Su actuación es preeminentemente defensiva. Pueden aparecer o ser absorbidos por dinámicas macro-espaciales donde la represión, el hostigamiento, el asesinato les haga retroceder. Los movimientos sociales emergentes no expresan un proyecto político, son parte de la sociedad civil. En una dictadura esta circunstancia tiende a transformar su actividad eminentemente defensiva y reivindicativa en acción política. Sin espacios de mediación institucional, los movimientos sociales condensan la lucha contra las dictaduras. Ante la ilegalidad de partidos y sindicatos de clase, cobran protagonismo las organizaciones pro defensa de los derechos humanos, de familiares de presos y detenidos-desaparecidos.

Transcurridos los primeros años de represión, la acción política en la clandestinidad, la reorganización de las fuerzas sindicales y los partidos de izquierda, se reacomodan; vuelven a su accionar mermados en fuerza, pero transformando el espacio de la lucha contra la dictadura. Modifican el campo de fuerzas. Las huelgas y manifestaciones reaparecen como mecanismos de protesta. Las demandas salariales, contra la carestía de la vida, son recurrentes. Las dictaduras comienzan a resquebrajarse. Las políticas de *shock* pierden eficacia. En Brasil las huelgas de los obreros metalúrgicos encabezadas por Lula en 1978, 1979 y 1980 marcaron «el paso de la lucha económica a la lucha política […]. Exactamente en 1979, cuando los huelguistas metalúrgicos de São Bernardo estaban reunidos en el Estadio de Villa Euclides, y un helicóptero del ejército volaba rasante, intimidando a los presentes. Pero lo que había debajo eran hombres, mujeres, niños, viejos. Parecía una escena de Coppola sobre la guerra de Vietnam. Esa percepción de que el Estado y el ejército son aliados de los patronos contra los obreros es uno de los elementos que va a permitir al proletariado brasileño pasar de la lucha económica a la política. La otra vertiente es la popular y reúne básicamente el trabajo de la Iglesia católica,

las comunidades eclesiales de base, los movimientos por la salud en la zona este, el movimiento contra la carestía»[13].

En Chile, los movimientos sociales recobran protagonismo. «Amalgamados fundamentalmente, en primera instancia, alrededor de los familiares de detenidos desaparecidos (Comité Pro Paz y Vicaría de la Solidaridad) y de las instancias promovidas por la iglesia católica en torno a la defensa y respeto a los derechos fundamentales (Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1978), estas organizaciones fueron desarrollando también una serie de actividades político-representativas y luego reivindicativas, cuyo canal de expresión, dadas las circunstancias, van a ser las diversas manifestaciones culturales y artísticas, las cuales se convertirán en el soporte de la convocatoria y movilización social, desde las grandes marchas y protestas antidictadura (1983-1987) hasta la campaña política por el NO (octubre de 1988), siendo, además, la punta del iceberg, la parte visible y pública de un accionar socio-político cultural más amplio y abarcador (ollas comunes, comprando juntos, navidades populares, peñas folklóricas, cantautores populares, casas de cultura y talleres culturales, publicaciones artesanales, eclosión de grupos y organizaciones culturales y organismos populares de educación, la Agrupación Cultural Universitaria –ACU–, el encuentro internacional por la cultura y la vida "Chile Crea", en 1987, la aparición de canales de televisión popular local: Canal 3 de la Victoria, radios populares de alcance medio-Radio Villa Francia, en 1982, ONG, etcétera»[14].

Contra las dictaduras, las mujeres tendrán un papel relevante, el mismo que les cupo en las luchas por los derechos civiles y políticos. En Chile: «El periodo propiamente dictatorial se caracterizó por una notable presencia de mujeres (de toda condición) en los hechos de *resistencia activa.* Los datos indican que, durante el periodo más virulento de las protestas nacionales (1983-1987), las mujeres se perfilaron como uno de los actores sociales con mayor protagonismo público, junto a los pobladores, los militantes de base y los estudiantes, superando con ello a obreros y empleados. Cabe agregar que su presencia en esos hechos no fue solo a través de organizaciones "feministas", sino también como miembros de Comités Locales de Derechos Humanos o de Subsistencia, de movimientos pacifistas amplios como el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, o de organizaciones de lucha armada, como el Movimiento de Izquierda

Revolucionaria, Movimiento Juvenil Lautaro o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La movilización de la mujer durante este periodo respondió a la cuádruple condición de ser humano, ciudadana, mujer y, sobre todo, madre-esposa-hermana-amiga de los/as caídos/as. Es decir: respondió a la electricidad *solidaria* que recorrió, en transversal, todos los sectores sociales más golpeados de la dictadura»[15].

Durante las décadas precedentes (desde 1950 a 1975, aproximadamente), las trasformaciones democráticas, salvo excepciones, se saldan con una mayor participación de la mujer en la vida pública. Las universidades ven aumentar la población femenina en las aulas y en disciplinas antes consideradas para hombres: ingenierías, ciencias físicas, matemáticas, arquitectura. Lentamente, su presencia política se hace notar. Diputadas, senadoras, alcaldesas y, con gobiernos populares, altos cargos de gobierno. En el ámbito del derecho, juezas, abogadas rompen la hegemonía masculina. En la cultura, artistas plásticas, cantautoras, actrices, literatas, poetas. La sociedad vive momentos de cambio. Las relaciones de poder familiar se cuestionan. La revolución sexual, los cambios de valores, el uso de la píldora, las estéticas marcan un punto de inflexión. La mujer entra de lleno en los escenarios y no habrá vuelta atrás. Los reductos siguen siendo el mundo rural, donde el machismo asume formas variadas, al igual que la violencia de género. Durante estas décadas se gana en experiencia, autoestima y capacidad de liderazgo. Así lo expresa Marcela Lagarde: «Vale ser osadas, pero no ponerse en riesgo y hacer cosas temerarias; porque sin osadía no llegamos a la vuelta de la esquina, no nos levantaríamos de la cama a vivir cada día. Se trata de tener una especie de equilibrio entre osadas y al mismo tiempo no ser temerarias. Ser temeraria significa no medir el peligro y arriesgarse, ser insensible al miedo, sentirse omnipotente y exponerse; en algunos acasos eso conduce incluso a provocarse daños. Ser temeraria es actuar como que no te fuera a pasar nada con lo que haces»[16].

Pero la resistencia a las tiranías supone un cambio drástico en el enfoque de la lucha de la mujer en el contexto represivo. El movimiento feminista se expande por América Latina. Salvo en las dictaduras, la dominación patriarcal es cuestionada. En Centroamérica, las mujeres toman las armas, llegando a ser comandantes revolucionarias. En los movimientos de liberación nacional, Frente Farabundo Martí en El Salvador, Frente

Sandinista en Nicaragua, Unidad Revolucionaria Guatemalteca, su presencia se une a las mujeres indígenas. En Cuba, la revolución da pasos en la misma dirección. La perspectiva de género se incorpora a las luchas democráticas. Los golpes de Estado significan un proceso de involución, también en la lucha de género. En México, el levantamiento zapatista revoluciona las dinámicas de género. Mujeres indígenas en la comandancia general revolucionaria reivindicando la condición de mujer campesina, madre e indígena. La comandante Esther ocupa la tribuna del Congreso de la Unión de México, el 28 de mayo de 2001: «Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso sí es lo único que importa ahora. Esta tribuna es un símbolo […] y es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista, quien tome primero la palabra y sea el mío el mensaje de nuestra palabra […]. Quiero explicarles la situación de la mujer indígena que vivimos en nuestras comunidades, hoy, que según esto está garantizado en la constitución el respeto a la mujer, la situación es muy dura. Desde hace años hemos venido sufriendo el dolor, el olvido, el desprecio, la marginación y la opresión. Sufrimos el olvido porque nadie se acuerda de nosotras […]; como somos niñas piensan que nosotras no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida».

La visión de una mujer ligada al trabajo doméstico, entregada al cuidado de la familia y los hijos se extiende entre las organizaciones de la derecha conservadora, es un ataque directo a la trasformación del orden familiar. Fue un arma de doble filo. El movimiento de Las Madres de la Plaza de Mayo, emergente a un año de la dictadura (1977), se aprovecha del estereotipo. «En el punto de partida, las posibilidades de acción de estas mujeres estuvieron dadas por dos fuertes supuestos culturales. En primer lugar, según la imagen sacralizada de la maternidad, la defensa de los hijos entraba dentro del orden natural […]. En segundo lugar, a partir de los mismos supuestos culturales, la acción de las mujeres fue posible por la falta de credibilidad que despertó. Se consideraba que la debilidad y la emotividad que caracterizan a las mujeres no podían enfrentarse con éxito a los aparatos estatales: sus primeros actos fueron tratados con gran escepticismo. "En un sector de los hombres ocurrió que aplicaron un poco de cierta lógica masculina: esto no puede conducir a nada, tal como es resulta imposible" (Agustina Paz). "A mi marido yo siempre le comentaba

todo, pero él decía ¡No, cómo van [a] hacer eso! ¡Cómo van [a] hacer semejante cosa!”. Entonces algunas cosas no se las contaba, y si salían bien entonces le decía: “¿Ves?, si fuera por vos no hacíamos nada”. […] El escepticismo también alcanzó al gobierno militar. “A nosotras nos menospreciaron: esas ‘viejas locas’”. Desde abril de 1977, en que comenzaron las rondas en Plaza de Mayo, hasta octubre de ese mismo año –lapso insólitamente largo en el periodo de mayor represión– las madres fueron ignoradas. A pesar de que en junio las rondas reunían cerca de cien mujeres, la actitud gubernamental era de cierta indiferencia […]. Éramos inocentes amas de casa»[17].

La refundación neoliberal se vive en dictadura, pero también en sistemas parlamentarios representativos. La despolitización y desideologización fue teorizada. La democracia dejó de ser una forma de vida, una práctica social de control y ejercicio del poder político, construcción de ciudadanía plena. Se convirtió en un cascarón vacío. Samuel Huntington sentenció: «Poca democracia permite consolidar la gobernabilidad, mucha la desestabiliza». Era necesario un giro. La democracia se desligó de la justicia social, del desarrollo político, la igualdad jurídica, de los contenidos específicos de género, étnicos, sociales, culturales, económicos y, sobre todo, de la participación, negociación, mediación y representación colectiva. Se trasformó en un procedimiento. En una técnica. Hayek no tuvo reparos en señalar en 1976 que la democracia había degenerado: «De un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas que todos pueden aceptar se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios […]. De este modo nació la democracia ilimitada, y cabalmente esta democracia ilimitada, no la simple democracia, es el problema actual»[18].

Los movimientos sociales nacidos bajo las dictaduras se reproducen. En esta ocasión en los procesos emanados de las reformas neoliberales realizadas por los gobiernos emanados de las urnas: México, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Privatización, desregulación, descentralización, esas eran las proclamas. Si en dictadura la oposición se reprime ilimitadamente, en los países con regímenes representativo-parlamentarios se ataca a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos de izquierda mediante la reforma del mercado laboral, la flexibilidad y el empleo precario. Es la revolución neoliberal. Lo público se clausura como espacio democrático. Su disolución política es reinventada en la esfera económica.

¿Democracia? La que genera el mercado. Así, se corrompe su definición, introduciendo dos elementos espurios: la competitividad y el rendimiento.

El centro del debate se desplaza y con ello la política pierde su centralidad. Su lugar es ocupado por una especie de credo religioso, asentado en la *mano invisible del mercado.* La dimensión subjetiva de la política es despreciada bajo la naturalización de lo social. Un nuevo mantra trasforma la política en gestión de bienes y servicios. En una sociedad disciplinada bajo las leyes del mercado, no hay espacio para la articulación de proyectos democráticos. La transición neoliberal consigue transformar al ciudadano político, *zoon politikon,* en un consumidor.

Estamos en presencia de un Estado totalitario, cuya particularidad es la desmovilización social, donde la despolitización facilita el control social. La razón de Estado se enroca en la estrategia de violencia antiterrorista. Es el comienzo de un nuevo tipo de guerra. Su objetivo es desarticular las redes ciudadanas y lograr la sumisión total para fortalecer la economía de mercado, bajo el pretexto de un nuevo enemigo: el terrorismo internacional.

> La guerra contra el terrorismo –con énfasis en la "seguridad interna" que la acompaña– presupone que el poder del Estado, ampliado ahora a las doctrinas de la guerra de anticipación y liberado de las obligaciones de los tratados y posibles restricciones de los organismos judiciales internacionales, puede volverse hacia el interior, en la confianza de que en su persecución interna de los terroristas, los poderes que reclamaba, como los poderes que había proyectado hacia el exterior, no serían medidos por los estándares constitucionales ordinarios, sino por el carácter siniestro y ubicuo del terrorismo en su definición oficial. La línea hobbesiana entre el estado de naturaleza y la sociedad civil comienza a fluctuar[19].

En esta lógica es «natural que sobreviva solo aquel sistema capaz de la mejor adaptación al contexto. De esta manera el desarrollo de la sociedad es identificado con la autorreproducción del sistema. Y esa misma selección natural regularía la "lucha de las especies por la sobrevivencia". Dicho en breve, las personas mejor adaptadas desplazan a las personas menos adaptadas. Este proceso de reproducción "natural" excluye al sujeto y a la acción intencional. El proceso social no respondería a ninguna intencionalidad. No tendría dirección ni eje central. Subordinada a la dinámica espontánea de la autorregulación, la estructura social no sería sino una secuencia de constelaciones provisorias»[20].

Se ponen las bases para el nacimiento de un totalitarismo invertido, en el cual: «la conquista del poder no resultó de una fusión de consecuencias no

deliberadas; fue el objetivo consciente de quienes conducían el movimiento político. Las dictaduras más poderosas del siglo XX fueron extremadamente personales, no solo porque cada una de ellas contó con un líder dominante de proporciones épicas, sino también porque cada sistema particular fue creación de un líder que había llegado a ocupar esa posición por esfuerzo propio […]. Cada sistema es inseparable de su *Führer o Duce.* El totalitarismo invertido tiene un recorrido diferente: el líder no es el arquitecto del sistema, sino producto de él. George Bush no creó el totalitarismo invertido […], es hijo complaciente y agraciado del privilegio, de las conexiones corporativas; un constructo de los genios de las relaciones públicas y de los propagandistas…»[21].

En esta dimensión del problema, el totalitarismo invertido constituye la base del neoliberalismo, impregnando todas las esferas de la vida social. Su necesidad de lograr el control mediante el superpoder que le otorga la militarización de la sociedad es la excusa para justificar la involución democrática y la criminalización de los movimientos políticos y sociales. La economía de mercado es la guerra.

La propuesta de crear un orden autorregulado no es nueva. Bernard de Mandeville, en el siglo XVIII, sugirió la «sociedad comercial» como fantasía del orden espontáneo. Fundado en la naturaleza egoísta del ser humano, Mandeville concibe la sociedad como un mecanismo dinámico y productivo movido por la energía pasional de los individuos que la integran. Son los vicios innatos de la naturaleza humana, producto de las pasiones, lo que mantiene unida a la sociedad. Vicios privados frente a virtudes públicas. Así lo describe: «Dejad, pues, de quejaros: solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Querer gozar de los beneficios del mundo, y ser famosos en la guerra y vivir con holgura, sin grandes vicios, es vana utopía en el cerebro asentada». Adam Smith tomó sus postulados para construir una propuesta de naturalización del orden social. La utilidad como puente entre los sentimientos morales y el egoísmo ata definitivamente lo social a una realidad naturalizada, sometida a leyes invisibles. Hoy, ese proyecto de sociedad mercantil muta en el neoliberalismo concebido como una sociedad compleja autorregulada y totalitaria, donde los seres humanos realizan intercambios de bienes con personas que desconocen y cuyas decisiones solo competen a sus intereses. «No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o el panadero de lo

que nos procura nuestra cena, sino del cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas»[22].

El desarrollo del neoliberalismo, inmerso en su propia metamorfosis, desgaja el trabajo asalariado y lo somete a las leyes del mercado, haciendo desaparecer cualquier tipo de subjetividad política cuyo referente no sea la naturaleza económica. Al tiempo que la centralidad de la política se diluye, la centralidad del trabajo se esfuma. «Durante mucho tiempo, el sector asalariado acampó en los márgenes de la sociedad, después se instaló en ella, pero siguiendo subordinado, y finalmente se difundió hasta envolverla de un extremo a otro, para imponer su marca en todas partes. Pero precisamente en el momento en que parecían haberse impuesto definitivamente los atributos ligados al trabajo para caracterizar el estatuto que ubicaba y clasificaba al individuo en la sociedad, precisamente en ese momento, decimos, la centralidad del trabajo ha sido brutalmente cuestionada»[23].

Bajo estos principios, la economía de mercado subsume la democracia y las subjetividades políticas incorporándolas al mercado. A decir de Von Mises, la única definición posible de democracia capitalista en el orden neoliberal se «desentiende del verdadero mérito de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia absoluta. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que estos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos». Pasamos de ciudadanos a consumidores.

> Enajenación y alienación levantan el edificio de las relaciones sociales de explotación desde la cual […] el neoliberalismo en la naturalización del mercado y la política substituye al ciudadano por el consumidor. El ser humano es subsumido en la figura del consumidor que en la medida que crece y satisface su deseo experimenta mayor libertad. Este acrecentamiento de la libertad conlleva la radicalización de la relación instrumental entre el yo y el mundo. Lo exterior, que incluye a la naturaleza y a los demás, aparece única y exclusivamente como algo a explotar, algo puesto al servicio del deseo, pues esto contribuye a atraer más materias y fuerzas hacia formas racionales y anexionarlas […]. El consumidor aparece como un ser racional dotado de autonomía y libertad donde –el dinero– permite la realización independiente del deseo […], la separación respecto de los demás, el cierre autista sobre uno mismo y la relación exclusiva con

> los objetos […] que confina al ser humano a ser el habitante de un mundo desértico en donde, desaparecidos los otros, todo es calculable y seguro[24].

Las luchas contra las dictaduras, defensa de la democracia y articulación de alternativas acaban confluyendo. El neoliberalismo, vía militar o vía electoral, las unifica. Los golpes de Estado impulsores de la refundación del capitalismo han servido para construir un mundo bajo su hegemonía, con su peculiar cultura autoritaria. Levantado sus cimientos con otros materiales, engulle al sujeto político por la vía de la represión sistémica. Lo intenta destruir e inhabilitar bajo la fórmula de la sumisión y la criminalización del pensamiento. Sheldon Wolin se pregunta sobre la deriva que está adoptando el neoliberalismo de totalitarismo invertido para Estados Unidos: «¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de "sálvese quien pueda"? De esta guerra no solo van a resultar miles de muertos […] y jugosas ganancias económicas, también y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente»[25].

LAS RESISTENCIAS CULTURALES EN LAS DICTADURAS FUNDACIONALES. LA LUCHA POR LA MEMORIA

Los golpes de Estado, origen de las dictaduras fundacionales, construyen hegemonía. No solo viven de la represión y la fuerza, imponen una razón cultural, generan una cosmovisión del mundo hasta socializarse en sus valores. Emergen bajo una matriz que recrea la realidad social. Integran, cohesionan, dan vida y determinan el proyecto de cultura autoritaria.

El primer objetivo consiste en transformar el sistema educativo. La escuela representa el espacio en el cual los educandos reciben premios, castigos, orientan sus comportamientos, socializan bajo la atenta mirada de los guardianes del orden. Es el eje central desde el cual expandir los valores engendrados por la dictadura. Los textos de historia sufren el primer embate. *Historia de Chile,* texto obligatorio para los estudiantes de bachillerato, jóvenes entre 14-17 años, se confecciona con los nuevos parámetros de la dictadura. En 1975, a dos años del golpe de Estado, cuenta

con 31 ediciones, con una tirada de 40.000 ejemplares, lo cual supone más de un millón doscientos mil ejemplares vendidos. Su autor, Walterio Millar, presenta el periodo de la Unidad Popular bajo el siguiente relato: «El presidente Allende no terminó su mandato constitucional. En el lapso de casi tres años que duró su gobierno popular revolucionario, fueron produciéndose sucesivamente hondas divergencias políticas entre la oposición y el presidente, divergencias de su gestión administrativa, económica y social, que acabaron por conducir al país a una enorme crisis institucional […]. Tuvo que soportar la tenaz oposición de diversos sectores, de la mayoría parlamentaria y de la prensa opositora empeñada en impedir el avance del marxismo socialista […]. A finales de 1972, la violencia había adquirido límites nunca vistos, menudeaban los atentados y el sectarismo amenazaba con quebrantar las bases de la legalidad y la propia seguridad de las personas. […] La situación se tornó caótica. Los paros gremiales prolongados, el desabastecimiento, las colas y el mercado negro provocaban un clamor público dramático que los soldados de la patria no podían dejar de oír. Este era el panorama cuando llegó el 11 de septiembre, el día en que las fuerzas armadas y de carabineros de Chile, para evitar el desborde de las pasiones […] resolvieron asumir el mando supremo del país, exigiendo al Presidente su renuncia. Allende no se acogió a las garantías de seguridad personal ofrecidas. Se suicidó en la Moneda»[26].

La reescritura de la historia facilita crear héroes y construir una memoria colectiva fundada en los principios de la actuación de las fuerzas armadas. Nuevamente, Walterio Millar, en *Historia de Chile,* dice: «Sería largo hacer una evaluación de todo lo obrado en la vasta y ardua labor de reorganización nacional en todos sus niveles, emprendida por el gobierno y los diversos organismos estatales para levantar al país de la postración moral y material en que lo dejó el régimen de la Unidad Popular. Especialmente conmueve ver cómo, en todo Chile, las damas se desprenden de sus joyas y objetos de valor, y cómo los sectores laborales entregan sus aportes en dinero para incrementar el fondo de reconstrucción nacional. Acción preponderante, en colaboración con el gobierno, ha cabido a los centros de madres, Secretaría General de la Juventud y sectores gremiales […]. De este modo el pueblo chileno entero se movilizó para expresar su solidaridad, su confianza y su reconocimiento a la Junta de Gobierno y a las

fuerzas armadas, en el primer año de una nueva etapa en la Historia de Chile»[27].

Los dictadores se convierten en salvadores de la patria, su vida representa un sacrificio. Un peregrinar en el que, tras serles revelados sus destinos, se ven obligados a combatir al enemigo. Un relato bíblico en el cual los asesinatos se justifican bajo palio de un renacer del espíritu nacional. Sobre estas bases las dictaduras recrean su proyecto. La figura del héroe capaz de generar orden en el caos, seguridad en la incerteza, se hace carne en las fuerzas armadas. Augusto Pinochet muere como individuo y renace como héroe. Es su retorno mítico encarnado en la «práctica religiosa. El individuo, por medio de prolongadas disciplinas psicológicas, renuncia completamente a su vida privada, a sus limitaciones personales, idiosincrasias, esperanzas y temores, ya no resiste a la aniquilación de sí mismo que es el prerrequisito al renacimiento en la realización de la verdad y así madura, al final, para la gran reconciliación (uni-ficación). Después de disolver totalmente todas las ambiciones personales, ya no trata de vivir, sino que se entrega voluntariamente a lo que haya de pasarle […]. El héroe mitológico abandona su choza, su castillo, es atraído, llevado, o avanza voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede derrotar, conciliar esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad (batalla con el hermano, el dragón; ofertorio, encantamiento), o puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte (desmembramiento, crucifixión). Detrás del umbral, después, el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares y, sin embargo, extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente (pruebas), otras le dan ayuda mágica (auxiliares). Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa»[28]. Así se expresa Augusto Pinochet, tras el golpe de Estado: «La divina providencia, junto con entregarme la misión de comandar la más antigua de las instituciones armadas de la república, me permitía asumir la responsabilidad de luchar por la libertad de Chile». Y en una entrevista concedida al Newsweek en 1984, afirma: «En cuanto al secreto de mi supervivencia no es un secreto. Soy un hombre que lucha por una causa justa: la lucha entre el cristianismo y espiritualismo, por una parte, y el marxismo y el materialismo por otra. Yo obtengo mi fuerza de Dios».

El cierre de espacios democráticos repercute en las esferas simbólicas. En los países donde se asientan dictaduras fundacionales, las universidades sufren graves consecuencias. La expulsión de académicos progresistas, sean matemáticos, físicos, ingenieros, sociólogos, juristas o historiadores son una constante. En ocasiones, consideradas «nidos de comunistas, subversivos, terroristas o marxistas», se clausuran. Ciencias de la Educación, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Historia, Antropología, Derecho, son facultades propicias para razias inquisitoriales. Se cambian los planes de estudio, se nombran rectores militares o civiles de pocas luces.

La diáspora intelectual, el exilio de cientos de pedagogos, académicos, docentes, investigadores, científicos-sociales destruye la base social de producción del conocimiento, trasformando los países en auténticos eriales. Lo mismo sucede con las artes, la música, el teatro, la pintura. Libros quemados, planchas destruidas, bibliotecas arrasadas, librerías clausuradas y editoriales censuradas. Es la construcción de una nueva hegemonía de clase, de un nuevo modo de pensar el mundo. Gramsci describe el proceso de formación de esta cultura como un formato para la dominación. No se trata tanto de nuevos paradigmas como de difundir «verdades ya descubiertas, socializarlas, convertirlas en base de acciones vitales, en elementos de coordinación y de orden intelectual y moral. Que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y en forma unitaria la realidad presente, es un hecho filosófico muchos más importante y original que el hallazgo, por parte de un genio filosófico, de una nueva verdad que sea patrimonio de pequeños grupos intelectuales»[29].

Es una propuesta histórica. Los hechos se reinterpretan. La realidad se manipula para dar cabida a una comprensión-visión unitaria de los acontecimientos que llevan al golpe de Estado y a la construcción de un nuevo orden social. Una justificación legitimadora sobre la cual levantar una cultura autoritaria. Los ejemplos van desde la dictadura franquista en España hasta el Chile de Augusto Pinochet.

Los golpes de Estado representan el punto de inflexión. Su triunfo acarrea el desplazamiento de elites. Las dictaduras fundacionales asientan la hegemonía de un nuevo sector de la clase dominante. Los viejos grupos de poder son marginados o apartados, así como sus organizaciones políticas, partidos, etc. El neoliberalismo funda el orden y con ello define los principios reguladores.

Las leyes de amnistía, la sempiterna visión de hacer *tabula rasa* del pasado, de eliminar todo vestigio del horror se extiende a medida que el discurso neoliberal se expande. Los muertos, los desaparecidos son el tributo por transitar a la economía de mercado. El pecado original se redime gracias a la visión maniquea de haber sufrido una guerra inevitable entre el bien y el mal.

La resistencia a esta mentira histórica ha sido un campo de batalla permanente. Sus espacios se desarrollaron al interior de las dictaduras y en el exilio. En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay surge un potente movimiento cultural, si se puede catalogar de contrahegemónico. Fueron tiempos difíciles. La censura, la represión actuaban sin ninguna cortapisa. Cualquier espectáculo podía ser considerado subversivo, contrario a la moral católica y culpado de atentar contra los valores occidentales. Había que actuar con cautela. En un primer momento se representaron obras clásicas readaptadas bajo títulos que denunciaban los excesos de las dictaduras, la tortura, la represión y la resistencia. Interpretaciones libres de Bertolt Brecht, Valle Inclán, Ibsen, Molière, Gorki, incluso Cervantes. No faltaron las parodias. A medida que las dictaduras se resquebrajaban las obras de teatro, los monólogos, los *gags* cómicos, la reedición de libros «prohibidos» fueron rompiendo el cerco de la censura. «En los esfuerzos que se realizaron para crear y mantener ámbitos donde se pudiera ejercer la reflexión social crítica de manera relativamente sistemática, en una época en que ese ejercicio era considerado subversivo y reprimido en consecuencia […]. La supervivencia y la relativa expansión de un sector que continuó trabajando en el país permitió no solamente a muchos intelectuales atravesar el desierto de la dictadura, sino también generar una reflexión social crítica, producir y mantener el debate, y desarrollar un conjunto de instituciones: centros, grupos de trabajo, revistas editoriales»[30].

Pero eran tiempos de oscuridad, un «exilio interior» del cual era difícil evadirse. Significaba la supresión del espacio público. La ciudadanía política había sido negada y perseguida. No se toleró ningún tipo de manifestación cultural, social, de protesta o que supusiese contradecir el ordenamiento dictatorial. En esta dinámica, cuando se realizaron acciones colectivas, paros o concentraciones, se las reprimió sin contemplación alguna. La calle fue un espacio reivindicativo y, a pesar del miedo, se

construyeron relaciones solidarias desde las cuales actuar contra las tiranías. Hubo posibilidades de resistencia. «¿En qué consistieron esas posibilidades? Ni más ni menos que en intentos de mantener una identidad cultural, códigos de autopercepción y de reconocimiento recíproco, y hasta una memoria. En verdad, estas prácticas defensivas desafiaban al régimen, implícitamente, en virtud de su mera presencia, pues implicaban identidades y quehaceres considerados subversivos, actuando en los márgenes, lejos de los espacios en que aquel ejercía un dominio absoluto»[31].

Julio Cortázar identificó la etapa de las dictaduras fundantes como «genocidio cultural». Desde el exilio, José Donoso, Juan Gelman, Luís Sepúlveda, Roberto Bolaño, Mario Benedetti, entre otros, denuncian las dictaduras. Los golpes de Estado llevan al exilio a compañías de teatro que se rehacen en el exterior como El Galpón de Montevideo o la Compañía de Los Cuatro de Chile. Otros jóvenes dramaturgos inician su vida fuera de su país. Óscar Castro en Francia, chileno, escribe en 1982, entre otras obras, *La triste e increíble historia del general Peñaloza y del exiliado Mateluna* y *Casimiro Peñafleta, preso político;* funda el grupo Aleph en París. Aldo Boetto, actor argentino, redacta *Tango en el exilio.*

La emergencia de una generación de ensayistas, literatos, poetas, a la cual se unen artistas plásticos, da como resultado obras de teatro, producciones cinematográficas que dan a conocer al mundo la realidad de las tiranías latinoamericanas. Son el testimonio vivo de los golpes de Estado. El relato de los desaparecidos, la desafección, las torturas, el exilio, los secuestros, los niños perdidos, los confidentes, los torturadores, la traición, los vuelos de la muerte o la Guerra de las Malvinas son llevados a la pantalla. Hechos reales y no ficción. No era solo cine y teatro de ensayo. Muchas de estas producciones fueron presentadas a los festivales de cine, logrando premios y su distribución a nivel mundial. El libro de María Seoane y Héctor Ruiz, *La noche de los Lápices,* relatando el asesinato perpetrado por las fuerzas armadas argentinas a manos del batallón 601, comandado por el coronel Ricardo Campoamor contra estudiantes secundarios el 16 de septiembre de 1976, fue llevado al cine. *La noche de los lápices* fue dirigida por Héctor Olivera y recrea la historia de la detención, tortura y asesinado de los estudiantes por reivindicar una bajada de precio en el billete del trasporte para escolares.

Las obras que ven la luz describen sin ambages las violaciones de los derechos humanos en los centros de torturas. Novelas donde también emerge la mujer, cuyas protagonistas se enfrentan a la búsqueda de sus hijos o sus maridos desaparecidos. Otras dan vida a los silencios obligados para evitar delaciones. Tiempos de oscuridad retratados por una generación de intelectuales que se negaron a torcer el brazo. Son documentos imprescindibles para reconstruir la memoria colectiva de la resistencia. En Chile, Vivian Lavín escribe *Mujeres tras las rejas de Pinochet. Testimonio de tres expresas políticas de la dictadura.* Mientras, Nubia Becker Eguiluz, sobreviviente del campo de tortura de Villa Grimaldi, relata su experiencia en *Una mujer en Villa Grimaldi. Tortura y exterminio en el Chile de Pinochet.* No son las únicas.

Igualmente, el cine documental toma cuerpo. Es el testimonio vivo en el cual los protagonistas son muchas veces militantes anónimos, dirigentes vecinales, líderes campesinos, entrevistados para la ocasión. Mítines, concentraciones, asambleas son grabadas para la memoria colectiva de las luchas sociales. De entre todas, sobresale *La Batalla de Chile* del cineasta Patricio Guzmán. Recibirá múltiples premios. Es el relato más completo de los mil días del gobierno de Salvador Allende. También el comunicólogo y sociólogo francés Armand Mattelart produce el documental *La espiral.* Miguel Littin, director de cine, recrea en un film el día del golpe de Estado en Chile. Películas como *Missing,* dirigida por Costa Gavras, cuyo guion relata la historia del periodista norteamericano asesinado en el Estadio Nacional, Charles Horman, serán un éxito. El film argentino *La historia Oficial,* dirigido por Luis Puenzo resulta ganador de un Oscar a la mejor película de habla no inglesa, cuyo estreno en 1985 narra la historia de una niña secuestrada y adoptada, hija de desaparecidos. Canciones de cantautores cubanos como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés recordando a Salvador Allende o los desaparecidos se unen a la producción artística de la memoria de resistencia.

A las novelas de los dictadores que dejaron constancia de la personalidad y la arbitrariedad del poder autocrático como *Yo, el supremo, Señor Presidente, La fiesta del Chivo* o *El otoño del patriarca,* se suman relatos cuyo protagonismo recae en las víctimas. Son historias de amor, desencuentros, miedos. Preguntas sin respuestas que no acaban de asimilar el odio, la canalla, miseria humana, el egoísmo y la venganza. Son historias

de soledad. Instantes donde se habla de la dignidad nunca arrebatada, la fuerza de los principios, la entrega, la militancia, la solidaridad. Remansos de paz en medio de la represión. Historias reales, pasadas por el tamiz de la creación literaria. Sujetos anónimos que cuentan la historia. Ellos nos transportan al presente. Son parte de la memoria colectiva que se construye para recordar, tomar conciencia y resistir al olvido.

En Chile, Isabel Allende escribe *La casa de los espíritus;* Roberto Bolaño, *Nocturno de Chile;* Pedro Lemebel, *Tengo miedo torero;* José Leandro Urbina, *Las malas Juntas.* Raúl Zurita y su poemario *Anteparaíso.* Antonio Skármeta retoma, en el exilio, la escritura con el cuento *La composición.* En Brasil, la gran novela escrita por de Edgard Telles Ribeiro: *Los años robados.* En Argentina, sobresalen muchas literatas. Ellas son las relatoras de los tiempos de oscuridad: Liliana Heker, con *El fin de la historia;* Elsa Osorio: *A veinte años, Luz.* Laura Alcoba: *La casa de los Conejos.* Alejandra Laurencich: *Las olas del Mundo.* Marta Dillon: *Aparecida.* En Uruguay, Carlos Martínez Moreno escribe *El color que el infierno me escondiera* y Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro escriben en 1987 *Memorias del Calabozo,* la historia de los nueve militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros detenidos en 1972 y posteriormente secuestrados por la dictadura. Así lo describe en el prólogo: «Ese largo viaje de los nueve rehenes de la tiranía duró, exactamente, once años, seis meses y siete días. Hubo en la historia de la humanidad, vastamente torturada, muchísimos antecedentes. […] Adolfo Wasem, Raúl Sendic, Jorge Manera, Julio Marenales, José Mujica, Jorge Zabalza, Henry Engler, Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández fuimos los nueve señalados por la pezuña de la tiranía. Muchos de nosotros, presos y torturados varias veces en la década de los sesenta. Todos presos y torturados en 1972. Algunos nuevamente torturados en 1973 antes del secuestro que nos trasformará, refinamiento nuevo, en rehenes». En 2018 la historia ha sido llevada al cine por el director uruguayo Álvaro Brechner y presentada en el festival de Venecia con el título *La Noche de los doce años.*

Tampoco podemos obviar a Juan Gelman y su poesía. *Hacia el sur, Bajo la lluvia ajena, Citas y Comentarios, Hechos y Relaciones.* Acá vemos parte de uno de sus poemas:

Así trabaja la esperanza:

la torturan y no habla
no habla con la policía
no habla con el juez
no habla con almirantes
no habla con la muerte señora
con nada que chupe seque vuelva pobre o triste
habla…

Asimismo, escribirá junto a Mara La Madrid, en 1997, las historias de vida de los hijos de los desaparecidos: *Ni el flaco perdón de Dios.* Mario Benedetti levanta también su voz por los desaparecidos:

Están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy, vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio.

Son los rostros de la memoria. En el teatro fueron llevadas a escena obras de Ariel Dorfman, como *La muerte y la doncella.* En Argentina, Miguel Toro estrena *1978: Viva el Fútbol.* Un relato estremecedor que muestra el contraste de la alegría de muchos argentinos celebrando el triunfo de su selección en el mundial de fútbol, mientras en los centros clandestinos de detención, las fuerzas armadas torturan sin piedad. La dramaturga estadounidense Stephanie Walker escribe *Madres,* obra que también se estrena en Estados Unidos en 2018. Es la historia de tres generaciones de madres de la familia Acosta. Relata la resistencia, sufrimientos y luchas que encarnan el valor y coraje de las mujeres. Su autora recalca: «La obra es sobre la fortaleza y resistencia de las mujeres que han pasado por la tortura, el sufrimiento y las desapariciones».

En Chile, en 1986, Rolando Vargas escribe *Pinochet.* Su obra deberá esperar treinta años para ser estrenada en suelo chileno. Es un relato a cuatro voces de los personajes más influyentes y destacados de la dictadura: el ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, el sacerdote Raúl Hasbún, el coronel Manuel Contreras, director de la DINA, y la esposa de Pinochet, Lucía Hiriat. Ellos imaginan el futuro de Chile en sus papeles de prohombres de la tiranía.

En Brasil, cantautores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gelardo Vandré rompen la censura. En el exilio se rearman grupos musicales y cantautores chilenos, argentinos, uruguayos: Quilapayún, Inti-Illimani, Los Olimareños, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa. Pintores y escultores retratan y plasman en sus lienzos, acuarelas y esculturas el tiempo de las dictaduras y los golpes de Estado. Los argentinos Antonio Berni, Ricardo Carpani, Carlos Biscione, chilenos como José Balmes, y la pintora Roser Bru. En Uruguay, Jorge Caraballo, Clemente Padín y Haroldo González exponen sus figuraciones postales, «arte correo». En los sellos cobran vida la violación de los derechos humanos, la tortura, la violencia. También los fotógrafos desempeñan un papel importante. El testimonio gráfico ocupa un lugar especial en la recuperación de la memoria histórica y la resistencia. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo, señalando los horrores de las dictaduras. Periodistas que arriesgaron su vida.

Gracias a la perseverancia de quienes nunca se doblegaron a las dictaduras, a pesar del miedo y con el miedo a cuestas, tenemos los testimonios de la resistencia y es posible reconstruir las luchas, impedir el olvido, la manipulación y la mentira. Asimismo, hay que destacar las obras que permiten desentrañar los procesos desde las experiencias personales. Óscar Soto Guzmán, médico cardiólogo del presidente Allende, sobreviviente del ataque al palacio presidencial, escribe el relato más completo de lo sucedido en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Su labor ha permitido conocer los nombres de todos aquellos que permanecieron junto al presidente Allende, algunos de ellos desaparecidos o desconocidos, como detenidos en el asalto.

La memoria colectiva, las luchas de resistencia forman parte del imaginario social que vive en la conciencia de quienes fueron víctimas de las tiranías. Sin embargo, una visión mezquina busca eliminar el pasado, hacer de la historia un relato flácido y sin mordente. Es la propuesta del olvido. El capitalismo digital se reacomoda. Los datos se presentan bajo una dinámica aleatoria perdiendo su comprensión. La mentira se articula bajo el hecho desnudo; así lo expone Juan Carlos Onetti en su primera novela, escrita en 1939, *El Pozo:* «Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el

alma de los hechos. Porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene».

La capacidad de almacenar datos se expande. El *big data* procesa información mediante algoritmos que se encienden y apagan a voluntad. La información a manos de las grandes trasnacionales de la cibernética e informática facilita el control social. Selecciona, depura y presenta ordenadamente aquello que considera oportuno para el usuario. Realizar una valoración crítica de la información depende del grado de formación recibido. Sin los elementos básicos para formar criterio, la posibilidad de construir historias *ad hoc* se vuelve fácil para el poder político. Sean estadísticas, golpes de Estado, desapariciones, violencia de género, todo se manipula. En otras palabras, la opción de falsear la realidad aumenta a la par que las políticas antidemocráticas se expanden.

La dominación cultural del capitalismo digital tiene que prescindir de la memoria colectiva. Deshacerse del pasado, vivir en el presente. El aquí y ahora. La urgencia de la información fragmenta la realidad. La difusión masiva, la noticia sin contrastar, sin contrapeso: «Se renuncia al proceso de selección mental que normalmente ayudaría a conferir significados. La mente se convierte en un cedazo por el cual pasan casi de hora en hora docenas de anuncios, de los cuales unos pocos son importantes, en tanto que la mayoría son intrascendentes. La información, en lugar de ayudar a enfocar la sensibilidad y a conferir significado, produce en cambio la admisión subliminal de que uno es incapaz de analizar las oleadas de acontecimientos que rompen sin cesar contra su conciencia, una conciencia que en defensa propia debe bajar continuamente su umbral de sensibilidad»[32].

La historia se reconduce a contar relatos cortos bajo la fórmula del *storytelling.* Una operación más compleja de lo que se podría creer a primera vista: «No se trata solo de contar historias a los asalariados, de ocultar la realidad con un velo de ficciones engañosas, sino de compartir un conjunto de creencias capaces de suscitar la adhesión o de orientar flujos de emociones; en resumen, de crear un mito constructivo. […] Es a la vez una herramienta de *marketing,* un instrumento de gestión personal que permite movilizar a los ejecutivos de una empresa, un regulador de las relaciones sociales, un medio de trasmitir conocimientos, de cristalizar la imagen de una marca o de vender productos. Es al mismo tiempo guardián de la

memoria y portador de un proyecto estratégico, comunicación y acción, vector de experiencia y de invención, herramienta de formación en el liderazgo y escuela de obediencia […]. La potencia a menudo incomprendida del neocapitalismo (y su violencia simbólica) ya no reside, como era el caso de la revolución industrial, solo en la sincronización del capital y del trabajo: consiste en crear ficciones movilizadoras, en comprometer a todos los "socios", asalariados y clientes, mánager y accionistas, en unos guiones premeditados. En lugar de las cadenas de montaje, engranajes narrativos. Mejor que el control y la disciplina, compartir supuestamente una historia colectiva. El *storytelling management* puede, por tanto, definirse como el conjunto de las técnicas que organizan esta nueva "prolijidad" productiva, que sustituye el silencio de los talleres y las fábricas: el neocapitalismo ya no pretende solamente acumular riquezas materiales, sino saturar, dentro y fuera de la empresa, los campos de producción y de intercambio simbólicos»[33].

La memoria colectiva y la historia son un campo de batalla. Forman parte de la guerra de cuarta generación desarrollada por el actual capitalismo digital. Sin memoria no hay recuerdos, no existe responsabilidad, culpables de genocidio, torturas ni crímenes de lesa humanidad. Todo se desvanece bajo la perspectiva de un pragmatismo ramplón. No hay lugar para nada que no sea lo inmediato, lo irrelevante, el chascarrillo. Así se construye el olvido. La conciencia y la memoria son el objetivo de una nueva guerra psíquica consistente en el desprendimiento de la capacidad de pensar, de recordar. «Esta redefinición de la guerra bajo el prisma de la información es resumida por Richard Zsafranski mediante una metáfora biológica: la guerra neocortical. Una guerra que se "esfuerza por controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos". Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario: el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es el de paralizar en el adversario el "ciclo de observación, de orientación, de la decisión y de la acción". En suma, se trata de anular la capacidad de comprender. Según el coronel de la USAF, hacer operativa esta guerra neocortical significa reestructurar a nivel mundial sus aparatos de colecta y de diseminación de información, colocar en red las diversas agencias de inteligencia y sus capacidades de análisis»[34].

Es el momento de resistir, de no torcer la mano. Si, durante décadas de tiranías y golpes de Estado, hubo quienes no renunciaron a su deber como demócratas, como ciudadanos, arriesgando su vida para hacer prevalecer la verdad y no se dejaron avasallar, ellos son el ejemplo. De allí la necesidad de mantener la lucha por la memoria, repensar la historia y defender la conciencia ética como el espacio de dignidad inherente al *Homo sapiens sapiens.*

[1] F. Portales, *Chile, una democracia tutelada,* Santiago de Chile, Sudamericana, 2000, p. 429.

[2] J. Medina Echavarría, *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico en América Latina,* San José, EDUCA, 1980, pp. 140 y ss.

[3] L. A. Romero, *Los golpes militares. 1812-1955,* Buenos Aires, Carlos Pérez, Argentina, 1969, p. 149.

[4] *Ibid.,* pp. 155-156.

[5] *Ibid.,* pp. 160-161.

[6] R. Osegueda, *Operación Guatemala $$OK$$,* México, América Nueva, 1955, pp. 213 y ss.

[7] G. Toriello Garrido, *Tras la cortina del banano,* México, FCE, 1976, p. 226.

[8] S. Correa, C. Figueroa, A. Jocelyn-Holt, C. Rolle, M. Vicuña, *Documentos del siglo XX chileno,* Santiago de Chile, Sudamericana, 2001, pp. 379-406.

[9] G. Caetano y J. Rilla, *Breve Historia de la dictadura (1973-1985),* Montevideo, Banda Oriental, 2.ª ed., 1998, pp. 43 y ss.

[10] J. Bengoa, «Reforma agraria en Chile: a treinta años de 1973 y cuarenta de su comienzo. Proposiciones, rupturas y derroteros», en F. Zapata, *Frágiles Suturas. Chile a treinta años del gobierno de Salvador Allende,* México, FCE, 2006, p. 322.

[11] T. Moulian, *Chile actual. Anatomía de un mito,* Santiago de Chile, LOM, 19.ª ed., 1998, p. 24.

[12] *Ibid.,* p. 22.

[13] Entrevista al dirigente del PT Perseu Abramo; en M. Harnecker, *El sueño era posible. Historia del PT,* La Habana, Cultura Popular, 1994, p. 184.

[14] R. Zamorano Farías, *Entre la teoría y la acción. Dilemas sobre la acción colectiva popular. Santiago de Chile 1988-1992,* México, Casa Juan Pablos, 2001, p. 40.

[15] G. Salazar y J. Pinto, *Historia Contemporánea de Chile Vol. IV. Hombría y Feminidad,* Santiago de Chile, LOM, 2002, pp. 197-198.

[16] M. Lagarde, *Para mis socias de la vida. Claves feministas para…,* Madrid, Horas y Horas, 2005, p. 299.

[17] S. Bianchi, «Madres de Plaza de Mayo», en I. Morant (dir.), *Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI,* vol. IV, Barcelona, Cátedra, 2.ª ed., 2008, p. 680.

[18] F. Hayek, «¿A dónde va la democracia?», en *La ilustración Liberal* 47 (2011), pp. 49-61.

[19] Sh. Wolin, *Democracia. S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido,* Buenos Aires, Katz, 2008, p. 138.

[20] N. Lechner, *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política,* Santiago de Chile, LOM, 2002, p. 19.

[21] Sh. Sheldon, *Democracia. S. A., op. cit.,* p. 81.

[22] B. Mandeville, *La fábula de las Abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública,* México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 21.

[23] R. Castel, *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado,* Buenos Aires, Paidoó, 2001, p. 389.

[24] A. Bilbao, «El dinero y la libertad moderna», en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 89, enero-marzo de 2000, p. 134.

[25] Sh. Sheldon, *Democracia. S. A., op. cit.,* p. 41.

[26] W. Millar, *Historia de Chile,* Santiago de Chile, Zig-Zag, 31.ª ed., 1975, p. 332.

[27] *Ibid.,* pp. 336-337.

[28] J. Campbell, *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito,* México, FCE, 5.ª reim., 1997, pp. 217 y ss.

[29] A. Gramsci, *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce,* Buenos Aires, Nueva Visión, 1973, p. 9.

[30] H. Sábato, «Sobrevivir en dictadura: las ciencias sociales y la "Universidad de las catacumbas"», en H. Quiroga y C. Tcach (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática,* Rosario, Homo Sapiens, 1996, pp. 165 y ss.

[31] M. Novaro y V. Palermo, *Historia argentina.* Vol. 9. *La dictadura Militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática,* Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 150.

[32] H. Schiller, *Manipuladores de cerebros. Mitos, técnicas y mecanismos para el control de la mente,* Buenos Aires, Gedisa, 1974, p. 43.

[33] Ch. Salmon, *Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes,* Barcelona, Península, 2011, p. 120.

[34] A. Mattelart y A. Vitalis, *De Orwell al cibercontrol,* Barcelona, Gedisa, 2015, p. 100.

VI. A MODO DE EPÍLOGO

> Toda dictadura es oprobiosa y deprimente, porque representa a una minoría entronizada por la fuerza en el poder. Todo régimen dictatorial, para mantener su inestable equilibrio, debe recurrir a métodos de barbarie que angustian al espíritu ciudadano y repugnan a las conciencias limpias.
>
> Carlos Prats González, general en jefe de las fuerzas armadas chilenas del Gobierno de Salvador Allende. Asesinado en 1974.

Este ensayo quiere ser una reflexión donde describir y presentar de manera sucinta los golpes de Estado que en América Latina han condicionado la vida política. Golpes de Estado que en ocasiones se han trasformado en décadas de dictadura, construyendo órdenes de dominación donde ha prevalecido un poder despótico, omnímodo y arbitrario. Regímenes que han sido y son un obstáculo para el desarrollo de una cultura democrática. Su aparición recurrente ha impedido, siempre por la fuerza, cualquier atisbo de proyecto popular, antiimperialista, cuyo eje sea presentar una alternativa al capitalismo dependiente. Han sido muchas las ocasiones frustradas, las esperanzas rotas y los sueños que han terminado en pesadilla. Pero el rechazo de su existencia o mera posibilidad forma parte de la dignidad humana. Un pensamiento radical, emancipador demuestra que las tiranías, por mucho que ejerzan el terror y se apoyen en la muerte, tendrán enfrente organizaciones, movimientos populares, hombres, mujeres, jóvenes, campesinos, trabajadores, personas cuyas conciencias no aceptan el yugo de la opresión. En ocasiones su valor tendrá el alto costo de entregar su vida, pero su ejemplo perdurará como parte de la memoria colectiva. No dejarse avasallar, no claudicar, ni humillarse. Así lo expresó Salvador Allende, mientras el golpe se ponía en marcha. Eran las 8:45 de la mañana del 11 de septiembre de 1973; en su tercera alocución, señala: «[…] Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé esta revolución chilena y defenderé el Gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del

pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino, con la diferencia, quizá, de que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada. […] El proceso social no va a desaparecer porque desaparezca un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero no podrá detenerse». Y cuando el golpe sobreviene, a las 9:10 de la mañana, se dirige por última vez al pueblo chileno: «Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a los trabajadores. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una patria mejor».

La superación de las barreras del miedo, la perseverancia y la lucha por construir un mundo más justo, igualitario y digno siguen vigentes. Los reveses no suponen abandonar, sino reinventarse. Hoy lo vemos en Brasil con un gobierno elegido desde la traición. Jair Bolsonaro no lo tendrá fácil. El fascismo en América Latina ha estado presente bajo formas diferentes. Hoy se sintetiza en la xenofobia, homofobia, racismo, odio articulado sobre la represión, la violencia y la persecución política. Es el rechazo a la vida. Criminalización de las protestas sociales. Son tiempos de resistencia, pero la fuerza no es suficiente para acallar los proyectos democráticos, anticapitalistas y emancipadores. Se lucha para ganar, para romper las dinámicas derrotistas, para aprender de los errores y los fracasos. Allende lo vio claro: «Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos».

En el texto, no he buscado hacer mención explícita de los múltiples horrores que acompañaron al establecimiento de dictaduras militares. Fueron tiempos de oscuridad. El miedo se adueñó de la vida cotidiana.

Hubo quienes vivieron años negando ser hijos, esposas, madres, hermanas o maridos de detenidos desaparecidos. Eran apestados sociales. Incluso para protegerse, se prefirió construir una historia donde los abuelos relataban a sus nietos que sus progenitores se habían marchado al exterior. Otros negaron haber sufrido torturas, haber sido violadas o detenidos. Se rompió con el pasado. Se trató de proteger a los más cercanos. También fueron momentos de solidaridad, compañerismo y afectos. La represión dejó al descubierto hasta dónde puede llegar la obsesión contra la izquierda, el socialismo-marxista. Sus militantes fueron considerados, al decir de los torturadores, animales que no merecían ningún respeto. En la desnudez de la tortura nunca perdieron la dignidad, eso les hizo fuertes y resistieron. Son los sobrevivientes. Pero hubo quienes, sin sufrir la tortura física, sufrieron la traición y la tortura psicológica. Debieron negar su historia para sobrevivir. La sociedad entera sufrió la persecución y enfermó, hasta el extremo de no reconocer los hechos. Nadie quiere ser responsable. Unos se escudan en la Guerra Fría, otros en su débil carácter y los más callan o se justifican.

Países enteros, como Chile, viven en una mentira. Hoy sigue vigente la Constitución de la dictadura aprobada en 1980, en medio de la sangría humana. En otros casos, directamente se pide el perdón y se fomenta el olvido. Ahí está el peligro. Por ello es necesario mantener en alto la necesidad de justicia, de imputar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de acabar con la impunidad. En definitiva, de asumir responsabilidades políticas, tener valentía y no escudarse en la cobardía de leyes de amnistía o perdones espurios.

Memorias. Testimonio de un soldado, escrito por el general Carlos Prats, es un libro de lectura imprescindible. Supera las 600 páginas con letra menuda. Es la historia de una vida dedicada a las fuerzas armadas. El texto es el relato de un hombre que vivió con pasión cada una de sus vocaciones: la literaria, la diplomática, la política, la familiar, y sobre todo, la militar. Es un libro donde se reflejan dudas y una visión de la política en tanto militar y, más adelante, como general en jefe de las fuerzas armadas. Sobresale el estilo, la escritura clara y, por encima de todo, un conocimiento erudito de la historia de Chile. Es la visión de un constitucionalista, apegado a la legalidad y respetuoso del mandato salido de las urnas. Pero en la lectura

hay algo que no cuadra; se destila un marcado antimarxismo y un temor al comunismo.

Ambas circunstancias caracterizaron su visión de Chile, al menos hasta el triunfo de la Unidad Popular. Pero en los tres años de gobierno popular cambió su percepción. Asumió que ni comunistas ni marxistas eran enemigos de Chile. Sus elogios al presidente Allende, cuyo primer encuentro se produce a pocos días de su nombramiento, en el entierro de su compañero de armas, René Schneider, asesinado en octubre de 1970, son desde luego dignos de militar cabal.

Carlos Prats amó a su pueblo y entendió que el gobierno de la Unidad Popular estaba comprometido con dicho ideal. Allí nació su lealtad a la vía chilena al socialismo y a Salvador Allende. No escatimó elogios a la Unidad Popular, ni puso en duda el patriotismo de Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista chileno. Sin embargo, su educación, enmarcada en la Guerra Fría, en el discurso antisubversivo, anticomunista, de miedo y terror, le hicieron dudar. Cualquier proceso político que portase banderas rojas y declamase palabras como imperialismo, reforma agraria, nacionalizaciones o Cuba levantaba suspicacias.

La grandeza del general Prats radica en su capacidad para *desaprender,* darse cuenta de la maniquea visión presentada por la Doctrina de la Seguridad Nacional. Fue un militar, sí, pero no un golpista. Tampoco un conspirador ni un traidor. Por consiguiente, reunía todos los requisitos para ser odiado por la derecha chilena y sus correligionarios fascistas. Ellos sí, prendidos del anticomunismo visceral, pensaban en asesinar, desestabilizar y eliminar todo aquello que oliese a democracia, no digamos a socialismo. Esto escribió Calos Prats en sus memorias el día 11 de septiembre: «Oigo, parcialmente, la alocución pronunciada con voz serena, que el presidente Allende dirigiera al país. Luego empiezo a escuchar los bandos de la Junta de las fuerzas armadas y carabineros de Chile. Me siento profundamente consternado ante el súbito y fatal derrumbe de tantos valores y principios, presintiendo con horror, cuánta sangre será derramada entre hermanos. La tenaz lucha sostenida para impedir que el Ejército se dejara arrastrar a la destrucción de su profesionalismo institucional, había sido estéril. Todas las angustias, las tensiones y sacrificios soportados, así como el orgullo y la dignidad humillados, no fueron holocausto a una causa lograda. Pienso en la terrible responsabilidad que han echado sobre sus hombros mis

excamaradas de armas, al tener que doblegar por la fuerza de las armas a un pueblo orgulloso del ejercicio pleno de los derechos humanos y del imperio de la libertad. Medito en los miles de conciudadanos que perderán sus propias vidas o las de sus seres queridos. En los sufrimientos de los que serán encarcelados y vejados. En el dolor de tantas víctimas del odio. En la desesperación de los que perderán su trabajo. En la desolación de los desamparados y perseguidos, y en la tragedia íntima de los que perderán su dignidad. Presiento que mis excamaradas de armas jamás recuperarán en vida la paz de sus espíritus, atenazados por el remordimiento de los actos concupiscentes en que se verán fatalmente envueltos y por la angustia ante la sombra de las venganzas, que les perseguirá constantemente. ¿Quiénes fueron los cerebros que los perturbaron hasta el paroxismo? ¿Mostrarán algún día sus rostros? ¿Desentrañará la historia la madeja diabólica de esta conspiración insensata en Chile cuyos instigadores –como siempre– permanecen en la penumbra? ¿Por qué los demócratas sinceros del gobierno y de la oposición no fueron capaces de divisar el abismo al que se precipitaba el país?». Sus reflexiones continúan el miércoles 12 de septiembre, cuando sentencia: «El viejo palacio de Toesca ha quedado humeante y semidestruido y el "líder luchador", con su heroico sacrificio humano, no hizo sino recibir el tiro de gracia el día de ayer. Pero "el gobernante" había sido inmolado con días de anterioridad por el torniquete político con que lo estranguló, con una mano, la poderosa plutocracia –que no aceptaba otra alternativa que su derrocamiento– y con la otra, un sector perturbado del gobierno que quiso seguir, a cualquier costo, adelante»[1]. Carlos Prats se exilia meses más tarde en Argentina. Será asesinado junto a su compañera, cumpliendo órdenes de Pinochet, con una bomba lapa en los bajos de su coche.

No fue el único caso de militar constitucionalista en Chile. El almirante Raúl Montero, último obstáculo para el golpe de Estado en la marina, los generales legalistas Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda y el Coronel José Domingo Ramos Albornoz, quien, el día 11 de septiembre de 1973, se enfrentó directamente a Pinochet, o el comandante de la fuerza aérea Ernesto Galaz Guzmán, torturado, sometido a consejo de guerra y compañero de celda de Arturo Bachelet.

En América Latina han existido y existen militares que defienden una política de desarrollo democrático, participativo, popular y antiimperialista.

No cabe duda de que han sido una minoría, pero sus nombres resaltan como vidas ejemplares. Liber Seregni en Uruguay, Jacobo Árbenz en Guatemala, apodado «soldado del pueblo»; Edgardo Mercado Jarrín en Perú o el ecuatoriano Rechelieu Levoyer. Todos, con trayectorias límpidas, apegadas a una carrera militar donde sobresalen los sueños de independencia nacional, soberanía política y emancipación.

De una generación de militares democráticos, nace, en los años ochenta del siglo XX, la propuesta de crear la Organización de Militares por la Integración y Democracia de América Latina y el Caribe (OMIDELAC). Fundada en 1986, se constituyó en respuesta a la Doctrina de la Seguridad Nacional, la injerencia de Estados Unidos y violación de los derechos humanos cometidos por sus «compañeros» de armas. Su programa incluye el principio de no intervención, la necesidad de lograr el desarrollo económico con justicia social, en paz y estabilidad democrática. Muchos han sufrido atentados, otros han sido torturados, asesinados, vilipendiados y separados de las filas. No por ello han dejado de batallar. Son soldados demócratas que denunciaron las torturas, que alzaron la voz para evitar los golpes de Estado, que acudieron a las familias para informar sobre los detenidos y prestaron auxilio a las víctimas.

Sí hay *otros militares*. Pero sus historias se han invisibilizado. Existe una deuda con ellos. ¿Cómo entender el envío de las cartas del general de la fuerza aérea, Arturo Bachelett, muerto en la tortura, remitidas a su mujer por alguno de sus custodios? En medio de las sesiones de tortura, hubo soldados que se revelaron, pagaron su osadía. Serían igualmente torturados y expulsados de sus filas. Algo similar ocurrió con los marinos de la armada chilena en 1973, detenidos antes del golpe por haber alertado de las maniobras de sedición de sus mandos. Su historia fue contada por Jorge Magasich en dos volúmenes, bajo el título *Los que dijeron NO. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973.*

En la sociedad civil nos encontramos con estadistas, políticos cuya utopía democrática ha sido servir al país bajo las banderas de la autodeterminación, la soberanía y el anticapitalismo. Cuando han gobernado, las clases populares han sido protagonistas. Se impulsa la cultura, las letras, las artes y la dignidad emana de hombres y mujeres solidarias cuya entrega total supone incluso la muerte. Los programas de salud, educación, construcción de viviendas, trabajo digno se refuerzan, son

tiempos de luz, de esperanza, de sueños, de compromiso. Nombres sobran. También son víctimas y están sometidos a campañas de acoso y derribo. Han sufrido conspiraciones, atentados y en algunos casos han sido asesinados.

Vendepatrias han urdido las acciones desestabilizadoras para evitar el avance social de los pueblos de «Nuestra América». Coaligados con militares golpistas, llenos de odio, inquina y, sobre todo, anticomunismo, han emprendido golpes de Estado frenando las aspiraciones de democracia y libertad de millones de ciudadanos que clamaban por ella. Las fuerzas armadas, salvo excepciones, no han estado a la altura de su cometido. Han preferido una posición subordinada, ser la mano ejecutora de las empresas transnacionales, los grupos económicos plutocráticos y las oligarquías terratenientes. Hoy ocupan un lugar secundario en el reparto, pero no por ello han dejado de mantener su ideología anticomunista. Se siguen considerando salvadores de la patria. Pero lo hacen en conversaciones privadas, bajo cuerda. De vez en cuando se escapa algún desliz. Conspiran y se sienten seguros. Saben que no sufrirán bajas. La prueba de fuego, muchos de quienes empuñaron las armas contra el pueblo siendo jóvenes oficiales, hoy son capitanes, coroneles o generales de estado mayor. Los enemigos están entre nosotros, señaló Fidel Castro en su viaje a Chile, teniendo como edecán a un tal Augusto Pinochet.

Los golpes de Estado se han reestructurado en el siglo XXI. Presentan otra cara, más «amable», sin tanta parafernalia castrense. Sin embargo, fracasarían si tras ellos no existiese el beneplácito de las fuerzas armadas. El nuevo golpismo está en marcha y en muchos países ha triunfado. No solo en América Latina, también en Europa, Asia, África y Oceanía.

Si la finalidad de los golpes es torcer la voluntad de un pueblo, suprimir derechos y libertades, recibir órdenes del exterior y asumir los postulados de organismos internacionales, bancos, troikas, trasnacionales y del complejo industrial-militar financiero, sin rechistar, el golpe constitucional triunfa sin disparar una sola bala. Ese es el peligro al que nos enfrentamos. Desenmascararlos es labor de todos aquellos que se sientan comprometidos con la libertad, la justicia social, la democracia y el socialismo.

[1] C. Prats González, *Memorias. Testimonio de un soldado,* Santiago de Chile, Pehuén, 3.ª ed., 1987, pp. 512-513.

BREVE CRONOLOGÍA DE GOLPES DE ESTADO EN AMÉRICA LATINA[1]

ARGENTINA

1930	El general José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Se inicia la *década infame,* caracterizada por el fraude electoral y la represión política.
1943	*Revolución del ‘43*. Los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell derrocan al presidente Ramón Castillo.
1955	*Revolución Libertadora*. Los generales Eduardo Lonardi y Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas derrocan al presidente Juan Domingo Perón, que se exilia en Paraguay. Comienza la persecución contra el Peronismo, con fusilamientos, torturas y represión política incluidos.
1966	*Revolución Argentina*. El general Juan Carlos Onganía derroca al presidente Arturo Illia. Illia es expulsado de la Casa de Gobierno mediante el uso de policías antidisturbios.
1976	*Proceso de Reorganización Nacional*. El teniente general Jorge Videla, el almirante general Emilio Massera y el brigadier general Orlando Agosti derrocan a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

BOLIVIA

1920 Con apoyo militar, el Partido Republicano derroca al presidente José Gutiérrez Guerra. Bautista Saavedra Mallea asume la presidencia.

1930 Un golpe de Estado destituye al presidente Hernando Siles Reyes y nombra provisoriamente al general Carlos Blanco Galindo. Se inicia un periodo turbulento de presidencias efímeras.

1936 El presidente José Luis Tejada Sorzano es derrocado por el mayor Germán Busch Becerra, reemplazado a su vez por el coronel David Toro Ruilova.

1943 Sublevación militar contra al general Enrique Peñaranda (elegido en elecciones fraudulentas) lleva al poder al general Gualberto Villarroel López.

1946 Un levantamiento popular hace caer al gobierno de Villarroel López. Este es asesinado. Su cadáver es arrastrado por las calles y colgado.

1951 *El Mamertazo*. Ante el creciente apoyo popular recibido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el presidente Mamerto Urriolagoitia ejecuta un «autogolpe» y entrega el poder a una junta militar encabezada por el general Hugo Ballivián Rojas.

1964 El general René Barrientos Ortuño dirige un golpe de Estado contra el presidente Víctor Paz Estenssoro.

1969 El general Ovando derroca al presidente Luis Adolfo Siles

Salinas.

1970 El general Juan José Torres realiza un golpe de Estado.

1971 Golpe de Estado del general Hugo Bánzer Suárez. Viraje a la ultraderecha.

1980 *El Golpe de la Cocaína*. Apoyado por la CIA, por la dictadura argentina. Financiado por el narcotráfico, el coronel Luis García Meza derroca al frágil gobierno de la presidenta Lidia Gueiler Tejada. Comienza una etapa de persecuciones políticas, torturas y represión.

BRASIL

1930 Una junta militar derroca al presidente Washington Luís Pereira de Sousa. El ganador de las elecciones –Julio Prestes– no llega a asumir el cargo. La junta militar triunfante nombra presidente a Getúlio Vargas.

1964 Un golpe militar apoyado y financiado por Estados Unidos destituye al presidente João Goulart. La dictadura, responsable de numerosos asesinatos y persecuciones políticas, fundará su propio partido político (la *Aliança Renovadora Nacional,* ARENA) y se extenderá hasta 1985.

CHILE

1925 Golpe de estado.

1932 *República Socialista de Chile*.

1938 *Matanza del Seguro Obrero*. Intento golpista del Movimiento Nacional-Socialista de Chile.

1969 *Tacnazo*. Levantamiento militar en el regimiento de Tacna. Detención del cabecilla, general Roberto Viaux.

1973 Golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Suicidio del presidente Salvador Allende. La dictadura militar en el poder se retira en 1990, dejando un saldo de más de tres mil desaparecidos, decenas de miles de presos políticos y otros tantos exiliados.

COLOMBIA

1944 Intento de golpe de Estado contra el presidente Alfonso López Pumarejo.

1949 El presidente Mariano Ospina Pérez cierra el Congreso y adopta medidas de corte dictatorial.

1953 El general Gustavo Rojas Pinilla derroca al presidente Laureano

Gómez, que seguía la línea autoritaria de Ospina Pérez.

COSTA RICA

1917 Federico Tinoco derroca al Presidente González Flores.

1948 José Figueres Ferrer se alza en armas contra el gobierno del presidente Teodoro Picado Michalski.

CUBA

1902 El presidente Tomás Estrada Palma es desplazado de su cargo por el gobierno estadounidense. Las intervenciones militares estadounidense tutelan y dirigen la llamada república neocolonial.

1933 *Sublevación de los Sargentos.* El presidente Gerardo Machado fuerza una reelección. Es derrocado por una sublevación militar dirigida por Fulgencio Batista.

1952 Batista asume personalmente el poder, derrocando al presidente Carlos Prío Socarrás. Se abre un periodo dictatorial y sangriento.

1959 Triunfo de la *Revolución Cubana*. El dictador se exilia en la República Dominicana; lleva consigo una fortuna cercana a los cien millones de dólares.

1962 *Invasión de Bahía de Cochinos*. Tropas de mercenarios –apoyados, financiados y entrenados por la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses– invaden Cuba. Los invasores son vencidos y capturados.

ECUADOR

1906 Como consecuencia de la *Revolución Liberal* (1895) el general Eloy Alfaro derroca al presidente Lizardo García y se autotitula *Jefe Supremo*.

1911 *La Hoguera Bárbara*. Golpe de Estado contra el presidente Eloy Alfaro, asesinado junto a familiares y aliados.

1925 *Revolución de los Militares Jóvenes*. Sublevación militar contra el presidente Gonzalo Córdova Rivera.

1972 *El Carnavalazo*. El general Guillermo Rodríguez Lara, jefe del Ejército, destituye al presidente José María Velasco Ibarra.

1976 Un triunvirato militar (formado por el almirante Alfredo Poveda y los generales Guillermo Durán y Luis Leoro Franco) reemplaza al general Rodríguez Lara.

2005 *Rebelión de los Forajidos*. El presidente Lucio Gutiérrez deja su cargo a causa de las presiones por parte de las fuerzas

armadas, el Congreso y un amplio movimiento civil de protesta.

EL SALVADOR

1931	El presidente Arturo Araujo es derrocado por un levantamiento oligárquico-militar. Se crea el Directorio Cívico; el general Maximiliano Hernández Martínez reprime el *Levantamiento Campesino* de 1932. Veinticinco mil muertos. Gobernará hasta 1944.
1944-1979	Periodo de presidencias provisionales, en su mayoría encabezadas por militares.

GUATEMALA

1898	José María Reina Barrios, presidente, es asesinado. El ministro de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada Cabrera, se autodenomina presidente. Ejerce hasta 1920.
1920	Levantamiento popular; el Congreso declara «insano» y destituye a Estrada Cabrera.
1930	Una sublevación militar depone y asesina al presidente Baudilio Palma. El general Manuel Orellana Contreras se autoproclama

presidente.

1931 El presidente Jorge Ubico Castañeda asume poderes dictatoriales. Se mantendrá en el poder hasta 1944.

1944 El general Federico Ponce Vaides sustituye a Ubico.

1954 El coronel Carlos Castillo Armas –establecido en Honduras– derroca al presidente Jacobo Árbenz, apoyado por Estados Unidos, mediante la *Operación PBSUCESS,* organizada por la CIA.

1963 El general José Miguel Ydígoras es derrocado mediante un levantamiento militar dirigido por el general Enrique Peralta, que asume la presidencia.

1963-1986 Periodo de dictaduras militares consecutivamente sustituidas.

1993 *Serranazo*. El presidente Jorge Serrano Elías disuelve el Congreso.

HAITÍ

1941 El presidente Elie Lescot es derrocado por un levantamiento militar. Franck Lavaud asume la presidencia. Se inicia un periodo de gobiernos interinos o provisionales.

1964 El presidente François *Papa Doc* Duvalier se autotitula «Presidente Vitalicio», nombra sucesor a su hijo, Jean-Claude.

Comienza una dictadura sangrienta, apoyada en los grupos de choque gubernamentales (los Voluntarios para la Seguridad Nacional, *Tonton Macoutes*), que dura hasta 1986.

1986 El general Henri Namphy lidera un golpe de Estado palaciego contra Jean-Claude *Baby Doc* Duvalier, instalando el «Duvalierismo sin Duvalier».

1988 El general Namphy es pasado a retiro por el presidente Leslie Manigat. Namphy rechaza la medida y derroca a Manigat.

1988 El general Prosper Avril derroca, a su vez, al general Namphy.

1991 El general Raoul Cedrás –apoyado por el gobierno estadounidense– derroca al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido elegido democráticamente ese mismo año. Aristide se exilia en Caracas y –posteriormente– en Washington, D. C. Cedrás instala una férrea dictadura militar.

1994 Estados Unidos despliega la *Operación Uphold Democracy* («Democracia Duradera») –reglamentada mediante la Resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU– que restituye (*sic*) a Aristide en el gobierno.

HONDURAS

1924 El presidente Rafael López Gutiérrez decide permanecer en el poder. Con el apoyo de la United Fruit Company y del presidente Calvin Coolidge, el general Tiburcio Carías Andino

destituye al presidente López. Se nombra presidente provisional al general Vicente Tosta Carrasco.

1956 Una sublevación militar derroca al presidente Julio Lozano Díaz. Se instaura un triunvirato compuesto por el general Roque Rodríguez, el coronel Héctor Caraccioli y el mayor Roberto Gálvez Barnes (hijo del expresidente Juan Manuel Gálvez).

1963 El general Oswaldo López Arellano derroca al presidente Ramón Villeda Morales. Gobernará hasta 1971 y en el periodo 1972-1975. Militares ocuparán la presidencia del país hasta 1982.

2009 El presidente Manuel Zelaya Rosales es depuesto por orden del Congreso, ejecutada por las fuerzas armadas. Zelaya se refugia en la embajada de Brasil. El presidente del Congreso –Roberto Micheletti– asume la presidencia *de facto*.

MÉXICO

1876 El general Porfirio Díaz desconoce lo previsto en el «Plan de Tuxtepec». Gobernará hasta 1911.

1910 Se inicia la Revolución mexicana.

1913 El presidente Francisco Madero es asesinado por fuerzas del general Victoriano Huerta, que toma el poder con apoyo estadounidense.

1917	El general Venustiano Carranza es elegido presidente, desconociendo los tres mandatos anteriores, emanados de la Convención de Aguascalientes (conferencia entre militares y gobernadores, en plena Revolución mexicana). Presionado por la oposición, abandona la presidencia y es asesinado por las fuerzas del general Álvaro Obregón.

NICARAGUA

1893	*Revolución Liberal*. Se instala junta de gobierno integrada por Zelaya, Ortíz, Francisco Baca y Pedro Balladares.
1936	El general Anastasio Somoza García derroca al presidente Juan Bautista Sacasa. Somoza gobernará Nicaragua entre 1937 y 1956.
1956	Magnicidio contra Somoza García, toma el poder su hijo, Luis Somoza Debayle.
1967	Anastasio Somoza Debayle se instala el poder hasta 1979.
1979	Triunfo de la *Revolución Sandinista*. El Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a Anastasio Somoza Debayle.

PANAMÁ

1941 Un levantamiento militar destituye al presidente Arnulfo Arias Madrid.

1968 Oficiales, liderados por el mayor Boris Martínez, derrocan –nuevamente– al presidente Arias. Los líderes más relevantes del *Proceso Revolucionario Militar* serán los generales Omar Torrijos Herrera (gobernando durante el periodo 1969-1981) y el general Manuel Noriega (1983-1989).

1989 Estados Unidos invade Panamá. Una fuerza militar estadounidense despliega la *Operación Just Cause* («Causa Justa») y destituye al general Manuel Noriega. Guillermo Endara presta juramento en la base militar estadounidense de Fort Clayton.

PARAGUAY

1904 *Pacto del Pilcomayo*.

1908 Insurrección militar derroca al presidente Benigno Ferreira.

1912 Golpe de Estado contra el presidente Liberato Marcial Rojas. Asume el poder un triunvirato encabezado por los generales Alfredo Aponte, Mario Uscher y Marcos Caballero Codas.

1936 El general Rafael Franco derroca al presidente Eusebio Ayala.

1936-1954	Periodo de gobiernos civiles y dictaduras militares.
1954	El general Alfredo Stroessner asume la presidencia. Se reelige en 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y 1988.
1989	El general Andrés Rodríguez –consuegro de Stroessner– da un golpe de Estado.
2012	El presidente Fernando Lugo es destituido por una farsa de juicio político sumarísimo. La maniobra es desconocida por los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay y Mercosur.

PERÚ

1948	*Ochenio de Manuel Odría*. El general Manuel Odría derroca al presidente José Luis Bustamante y Rivero. La dictadura se extiende hasta 1956.
1968	*Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armada,* dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, derroca a Fernando Belaúnde Terry.
1975	*Tacnazo*. Relevo militar dentro del *Gobierno Revolucionario*. El general Francisco Morales Bermúdez derroca al general Velasco Alvarado y gobierna hasta 1980.
1992	El presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso y asume plenos poderes, mediante la creación del *Gobierno de*

Emergencia y Reconstrucción Nacional.

REPÚBLICA DOMINICANA

1902 Insurrección militar encabezada por el general Horacio Vásquez Lajara derroca al presidente Juan Isidro Jiménez.

1903 El general Alejandro Woss y Gil derroca al presidente Horacio Vásquez.

1903 Apoyado por el gobierno de Estados Unidos, el general y sacerdote Carlos Morales Languasco destituye al fugaz presidente Woss.

1916 Al resistir las presiones estadounidenses, por orden del presidente Woodrow Wilson, la República Dominicana queda oficialmente ocupada por fuerzas militares estadounidenses.

1930 Rafael Leónidas Trujillo toma el control del país, gobernando –directa e indirectamente– hasta 1961. Se calcula que este periodo deja un saldo de unos cincuenta mil muertos.

1963 El coronel Elías Wessin y Wessin encabeza un golpe de Estado que destituye al presidente Juan Bosch.

1965 Una insurrección militar –al mando del coronel Francisco Caamaño– reclama la restitución del presidente Bosch en el poder. Estados Unidos envía cuarenta y dos mil infantes de marina, a fin de evitar una «invasión comunista» en el país. Comienza un periodo marcado por la presencia del antiguo

político *trujillista* Joaquín Balaguer, que ocupará la presidencia (mediante elecciones fraudulentas) en los periodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996.

URUGUAY

1933 El presidente Gabriel Terra –apoyado por los sectores conservadores católicos– provoca un «autogolpe». Disuelve ambas cámaras legislativas. Terra es apoyado por la Policía y el Cuerpo de Bomberos. Gobernará hasta 1938.

1941 Nuevo «autogolpe». El presidente Alfredo Baldomir (cuñado del presidente Terra y jefe de Policía durante el golpe de Estado de 1933) restablece las garantías abolidas por el presidente anterior.

1973 Las fuerzas armadas, llamadas por Juan María Bordaberry, dan golpe de Estado. La dictadura gobernará, mediante presidentes-títeres, hasta 1985.

VENEZUELA

1908 El general Juan Vicente Gómez derroca al presidente Cipriano Castro.

1945	*Revolución de Octubre*. Una alianza entre las fuerzas armadas y el partido Acción Democrática derroca al presidente Isaías Medina e instala a Rómulo Betancourt en el poder.
1948	Una junta militar integrada por los generales Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez derroca al presidente Rómulo Gallegos.
1958	Una junta militar encabezada por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal derroca al dictador Marcos Pérez Jiménez.
1992	Levantamiento militar fallido, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez.
2002	Sublevación cívico-militar. Asume la presidencia el dirigente empresarial Pedro Carmona Estanga, que fracasa. El Presidente constitucional Hugo Chávez Frías asume la presidencia.

[1] Cronología realizada en colaboración con Eduardo Fort.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Beltrán, V. R., *El papel político y social de las fuerzas armadas en América Latina,* Caracas, Editorial Monte Ávila, 1970.

Cavalla, A., *Geopolítica del fascismo dependiente,* México, Ediciones Casa de Chile, 1977.

—, *Geopolítica y seguridad nacional en América,* México, UNAM, 1979.

Clausewitz, C., *De la guerra,* versión íntegra, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.

Comblin, J., *El poder militar en América Latina,* Salamanca, Sígueme, 1978.

Costa Pinto, L. A., *Nacionalismo y militarismo,* México, Siglo XXI, 1974.

Dinges, J., *Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur,* Santiago de Chile, Ediciones B, 2004.

Früling, H.; Portales, C. y Varas, A., *Estado y fuerzas armadas,* Santiago de Chile, Ediciones FLACSO, 1982.

Garcés, J., *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles,* Madrid, Siglo XXI de España, 1996.

—, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende,* Madrid, Siglo XXI de España, 2018.

García, P., *El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares,* Madrid, Alianza, 1995.

Golbery do Couto e Silva, A., *Geopolítica do Brasil,* 2.ª ed., Río de Janeiro, José Olympio, 1967.

Goldhagen, D. J., *Peor que la guerra. Genocidio, eliminacionismo y la continua agresión contra la humanidad,* Madrid, Taurus, 2010.

Magasich, J., *Los que dijeron «NO». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973,* Santiago de Chile, Editorial LOM, 2008.

Malaparte, C., *Técnica del golpe de Estado,* Barcelona, José Janés editor, 1958.

Maquiavelo, N., *Del arte de la guerra,* Madrid, Tecnos, 2008.

Martín Baró, I. (ed.), *Psicología social de la guerra,* San Salvador, Ediciones UCA, 1990.

Mercado Jarrín, E., *Seguridad, Política, Estrategia,* Lima, Schapire editor, 1974.

Novaro, M. y Palermo, V., *Historia de Argentina. Vol. 9. La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática,* Buenos Aires, Paidós, 2003.

O'Donnell, G., *Modernización y autoritarismo,* Buenos Aires, Paidós, 1972.

Prats González, C., *Memorias. Testimonio de un soldado,* Chile, Ediciones Pehuén, 1985.

Rodríguez Rejas, M.ª J., *La norteamericanización de la seguridad en América Latina,* Madrid, Akal, 2017.

Roitman Rosenmann, M., *Breve Manual actualizado del golpe de Estado,* Madrid, Sequitur, 2018.

Rouquié, A., *El estado militar en América Latina,* México, Siglo XXI, 1984.

—, *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina,* Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011.

Stepan, A., Brasil: *Los militares y la política,* Buenos Aires, Amorrortu, 1974.

Tapia Valdés, J., *El terrorismo de estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur,* México, Editorial Nueva Imagen, 1980.

Varas, A. (coord.), *La autonomía militar en América Latina,* Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1988.

Veneroni, H., *Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina. La dependencia militar,* Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973.

Document Outline